



¿Progresistas?

Partidos y movimientos en América Latina

COYUNTURA

Carmelo Mesa-Lago

Stefanie Hanke / Arnold Antonin

TRIBUNA GLOBAL

Gerardo Honty

TEMA CENTRAL

Valter Pomar

Kjeld Aagaard Jakobsen

Ricardo Sidicaro

Hervé Do Alto

Massimo Modonesi

Virgilio Hernández E. /

Fernando Buendía G.

Luis Armando González

ENSAYO

Jenny Ybarnegaray Ortiz

NUEVA SOCIEDAD

es una revista latinoamericana abierta a las corrientes de pensamiento progresista, que aboga por el desarrollo de la democracia política, económica y social.

Se publica cada dos meses en Buenos Aires, Argentina, y circula en toda América Latina.

Directora: Svenja Blanke

Jefe de redacción: Pablo Stefanoni

Equipo editorial: Silvina Cucchi, Florencia Grieco

Administración: Natalia Surraco, María Eugenia Corriés

NUEVA SOCIEDAD Nº 234

Diseño original de portada: Horacio Wainhaus

Arte y diagramación (portada e interior): Fabiana Di Matteo

Ilustraciones: Alejandro Salazar

Fotografías: Shutterstock

Corrección: Germán Conde, Vera Giaconi

Traducción al inglés de los sumarios: Kristie Robinson

Impreso en Talleres Gráficos Nuevo Offset,
Viel 1444, Buenos Aires, Argentina

Los artículos que integran **NUEVA SOCIEDAD** son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Revista. Se permite, previa autorización, la reproducción de los ensayos y de las ilustraciones, a condición de que se mencione la fuente y se haga llegar una copia a la redacción.

NUEVA SOCIEDAD – ISSN 0251-3552

Oficinas: Defensa 1111, 1º A, C1065AAU Buenos Aires, Argentina.

Tel/Fax: (54-11) 4361-4108/4871

Correo electrónico: <info@nuso.org>

<distribucion@nuso.org> (distribución y ventas)

<www.nuso.org>

El portal **NUEVA SOCIEDAD** es una plataforma de reflexión sobre América Latina.
Articula un debate pluralista y democrático sobre política y políticas latinoamericanas.

 **NUEVA
SOCIEDAD**

es un proyecto de la

**FRIEDRICH
EBERT
STIFTUNG**

■ **ÍNDICE**

COYUNTURA

3782	Carmelo Mesa-Lago. Cuba: ¿qué cambia tras el VI Congreso del Partido Comunista?	4
3783	Stefanie Hanke / Arnold Antonin. Haití: el presidente inesperado. Crisis y escenarios poselectorales	19

TRIBUNA GLOBAL

3784	Gerardo Honty. Energía nuclear en América Latina: el día después	32
------	---	----

TEMA CENTRAL

3785	Valter Pomar. Balance y desafíos de las izquierdas continentales	46
3786	Kjeld Aagaard Jakobsen. El PT en el gobierno o el desafío de mantener las convicciones	60
3787	Ricardo Sidicaro. El partido peronista y los gobiernos kirchneristas	74
3788	Hervé Do Alto. Un partido campesino en el poder. Una mirada sociológica del MAS boliviano	95
3789	Massimo Modonesi. México: el crepúsculo del PRD	112
3790	Virgilio Hernández E. / Fernando Buendía G. Ecuador: avances y desafíos de Alianza PAIS	129
3791	Luis Armando González. El FMLN salvadoreño: de la guerrilla al gobierno	143

ENSAYO

3792	Jenny Ybarnegaray Ortiz. Feminismo y descolonización. Notas para el debate	159
------	---	-----

SUMMARIES

■ Segunda página

América Latina es, sin duda, la región del mundo donde el fracaso de las políticas de libre mercado aplicadas en la década de 1990 dio paso a una mayor pluralidad de alternativas genéricamente englobadas bajo expresiones como «posneoliberalismo», «giro a la izquierda» o «socialismo del siglo XXI». Otras fórmulas buscan distanciarse de los viejos imaginarios desarrollistas que marcaron a fuego el socialismo real y, rescatando ciertas cosmovisiones indígenas, hablan del «socialismo del buen vivir» o «socialismo comunitario». En todo caso, no nos interesa tanto esta vez discutir hasta qué punto la radicalidad discursiva de varios de los procesos de cambio latinoamericanos se concilia con los cambios reales. El objetivo de este número de NUEVA SOCIEDAD es otro, menos explorado: indagar acerca de las trayectorias, las formas organizativas, las culturas políticas, los valores, las rupturas y las inercias de los partidos y movimientos que han vehiculado procesos progresistas en la región. Ello implica, entre otras cosas, interrogarse sobre el vínculo entre Estado, gobierno y partido, las tensiones entre viejas utopías y nuevos pragmatismos, la pervivencia de visiones clientelares de la política, las tentaciones unanimistas para «defender la revolución», los personalismos en detrimento del fortalecimiento de procesos colectivos de participación y decisión, y un largo etcétera.

Un partido de trabajadores en Brasil, un partido campesino en Bolivia, un movimiento «populista» en Argentina y otro sustentado en las clases medias en Ecuador; un ex-movimiento guerrillero en El Salvador y otro que se desprendió de un partido tradicional en México —que dirige los destinos de la capital mexicana, equivalente en dimensiones demográficas a países enteros de la región— dan cuenta de una enorme diversidad de trayectorias y culturas políticas. Los partidos no han muerto, pero sin duda están lejos de los modelos estadounidense o europeo y se muestran desafiantes a ciertas visiones normativas de la politología.

En el artículo que abre el Tema Central, un balance de la actuación de los partidos de izquierda en el gobierno en América Latina y el Caribe, Valter Pomar percibe que, pese a los avances logrados, persiste un déficit estratégico que pone en cuestión la superación de esta primera etapa de reformas paliativas de los efectos del neoliberalismo en favor de cambios sociopolíticos más profundos y creativos. En ese marco, el autor sostiene que si la izquierda latinoamericana y caribeña desea ampliar su

fuerza sin perder el rumbo, deberá prestar más atención al debate sobre el capitalismo en el siglo *xxi* y al balance del socialismo del siglo *xx* y poner en la ecuación la relación entre líneas políticas, base social, partido, gobierno y Estado.

Ricardo Sidicaro aborda las opacas relaciones entre peronismo y kirchnerismo, una experiencia cuya inclusión bajo el rótulo «progresista» muchos discutirían. Sidicaro recorre los varios peronismos y se detiene, entre otras temáticas, en la mística recordada por esta versión actual del peronismo luego de la muerte de Néstor Kirchner en 2010 y la consolidación del «crisinismo», liderado por la actual presidenta Cristina Fernández. Entretanto, Kjeld Aagaard Jakobsen aborda las mutaciones del Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil, sus ambivalentes relaciones con los movimientos sociales, las tensiones del tránsito de un partido de los sindicatos a un partido de gobierno y los cambios en la era post Lula.

Un caso particular es el del Movimiento al Socialismo (MAS) boliviano, un partido con fuerte arraigo en el mundo campesino-indígena, del que Hervé Do Alto traza una sociología. En su artículo, muestra cómo «lo campesino» opera en su interior como generador de legitimidad y, al mismo tiempo, como vehículo para una ruralización más amplia de la política boliviana. A la inversa, el Movimiento Alianza PAÍS surgió en medio del retroceso de las luchas indígenas que marcaron el Ecuador de los años 90 y primeros 2000. Como explican Virgilio Hernández E. y Fernando Buendía G., Alianza PAÍS se construirá como un movimiento en el que jóvenes profesionales de clase media asumirán la tarea de superar el neoliberalismo en el marco del fuerte liderazgo de Rafael Correa, en un proceso que genera pasiones encontradas y hoy se enfrenta no solo a la oposición conservadora, sino a sectores críticos desde la izquierda.

Por su parte, Massimo Modonesi aborda el desempeño del Partido de la Revolución Democrática (PRD), enfocándose en las dimensiones de la actual crisis de este partido-movimiento que surgió de las entrañas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y articuló a militantes socialistas, comunistas, trotskistas, maoístas, dirigentes de organizaciones urbano-populares, líderes estudiantiles y referentes de asociaciones civiles. Su crecimiento lo dejó, en 2006, a las puertas de colocar en la Presidencia de México a Andrés Manuel López Obrador, oportunidad en que se generó una inédita movilización popular ante las denuncias de fraude.

Finalmente, nos encontramos con el largo tránsito desde la lucha armada hacia la construcción democrática-electoral del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador. Como bien muestra Luis Armando González, este camino ha llevado a que el FMLN deje atrás sus objetivos socialistas para sostener posiciones progresistas pragmáticas, que le han permitido transformarse en un partido electoralmente competitivo y gobernar El Salvador en esta segunda década del siglo *xxi*.

Los artículos plantean problemas, certezas y dudas suficientes, en nuestra opinión, para justificar los signos de interrogación que acompañan el adjetivo «progresistas» en el título de este número de NUEVA SOCIEDAD. No para descalificar ninguno de estos procesos, sino para abrir una discusión desde el propio progresismo, habilitando una necesaria introspección hacia las propias prácticas y valores en este momento estimulante que hoy transita América Latina.

Cuba: ¿qué cambia tras el VI Congreso del Partido Comunista?

CARMELO MESA-LAGO

En abril de 2011 se realizó el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), después de 14 años sin celebrar ese tipo de reuniones. El congreso estuvo marcado por las ambiciosas reformas que Raúl Castro se propuso como meta tras reemplazar a su hermano Fidel en 2006. No obstante, las contradicciones, las indecisiones, las inercias y las resistencias del aparato burocrático siembran dudas acerca de la eficacia de los cambios aprobados por el Congreso para sacar al país de la profunda crisis económica que enfrenta y recuperar unas fuerzas agotadas por más de medio siglo de nadar a contracorriente.

Lo que aprobemos en este Congreso no puede sufrir la misma suerte que los anteriores, casi todos olvidados sin haberse cumplido.

Raúl Castro, Informe central al VI Congreso del PCC¹.

■ La crisis económica como antesala del Congreso

En 2010 Cuba afrontaba una crisis severa y, sin llegar al extremo de los

terribles años de 1993-1994 tras el colapso de la Unión Soviética y el mundo socialista, se estaba aproximando a una situación en extremo complicada². El PIB creció 1,4% en 2009 y 2,1%

Carmelo Mesa-Lago: catedrático distinguido emérito de Economía y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Pittsburgh, ha sido profesor-investigador visitante y conferencista en 40 países, autor de 80 libros y 275 artículos y capítulos de libros publicados en siete idiomas en 33 países. Consultor en toda América Latina para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), otras agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y organismos financieros internacionales. Es fundador de *Cuban Studies*. Obtuvo el Premio de Investigación al Trabajo Decente de la OIT (inaugural) y ha sido finalista al Premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales.

Palabras claves: economía, reformas, Congreso del Partido Comunista, Raúl Castro, Cuba.

Nota: el autor agradece los comentarios de Jorge Pérez López y Pavel Vidal, así como las correcciones de Lenier González.

1. La Habana, 16 de abril de 2011.

2. Capté esa impresión con mis preguntas en visitas a Cuba en junio de 2010 y enero de 2011. Ver C. Mesa-Lago y Pavel Vidal: «The Impact of the Global Crisis in Cuba's Economy and Social Welfare» en *Journal of Latin American Studies* vol. 42 N° 4, 2010, pp. 689-717, y Omar Everlén Pérez Villanueva: «Notas recientes sobre la economía de Cuba» en *Espacio Laical* vol. 6 N° 3, 2010, pp. 75-81.

en 2010, solo un tercio del promedio regional. Pero además la cifra es dudosa: 65% del PIB fue generado por servicios –salud, educación, administración, defensa, comercio– que están sobrevaluados y crecieron 7%, en tanto que la producción física solo generó un 19% y cayó 7% (debido a la descapitalización de la industria, el colapso de la producción azucarera y la contracción en la construcción); finalmente, 16% del PIB se explica por los sectores de agua, gas y electricidad, que declinaron un 1%.

La formación bruta de capital disminuyó por segundo año consecutivo a 10% del PIB, menos de la mitad del promedio regional y de los propios registros cubanos de 1989, antes de la primera crisis. La inflación creció 1,4% anual –solo un cuarto del promedio regional–, aunque la liquidez monetaria aumentó a 42% del PIB (el doble que en 1989). El déficit fiscal se redujo de 5% a 4%, aunque siguió siendo superior al promedio regional de 2,4%, como resultado de fuertes recortes presupuestarios³.

El sector externo tuvo un desempeño mezclado. Las exportaciones de bienes aumentaron (aunque todavía eran 22% inferiores al nivel de 1989), mientras que las importaciones se estancaron (lo que agravó la severa escasez interna) y el déficit comercial disminuyó (aun así, fue 74% mayor al déficit de 1989). Las exportaciones de servicios (pagos por profesionales cubanos que

trabajan en el exterior –mayormente en Venezuela– y turismo) aumentaron y ayudaron así a compensar el déficit comercial. Pero los términos de intercambio se deterioraron por tercer año consecutivo debido al incremento del precio del petróleo y de los alimentos, la deuda externa ascendió a us\$ 20.000 millones (el triple de 1989) y la dependencia cubana de Venezuela creció justo cuando la economía venezolana sufrió el peor desempeño regional.

En la esfera social hubo un pequeño incremento nominal en los salarios y las pensiones, pero sus valores reales (ajustados a la inflación) estaban respectivamente 73% y 50% por debajo de los niveles de 1989. La mortalidad infantil era 4,5 por 1.000, la más baja en el hemisferio después de Canadá, pero la mortalidad materna aumentó y se colocó 95% por encima de 1989. La construcción de viviendas decreció hasta la mitad de la tasa por 1.000 habitantes de 1989. El desempleo abierto se mantuvo en 1,6%, uno de los más bajos del mundo, pero después se verá que en realidad era de 11,6%. Y la población disminuyó debido al proceso acelerado de envejecimiento que agrava el costo de las pensiones y la salud.

3. Esta sección se basa en datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE): *Panorama económico y social Cuba 2010*, La Habana, 2011; las comparaciones regionales son de Cepal: *Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe*, Cepal, Santiago de Chile, 2010.

■ Reformas de Raúl, «Lineamientos» y acuerdos del Congreso

En este contexto crítico, la alternativa oficial para enfrentar la crisis son las «reformas estructurales» del sistema, que Raúl Castro anunció el 26 de julio de 2007, lo que fue seguido del debate más amplio y profundo siempre «dentro de la revolución». Entre 2008 y marzo de 2010, Raúl aprobó varias reformas orientadas hacia el mercado, la gran mayoría modestas pero dos de ellas más profundas: la entrega en usufructo de tierras estatales ociosas a personas y entidades, y el proyecto de despido masivo de trabajadores estatales excedentes para ser ocupados en nuevos empleos privados. Los «Lineamientos» fueron publicados en noviembre de 2010 y, tras un amplio debate nacional, fueron sometidos en abril de 2011 al VI Congreso del PCC, que alteró –con modificaciones y agregados– en un 68% los 291 lineamientos originales y los aumentó a 313 acuerdos (287 económicos y 26 sociales). Pero la mayoría fueron fusiones y correcciones de estilo, con pocos cambios sustanciales. Los acuerdos reconocen que las medidas anteriores son insuficientes para resolver los problemas del país, de ahí la necesidad de más cambios⁴.

Con todo, los acuerdos y reformas son positivos pero al mismo tiempo restringidos, con trabas y desincentivos que limitan su efectividad

para resolver los problemas citados; adicionalmente, deben ser implementados mediante leyes aprobadas en la Asamblea Nacional, que se reúne solo en junio y diciembre, o por decretos del Ejecutivo. Los límites de espacio hacen imposible un análisis integral de los acuerdos, por lo que se seleccionan cuatro aspectos claves, con el objetivo de describirlos, apuntar sus aspectos positivos y limitaciones/desincentivos, explorar sus posibles efectos y arribar a algunas observaciones finales⁵.

■ Cuatro aspectos claves de los acuerdos

«Actualización» del modelo económico. Según los acuerdos, el modelo económico socialista no se cambia sustancialmente sino que se «actualiza» para enfrentar los problemas existentes, de manera programada y gradual, con orden y disciplina. Continúa la planificación central como vía fundamental para dirigir la economía, aunque con transformaciones y teniendo en cuenta el mercado y la gestión «no estatal» o privada (un término que no mencionan los

4. VI Congreso del PCC: «Proyecto de lineamientos de la política económica y social», La Habana, 9 de noviembre de 2010 e «Información sobre el resultado del debate de los lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución», La Habana, 1 de mayo de 2011.

5. Ver Oscar Espinosa Chepe: «Cambios en Cuba: pocos, limitados y tardíos», <<http://webstc.org/Cambios%20en%20Cuba.pdf>>, La Habana, febrero de 2011.

acuerdos); ambos mecanismos quedan bajo la influencia del plan, controles financieros y administrativos, y estricta regulación. La empresa estatal sigue siendo el actor económico principal y se ratifican formas de gestión privada antiguas o introducidas por las reformas de Raúl, pero sin agregar nuevas: la inversión extranjera (en empresas mixtas pero con mayoría de acciones estatales), cooperativas (las actuales agrícolas y las recientes en producción y servicios), pequeñas granjas privadas, usufructo, trabajo por cuenta propia y arrendamiento de establecimientos. Se prescribe una mayor descentralización en la gestión de las empresas estatales, y estas habrán de ser autofinanciadas, es decir que no recibirán subsidios fiscales; tanto estas empresas como las cooperativas que incumplan sus obligaciones y arrojen pérdidas serán liquidadas o transferidas a la gestión privada. Con sus utilidades, las empresas podrán establecer fondos de inversión y estimulación a los trabajadores y directivos de empresas, y también tendrán mayor «flexibilidad» para fijar los precios. Por último, los acuerdos estipulan la meta de lograr la autonomía de gestión en las diversas cooperativas y permitir a estas negociar libremente y sin intermediarios estatales (una consistente propuesta de la mayoría de los economistas cubanos) después de cumplir sus compromisos con el Estado; establecer estímulos fiscales para promover la gestión privada, y

desarrollar mercados mayoristas que vendan insumos y alquilen equipos al sector privado.

Pero hay serios limitantes:

- los acuerdos realmente no definen un «modelo», pues no especifican el grado de participación del plan y del mercado, así como sus interrelaciones, al margen de que hay contradicciones entre algunos acuerdos y quedan vacíos importantes⁶;
- la descentralización, el autofinanciamiento, el cierre de las empresas improductivas y los fondos de inversión y estimulación ya fueron ensayados varias veces sin éxito durante la Revolución;
- el «perfeccionamiento empresarial» es incorporado al modelo económico a pesar de que fue incapaz de extenderse con éxito del sector militar al civil de la economía; y tampoco ahora se explica cómo será integrado con el mercado y el sector privado;
- en la esfera privada «no se permitirá la concentración de la propiedad»;

6. En un debate entre cuatro científicos sociales en La Habana en 2011, hubo un consenso acerca de que tampoco se desarrolló un modelo ni durante el «Proceso de Rectificación» (1986-1990) ni durante el «Periodo Especial» que comenzó en 1991 y que para la mayoría aún no ha concluido. Ver Mayra Espina, José Luis Rodríguez, Juan Triana y Rafael Hernández: «El Periodo Especial veinte años después» en *Temas* N° 65, 2011, pp. 59-75. El economista Pavel Vidal se pregunta: «El plan está por encima del mercado pero hasta dónde». V. «Desarticlar el monopolio de la centralización estatal», entrevista de Lenier González en *Espacio Laical* vol. 7 N° 26, 2011, pp. 46-52.

además, se prohíbe que la propiedad cooperativa sea vendida o arrendada a los sectores cooperativo y privado; tampoco puede ser usada como colateral para préstamos destinados a la inversión;

- se mantiene la determinación centralizada de precios en las áreas que «interese regular», «descentralizando las restantes» (sin especificar unas y otras). La «flexibilidad» de las empresas para fijar precios se dejaba en los lineamientos a regulaciones posteriores «que aseguren los intereses del país», pero los acuerdos suprimieron esta cláusula; se estipula «revisar integralmente el sistema de precios» sin pautas sobre cómo hacerlo;

- en relación con la inversión extranjera puede observarse más de lo mismo: se mantiene circunscrita a «aquellas actividades de interés para el país», lo que llevó a la caída en el número de empresas con capital extranjero en 2002-2009 a pesar de la severa iliquidez y la desesperada necesidad de capital foráneo y transferencia de tecnología en todos los sectores de la economía.

En los acuerdos también abundan las metas idealistas: eliminación de la dualidad monetaria (peso convertible y peso nacional); recuperación de la capacidad exportadora en azúcar, tabaco y pesca, así como la de níquel; reducción de la dependencia en las importaciones y erradicación de los subsidios a las exportaciones. Pero ni siquiera se esbozan estrategias para

alcanzar esos objetivos teniendo en cuenta la crisis actual. Por ejemplo, hay algún consenso en que la unificación monetaria entre el peso nacional y el convertible debe ser precedida por un incremento en la producción y la productividad, así como en que la reducción de la dependencia en las importaciones de alimentos demanda un aumento de la producción interna. Sin embargo, todo indica que las reformas y los acuerdos son insuficientes para lograr esos objetivos, y las cifras de 2010 muestran una caída en la producción física. Por otra parte, el fin de los subsidios a las exportaciones requiere una reforma integral de precios que se apunta en los acuerdos, pero estos tienen contradicciones y serios vacíos que deben resolverse.

Es cierto que la «actualización del modelo» no se ha implementado; no obstante, la experiencia histórica y las limitaciones citadas crean serias dudas sobre su éxito⁷. Un economista cubano aboga por el «cambio» (en lugar de la «actualización») del modelo de planificación:

Si se intenta perfeccionar lo que no ha funcionado por décadas, entonces no llegaremos a ningún lado. No veo un cambio estructural importante en (...) la planificación [hay] que otorgar mayor espacio al mercado (...) regulándolo con instrumentos indirectos de penalización y

7. Raúl anunció que la actualización del modelo tomará un quinquenio.

estímulos, no sustituirlo por un sistema centralizado que ha demostrado una y mil veces ser ineficiente en Cuba y fuera de Cuba.⁸

Si se hubiese seguido el modelo de socialismo de mercado chino o vietnamita (con un rol mayor del mercado y del sector privado), que ha dado excelentes resultados por decenios, aunque adaptándolo a las características cubanas, las probabilidades de éxito hubiesen sido mucho mayores.

Tierras en usufructo. Cuba importa 80% de los alimentos para el consumo interno a un costo de us\$ 1.500 millones anuales, pero 3,6 de un total de 6,6 millones de hectáreas de tierras estatales están ociosas o subexplotadas. Para incrementar la producción y reducir las importaciones, el decreto-ley N° 259 del 10 de julio de 2008 dispuso la entrega en usufructo de dichas tierras a individuos, cooperativas y entidades estatales. En junio de 2010, el director del Centro de Control de la Tierra, Pedro Olivera, informó que se había entregado un millón de hectáreas a 110.000 personas y 1.715 entidades; en marzo de 2011 se habían otorgado 128.000 usufructos por un total de 1,2 millones de hectáreas (sin especificar el carácter del usufructuario), equivalentes a menos de la mitad del total de tierras estatales disponibles⁹. El VI Congreso acordó entregar en usufructo las tierras ociosas restantes del Estado, bajo las mismas condiciones.

El usufructo enfrenta fuertes limitaciones/desincentivos, no mejorados por los acuerdos:

- la tierra entregada tiene una extensión máxima de 13,4 hectáreas y está cubierta de un arbusto espinoso muy difícil de extraer (marabú) o tiene bajo rendimiento, por lo que cultivarla demanda un gran esfuerzo. Con frecuencia no hay acceso al agua ni a otros recursos para hacer un pozo, y no se permite al usufructuario la construcción de una casa en la parcela, por lo que puede tener que recorrer una distancia considerable para llegar hasta los cultivos;
- el Estado retiene la propiedad de la tierra y concede el contrato de usufructo por solo diez años a individuos (20 años a cooperativas y entidades estatales), renovables otros diez si el usufructuario cumple con sus obligaciones. El contrato es cancelado si la tierra no se cultiva «de forma racional y sostenible» (a discreción del gobierno), no se vende al Estado la producción contratada, o en virtud de necesidades de utilidad pública e interés social;
- el gobierno determina en parte lo que debe plantar el usufructuario, al asignarle una cuota de la cosecha (hasta 70%) para su venta obligatoria al Estado («acopio») a un precio fijado por este e inferior al precio de

8. P. Vidal: «Desarticular el monopolio de la centralización estatal», cit.

9. AP, 27/6/2010; Reuters, 22/3/2011.

mercado. Los «Lineamientos» originales estipulaban que la mayoría de los precios fuese fijada por la oferta y la demanda, pero los acuerdos suprimieron esta cláusula y ratificaron que el Estado determinará el precio de acopio;

- la ley no es clara sobre si, en caso de cancelación, el Estado reembolsa al usufructuario por la limpieza de marabú y otras bienhechurías;

- la mayoría de los usufructuarios carece de experiencia para cultivar la tierra pero hay un máximo de dos años para comenzar a producir y vender al Estado, y deben pagarse tres impuestos: utilización de la fuerza de trabajo y seguridad social, posesión y uso de la tierra, y sobre los ingresos personales, todos los cuales reducen la ganancia;

- los usufructuarios necesitan crédito a bajo interés para adquirir semillas, fertilizantes, aperos de labranza y equipo.

Con todo, a pesar de las limitaciones anotadas –algunas de las cuales han sido enmendadas como se especifica a continuación–, el usufructo es una de las reformas más importantes. Raúl Castro afirmó ante la Asamblea Nacional, en 2010, que «el Estado compensaría a los usufructuarios lo invertido y les abonaría el valor de las bienhechurías». Más tarde, en marzo de 2011, el gobierno aprobó que los bancos estatales otorguen pequeños créditos a un interés anual creciente de 3% a 7%,

según el plazo del préstamo, pero el número de prestatarios es reducido y el crédito no puede usarse para erradicar el marabú, sino para iniciar la producción¹⁰. Los acuerdos estipulan «realizar las modificaciones que correspondan» a la ley de usufructo para «asegurar la sostenibilidad» de las tierras entregadas. También mantienen el acopio, aunque proponen «mecanismos de gestión más ágiles» y permitir al productor concurrir al mercado con sus propios medios.

Orlando Lugo, presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Campesinos (ANAP) declaró después del VI Congreso:

- que el término de diez años al usufructo es un límite, además de que el Estado puede rescindir el contrato, y un freno a la producción, por lo que el usufructo debería ser permanente y los hijos del usufructuario, tener derecho a heredarlo;

- que habría que permitir que los campesinos construyeran una casa y darles facilidades para que adquieran los materiales;

- que se han otorgado créditos para comprar insumos a 10.000 campesinos (no solo usufructuarios), 2,5% del total de 400.000 miembros de dicha asociación. En 2010 no se dieron créditos ni insumos a los usufructuarios, por lo que cayó la producción

10. *Granma*, 18/12/2010 y 30/3/2011; Reuters, 22/3/2011.

agrícola y hay quejas por los altos precios y la baja calidad de los productos vendidos;

- que no debe haber una comercialización monopolizada por el Estado (acopio), sino que se debe permitir la comercialización directa de los campesinos a la red minorista¹¹. Por su parte Armando Nova, agrónomo cubano, recomienda que el usufructuario tome sus propias decisiones sobre qué sembrar, a quién vender y fijar los precios; que las cooperativas tengan autonomía y que se reduzca el acopio a lo indispensable y la mayoría de la producción se venda mediante criterios de oferta y demanda¹².

A mediados de 2010, el ministro de Economía Marino Murillo expresó su preocupación por la falta de resultados productivos del usufructo y advirtió a los usufructuarios que podría revisarse la concesión de la tierra. Por otra parte, Pedro Olivera alegó que era prematura la evaluación porque el impacto en la producción tomaría dos años¹³. Pero un par de años después de iniciado el usufructo, la producción agrícola disminuyó 10% en los tres primeros trimestres de 2010 (lo cual requeriría un salto imposible de 42% en el cuarto trimestre para que la disminución se mantuviera en el 3% previsto para el año completo). En todo 2010 la producción cayó: 18%-21% en frijoles, huevos y azúcar, 11%-13% en cítricos y hortalizas, y 4%-5% en leche y tabaco en rama; solo aumentaron 3% los tubérculos y 20% el maíz. Cifras

preliminares del primer trimestre de 2011 muestran una reducción en la superficie cultivada del sector privado (con poquísimas excepciones), aunque un aumento en la producción de la mayoría de los cultivos respecto al deprimido año 2010¹⁴.

Aunque para obtener conclusiones sólidas se requieren las cifras del año 2011 completo, la información disponible hasta el momento indica que el usufructo no ha logrado un incremento de la producción agrícola, y que el reparto del resto de la tierra estatal ociosa bajo las mismas condiciones tampoco alcanzaría dicho objetivo. Como en Cuba, en las reformas agrarias de China y Vietnam el Estado retuvo la propiedad de la tierra, pero al contrario que en Cuba, estos dos países otorgaron contratos de duración indefinida, dando libertad a los agricultores para plantar lo que desearan, vender los productos a quienes quisiesen y fijar su precio de acuerdo con la oferta y la demanda. El resultado fue un enorme incremento de la producción agrícola, el logro de la autosuficiencia alimentaria y la exportación del excedente. Vietnam es hoy el primer exportador de arroz del mundo y vende a Cuba

11. Entrevista en *Juventud Rebelde*, 14/5/2011.

12. «El papel estratégico de la agricultura: problemas y medidas» en *Temas*, 9/4/2010.

13. *AP*, 27/6/2010.

14. ONE: *Panorama económico y social Cuba 2010*, cit., y *Sector agropecuario. Indicadores seleccionados*, La Habana, 2011.

la mayor parte del arroz que se consume en la isla.

Despido de empleados estatales innecesarios y expansión de empleos privados. La cifra oficial de desempleo abierto era de 1,6% en 2010 pero, como parte de las reformas, el gobierno reconoció que la nómina estatal estaba «inflada» (desempleo oculto) y dispuso un plan de reducción del empleo público: 500.000 trabajadores en seis meses, entre octubre de 2010 y marzo de 2011 (10% de la fuerza laboral de 2010), un millón al final de 2011 (20% de la fuerza laboral) y 1,8 millones para 2014 (39%)¹⁵. Para dar ocupación a los despedidos se crearían 250.000 trabajos por cuenta propia en la primera etapa y otros tantos en otras actividades privadas. Desde el comienzo del régimen revolucionario, el cuentapropismo ha sufrido no pocos vaivenes: inicialmente prohibido, se autorizó tímidamente por primera vez en los años 70, se reintrodujo en los 80 para después criticarlo y se amplió en los 90 en el contexto de la caída de la URSS y el «Periodo Especial», pero luego volvió a ser restringido. El cenit de 169.000 cuentapropistas se alcanzó en 2005, 25 años después de la apertura inicial. En marzo de 2011, cuando se debió cumplir la primera etapa, se habían creado 138.000 trabajos netos por cuenta propia, solo 55% de la meta; además, casi todos eran «desvinculados al trabajo» (antiguos en lugar de nuevos desempleados) y

buena parte de ellos ya realizaba ilegalmente esas actividades y simplemente las legalizó¹⁶.

Los obstáculos a la creación de trabajos por cuenta propia son múltiples y poderosos:

- *Ámbito estrecho, baja calificación y exclusiones:* varios economistas cubanos y extranjeros sugirieron que el Estado se reservase áreas estratégicas y permitiese el cuentapropismo en el resto, o que estableciese categorías generales flexibles que se adecuasen al cambio de la demanda, o que identificase solo las actividades prohibidas. Por el contrario, el gobierno decidió aprobar 178 ocupaciones en 2010, 21 más que en los años 80; algunas tienen cierta importancia (electricista, productor y vendedor de bienes específicos, transportista de carga y pasajeros, traductor e intérprete, reparador) pero la gran mayoría son artesanales y no calificadas (aguador, limpiabotas, pelador de frutas, payaso, llenador de líquido para fosforeras, forrador de botones, carretillero). Siguen excluidos de realizar trabajo por cuenta propia los profesionales, muchos de los cuales serán despedidos de sus puestos y tendrán que desempeñar ocupaciones privadas no calificadas.

15. Esta sección se basa principalmente en C. Mesa-Lago: "El desempleo en Cuba: de oculto a visible" en *Espacio Laical* vol. 6 N^o 4, 2010, pp. 59-66.

16. *Juventud Rebelde*, 19/3/2011.

- *Impuestos excesivos*: además de pagar por la licencia para trabajar, hay numerosos tributos, por ejemplo, entre 10% y 40% sobre el ingreso según las ocupaciones; 25% por utilización de la fuerza de trabajo (que puede aumentar hasta 75% cuando hay más de 15 trabajadores); aporte a la seguridad social; 10% por ventas y 10% por uso de servicios públicos. Según la ministra de Finanzas y Precios, Lina Pedraza, la carga tributaria promedio oscila entre 30% y 35% y queda una utilidad promedio de 20%-25%¹⁷. Pero un economista canadiense estima que la carga tributaria es «punitiva», ya que la tasa efectiva puede exceder 100% del ingreso neto y es superior a la que se carga a las empresas con capital extranjero¹⁸. La ministra Pedraza declaró a la Asamblea Nacional en 2010 que «el impuesto por utilización de fuerza de trabajo será mucho más elevado en la medida en que se decida utilizar mayor cantidad de [trabajadores, a fin de] que el negocio rinda menos utilidades y la carga tributaria sea más fuerte (...) para desestimular la contratación de más trabajadores [y] que no exista concentración de la riqueza»¹⁹. Con los impuestos a los cuentapropistas, el gobierno planeaba incrementar el ingreso fiscal en 300% en 2011 pero, debido a las restricciones citadas, *mató al ganso antes de que pusiera los huevos de oro*.

- *Inexistencia de un mercado mayorista y de crédito*: los cuentapropistas necesitan pequeños créditos para adquirir

insumos, materiales y equipo en un mercado mayorista²⁰. La Unión Europea, Brasil, España y un grupo de empresarios cubano-americanos de mente abierta de la Florida han ofrecido asistencia financiera y asesoría en negocios para los cuentapropistas por cerca de us\$ 20 millones²¹; no obstante, hasta el momento el gobierno no ha hecho público que las haya aceptado.

Los acuerdos ratifican la reducción de las nóminas estatales infladas y la ampliación del empleo privado. El despido de la mano de obra excedente es esencial para elevar la productividad del trabajo y aumentar los salarios, que están 73% por debajo del nivel real de 1989. Innovaciones positivas introducidas en el cuentapropismo respecto al pasado son la autorización para emplear a trabajadores fuera del círculo familiar

17. «Intervención acerca de las propuestas para el perfeccionamiento y actualización del sistema tributario» en *Granma*, 16/12/2010.

18. Archibald Ritter: «Micro-Enterprise Tax Reform, 2010: The Right Direction but Still Onerous and Stultifying» en *The Cuban Economy*, <<http://thecubaneconomy.com/articles/2011/01/micro-enterprise-tax-reform-2010-the-right-direction-but-still-onerous-and-stultifying/>>, 11/1/2010, y «Raúl Castro's New Economic Strategy», ponencia presentada en el Panel sobre la Economía Cubana, Inter-American Dialogue, Washington, DC, marzo de 2011.

19. L. Pedraza: ob. cit. Los acuerdos del Congreso también prescriben que no debe haber acumulación de la propiedad con el fin de evitar desigualdades en el ingreso.

20. El ministro Murillo reconoció esta necesidad y dijo que se resolvería «en los próximos años». V. *Granma*, 24/9/2010.

21. *El Financiero*, 11/10/2010.

(inicialmente solo en la mitad de las ocupaciones aprobadas, pero desde mayo de 2011 en todas); la posibilidad de vender bienes y servicios a entidades estatales; una mayor flexibilidad para arrendar locales y activos al Estado y particulares; la encomienda al Banco Central para regular pequeños préstamos a cuentapropistas que financien la compra de bienes, insumos y equipo (aún no se tiene información de si ya han comenzado); el permiso de un año para extraer materiales de construcción (minería) en volúmenes pequeños; la obligatoriedad de afiliación a las pensiones de seguridad social, que antes era voluntaria, lo que extiende la protección a un sector que crecerá considerablemente; y, finalmente, el incremento del número de sillas de 12 a 20 en los pequeños restaurantes, llamados popularmente «paladares»²². En diciembre de 2010, el ministro de Economía admitió ante la Asamblea Nacional que había quejas por la carga fiscal y que las autoridades estudiarían medidas, y en 2011 se rumoraba que el gobierno dictaría una moratoria o un año de gracia a los impuestos de los cuentapropistas, pero el VI Congreso no lo aprobó.

El 28 de febrero de 2011 Raúl Castro reconoció la imposibilidad de cumplir la meta de creación de 250.000 empleos por cuenta propia; no fijó un periodo claro para alcanzarla y se refirió vagamente al Plan Quinquenal

2011-2014. El número de despidos no había sido publicado al tiempo de terminar este artículo, pero parecía ser aún pequeño²³. El presidente cubano culpó del fracaso a la resistencia de los administradores estatales y aseguró que el Estado no dejaría desamparados a los despedidos.

Política social. Con anterioridad al Congreso, Raúl había advertido que el costo de los servicios sociales (51% del presupuesto estatal y 31% del PIB en 2010²⁴) y su expansión eran insostenibles, por lo que debían ser subordinados al incremento de la producción y los recursos fiscales disponibles, y sometidos a ineludibles recortes²⁵. Desde 1995, economistas cubanos propusieron sustituir los subsidios a bienes y servicios por subsidios a personas necesitadas, un enfoque apropiado que fue validado por Raúl en 2010²⁶. No se publican estadísticas sobre pobreza en Cuba, pero algunas encuestas muestran que a comienzos de siglo, antes de la crisis

22. P. Vidal y O.E. Pérez Villanueva: «Se extiende el cuentapropismo en Cuba» en *Espacio Laical* vol. 6 N° 3, 2010, pp. 53-58; *Granma*, 30/3/2011; AFP, La Habana, 5/4/2011.

23. Un acuerdo del Consejo de Ministros del 17 de mayo de 2011 congeló todas las plazas estatales existentes y extendió el cronograma de despidos (sin ofrecer fechas).

24. Cálculos del autor basado en ONE: *Panorama económico y social Cuba 2010*, cit.

25. Esta sección se basa en C. Mesa-Lago: «Cincuenta años de servicios sociales en Cuba» en *Temas* N° 64, 2010, pp. 45-56.

26. «Discurso de Raúl en la clausura de la Asamblea Nacional del Poder Popular» en *Granma*, 18/12/2010.

actual, promediaba 20% de la población urbana y llegaba hasta 40% de la población urbana²⁷.

Los acuerdos ratifican los anuncios y políticas de Raúl sobre la eliminación de «gratuidades indebidas» y el racionamiento «de manera ordenada y gradual». En 2010, diversos alimentos y manufacturas fueron sacados de la libreta de racionamiento (papas, chícharos, jabón, pasta de dientes, detergente, cigarrillos) y se aumentó el precio de bienes y servicios (electricidad, gas, agua, gasolina). El sistema de racionamiento vende alimentos claves a precios subsidiados por debajo del costo, pero solo cubre entre siete y diez días al mes; el resto debe ser adquirido a precios muy altos en mercados agropecuarios y tiendas en divisas. Este régimen beneficia hoy a toda la población, por lo que es justificable suprimirlo para los estratos alto y medio-superior, pero es crucial para la población pobre y de bajo ingreso que no recibe remesas del exterior, por lo que no puede ser eliminado sin antes reforzar la asistencia social.

Vidal recomienda que la asistencia social se incremente de manera rápida, sin demoras, pues de lo contrario «habría un costo social muy grande»; deben identificarse los grupos vulnerables y resultan necesarios nuevos mecanismos y el entrenamiento del personal²⁸. Un acuerdo promete garantizar la asistencia social «a las

personas que la necesiten», pero la asignación presupuestaria a este renglón fue reducida en 39% entre 2008 y 2011, aunque creció levemente en 2011²⁹; todo ello, a pesar de que la eliminación de gratuidades y el racionamiento demandan su aumento. Igualmente, la asistencia social la recibirán «las personas que realmente la necesitan», lo cual si se consigue mediante la focalización adecuada excluiría a beneficiarios no pobres y ahorraría recursos, pero también se dispone «eliminar prestaciones que pueden ser asumidas (...) por los familiares de las personas» beneficiadas; un fin dudoso respecto a su factibilidad en vista de las necesidades generalizadas en la mayoría de la población.

Las pensiones de seguridad social son una carga grande y creciente en el PIB (7,6% en 2010) y el Estado cubre el déficit (40% del gasto) porque los ingresos por contribuciones son inferiores a los egresos, un problema que se agrava por el acelerado envejecimiento de la población (el segundo mayor en la región después de Uruguay). Para enfrentar estos problemas, la reforma de 2008 aumentó las edades de retiro e introdujo otros cambios, pero estos no han reducido el severo déficit

27. M. Espina, J.L. Rodríguez, J. Triana y R. Hernández: ob. cit.

28. P. Vidal: «Desarticular el monopolio de la centralización estatal», cit.

29. Basado en ONE: *Panorama económico y social Cuba 2010*, cit. y *Anuario estadístico de Cuba 2009*, ONE, La Habana, 2010.

del sistema. Para equilibrarlo, en 2010 habría que haber aumentado la cotización actual de 12% sobre el salario (pagada por las empresas) a 20,6%, y el porcentaje debería incrementarse en los años sucesivos. Uno de los acuerdos estipula la disminución del aporte fiscal a dichas pensiones mediante la expansión de las cotizaciones de los trabajadores estatales y privados. La obligatoriedad de afiliarse y cotizar de los trabajadores por cuenta propia sería una fuente adicional de ingresos (si realmente se logra un aumento sustancial de ellos), pero esto sería contrarrestado parcialmente por una caída en el empleo y las cotizaciones en el sector estatal, donde solo cotiza aproximadamente un cuarto de los empleados y es difícil extender los aportes por los bajos salarios³⁰.

Con respecto a la educación superior, la explosión de la matrícula bajo la «Batalla de Ideas» lanzada por Fidel Castro a inicios del siglo XXI generó un aumento enorme en carreras de humanidades, trabajo social, pedagogía y medicina, pero la matrícula en las ciencias naturales y matemáticas se contrajo y solo aumentó ligeramente en ciencias agropecuarias y carreras técnicas. Esto provocó un déficit de ingenieros agrónomos y de científicos que compromete el desarrollo económico futuro del país. A pesar del incremento de graduados en educación, los bajos salarios de los maestros causaron un éxodo a otras actividades más lucrativas y ocurrió

un déficit de docentes que se intentó cubrir con «maestros emergentes» (jóvenes traídos del interior y entrenados con rapidez en cursos cortos). El resultado fue una baja en la calidad de la enseñanza y serias deficiencias en ortografía en los exámenes para admisión universitaria. Raúl corrigió algunos de estos problemas: cerró el ineficaz programa de trabajadores sociales (que eran utilizados para otras tareas), ofreció incentivos a los maestros retirados para que volvieran a enseñar, hizo más estrictos los exámenes de ingreso, restringió la matrícula excesiva en carreras no esenciales e intentó aumentar la matrícula en las más necesarias³¹. Los acuerdos estipulan que las matrículas en las carreras universitarias se correspondan con las demandas de desarrollo de la economía y la sociedad.

Uno de los acuerdos más importantes, que no estaba en los «Lineamientos», es la autorización de la compra-venta de viviendas, prohibida desde 1960 y que forzó la «permuta» o intercambio de viviendas de «similar» valor, cuajada de trabas burocráticas y corrupción. El acuerdo no da detalles

30. C. Mesa-Lago: «Estructura demográfica y envejecimiento poblacional: implicaciones sociales y económicas para el sistema de seguridad social en Cuba» en *Espacio Laical* vol. 6 N° 3, 2010, pp. 87-92; cálculos basados en ONE: *Panorama económico y social Cuba 2010*, cit.

31. C. Mesa-Lago: «Cincuenta años de servicios sociales en Cuba», cit.

sobre la regulación de la compraventa y tampoco elimina la permuta, sino que dice que se flexibilizará. También se legitiman las formas privadas de construcción de viviendas existentes de facto por decenios y se promete satisfacer la demanda de materiales de construcción por la población para la conservación y rehabilitación de sus unidades habitacionales. Por otra parte, el ministro Murillo anunció en 2010 la abolición del precio subsidiado de materiales de construcción vendidos a la población para la construcción de sus viviendas (el precio subsidiado de un bloque es 10% del precio oficial) debido a la venta ilegal de dichos materiales con enormes ganancias para los traficantes³². Aunque económicamente sensata, esta medida perjudicará al sector más pobre y de bajo ingreso, que no tendrá acceso a esos materiales a un precio diez veces mayor –por lo que debería estudiarse la posibilidad de vivienda subsidiada para los grupos vulnerables–. Además puede provocar una caída de la construcción de viviendas privadas, que ya disminuyó 20% en 2010.

En salud pública, la «exportación» de médicos, oculistas, enfermeras y otro personal sanitario, especialmente a Venezuela, ha generado ingresos en divisas por ventas de servicios profesionales de alrededor de us\$ 5.000 millones anuales, pero también ha creado un déficit interno de estos profesionales (aproximadamente un tercio de los

médicos está en el exterior). Uno de los acuerdos estipula garantizar que la graduación de especialistas médicos cubra «las necesidades del país y las que se generen por los compromisos internacionales». El incremento ya experimentado en la matrícula universitaria en medicina podría resolver este problema.

Raúl reconoció que los salarios generales eran insuficientes para satisfacer las necesidades mínimas y hemos visto que su valor real cayó 73% en 1989-2010. Los acuerdos estipulan el aumento de los salarios de manera gradual, pero para elevar su valor real habría que generar un aumento considerable en la producción y la productividad.

Son positivos los acuerdos de sustitución de subsidios a bienes por subsidios a las personas, de autorización de la compraventa y de correspondencia de la matrícula universitaria con las demandas al desarrollo. Pero la reducción de gratuidades y el racionamiento, que perjudica a grupos vulnerables, la disminución presupuestaria a la asistencia social y algunos acuerdos de política social indican una erosión en la red mínima de protección social que debe recuperarse y superar la pérdida sufrida en 2008-2011. Respecto a la vivienda, hay que

32. M. Murillo: «Resultados económicos del año 2010 y el plan de la economía para 2011» en *Granma*, 18/12/2011.

esperar el reglamento de compraventa y ver cómo esta se coordina con la permuta «flexibilizada». El aumento del salario real, precedido de un incremento de la producción y la productividad, requiere reformas más profundas que las hasta ahora implementadas o aprobadas en el Congreso.

■ Observaciones finales

Las reformas de Raúl y los acuerdos del VI Congreso del PCC son positivos y bien orientados pero parciales, implican trabas y cargas impositivas que generan desincentivos y son insuficientes para enfrentar los problemas económico-sociales acumulados durante 52 años de socialismo en Cuba. Las fallas en las reformas, analizadas por economistas cubanos y extranjeros, no fueron corregidas por los acuerdos, aunque algunos reconocen dichos problemas y anuncian modificaciones futuras. La pregunta clave es por qué no fueron corregidas esas fallas en meses de debates en que participaron casi nueve millones de cubanos, así como en la Asamblea Nacional, el Comité Central del PCC y su Buró Político, el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros y entre los delegados en el Congreso. Raúl había anunciado una Conferencia Nacional del PCC en la segunda mitad de 2011 y la pospuso para fines de enero de 2012, pero esa reunión estará encaminada a determinar el papel del Partido y sus relaciones con el gobierno³³.

La efectividad de las reformas y los acuerdos es lastrada por objetivos mutuamente excluyentes o contradictorios. Por una parte se reconoce la necesidad de aumentar la producción, eliminar la mano de obra excedente en el sector estatal, reducir el costo de los servicios sociales, etc., así como reconocer el papel creciente que deben jugar el mercado y el sector privado. Por otra, se pone énfasis en el plan central, el control, la regulación y la fuerte tributación al sector privado que impide su desarrollo. Esto sugiere un conflicto en la dirigencia (que también existe en los niveles intermedios), unos en favor de los cambios y otros temerosos o reacios a ellos; el resultado ha sido un compromiso ineficaz.

La conclusión es que las reformas y los acuerdos pueden lograr modestas mejoras pero, a menos que se resuelvan las contradicciones existentes en la cima de la pirámide del poder cubano y se profundicen los cambios, no se conseguirá resolver los problemas económicos y sociales fundamentales. Si este vaticinio probase ser correcto, podría ocurrir una lucha en la dirigencia para expandir y profundizar las reformas. Por el contrario, si prevalece la inercia, ocurriría una erosión económico-social mayor y el consiguiente descontento de la población. ☒

33. R. Castro: «Informe central al VI Congreso del PCC», cit.

Haití: el presidente inesperado

Crisis y escenarios poselectorales

STEFANIE HANKE / ARNOLD ANTONIN

La elección del cantante Michel Martelly como presidente de Haití fue un hecho inesperado, en medio de la incierta reconstrucción del país después del devastador terremoto de 2010. El nuevo gobierno deberá lidiar con un país –y un Estado– casi destruidos, con la presencia de una fuerza militar de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y aún preso de la agobiante herencia de medio siglo de desgobierno que incluyó la larguísima dictadura de los Duvalier, además de los militares y Aristide. Así, el nuevo mandatario enfrentará enormes desafíos, en el marco de una cuestionada estrategia de cooperación de la «comunidad internacional», que debería aumentar sus efectivos civiles, enfocarlos hacia la ayuda para el desarrollo y definir un plan de salida del país.

A un año y cuatro meses del terremoto del 12 de enero de 2010, Haití logró tener, finalmente, un nuevo presidente, pero el país sigue en ruinas. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 800.000 personas viven todavía en los 1.150 campos de refugiados que existen en Puerto Príncipe, Leogane y alrededores. La única

construcción visible entre los escombros de la ciudad de Puerto Príncipe es el antiguo mercado Hyppolite, reconstruido por la compañía privada de teléfonos Digicel. Por lo demás solo se ven galpones y otras viviendas provisionarias, mientras las plazas y los espacios públicos –y también muchos privados– siguen ocupados por los refugiados del terremoto, en

Stefanie Hanke: representante de la Fundación Friedrich Ebert (FES) en Haití y República Dominicana.

Arnold Antonin: economista y cineasta haitiano; profesor de la Universidad del Estado de Haití. Es fundador y director del Centro Petión-Bolívar de Haití.

Palabras claves: elecciones, terremoto, reconstrucción, René Préval, Michel Martelly, Haití.

tiendas de campaña y construcciones transitorias sumamente precarias y con apenas los servicios públicos más elementales –y en muchos casos sin ellos–. Según estimaciones, vive en estas condiciones más de un millón de personas. De ellas, no todas perdieron sus casas: se han sumado muchas que vivían en barrios marginales en muy malas condiciones, atraídas por la ayuda distribuida a los damnificados y con la esperanza de lograr obtener en algún momento una vivienda decente. Pero lamentablemente la construcción masiva de viviendas y servicios públicos para mejorar la calidad de vida de la población no ha sido la prioridad de las autoridades nacionales ni internacionales, concentradas en el proceso electoral.

■ Elecciones a cualquier precio

En vistas de que se acercaba el 7 de febrero de 2011, fecha en la cual, según la Constitución, debía haber un nuevo presidente electo juramentado, las autoridades focalizaron todos los esfuerzos en realizar los comicios presidenciales en tiempo récord y contra viento y marea. Más allá del discurso acerca de la estabilidad política, esto se debía en gran medida a la necesidad de movilizar, aprobar y dar legalidad a los millones de dólares en ayudas prometidos por la comunidad internacional para la reconstrucción (o refundación) de

Haití. En efecto, la desastrosa gestión de crisis del gobierno de René Préval después del terremoto empujó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a Estados Unidos a reclamar la celebración de elecciones a cualquier precio, e incluso muchos donantes hicieron depender la entrega de sus prometidas ayudas de la elección de un nuevo gobierno. A ello se agregaba el problema de que incluso el Parlamento había quedado inoperante y caduco luego de unas elecciones de senadores cuestionadas por la oposición, por lo que el proceso electoral se vio bloqueado, en medio de acusaciones contra el Consejo Electoral Provisional de favorecer el fraude en beneficio del partido de gobierno.

Al iniciarse el proceso electoral en septiembre de 2010, el presidente Préval concentró todos sus esfuerzos en fundar un nuevo partido, *Unité* (Unidad, en *créole*), y lanzar a su candidato, Jude Célestin, desconocido hasta ese momento, con la firme idea de que bastaba el apoyo del aparato estatal para ungirlo presidente. Así se llegó al 28 de noviembre de 2010, cuando cuatro millones de haitianos debieron elegir presidente de la República, 99 diputados y 11 senadores. En vísperas de los comicios se destacaban como candidatos con más posibilidades la abogada y ex-primer dama Mirlande Manigat, quien según las encuestas recogía 36% de las

intenciones de voto; Célestin, con 21,1% de intención de voto; Michel Martelly, con 14,2%; y Jean-Henry Céant, con 9,2%.

El renombrado *think tank* The International Crisis Group calificó las elecciones como las «quizás más importantes» de la historia de Haití (aunque en realidad las elecciones en Haití han sido siempre «las más importantes» en su momento). Sin embargo, no se tuvieron en cuenta enseñanzas fundamentales de los años pasados: en primer lugar, no había una comisión electoral independiente y en condiciones de funcionar; en segundo lugar, no había tampoco un sistema de quejas y arbitraje de disputas que trabajara con rapidez y por encima de los partidos políticos; y en tercer lugar, faltaban medidas eficientes y que construyeran confianza, sostenidas a escala local e internacional.

El Consejo Electoral Provisional de Haití es de una provisionalidad permanente y no se corresponde con los requerimientos constitucionales para un consejo electoral de carácter independiente. Desde su surgimiento, se ha visto a menudo agitado por escándalos y se lo consideraba dependiente de las orientaciones del ahora ex-presidente Préval. No obstante, aunque tanto el Consejo como la comunidad internacional implicada en el proceso habían declarado que

todo estaba listo para la realización de elecciones correctas, la primera vuelta se convirtió en un verdadero desastre organizativo. Cientos de miles de haitianos acudieron a las mesas de votación pero no pudieron sufragar porque sus nombres no estaban registrados en las listas de electores, muchas de ellas perdidas durante el terremoto, o porque no obtuvieron los documentos a tiempo. Al anoecer de la jornada electoral solo habían votado 1,1 millones de personas de un total de 4,6 millones de votantes: menos de 25%.

Con todo, la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH, por sus siglas en inglés), la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Consejo Electoral Provisional declararon que las elecciones habían sido «bastante satisfactorias». Pero de los 18 candidatos registrados, 12 tenían otra opinión y exigieron la anulación de las elecciones, entre ellos Martelly y Manigat. Sin embargo, los dos últimos, cuando de alguna manera tuvieron la seguridad de que eran los candidatos con más posibilidades de éxito y de que en cualquier caso ambos irían al balotaje, cambiaron de opinión¹. Y no deja de ser asombroso que esto sucediera el lunes

1. Mirlande Manigat confirmó esto una semana después, en una entrevista de la BBC del 5 de diciembre de 2010.

siguiente a las elecciones, cuando todavía no había comenzado el recuento de los votos. Nueve días después, el 7 de diciembre, el Consejo Electoral Provisional dio a conocer los resultados preliminares oficiales de la primera vuelta, según los cuales Martelly ocupaba el tercer lugar con 21,84%, detrás de Célestin, que recogía 22,48% de los sufragios y de Manigat, quien obtenía 31,37%.

Martelly quedaba así eliminado para el balotaje, lo que derivó en violentas revueltas populares organizadas por sus partidarios apenas fueron difundidos los resultados. Incluso el aeropuerto de Puerto Príncipe debió ser temporalmente cerrado. Tras ello, la embajada de EEUU anunció su apoyo a un nuevo recuento de los votos, y tras varios días de tira y afloja, el presidente Préval pidió que se conformara una comisión especial de la OEA para llevar a cabo una verificación de los resultados, que terminó revirtiendo los ya cuestionados conteos previos. Tras revisar una parte de los sufragios, sobre la base de un muestreo, la comisión de expertos de la OEA emitió un dictamen según el cual Célestin solo había obtenido 21,90%, mientras que Martelly había quedado por delante con 22,20%. Así el candidato del gobierno, Jude Célestin, quedaba finalmente excluido de la segunda vuelta.

Ante este giro, el presidente Préval jugó a ganar tiempo y en un primer

momento se negó a retirar a su candidato de la contienda electoral. El propio Célestin anunció su victoria en el primer turno con 52% de los votos y afirmó que no se bajaría voluntariamente. En paralelo, todos los candidatos excluidos del segundo turno y los partidos que no participaron de las elecciones por falta de confianza en el Consejo Electoral Provisional se lanzaron a las calles en manifestaciones y organizaron una intensa campaña contra las elecciones. La comunidad internacional, por su parte, informó a Préval que le retiraba su apoyo, gracias al cual, cinco años antes, había ascendido al poder². Se llegó a decir que incluso habían considerado la posibilidad de sacarlo del país, lo cual ya había ocurrido con Jean-Bertrand Aristide en 2004³. En tal sentido, el *Latin American Weekly Report* informó el 13 de enero de 2011 que distintos representantes de la comunidad internacional habían propuesto el día de las elecciones que se preparara un avión en el que Préval debía sa-

2. En 2005, tras la primera vuelta, Préval fue declarado ganador aunque solo había recibido 48,7% de los votos. Esto fue posible por una decisión –sin amparo jurídico– del Consejo Electoral y del gobierno de transición de no contabilizar las boletas en blanco. De este modo Préval alcanzó 51% de los votos.

3. Mientras se desarrollaba una rebelión popular en su contra y avanzaba un movimiento armado hacia el Palacio Nacional, el gobierno estadounidense «evacuó» a Aristide en un avión hacia la República Centroafricana, su primer lugar de exilio.

lir del país⁴. Más tarde, el jefe de la MINUSTAH, Edmond Mulet, afirmó que esta fue una información totalmente inventada, pero el rumor quedó, alimentado por varios hechos: el gobierno de EEUU anuló las visas de varios miembros del gobierno, del Consejo Electoral y de altos cuadros del partido Inité, y un repentino viaje de Préval a República Dominicana fue interpretado como un desesperado y fracasado intento del presidente de encontrar apoyo en su amigo, el presidente Leonel Fernández.

En esta situación, y en vista de la enorme presión a la que se veía sometido, Préval reaccionó con una contraestrategia clásica: elevando el potencial de caos en el país. Así, el sorprendente regreso del ex-dictador Jean-Claude Duvalier en medio del desaguado electoral fue interpretado como una jugada de Préval para seguir caldeando el «limbo político» después de las elecciones⁵. Lo mismo sucedió con el regreso, dos meses después y tras siete años de exilio en Sudáfrica, del ex-presidente Aristide, en vísperas del segundo turno de las elecciones.

El primer balotaje de la historia haitiana se fijó entonces para el 21 de marzo, es decir tres meses después de iniciado el proceso electoral. Y el 4 de abril el Consejo Electoral Provisional emitió el resultado prelimi-

nar, que dio como ganador a Michel Martelly como nuevo presidente de Haití con 67,5% de los votos frente a 31,74% de Mirlande Manigat. Hay que decir que únicamente 30% de la población en edad de votar concurre a las urnas, es decir que solo 700.000 electores, sobre un total de más de 4 millones de habitantes, han votado por Martelly, en un país de 10 millones de habitantes. El 16 de abril se proclamaron los resultados definitivos que confirmaban estos datos y el 20 de abril, los resultados de las legislativas. Otra vez se produjeron entonces fuertes y violentas manifestaciones impulsadas por candidatos no oficialistas contra el Consejo Electoral Provisional, al que acusaban de dar la victoria a los candidatos al Parlamento de Inité de manera fraudulenta. Pero la historia no acaba ahí: después de la proclamación oficial y definitiva de las elecciones por el Consejo Electoral Provisional, el presidente electo, en respuesta a las denuncias de fraude en la elección de varios diputados, pidió que se revisaran los resultados y la embajada de EEUU emitió un comunicado apoyando esa petición.

4. «Haiti Reaches Critical Crossroads», WR-11-02.

5. Con fecha 13 de enero de 2011 y bajo el título «Political Limbo» el *Latin American Newsletter* describe el caos poselectoral haitiano.

■ Un presidente excéntrico y muchos desafíos

Michel Martelly, alias *Sweet Micky*, se autodenomina desde hace varios años «el presidente del kompa» –una músicaailable muy popular en Haití–, y su postulación a la Presidencia de la nación caribeña no fue tomada muy en serio. Él mismo se ha definido como un *enfant terrible*; mal estudiante y rechazado por la Escuela Militar de Haití, luego de realizar diversos trabajos se lanza en los años 80 a una carrera brillante como músico y cantante popular. En 1994, al regreso de Aristide de su primer exilio en EEUU, *Sweet Micky* prefirió emigrar a Miami a vivir bajo ese gobierno, y recién retornará al país durante la presidencia de Préval y será recibido triunfalmente.

Durante su campaña electoral, Martelly declaró que la decepción, la frustración y la exclusión de las cuales fue víctima la población haitiana durante la famosa «transición» que siguió a la caída de Duvalier en 1986 habían funcionado como «25 años de campaña» en su favor. Se presentó como el hombre del cambio y en lucha abierta y frontal contra el sistema. Prometió educación gratis para todos, disciplina y trabajo.

Respecto a la dualidad que representaría desempeñar dos papeles tan opuestos como el de cantante provo-

gador hasta la obscenidad –algo que Martelly no niega ni intenta ocultar– y candidato a la Presidencia de la República, él mismo responde que no hay que confundir los dos personajes: el cantante *Sweet Micky* y el candidato Michel Joseph Martelly. En efecto, y a pesar de que supo amenizar y volver incluso «divertida» su campaña mezclando sus discursos con expresiones de sus espectáculos musicales, en sus actos oficiales, donde se ha presentado de saco y corbata, da la impresión de ser un personaje formal con un discurso articulado y fuera de los lenguajes de «medias tintas» utilizados por los otros candidatos, que no supieron mostrarse en abierta ruptura con el «sistema Lavalas» –caracterizado por incompetencia, corrupción, entreguismo, inacción y caos político marcado por la violencia–, instaurado por Aristide desde su primera llegada al poder en 1990. Sin embargo, esta dualidad como cantante y músico provocador y hombre de Estado no deja de ser inquietante en alguien que debe asumir una función crucial en un momento tan determinante en la vida del país. El nuevo presidente se encuentra frente a tres desafíos urgentes.

Designar un primer ministro y formar un gobierno en acuerdo con el Parlamento. Al no sumar más de tres diputados, Martelly deberá demostrar una enorme capacidad de negociación para obtener el apoyo necesario para

concretar en el menor tiempo posible las promesas electorales. En un país donde hasta ahora ha sido tan difícil el balance de poder entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento, nunca se había visto una debilidad tan grande de la bancada parlamentaria del partido presidencial. En estas circunstancias, incluso se vislumbra la posibilidad de la cohabitación con un primer ministro de otro partido. Pero en este caso, si nuevamente se trata de un primer ministro de Inité, la población lo sentirá como un continuismo, y Martelly hizo de la ruptura con el viejo régimen uno de los principales ejes de su campaña. El candidato escogido por el presidente, el industrial Daniel Rouzier, fue rechazado por el Congreso, y se anticipa lo mismo con su nuevo candidato, el abogado y ex-ministro de Justicia Bernard Gousse.

Hacer frente a los problemas, físicos, sociales y económicos de los campos de refugiados frente a la nueva estación ciclónica que se aproxima.

Como hemos señalado, hay más de mil campos de refugiados que se encuentran en plazas públicas y otros espacios estatales y privados que han sido ocupados por las víctimas del terremoto y otros grupos marginales. La primera consecuencia es el gran trastorno que produce esta ocupación espontánea de espacios que estaban previstos para otros

finés: hoy ya no queda ni una plaza pública en el departamento del Oeste. A esto se suman problemas derivados de la falta de servicios públicos (agua, electricidad, recolección de basura, evacuación de aguas servidas, etc.), además de la indefensión frente a las fuertes lluvias y los ciclones que cada año se producen entre abril y diciembre, la promiscuidad y el hacinamiento: la falta de seguridad que ofrecen tiendas y toldos trae como consecuencia un aumento en las violaciones de mujeres y niñas y una gran vulnerabilidad frente a las enfermedades.

Esto implica un proceso de reubicación de los refugiados que comienza por la necesidad de un plan maestro de urbanismo, inexistente en el nivel oficial, y la identificación de terrenos y amplias zonas para la construcción masiva de viviendas de interés social. Y aquí se presenta otro gran problema: la falta de un catastro y, en consecuencia, la poca seguridad que ofrecen los títulos de propiedad. En este gran desorden es difícil saber por dónde empezar, más aún cuando las autoridades encargadas, tanto gubernamentales como la Comisión Provisional para la Reconstrucción de Haití (CIRH), se han concentrado exclusivamente en el embrollo del proceso electoral, por lo cual a un año y medio del terremoto, la urbanización y los proyectos de viviendas todavía no se han encarado.

La CIRH es el órgano máximo de la reconstrucción. Fue creada por decreto presidencial del 15 de abril de 2010 para «dar ayuda eficaz a la población damnificada y poner en marcha un Plan de Desarrollo para Haití con el fin de reconstruir un país más fuerte»; está encabezada por el ex-presidente de EEUU Bill Clinton y el primer ministro haitiano. Los únicos optimistas en la CIRH parecen ser sus líderes, Clinton y Jean-Max Bellerive, el primer ministro saliente del gobierno de Préval. El ex-primer ministro de Jamaica, Perceval Patterson, es el más crítico del proceso por la lentitud de la Comisión, la cantidad de lagunas organizativas, la opacidad y la falta de transmisión de información. Por su parte, los 12 miembros de la parte haitiana de la CIRH denunciaron en una reunión en Santo Domingo estar totalmente al margen de la estructura de la institución. Señalaron que los contactos se establecen solamente en vísperas de las reuniones del Consejo de Administración de la CIRH, y por lo tanto el consejero no tiene tiempo de leer, analizar, comprender y menos aún reaccionar en modo inteligente a los proyectos que le son presentados a último minuto. Los proyectos se transmiten al Consejo en forma de cuadro sintético el día antes de las reuniones y los procedimientos cambian sin ningún aviso.

El reclutamiento y la elección de las empresas para la reconstrucción se han realizado fuera del conocimiento de la parte haitiana del Consejo de Administración, y ningún documento ha informado al Consejo sobre los criterios de empleo y el perfil de los candidatos. En la quinta reunión, en febrero de 2011, a la cual asistieron los dos principales candidatos a la Presidencia (Manigat y Martelly) se habló de redefinir las prioridades de la CIRH. Ahora se plantea, frente a las críticas y la ineficacia, no renovar su mandato y crear otro organismo para la gestión de la reconstrucción. Respecto a este organismo, Martelly dijo durante su campaña que lamenta su lentitud, pero fue siempre prudente en cuanto a si lo mantendrá o no.

Cumplir las principales promesas electorales. Martelly enfrenta en este sentido varios desafíos:

La educación gratuita. Se trata de un punto cardinal de la campaña de Martelly, que hizo que mucha gente votara por él, pero la educación va a ser el primer gran escollo al que se va a enfrentar el nuevo presidente. El nuevo año escolar comenzará en septiembre y la mayoría de los haitianos espera que esta promesa se cumpla de inmediato, mientras que se trata de un proceso que requiere

un buen tiempo de preparación y los recursos para implementarlo. Actualmente hay en Haití 500.000 niños en edad escolar que no van a la escuela, muchos de los cuales ni siquiera han sido inscritos en el Registro Civil. Y de los que se inscriben en la escuela, 67% la abandona en el primer año por falta de recursos económicos de los padres. 85% de las escuelas son privadas, pero además, de las 20.000 escuelas contabilizadas –que desde antes del sismo no respetaban las normas ni las condiciones requeridas para el aprendizaje–, 5.000 han sido víctimas del terremoto y cerraron o funcionan en tiendas o refugios provisionales. 85% de los 70.000 docentes no tiene la formación básica requerida⁶. Y no menos importante es el hecho de que todos los haitianos hablan *créole* y pocos entienden francés, y lo mismo sucede con los profesores. Sin embargo, casi no hay libros de enseñanza en *créole*, aunque la Constitución determina que Haití es bilingüe. Hasta el gobierno de Préval, solamente 9% del presupuesto nacional se dedicaba a la educación. Para poner en práctica el nuevo plan se requiere nada menos que 30% del presupuesto nacional.

La seguridad y un ambiente políticamente estable. Préval había hecho de la estabilidad política su caballo de batalla.

Pero en realidad, la única estabilidad que hubo durante su mandato fue que logró cumplir con su periodo presidencial. No obstante, no logró consolidar las instituciones, en particular el aparato de Justicia, minado desde dentro por la corrupción, ni la policía, para que en un país sin ejército pueda hacer frente a secuestros de personas, asesinatos de civiles y policías, amotinamientos y recurrentes violencias callejeras, entre otras cosas. Todo esto, unido al terremoto, aumentó la masiva fuga de cerebros y la falta de inversiones privadas.

En este contexto, Martelly propone consolidar el aparato de justicia y la policía y crear una nueva fuerza armada que sustituya la MINUSTAH. Pero nuevamente volvemos a la pregunta acerca de con qué medios va a realizar este proyecto de reestructuración del aparato judicial y policial, en cuánto tiempo podrá concretarlo y si mientras tanto podrá mantener la confianza de los votantes para que no se produzcan nuevos motines que debería reprimir con la fuerza pública, lo cual a su vez impediría crear un ambiente propicio para nuevas inversiones.

6. Datos tomados del Plan de Reforma de la Educación del gobierno de Préval.

La sustitución de la MINUSTAH por una fuerza nacional. Siete años después de la instauración del mandato de la MINUSTAH, el país todavía no dispone de suficiente fuerza policial nacional, capaz de garantizarles a sus ciudadanos la seguridad, ni tampoco existen planes para organizar la seguridad interna. Ricardo Seitenfuss, representante de la OEA en Haití, criticó la posición y estrategia de la ONU:

Haití no es una amenaza internacional. No hay una guerra civil. Haití no es Irak o Afganistán. A pesar de esto, el Consejo de Seguridad, a falta de alternativas, impuso fuerzas de mantenimiento de la paz desde 2004 tras la salida del presidente Aristide. Desde 1990 estamos aquí en nuestra octava misión. (...) Estamos enfrentados a luchas por el poder entre actores políticos que no respetan las reglas democráticas. Pero a mí me parece que Haití, [en] la arena internacional, en esencia está pagando por su proximidad a Estados Unidos. Haití ha sido objeto de una atención negativa por parte del sistema internacional. La ONU tenía que bloquear el poder y transformar a los haitianos en prisioneros en su propia isla. El temor a los refugiados haitianos (*boat people*) explica en gran medida las decisiones de la comunidad internacional con respecto a Haití. Queremos que se queden en casa a cualquier precio.⁷

Estas palabras le costaron a Seitenfuss su puesto: en enero de 2011 fue enviado «de vacaciones» por tiempo indefinido.

Por su parte, Martelly parece decidido a crear una fuerza armada, o «un pequeño ejército», como explicó en una entrevista⁸. En su opinión, bastarían para su financiamiento us\$ 25 millones, en comparación con los us\$ 824 millones que cuesta la MINUSTAH anualmente.

Curiosamente, el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, eligió la posesión de Martelly para nombrar un nuevo jefe de la MINUSTAH, el ex-ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Mariano Fernández, quien reemplazará a Edmond Mulet como representante especial a partir del 1 de junio. La decisión de dar a la MINUSTAH una nueva cara se puede interpretar como un esfuerzo por construir una nueva relación con un nuevo gobierno. Empero, en lo que se refiere al resultado de la encuesta sobre la responsabilidad de los soldados nepaleses en la introducción y propagación de la epidemia de cólera en Haití, esta fue publicada pero el informe no pudo ser más ambiguo y no aclaró la responsabilidad de la MINUSTAH en Haití⁹.

7. *Le Temps*, 20/12/2010.

8. Varga Vila Verón: «Presidente electo Michel Martelly restablecerá el Ejército en Haití» en *Dajabón digital*, 5/5/2011, <<http://dajabondigital.com/latest/805-presidente-electo-michell-martelly-restablecera-el-ejercito-de-haiti>>.

9. Ya en el pasado la MINUSTAH ha estado en los titulares de la prensa. Existieron componendas criminales entre tropas jordanas

La agricultura. Esta actividad representa todavía una tercera parte del PIB, con us\$ 1.000 millones. Esta cifra es producida principalmente por la explotación del carbón de leña (que sirve como combustible) y lo siguen los plátanos y la carne vacuna. Los productos tradicionales de exportación de Haití, como el azúcar y el café, son ya productos marginales. En cuanto al arroz, principal producto de consumo alimenticio, ha sido sustituido en gran parte por el arroz importado. Así, frente a esta situación, básicamente el abandono del campo por parte del Estado y la liberalización salvaje del mercado, los campesinos, que nunca recibieron apoyo técnico ni crédito agrícola, dejan el campo para ir a formar los barrios marginales. La población urbana, por su parte, ante el crecimiento de la ciudad, construye sus casas en las tierras agrícolas de las pocas llanuras de Haití, lo que vuelve estas aún más estériles.

El nuevo presidente, que formó el partido Respuesta Campesina para

apoyar su candidatura, ha hecho de la agricultura una de sus prioridades. Ahora le toca salir de las generalidades y de las consignas para presentar un plan de desarrollo agrícola y agroindustrial. Para ello deberá empezar por encontrar un sustituto al carbón de leña, protegiendo el medio ambiente y dándoles a los campesinos productos alternativos, además de luchar por reducir la inseguridad alimentaria mediante un aumento de la producción de cereales y otros cultivos y la transformación industrial de los productos locales para crear valor agregado. Evidentemente, todo esto hay que relacionarlo con el rescate del medio ambiente en Haití que, junto con la educación, es uno de los mayores problemas para la supervivencia del país.

■ Perspectivas

En este contexto, podemos imaginar tres escenarios posibles, sabiendo que en Haití a menudo lo imaginable es lo que sucede.

Escenario optimista. Este escenario podría concretarse si la nueva Presidencia logra instalar un gobierno sin demasiadas obstrucciones por parte del Parlamento y presenta un programa que gana la confianza de la mayoría de la población, con señales de voluntad de un verdadero cambio y de pasar de las promesas

y bandas de Cité Soleil, 108 soldados de Sri Lanka fueron retirados debido a contactos con prostitutas menores de edad y una investigación sacó a la luz que se habían malversado us\$ 610 millones (Colum Lynch: «UN Finds Fraud Mismanagement in Peacekeeping» en *The Washington Post*, 18/12/2007). Países como Jordania o Costa de Marfil, en los cuales Amnistía Internacional constata una y otra vez violaciones sistemáticas de los derechos humanos, han enviado más de 300 soldados y 100 policías.

a los actos. Es decir, si en los próximos seis meses se crea un clima nuevo en el que se sienta y se vea que el país comienza a salir de la catástrofe creada por el terremoto y por medio siglo de desgobierno.

Para ello, el nuevo gobierno deberá mantener una comunicación estrecha, franca y directa con la población, tal como lo hizo el presidente en su campaña electoral. De esa forma podrá contar con el apoyo y la comprensión necesarios, que den calma y serenidad mientras los nuevos planes y políticas se ponen en marcha. En caso contrario, será difícil evitar nuevas revueltas e insurrecciones populares, que serían signos negativos para los inversionistas. Por otra parte, ello implica que la comunidad internacional, países e instituciones financieras, se apresuren a desembolsar finalmente los fondos prometidos y comience la verdadera reconstrucción, bien planificada, dirigida y orientada. Hay que decir que Martelly cuenta con la ventaja de que muchos de quienes lo apoyaron lo hicieron conscientes de que, dado su *background*, todo lo que haga que no sea desastroso será considerado como una especie de milagro.

Escenario pesimista. Este ocurriría si el gobierno de Martelly, al igual que los anteriores, continúa con

la logorrea demagógica e insiste en el culto a la personalidad del presidente y no en la consolidación de las instituciones. Si se rodea de los tradicionales corruptos, duvalieristas y otros. Si no crea el clima de confianza que solo los actos bien dirigidos pueden proveer y así, en pocos meses, la población le retira la confianza y comienzan a darse manifestaciones violentas como otras vistas en el pasado en reclamo del cumplimiento de las promesas hechas en la campaña. Y si sus adversarios, Préval y Aristide, aprovechan entonces para recuperar las simpatías perdidas y posicionarse para la reconquista del poder. Todo esto puede traer reacciones autoritarias y represivas del gobierno, volviendo al círculo vicioso de la degradación.

Escenario moderadamente optimista. El gobierno del presidente Martelly logra hacer algunos actos visibles que le crean un cierto clima de confianza, llegan inversiones extranjeras y lentamente y con muchas dificultades arranca un proceso de normalización, en el que se siente la voluntad política del cambio y hay actos concretos que mejoran las condiciones de vida del pueblo.

En cualquiera de los casos, la comunidad internacional debe cumplir con sus promesas de ayuda financiera formuladas en el momento del terremoto y cambiar radicalmente

su enfoque del apoyo a Haití, creando las condiciones para reforzar las instituciones nacionales y dejando más iniciativa a los haitianos para que asuman sus responsabilidades, aunque cometan errores. Por lo que se refiere a la MINUSTAH, debería aumentar sus efectivos civiles y enfocarlos en la ayuda para el desarrollo, mientras define un plan de salida del país. En cuanto a la clase política haitiana, la victoria de Martelly ha sido

para ella no solo una derrota sino una verdadera humillación. Tendrán que renovar sus cuadros, sus políticas y estrategias de acercamiento al pueblo y formar lo que debieron hacer desde hace 25 años: verdaderos partidos políticos democráticos.

Con todo, es difícil en este momento apostar cuál de estos escenarios será el que se concrete. ☒

Ecuador Debate

Abril de 2011

Quito, Ecuador

Nº 82

COYUNTURA: Diálogo sobre la coyuntura: La consulta popular y los conflictos del decisionismo. Conflictividad socio-política: Noviembre 2010 – Febrero 2011. TEMA CENTRAL: Ecuador: unas reformas petroleras con muy poca reforma. Alcances y contenidos de las transiciones al post-extractivismo. Desigualdad, medio ambiente y desarrollo sostenible en el área andina de América Latina. Un esbozo interpretativo provisorio. Dinámicas del capitalismo: escisión metabólica y sacrificio del valor de uso. Tendencias de la minería y escenarios de transición al post extractivismo: el caso peruano. Malos vecinos: Las empresas mineras canadienses en América Latina. DEBATE AGRARIO-RURAL: El agua y el futuro de la alimentación mundial. Percepciones de cambio climático y estrategias de adaptación en las comunidades agrícolas de Cotacachi. ANÁLISIS: Los conceptos de política y decisionismo político en Carl Schmitt. Su repercusión en el debate latinoamericano. ¿Cómo controlar a los líderes políticos? RESEÑAS: Democracia, participación y socialismo. In the shadows of State and Capital. The United Fruit Company, Popular Struggle and Agrarian Restructuring in Ecuador, 1900-1995.

Ecuador Debate es una publicación del Centro Andino de Acción Popular. Redacción: Diego de Utreras 733 y Selva Alegre, Apartado aéreo 17-15-173-B, Quito, Ecuador, Tel.: 2 522763. Correo electrónico: <caap1@caap.org.ec>.

Energía nuclear en América Latina: el día después

GERARDO HONTY

El debate acerca de la energía nuclear se ha reavivado –especialmente en Europa– luego de la catástrofe de Fukushima en Japón, que ha vuelto a poner sobre la mesa los riesgos de esta controversial fuente de energía. Sin embargo, la discusión es aún muy incipiente en América Latina, donde pese a ser una fuente marginal, hay varios proyectos de ampliación de la capacidad nuclear, supuestamente asociada a una reafirmación de las soberanías nacionales. En ese contexto, el artículo releva la situación nuclear en la región y argumenta contra la opción nuclear como paradigma del desarrollo.

Aún es demasiado pronto para pronosticar qué ocurrirá con la industria nuclear tras el accidente ocurrido en la planta de Fukushima en Japón el pasado 11 de marzo de 2011. Las primeras reacciones han sido de alerta y preocupación, pero no se han levantado voces lo suficientemente alarmadas desde los gobiernos de todo el mundo que hagan prever un repliegue del desarrollo nuclear. Entre los países desarrollados, algunos pocos han comenzado a dar instrucciones para limitar o detener su

expansión. Japón es uno de ellos; Alemania ha acelerado su plan para eliminar la energía nuclear en 2022, Suiza cerrará sus cinco centrales en 2034 y España ha dicho que cerrará su central de Garoña en 2013. Pero no mucho más. Por el contrario, en otros países como la India y China ha habido declaraciones explícitas en el sentido de continuar con los planes de construcción de plantas atómicas. Y, como veremos más adelante, también hay planes en el mismo sentido en la región latinoamericana.

Gerardo Honty: sociólogo, investigador del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), Uruguay. Es experto en políticas de energía y cambio climático. Su último libro es *Cambio climático. Negociaciones y consecuencias para América Latina* (Coscoroba, Montevideo, 2011).

Palabras claves: energía nuclear, energías renovables, ambiente, Fukushima, América Latina.

Cuadro 1

Generación de electricidad en América Latina, 2007

	Hidráulica	Térmica	Nuclear	Otros	Total
Capacidad instalada (en mw)	147.057,15	124.377,79	4.390,00	2.459,53	278.284,47
Electricidad generada (en %)	57	40	2,4	0,6	100

Fuente: Organización Latinoamericana de Energía (Olade): *Informe de estadísticas energéticas 2007*, Olade, Quito, 2008.

Sin embargo, la opinión pública parece haber sentido más el impacto que los voceros oficiales y se han organizado manifestaciones en todo el mundo para reclamar el cierre de las plantas nucleares. Una encuesta realizada por Worldwide Independent Network of Market Research (WIN) en 47 países reveló que el porcentaje de personas que se oponen a la energía nuclear creció 11% después del accidente y pasó de 32% a 43% en términos globales. La dispersión de estos datos es bastante alta: va desde 24% en Corea del Sur hasta 90% en Austria¹. No obstante, en América Latina el estudio solo fue realizado en Brasil y Colombia, donde los resultados muestran que 54% y 73% de los habitantes, respectivamente, se oponen al uso de la energía nuclear tras el accidente en Fukushima.

■ El futuro nuclear en América Latina

La presencia de la energía nuclear en América Latina es muy poco

significativa. Solo tres países (Argentina, Brasil y México) poseen plantas nucleares y su participación es baja tanto en los totales nacionales como en la perspectiva regional. La capacidad nuclear representa menos de 1% del total de la potencia de generación instalada en la región. En el año 2007 la generación de nucleoelectricidad en toda América Latina fue de 1,226 TWh, lo que representa 2,4% de la oferta de electricidad total (v. cuadro 1).

Luego del accidente nuclear ocurrido en Japón se observan distintas posturas. Los países que poseen plantas nucleares mantienen sus planes de aumentarlas (Argentina, México y Brasil); un conjunto asegura que continuará avanzando en los estudios para su eventual implementación (Chile, Ecuador y Uruguay); y, finalmente, otro grupo ha detenido o cancelado cualquier opción nuclear (Bolivia, Perú y Venezuela).

1. Agencia Estado, 19/4/2011.

Argentina. El sector nuclear en Argentina está en manos de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina SA, creada el 30 de agosto de 1994. La primera central nuclear del país –y la primera de América Latina–, Atucha I (357 MW), se puso en marcha en 1974 y se encuentra ubicada en la provincia de Buenos Aires, a 100 km de la capital argentina. En ese mismo emplazamiento se encuentra la Central Nuclear Atucha II, de 745 MW, en etapa de construcción. Por su parte, la central nuclear de Embalse (648 MW), la segunda construida en Argentina, se encuentra ubicada en Embalse de Río Tercero, provincia de Córdoba, a 700 km de la ciudad de Buenos Aires. En el año 2009 la oferta de energía eléctrica proveniente de estas usinas nucleares alcanzó el 7% de la oferta eléctrica del país (v. cuadro 2).

En el año 2006 se puso en marcha el Plan Estratégico del Sector Nuclear

Argentino, que ratificó la decisión de continuar con la construcción y puesta en marcha de la central nuclear Atucha II y procura restablecer las actividades de la minería de uranio y su proceso de enriquecimiento. Argentina no solo tiene usinas nucleoelectricas, sino que ha desarrollado tecnología de fabricación de reactores nucleares de investigación y experimentación. Entre sus clientes figuran Argelia, Australia, Egipto y Perú. En este marco, en mayo de 2010 se firmó un convenio entre la Comisión Nacional de Energía Atómica y el gobierno de la provincia argentina de Formosa para impulsar la construcción de un reactor nuclear de 150 MW de potencia. Y luego del accidente de Fukushima no ha habido reacciones desde el sector gubernamental que indiquen que los planes nucleares serán revisados.

Brasil. En Brasil, la generación de energía a partir de fuentes nucleares

Cuadro 2

Argentina: generación de energía eléctrica por tipo, 2009

Tipo	GWh	%
Ciclo combinado gas natural	24.920	23
Ciclo combinado vapor	12.560	12
Nuclear	8.161	7
Turbo gas	10.379	9
Turbo vapor	15.872	15
Hidráulica	34.204	32
Otros	1.771	2
Total general	107.867	100

Fuente: Secretaría de Energía de la República Argentina.

Cuadro 3

Brasil: potencia instalada y generación por tipo de fuente, 2009

	Hidráulica	Térmica	Eólica	Nuclear	Importación	Total
Capacidad instalada (en mw)	79.291	24.315	602	2.007		106.215
Electricidad generada (en %)	76,9	12,3	0,2	2,5	8,1	100

Fuente: Balance Energético Nacional 2010.

está, desde 1997, en manos de la empresa de economía mixta Eletronuclear, subsidiaria de Eletrobras. La central Almirante Álvaro Alberto está situada en el municipio de Angra dos Reis, cuenta con dos usinas en operación (Angra 1 y Angra 2), y ha iniciado la construcción de una tercera (Angra 3). Angra 1 tiene una capacidad de generación de 657 mw y entró en operación en 1985. Angra 2, con una potencia de 1.350 mw, comenzó a entregar electricidad en el año 2000. La construcción de Angra 3 se inició en junio de 2010 y demandará entre tres y poco más de cinco años para su término; se estima que su capacidad de generación será de 1.405 mw. La mayor parte del financiamiento (60%) proviene del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que aportará us\$ 4.000 millones. En el año 2009 la energía nuclear representó 2,5% del total de la oferta eléctrica brasileña según el Balance Energético Nacional del Ministerio de Energía y Minas. La capacidad nuclear instalada

es 1,9% de la potencia de generación total de Brasil (v. cuadro 3).

En julio de 2008 el Gobierno Federal creó el Comité de Desarrollo del Programa Nuclear Brasileño, que ha previsto un plan de expansión de la oferta de energía de origen nuclear de 4.000 mw adicionales hacia el año 2025, para lo cual ha previsto la instalación de cuatro centrales nucleares de 1.000 mw².

El accidente de Fukushima no parece haber tenido impacto en el programa nuclear brasileño. El canciller Antonio de Aguiar Patriota declaró a la prensa que la crisis nuclear en Japón no iba a incidir en los planes de desarrollo energético de su país³. Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Edison Lobão, descartó la posibilidad de suspender la construcción de cuatro nuevas plantas atómicas, como lo prevé el plan energético.

2. Fuente: <www.eletronuclear.gov.br>.

3. Agencia EFE, 1/4/2011.

«No tenemos necesidad de revisar nada, salvo aprender de lo que ocurrió allá», declaró Lobão. Sin embargo, esta opinión no es unánime. Algunos legisladores, y particularmente el presidente del Senado, José Sarney, advirtieron que el país debía replantear sus planes de apostar por la tecnología nuclear como fuente energética del futuro.

Acuerdos Argentina-Brasil. El 22 de febrero de 2008 Brasil y Argentina firmaron una declaración conjunta que promueve la integración bilateral en materia nuclear, la cual fomentó el trabajo entre la Comisión Nacional de Energía Atómica de Argentina (CNEA) y la Comissão Nacional de Energia Nuclear de Brasil (CNEN) para la conformación de la Comisión Binacional de Energía Nuclear (Coben). A partir de entonces, ambos países vienen trabajando para acordar y avanzar sobre los intereses comunes en materia nuclear.

En 2009, mediante la Declaración Conjunta sobre Cooperación Nuclear emitida en San Juan por el entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva y su par Cristina Fernández de Kirchner, se instruyó a la Coben para «intensificar los esfuerzos de implementación de proyectos de cooperación e integración por ella identificados como prioritarios para el avance de la cooperación bilateral en el campo de los usos pacíficos de la energía nuclear, particularmente proyectos emblemáticos de la

relación estratégica bilateral y de alta visibilidad, como el desarrollo conjunto de un reactor de investigación multipropósito»⁴.

El 31 de enero de 2011, en ocasión de la visita de la presidenta Dilma Rousseff a Argentina, se firmó una declaración en la que «se felicitaron (...) por la firma del Acuerdo de Cooperación entre la CNEA y la CNEN sobre el Proyecto de Nuevo Reactor de Investigación Multipropósito, el cual abre la perspectiva de una cooperación de gran impacto para el desarrollo de sus respectivos sectores nucleares»⁵.

México. Este país cuenta con una planta nuclear ubicada en Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, en el estado de Veracruz. La Central Nuclear Laguna Verde posee dos generadores de 682,5 MW cada uno y es propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Las unidades entraron en operación en 1990 y 1995. En 2007 la CFE anunció que aumentaría la capacidad instalada en 20%, obra que estaría a cargo de la empresa española Iberdrola.

4. «Acuerdo nuclear entre Argentina y Brasil luego de la visita oficial de Dilma Rousseff» en *NPSGlobal*, 31/1/2011, <<http://npsglobal.org/esp/noticias/140-usos-pacificos-de-la-energia-nuclear/1092-acuerdo-nuclear-argentina-brasil-visita-oficial-dilma-rousseff.html>>.

5. «Declaração Conjunta por ocasião da visita da Presidenta Dilma Rousseff à República Argentina – Buenos Aires, 31 de janeiro de 2011», <www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/notas-a-imprensa/declaracao-conjunta-por-ocasio-da-visita-da-presidenta-dilma-rousseff-a-republica-argentina-2013-buenos-aires-31-de-janeiro-de-2011>.

Cuadro 4

México: generación de energía eléctrica y capacidad instalada, 2010

Tipo de central	Capacidad instalada (en MW)	Generación (en %)
Hidroeléctrica	11.503,2	15
Termoeléctrica	24.520,7	40
Productores independientes	11.906,9	33
Carboeléctrica	2.600,0	7
Nucleoeléctrica	1.364,9	2
Geotermoeléctrica	964,5	3
Eoloeléctrica	85,3	-
Total	52.945,4	100

Fuente: Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico: «Prontuario estadístico del sector energético», Sistema de Información Energética, febrero de 2011.

En el año 2010 la central nuclear de Laguna Verde aportó 2,4% del total de la electricidad producida en el país (v. cuadro 4).

La Estrategia Nacional de Energía aprobada en febrero de 2010 reconoce la energía nuclear como una energía «limpia» y establece la obligación de hacer los estudios necesarios para ampliar su participación en la matriz energética⁶. Luego del accidente ocurrido en Fukushima, el subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía, Carlos Petersen y Vom Bauer, aclaró que aún no está tomada la decisión de construir otra planta nuclear en el país, pero deben continuar los estudios para tener mayor certidumbre y minimizar los riesgos a futuro, en caso de que así se decida. «No está ni cancelado ni mucho menos; tiene que continuarse el estudio

de la decisión para poner o no una planta nuclear en México», declaró el funcionario a la agencia Notimex⁷. Por su parte, Ricardo Córdoba, subdirector de Seguridad Nuclear en la Comisión Federal de Electricidad, declaró que la energía nuclear debe seguir siendo considerada como una fuente limpia de energía⁸.

Chile. A fines de octubre de 2010, cuando el presidente Sebastián Piñera presentó los seis pilares de la política energética de largo plazo de su gobierno, destacó que uno de ellos serían las energías renovables no convencionales (ERNc), pero enfatizó que tampoco había que descartar a priori la energía nuclear. En

6. Fuente: <www.energia.gob.mx/portal/subsecretaria_de_planeacion_energetica_y_desarrollo_tecnologico.html>.

7. Despacho del 14/3/2011.

8. Agencia AP, 11/5/2011.

aquella oportunidad abogó por la creación de la institucionalidad que sería necesaria cuando llegara el momento de decidir respecto de esta alternativa. Para ello, el gobierno nacional ha venido preparando una serie de estudios con el objetivo de disponer de información técnica que oriente la decisión⁹.

Además, el gobierno de Chile ha firmado acuerdos con Francia y Estados Unidos para la cooperación nuclear. El 20 de octubre de 2010, en el marco de la visita oficial del presidente Piñera a Francia, se firmó una declaración conjunta en la que se establece, entre otras cosas, que «en el marco de los estudios previos llevados a cabo por Chile en el ámbito de la energía nuclear, ambos países deciden elaborar e implementar un programa de formación de capital humano en esta área. Además, Francia está dispuesta a apoyar a Chile en sus procesos de fortalecimiento y rediseño institucional en este ámbito»¹⁰.

Por otro lado, el 18 de marzo de 2011 (en pleno desarrollo de la crisis nuclear japonesa) se firmó un memorándum de entendimiento entre los gobiernos de Chile y EEUU para la investigación y el desarrollo de la energía nuclear con fines pacíficos. El acuerdo es muy general e incluye la cooperación recíproca sobre el tema a través del intercambio de información, capacitación de personal, actividades académicas, etc.

Cuestionado por la firma de este acuerdo, el ministro de Energía y Minería, Laurence Golborne, explicó que lo que buscan estos acuerdos es generar «capital humano» con conocimientos en la materia. «El acuerdo es de cooperación científica y tecnológica en temas nucleares, no es para desarrollar plantas de potencia, ni nada por el estilo.» Además afirmó que el uso de la energía nuclear es «una materia que requiere un amplísimo consenso social, no es solo un problema técnico». Por eso «la sociedad deberá ponderar si los riesgos asociados son factibles de abordar o no respecto de otras alternativas que también existen»¹¹.

Es de destacar que Chile es un país muy expuesto a terremotos y tsunamis (en enero de 2010 y febrero de 2011 se registraron terremotos de 8,8 y 7,1 grados respectivamente), por lo que el accidente de Fukushima ha tenido particular impacto en la opinión pública acerca de la conveniencia del uso de la energía nuclear.

9. Comisión Nacional de Energía, Gobierno de Chile, <www.cne.cl/cnewww/opencms/05_Public_Estudios/introduccion.html>.

10. Declaración conjunta de M. Nicolas Sarkozy, presidente de la República de Francia, y M. Sebastián Piñera, presidente de la República de Chile, Palais de l'Élysée, 20 de octubre de 2010, disponible en <www.elysee.fr/president/root/bank_objects/101020Declaration_conjointe_Sarkozy-Pinera_version_espagnole.pdf>.

11. «Ministro Golborne aclara que acuerdo nuclear es para generar capital humano capacitado» en *Publímetro*, 20/3/2011, <www.publimetro.cl>.

Uruguay. El 29 de julio de 1988 el entonces presidente uruguayo, Julio María Sanguinetti, firmó un acuerdo de cooperación nuclear con Canadá que incluía la eventual generación de electricidad. Sin embargo, la oposición ciudadana y de algunos partidos políticos terminó impidiendo la concreción de dicho acuerdo. Más tarde, en 1997, la llamada Ley de Marco Regulatorio del Sector Eléctrico (N° 16.832) incluyó un artículo que expresamente prohíbe la generación (e incluso la importación) de energía nucleoelectrónica en el país.

No obstante ello, en 2006 el Ministerio de Industria, Energía y Minería publicó el estudio denominado «Aspectos para el análisis de la alternativa de incorporación de generación nuclear en Uruguay», que dio inicio a un proceso que continúa hasta hoy. En 2008, el entonces presidente Tabaré Vazquez encargó al ministro de la cartera un estudio más completo que el anterior¹². Ya durante la administración del actual presidente José Mujica, fue conformada una comisión multipartidaria a la que se le adjudicó un presupuesto cercano al millón de dólares para evaluar la factibilidad de la instalación de una planta nuclear en el país.

De acuerdo con el director nacional de Energía, Ramón Méndez, el accidente de Fukushima no alterará los planes del país en materia de energía nuclear. «En ese camino, naturalmente vamos

a colocar como un eje central lo que ha pasado en Japón. Hay que darle la mayor de las importancias, agregarlo como un elemento fundamental (...). Pero creo que no hay que abandonar la discusión.»¹³

Ecuador. Ecuador no tiene planes formales de instalación de plantas atómicas aunque la opción está presente, como lo ilustra el mensaje al país del ministro de Electricidad y Energía Renovable Esteban Albornoz Vintimilla: «la problemática que enfrenta el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable tiene múltiples aristas como: (...) desarrollar la energía geotérmica y de biocombustibles y las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear»¹⁴.

Ecuador tiene además acuerdos firmados con Rusia e Irán sobre energía nuclear. El 31 de julio de 2008 la ex-canciller María Isabel Salvador y el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Manouchehr Mottaki, firmaron una declaración en la que «reafirmaron el derecho inalienable de todos los países para desarrollar la investigación, la producción, la

12. «Análisis para la eventual puesta en marcha de un programa nuclear para generación eléctrica en Uruguay», Montevideo, octubre de 2008.

13. «Caos nuclear incidirá en debate sobre posible planta en Uruguay» en *Espectador.com*, 16/3/2011, <www.espectador.com>.

14. En Ministerio de Energía y Electricidad Renovable, <www.meer.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=90:mensaje-al-pais&catid=17:ultimas-noticias>.

utilización de la energía nuclear con fines pacíficos»¹⁵. En octubre de 2009, Ecuador suscribió una serie de convenios con Rusia durante la visita oficial de Rafael Correa a ese país, entre los que se encuentra uno relativo a la cooperación para la utilización de la energía atómica con fines pacíficos. El documento plantea, entre otros aspectos, la cooperación en proyección, construcción y explotación de reactores nucleares energéticos y de investigaciones, así como la explotación y explotación de yacimientos de uranio.

Luego de la crisis nuclear japonesa, el presidente Correa afirmó que el accidente de Fukushima no detendrá los estudios en los que se ha embarcado su país. «Lo más importante como país es conocer, no podemos caer en la izquierda tradicional de pensar que la tecnología es mala y dejar todo en saberes.»¹⁶

Perú. El presidente de Perú, Alan García, luego del accidente ocurrido en Japón, ha planteado que su país renuncie al desarrollo de la energía nuclear por cien años. «Teniendo tantos recursos hidroenergéticos, de gas y petróleo, Perú puede hoy hacer un compromiso, por los próximos 100 años o más, de verse libre de esa amenaza, mucho más siendo un país sísmico», dijo el mandatario. García indicó que consultará a sus ministros un proyecto de ley para declarar a Perú país libre de energía nuclear¹⁷.

Venezuela. En octubre de 2010 el presidente Hugo Chávez había alcanzado acuerdos con el gobierno ruso para construir dos plantas nucleares de 1.200 MW cada una. La primera de ellas estaría instalada en diez años, pero el accidente ocurrido en Japón llevó al gobierno venezolano a detener los trabajos que venían realizándose. «Yo, por los momentos, he ordenado al viceministro [de Energía y Petróleo Rafael] Ramírez que congelemos los planes que hemos venido adelantando, estudios muy preliminares del programa nuclear pacífico venezolano.»¹⁸

Bolivia. Por su parte el presidente Evo Morales ha sido enfático en declararse contrario al uso de la energía nuclear en Bolivia y agregó que toda América Latina debería hacer lo mismo. «Lo que pasó en Japón con la energía nuclear es muy grave y da lástima y una enorme preocupación

15. «El Ecuador apunta la mira hacia la era nuclear» en *Hoy*, 19/4/2010, <www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/la-energia-nuclear-esta-en-la-bitacora-del-plan-de-diversificacion-energetica-403434.html>.

16. «Presidente Correa: 'Debemos aprender sobre energía nuclear'», entrevista, en *Ecuadorinmediato.com*, 21/3/2011, <http://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=146082&umt=presidente_correa_debemos_aprender_sobre_energia_nuclear>.

17. «Alan García propone renunciar a la energía nuclear» en *Infobae.com*, 18/3/2011, <<http://america.infobae.com/notas/21083-Alan-Garcia-propone-renunciar-a-la-energia-nuclear>>.

18. «Congelan planes nucleares de Venezuela» en *El Universal*, 15/3/2011, <www.eluniversal.com/2011/03/15/congelan-planes-nucleares-de-venezuela.shtml>.

(...). Tenía muchos deseos de que Bolivia tuviera energía nuclear —energía nuclear, no bombas atómicas—, pero ahora me doy cuenta de que tal vez estuve equivocado, ahora hay que pensar y tal vez rechazar al ver el Japón», declaró Morales¹⁹.

Paraguay. En Paraguay, en virtud de su altísimo excedente de energía hidroeléctrica, la discusión sobre energía nuclear es prácticamente inexistente.

■ La oferta nuclear esperada

De acuerdo con los análisis de prospectiva realizados en 2009 por la Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en inglés), el consumo global de electricidad en América Latina pasará de los 806 TWh anuales del año 2007 a los 1.438 TWh que serán consumidos en el año 2030. Es decir que el crecimiento esperado del consumo de energía eléctrica será de 78% en ese periodo. Siguiendo la misma fuente de información, menos de 2% de la electricidad en el año 2030 provendrá de plantas nucleares. Es decir que, dentro de 20 años, la proporción de energía de origen atómico en la región seguirá siendo la misma que en la actualidad.

Por el contrario, las fuentes renovables (diferentes de la hidráulica) para generar electricidad en América Latina crecerán más del doble de lo que creará la nuclear. En el informe citado

se establece que en 2030 la fuente de mayor contribución a la generación eléctrica seguirá siendo la hidráulica, con 55%, seguida por el gas natural, con 32%.

Aun en un escenario sin políticas específicas para alentarlas, las otras fuentes renovables (eólica, solar y biomasas) alcanzarían el 4% del suministro eléctrico latinoamericano. Además, la Agencia Internacional de la Energía no se ha caracterizado por demostrar un sesgo que favorezca particularmente las energías renovables, por lo que su pronóstico puede ser considerado «conservador» con relación al desarrollo esperado del sector.

De esto pueden desprenderse algunas conclusiones. La primera es que la energía nuclear va a mantener su presencia marginal en el horizonte energético de América Latina. Lo segundo es que las fuentes renovables, sin hacer ningún esfuerzo específico, tienen mucho más para ofrecer que la energía de origen nuclear. Y finalmente puede concluirse que con muy poco esfuerzo las energías renovables son capaces de suplir con muchas ventajas y menos riesgos la oferta que podría llegar a brindar la energía nuclear.

19. «Evo Morales descarta que Bolivia produzca energía nuclear» en *AméricaEconomía.com*, 24/4/2011, <www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/evo-morales-descarta-que-bolivia-produzca-energia-nuclear>.

■ Los ejes del debate

Varios actores provenientes del mundo político –tanto progresista como conservador–, académico y empresarial en América Latina apoyan la ampliación de la capacidad nuclear en la región. Las razones son varias pero las más comúnmente esgrimidas son: a) el menor costo relativo de la energía nuclear, b) las bajas emisiones de gases de efecto invernadero y c) la gran capacidad de generación concentrada en un solo lugar.

Todos estos fundamentos son discutibles y de hecho se han debatido intensamente en los últimos tiempos. Sin embargo, no puede dejar de percibirse en estos discursos una asociación casi axiomática entre energía nuclear y desarrollo. Hay un subtexto implícito –y muchas veces un mensaje explícito– que afirma la necesidad de este tipo de fuente energética para asegurar «el desarrollo».

Más allá de la necesaria discusión acerca del tipo de desarrollo al que remite el razonamiento, el argumento parece desconocer absolutamente la capacidad de las energías renovables para suplir toda la electricidad necesaria, aun ante semejante concepción del desarrollo. Según la última prospectiva realizada por la Agencia Internacional de la Energía²⁰, en el año 2035 las energías renovables cubrirán un tercio de la

oferta mundial de electricidad. Sin embargo, los actores políticos latinoamericanos suelen despreciar las posibilidades de este tipo de energías.

Pero los problemas de la energía nuclear sobrepasan largamente sus potenciales beneficios. El riesgo de accidentes –expuesto con una vehemencia escalofriante en Japón– es solo uno de los aspectos negativos que presenta la energía nuclear. A esto hay que agregar consideraciones ambientales, económicas y de seguridad, entre otras.

El costo de la energía nuclear merece una primera reflexión. Es sabido que el factor predominante en la conformación del costo de este tipo de energía radica en la inversión inicial, ya que el costo de operación tiene menor incidencia que en las otras fuentes como el gas, derivados de petróleo, etc. Por lo tanto, estimar con la mayor exactitud la inversión necesaria para la construcción de una planta nuclear se vuelve un elemento clave para prever el precio final de la energía que va a generarse. Sin embargo, es bastante difícil establecer de antemano el valor real final que asumirá la construcción de una central nuclear. Ya en 1986, un estudio realizado por la Administración de la Información de la Energía de EEUU demostraba que el costo de las centrales construidas entre 1966 y

20. IEA: *World Energy Outlook 2010*, noviembre de 2010.

1977 había sido muy superior al que se había considerado originalmente²¹.

Un aspecto que influye en esta divergencia entre el costo esperado de una central y el que finalmente termina teniendo es el retraso en los tiempos de construcción. Esto se ha repetido a lo largo de la historia: uno de los últimos casos es el de la central de Olkiluoto en Finlandia, que lleva años de retraso en su cronograma y cuyo presupuesto ha aumentado en más de 50% respecto del previsto originalmente. La última central que entró en operación en el mundo (Cernavoda 2, Rumania, agosto de 2007) tardó 24 años en construirse.

Por otra parte, a la inversa de lo que ocurre con las industrias convencionales, que reducen costos a medida que avanzan en su curva de aprendizaje, la tecnología nuclear enfrenta costos cada vez mayores. La última evaluación del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) realizada en 2009 duplicó el costo del kilovatio instalado, que pasó de us\$ 2.000 a us\$ 4.000²². Los relativamente menores costos de la energía nuclear están fundados en una larga lista de subsidios ocultos y explícitos en todo el mundo. En EEUU, después de 50 años de actividad, la industria nuclear aún no ha logrado sobrevivir sin importantes subsidios estatales²³.

El argumento de la capacidad de generación centralizada (varios cientos

de MW concentrados en un solo lugar) no necesariamente opera a favor de la energía nuclear. Pocos países en América Latina tienen capacidad de red suficiente para absorber la producción de una gran planta nuclear. Esto va a requerir en muchos países latinoamericanos la construcción de nuevas redes de transmisión con capacidad para transportar toda esa energía. En cambio, las energías renovables, naturalmente descentralizadas, operan con cargas menores y disminuyen las pérdidas originadas en el transporte de electricidad.

Otro aspecto que los tomadores de decisión deben tener en cuenta –al menos en los países que aún no poseen energía nuclear– es el costo de preparación de las condiciones nacionales mínimas de base para instalar energía nuclear. Esto requiere de capacidades científico-técnicas, de calificación laboral, del desarrollo de una estructura jurídica específica y del necesario acuerdo ciudadano que evite los conflictos sociales. Instalar todas estas capacidades en el país requiere de grandes inversiones que

21. IEA: *World Energy Outlook 2006*, OECD-IEA, París, 2006.

22. Ministerio Federal Alemán de Ambiente, Departamento de Conservación de la Naturaleza y Seguridad de los Reactores: «Informe sobre el estado mundial de la industria nuclear 2009».

23. «After 50 Years, Nuclear Power is Still Not Viable without Subsidies, New Report Finds» en *Union of Concerned Scientists*, 23/2/2011, <www.ucsusa.org/news/press_release/nuclear-power-subsidies-report-0504.html>.

correrán por cuenta del Estado y pasarán a engrosar la lista de los subsidios ocultos a la energía nuclear.

La seguridad es otro aspecto que debe ser considerado. Las centrales nucleares son blanco fácil en caso de conflictos bélicos o ataques terroristas. Esto puede sonar más o menos descabellado en los tiempos actuales en América Latina, pero no puede perderse de vista que la vida de una central atómica puede llegar a los 60 años –considerando desde su construcción hasta su desmantelamiento–, y esto es demasiado tiempo como para no tomar recaudos ante eventuales hechos futuros de esta naturaleza. Por otro lado, la proliferación nuclear es otro de los factores que oscurecen el horizonte nuclear. El proceso de fabricación de combustible para hacer funcionar una central núcleoeléctrica es el mismo que permite obtener materiales para la construcción de bombas atómicas. Puede llegar a ser difícil en situaciones de inestabilidad institucional controlar el destino del plutonio producido.

Desde el punto de vista ambiental, no hay duda de que el principal problema es el destino final de los residuos, principalmente el del combustible nuclear quemado. Estos residuos mantienen su radioactividad por decenas (incluso cientos) de miles de

años y no se ha logrado determinar o construir un solo lugar seguro en el planeta donde alojar el volumen de residuos radiactivos producidos. Es más, es imposible determinar que algo es seguro en escalas de tiempo tan extendidas, por lo que el legado radiactivo a las generaciones futuras es una carga excesivamente pesada para la conciencia de la generación presente.

En resumidas cuentas, la energía nuclear presenta no solo riesgos por eventuales accidentes, sino una larga lista de problemas de diversa índole que hacen inconveniente su utilización. Y resulta incomprensible que se insista con esta solución tan controvertida y desfavorable, cuando existen alternativas con bastantes menores impactos y riesgos. Como se vio anteriormente, las necesidades energéticas latinoamericanas pueden ser satisfechas por completo con la adición de fuentes renovables, sin necesidad de recurrir a la energía nuclear.

El accidente de Fukushima debería haber sido por sí solo suficiente para alertar a los gobiernos latinoamericanos de lo desaconsejable de emprender o continuar el camino nuclear. Si no ha sido así, al menos ha servido para reavivar un debate que lleva decenas de años y parece no estar laudado aún. ☐

 **TEMA CENTRAL**



¿Progresistas?

Partidos y movimientos en América Latina

Balance y desafíos de las izquierdas continentales

En una gran parte de América Latina y el Caribe, partidos de izquierda –con diferentes tradiciones y proyectos ideológicos– han llegado al gobierno. Pese a los avances, se percibe un déficit estratégico a la hora de superar una primera etapa de reformas paliativas de los efectos del neoliberalismo. El artículo sostiene que si la izquierda latinoamericana y caribeña desea ampliar su fuerza sin perder el rumbo, tendrá que prestar más atención al debate sobre el capitalismo en el siglo XXI, así como al balance del socialismo del siglo XX y a la discusión estratégica. Esto incluye poner en la ecuación la relación entre las líneas políticas, la base social, el partido, el gobierno y el Estado.

VALTER POMAR

América Latina y el Caribe desempeñaron un papel importante en el desarrollo del capitalismo, más específicamente en el enriquecimiento de potencias aún dominantes en la actualidad, como Estados Unidos y algunos países europeos. El saqueo y la explotación de América Latina y el Caribe favorecieron la acumulación de riquezas que precedió a la industrialización capitalista de las metrópolis europeas. Luego, los países de la región no solo sirvieron como proveedores de materias primas, sino también como mercado consumidor de productos industriales y receptores de capitales exportados por las metrópolis.

Valter Pomar: doctor en Historia por la Universidad de San Pablo (USP). Integra el Directorio Nacional del Partido de los Trabajadores (PT).

Palabras claves: izquierdas, estrategia, integración, capitalismo, socialismo, América Latina.

Traducción: Sara Daitch.

Esta relación de explotación se mantuvo a lo largo de la historia, sin importar cuál fuera el país que ejercía la hegemonía del polo metropolitano: Portugal, España, Holanda, Francia, Inglaterra o EEUU. La explotación de las metrópolis no obstaculizó el desarrollo de América Latina pero sí generó un tipo de desarrollo que reproduce las condiciones generadoras de la explotación, la dependencia externa y la desigualdad. En el límite, las metrópolis aceptaban e inclusive estimulaban el desarrollo, siempre que este último fuera asociado, subordinado, dependiente y periférico. En efecto, tanto la explotación como el desarrollo asumieron formas diferentes que dependían: a) de las condiciones naturales; b) de las características de las sociedades precolombinas y de las respectivas metrópolis; c) de los diferentes tipos y niveles de explotación, por lo tanto, de la actitud general de las clases dominantes y del comportamiento de los grupos sociales explotados.

Con frecuencia, las diferencias nacionales, subregionales, sociales, étnicas, culturales y lingüísticas son puestas al servicio del cuestionamiento de la existencia de una única América Latina y el Caribe. Así sucedió al comienzo del siglo XIX y continúa así a comienzos del siglo XXI, como se puede observar en el discurso de los sectores opositores a las políticas de integración, especialmente las impulsadas desde 1998 y plasmadas en instituciones como la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe (Celac), etc.

Obviamente, no es posible desconocer o minimizar las profundas diferencias existentes entre los países de América Latina y el Caribe, parte de las cuales resultan de la acción de las metrópolis y de sus aliados en la región. La cuestión es notar que, desde el periodo colonial, la región ha manifestado un doble potencial: a) por un lado, un potencial de integración subordinada o, para ser más exactos, de desintegración en unidades nacionales autónomas y a veces enfrentadas entre sí, pero igualmente subordinadas a centros metropolitanos; b) por otro lado, un potencial de integración autónoma. Ambos destinos están incluidos entre los posibles futuros de América Latina y el Caribe: o bien se transforma en una región integrada desde afuera, a partir de los intereses y las necesidades de las potencias centrales o, por el contrario, se transforma en una región integrada desde adentro. Y en este segundo futuro posible se presenta un abanico de alternativas que van desde una integración con hegemonía ejercida por una nación de la región, en favor de los intereses de su propia clase dominante, hasta una integración con orientación socialista.

Como sabemos, en el transcurso de los últimos cinco siglos prevaleció una variante dependiente, asociada y periférica de integración, combinada con desarrollos nacionales marcados por la desigualdad y las reducidas libertades democráticas. Durante ese tiempo, debido a las ya mencionadas conexiones, con cada crisis que ocurría en las metrópolis se acentuaba la lucha por la naturaleza del desarrollo nacional, la integración regional y las relaciones con el resto del mundo en la región. A fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, el ciclo de revoluciones burguesas en Europa creó un contexto propicio para las independencias latinoamericanas. Pero es bueno notar que parte de las repúblicas independientes, así como la monarquía brasileña, escaparon de la hegemonía ibérica rumbo a la hegemonía británica.

En la primera mitad del siglo XX, el conflicto interimperialista ayudó a abrir las puertas de una creciente industrialización, proceso que a su vez estuvo en la base del ciclo revolucionario y populista de los años 1930-1950, así como en el ciclo de golpes y dictaduras que se iniciaron en la década de 1960. Esta etapa de industrialización sucedió simultáneamente con el declive de la hegemonía británica y la consolidación de la hegemonía regional y mundial de EEUU.

La crisis internacional de los años 70, y más precisamente la actitud de EEUU frente a la crisis, desencadenaron un proceso regresivo a escala mundial del que no estuvieron exentos América Latina y el Caribe, caracterizado por el colapso de la socialdemocracia europea, de los nacionalismos africanos, de los desarrollismos latinoamericanos y finalmente del socialismo de tipo soviético; y marcado además por la crisis de la deuda externa y por el progreso del neoliberalismo.

En este nuevo contexto, el neoliberalismo se volvió hegemónico en América Latina durante las décadas de 1980 y 1990, lo que contribuyó a acentuar la dependencia, la desigualdad y el conservadurismo político. Así, en los años 90, la lucha por los intereses nacionales, populares, democráticos y socialistas en América Latina ingresó en una etapa de defensa estratégica. En otras palabras: se trataba de defender las conquistas logradas en el periodo anterior en un contexto marcado por la crisis del socialismo y por la ofensiva neoliberal.

A partir de la segunda mitad de los años 90, esta situación de defensa estratégica de las fuerzas populares coincidió, además, con un periodo de gran inestabilidad internacional, resultante de la combinación de dos fenómenos:



la crisis del capitalismo y el declive de la hegemonía de EEUU. Por un lado, se puede observar una crisis de acumulación que se manifiesta directa o indirectamente en todos los terrenos: financiero, comercial, cambiario, energético, alimentario, ambiental. Por otro lado, se aprecia el reacomodamiento geopolítico derivado: a) de las dificultades enfrentadas por EEUU para mantener su hegemonía mundial; b) del agravamiento de las contradicciones intercapitalistas, en aumento luego de la derrota del bloque soviético; c) del fortalecimiento de potencias rivales, en especial de China. Se abre así un periodo de inestabilidad internacional –causada por la combinación de los fenómenos geopolíticos y macroeconómicos– que continuará marcado por crisis, guerras y revueltas sociales.

No es posible saber cuánto tiempo durará esta crisis y cómo será el mundo que emergerá de ella. Esto dependerá de la articulación de la lucha política dentro de cada país con la lucha entre Estados y bloques regionales. Actualmente,

A diferencia de lo que ocurría antes de 1945, hoy existe una disputa entre Estados de la (casi) antigua periferia y Estados del (casi) antiguo centro. Y, a diferencia de lo que ocurría antes de 1990, hoy se trata de una disputa en el contexto del capitalismo ■

esta lucha se concentra en dos polos: por un lado en EEUU y sus aliados europeos y japoneses; y por otro, en los BRICS (Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica) y sus aliados. A diferencia de lo que ocurría antes de 1945, hoy existe una disputa entre Estados de la (casi) antigua periferia y Estados del (casi) antiguo centro. Y, a diferencia de lo que ocurría antes de 1990, hoy se trata de una disputa en el contexto del capitalismo.

América Latina es uno de los escenarios de esta lucha entre EEUU y los BRICS. Desde el punto de vista geopolítico, si se considera el mediano y largo plazo, existen por lo menos tres posibles escenarios. En el primero de ellos, EEUU mantiene su condición de potencia hegemónica mundial y regional. En el segundo, EEUU pierde su condición de hegemonía mundial, pero se mantiene como potencia regional. En el tercer escenario, el más favorable para América Latina y el Caribe, EEUU deja de ser potencia hegemónica mundial y también potencia hegemónica regional.

Como hemos señalado, la lucha EEUU-BRICS ocurre en el contexto del capitalismo. Pero en América Latina y el Caribe debe considerarse una variable excéntrica: como resultado de un proceso iniciado en 1998, se conformó en la región

una fuerte influencia de la izquierda. Como se destaca en el documento base del XVII Encuentro del Foro de San Pablo¹, partidos de izquierda apoyan, participan o dirigen los gobiernos de Cuba, Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Brasil, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Argentina y República Dominicana.

Excepto Cuba, cuyo gobierno es el resultado de una lucha armada revolucionaria en un proceso que en abril de 1961 asumió un carácter socialista, los demás gobiernos resultan de victorias electorales, en una onda expansiva que se inició en 1998 con Hugo Chávez en Venezuela y que se extendió hasta 2009 con Mauricio Funes en El Salvador. Este llamado «giro a la izquierda» ha tenido un nuevo capítulo con el reciente triunfo de Ollanta Humala en Perú.

Sin duda, los gobiernos en los cuales la izquierda tiene participación mantienen entre sí importantes diferencias, que van desde las causadas por la naturaleza y la geografía a las históricas y sociales, incluyendo las producidas por las diferentes líneas políticas en juego, tanto de la izquierda que llegó al gobierno como de la derecha que pasó a la oposición. Pero esas diferencias políticas no necesariamente representan un aspecto negativo. Por el contrario: si fuera solo una, si siguiera un único modelo, la izquierda latinoamericana no habría vencido en las elecciones en países tan diferentes.

No obstante, pese la diversidad, todas las izquierdas de América Latina y el Caribe enfrentan problemas comunes: a) la herencia histórica del neoliberalismo, del desarrollismo conservador y del pasado colonial (como el racismo en Bolivia y Brasil); b) la oposición radical que el sector mayoritario de la burguesía latinoamericana (y de los sectores medios aliados) ejerce contra cualquier tipo de política de redistribución, sea de poder, riquezas o acceso a derechos sociales; c) la actitud beligerante de las antiguas metrópolis contra gobiernos latinoamericanos que dan prioridad a procesos de integración regional.

Existen diferentes procesos de integración. Algunos comenzaron antes de la ola de gobiernos progresistas y de izquierda. Es el caso del Mercosur y de otros acuerdos comerciales subregionales, que respondían a propósitos integracionistas pero que también eran tratados como pasos intermedios en dirección al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Otros procesos de integración surgieron recientemente como iniciativa de gobiernos en los cuales la izquierda participa: Unasur, el ALBA y la Celac. Así, mientras que el

1. <www.forodesaopaulo.org>.

ALBA es un encuadramiento institucional para la cooperación entre gobiernos ideológicamente afines, la Unasur y el Celac son proyectos de integración regional que buscan incluir a todos los países de la región, independientemente de la orientación política e ideológica de sus gobiernos.

Se mencionó antes que la lucha EEUU-BRICS ocurre en el contexto del capitalismo, que América Latina y el Caribe es uno de los escenarios donde sucede esta lucha, y que en la región existe una variable excéntrica que debe ser considerada:

Es esta influencia de la izquierda la que torna factible que América Latina y el Caribe se constituyan, no en un escenario pasivo sino, por el contrario, en uno de los polos del combate de carácter geopolítico que está en curso en el mundo ■

la fuerte influencia de la izquierda. Y es esta influencia de la izquierda la que torna factible que América Latina y el Caribe se constituyan, no en un escenario pasivo sino, por el contrario, en uno de los polos del combate de carácter geopolítico que está en curso en el mundo. Es decir, permite hacer de la región uno de los espacios de reconstrucción de una alternativa socialista al capitalismo.

Para transformar en realidad estas dos posibilidades, la izquierda de América Latina y el Caribe deberá enfrentar varios desafíos teóricos, estratégicos y tácticos. El primero de ellos es derrotar el contraataque impulsado por la derecha latinoamericana y sus aliados metropolitanos. Como hemos visto en estos años, este contraataque incluye: a) una campaña mediática permanente contra la izquierda; b) el intento por colocar una cuña entre los gobiernos de izquierda en la región, dividiéndolos en «moderados» y «radicales» y lanzándolos unos contra otros; c) la promoción de campañas de desestabilización e incluso de golpes de Estado, de los cuales hasta ahora solo el de Honduras tuvo éxito; d) el lanzamiento de candidaturas electoralmente competitivas, táctica que triunfó en Panamá, Costa Rica y Chile; e) la presión militar a través del relanzamiento de la IV Flota y de la ampliación del número de bases militares de EEUU y sus aliados europeos en la región.

Este contraataque de la derecha se ve favorecido por dos factores: uno de ellos, la administración Obama, y el otro, los impactos regionales de la crisis internacional. La elección de Barack Obama generó enormes expectativas en la población periférica del mundo, que proporcionaron al mandatario estadounidense un capital político con el que George W. Bush no contaba. Y aun

cuando la administración Obama no alteró lo fundamental de la política exterior estadounidense, ese capital político continúa activo, aunque bastante desgastado. Por otro lado, la crisis internacional causó enormes dificultades a varios países de la región, en especial a los más dependientes de sus exportaciones.

Otros dos desafíos de la izquierda político-social de América Latina y el Caribe son: a) no perder los gobiernos nacionales conquistados hasta ahora; b) conquistar nuevos gobiernos nacionales. Ello se ha logrado en Perú cerrando paso al regreso del fujimorismo, y en los próximos meses hay procesos electorales en Guatemala, Argentina y Nicaragua, tres países gobernados por la centroizquierda. Posteriormente, se realizarán dos elecciones fundamentales: las de Venezuela y México.

El cuarto desafío de la izquierda político-social es, en los países donde tiene el control del gobierno nacional, impulsar cambios estructurales de carácter democrático-popular. En este punto, es preciso considerar algunas limitaciones:

- a) en el ámbito mundial, la izquierda todavía se encuentra en una etapa de defensa estratégica, lo cual crea dificultades objetivas y subjetivas para cambios estructurales;
- b) impulsar cambios estructurales a partir de un gobierno surgido de elecciones es algo muy diferente de hacerlo a partir de gobiernos revolucionarios;
- c) hacer reformas estructurales exige un respaldo político mayor que el necesario para vencer en las elecciones;
- d) los gobiernos en los cuales la izquierda político-social participa en América Latina y el Caribe son coaliciones generalmente políticas (con partidos de centro y hasta de derecha) y sociales (con sectores de la burguesía) que actúan en los marcos del capitalismo y que, en mayor o menor medida, adoptan políticas que también favorecen a sectores de la burguesía;
- e) por este motivo, además de la oposición de derecha, los gobiernos respaldados por la izquierda político-social en América Latina enfrentan una oposición de izquierda, contraria a los acuerdos con sectores de centro y de la burguesía, y a las políticas de tipo capitalista.

Brasil es un buen ejemplo de lo complejo y difícil que es impulsar cambios estructurales de naturaleza democrático-popular desde el gobierno nacional. En el transcurso de todo el siglo xx, la historia brasileña estuvo marcada por la lucha entre dos grandes alternativas de desarrollo: la conservadora

y la progresista. La primera consistía en un desarrollo del capitalismo sin reformas estructurales, con bajos niveles de democracia y en el que Brasil se mantenía alineado con los intereses de las metrópolis (primero Inglaterra y luego EEUU). Mientras, la alternativa progresista conllevaba un desarrollo capitalista combinado con reformas, democratización, soberanía nacional y una política externa autónoma.

A lo largo de gran parte del siglo xx, la alternativa conservadora fue predominante, lo que explica la coexistencia de un crecimiento rápido en un ambiente de dictaduras y desigualdad social en aumento. En contraste, la alternativa progresista, además de ser minoritaria, sufrió la supremacía de fuerzas capitalistas y tuvo algunas fuerzas socialistas como aliadas. Pero a finales de la década de 1980, las fuerzas socialistas encabezadas por el Partido de los Trabajadores (PT) comenzaron a dirigir el bloque de fuerzas políticas y sociales que defendían la alternativa progresista. Así, durante un breve instante, pareció que Brasil libraría una lucha entre dos grandes alternativas: la capitalista conservadora y la democrático-popular y socialista.

Pero ese momento de optimismo duró poco: en un ambiente internacional y nacional marcado por la crisis del socialismo y por la ofensiva neoliberal, el PT y gran parte de la izquierda brasileña modificaron sus objetivos pro-

En un ambiente internacional y nacional marcado por la crisis del socialismo y por la ofensiva neoliberal, el PT y gran parte de la izquierda brasileña modificaron sus objetivos programáticos y estratégicos ■

gramáticos y estratégicos y asumieron una línea hegemónica por el progresismo (desarrollo capitalista con políticas sociales, democracia, soberanía e integración), aun cuando mantuvieran el socialismo como meta de largo plazo. Así, los años 90 estuvieron marcados por la lucha entre la alternativa conservadora (bajo la hegemonía neoliberal) y la progresista (ahora encabezada por el PT).

El periodo neoliberal acentuó las tendencias más conservadoras del patrón tradicional de desarrollo brasileño, a tal punto que ocurrieron rupturas en el bloque hegemónico. De hecho, las disidencias entre la grande, mediana y pequeña burguesía fueron fundamentales para la elección de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente en 2002. Y en efecto, luego de conquistar la Presidencia de la República, el gran tema de la política nacional (y el gran desafío táctico

de la izquierda brasileña) continuó siendo la superación de la herencia neoliberal. Pero en 2011, y a pesar de más de ocho años de gobierno petista, esta herencia neoliberal aún posee extrema influencia.

Hoy, el gran desafío estratégico consiste en mantener el control sobre el gobierno nacional, conservar la hegemonía del PT sobre las fuerzas progresistas y lograr que la alternativa socialista vuelva a ser uno de los polos de disputa (como ocurrió a fines de 1980). Pero a su turno este desafío estratégico se ve impedido por la creciente influencia material, política e ideológica que algunos sectores de la burguesía ejercen sobre el PT.

La vinculación práctica entre el desafío táctico y el desafío estratégico depende de la realización de las denominadas «reformas estructurales democrático-populares», reformas que tienen como objetivo modificar la concentración de los ingresos, de las propiedades y del poder. En concreto, nos referimos a la reforma tributaria, la reforma agraria, la reforma urbana, la reforma del sistema financiero, la reforma política, la democratización de la comunicación, etc. La reforma política se destaca de manera importante, sea por la necesidad de disminuir la influencia del capital sobre la izquierda o por hacer alcanzable la mayoría parlamentaria indispensable en las transformaciones estructurales, por lo menos en el contexto de la estrategia que actualmente implementa la izquierda.

Si la izquierda no es capaz de al menos dar pasos en dirección a estas reformas, detentar el gobierno no posee significado estratégico aunque en lo inmediato ayude a mejorar la vida del pueblo. Y, al mismo tiempo, no realizar tales reformas puede decepcionar y dividir a quienes respaldan a la izquierda, como en cierta medida ocurrió en Chile con la Concertación. Empero, para realizar reformas estructurales (o por lo menos para acumular fuerzas en ese sentido), un gobierno de izquierda necesita de sustento político y sin él puede ser derrocado, como sucedió con el gobierno de Manuel Zelaya en Honduras en 2009. Por estas razones, la izquierda político-social no puede ir ni muy rápido ni muy despacio: se hace necesario considerar de manera adecuada la correlación de fuerzas, mediante el análisis concreto de las situaciones específicas.

El quinto desafío de la izquierda político-social de América Latina y el Caribe es poder acelerar el proceso de integración, fundamental en el aprovechamiento del potencial de la región y en la reducción de la injerencia imperialista.

Un sexto desafío es volver hegemónica una cultura popular latinoamericana y caribeña en la región ya que, en realidad, el *american way of life* sigue siendo culturalmente preeminente, aun cuando EEUU reciba fuertes cuestionamientos desde el punto de vista político.

Por último, el séptimo desafío está relacionado con la ampliación de la capacidad teórica y política de las izquierdas latinoamericanas y caribeñas. Se destaca la necesidad de extender la coordinación entre gobiernos, partidos y movimientos sociales. Sin ello, será cada vez más difícil enfrentar a la derecha en el plano nacional o bien afrontar los desafíos de la integración continental y de la inestabilidad mundial. La reflexión teórica necesita enfrentar y superar tres factores negativos que producen deformaciones sistémicas en la visión del mundo y en las formulaciones de las diferentes familias de la izquierda latinoamericana:

- a) la crisis de las alternativas nacionalistas, desarrollistas, socialdemócratas y socialistas, combinada con la influencia del neoliberalismo;
- b) la importancia que asumieron los procesos electorales y la participación en la institucionalidad estatal;
- c) la necesaria construcción de frentes policlasistas en un contexto de debilitamiento de la clase trabajadora, como clase en sí y para sí.

Estos factores negativos actuaron de manera diferente en cada familia de la izquierda y en cada organización en particular. No obstante, es posible identificar tres tendencias que se hicieron presentes en todas las líneas y partidos: el centrismo,

el utopismo y el movimientismo.

**Tres tendencias
se hicieron presentes
en todas las líneas y
partidos: el centrismo,
el utopismo y
el movimientismo ■**

Sin duda, en la coyuntura de 1990 era inevitable hacer concesiones (políticas y programáticas), salvo para el izquierdismo fanático. Por lo tanto, al hablar sobre (y criticar) el *centrismo* nos referimos a organizaciones que realizaron concesiones más profundas y que cambiaron los objetivos programáticos o su base social, o que simplemente adoptaron una postura estratégicamente subordinada a los intereses de sectores de la burguesía. Esta postura predominó entre quienes adoptaron estrategias de centroizquierda.

Por otro lado, en cualquier coyuntura una organización de izquierda necesita de alguna dosis de voluntarismo romántico –o utopismo, en el sentido

corriente de la palabra–, que complemente y fortalezca las convicciones científicas y racionales, y que también ayude a mantener en mente los objetivos de largo plazo. Por lo tanto, al hablar sobre (y criticar) el *utopismo*, nos estamos refiriendo a organizaciones que en el plano táctico adoptan una postura de sistemática minimización de la fuerza de los adversarios de los procesos de cambio, y que en el plano estratégico adoptan paradigmas precapitalistas. Esta segunda característica se encuentra muy presente, por ejemplo, en parte de la izquierda boliviana y ecuatoriana.

En última instancia, un partido de izquierda que cambia bases sociales organizadas por bases electorales está condenado a la derrota ideológica, política e inclusive electoral. Por este motivo, la izquierda necesita obligadamente tanto apoyar como fomentar la movilización y la organización de sus bases sociales. Por lo tanto, cuando hablamos sobre (y criticamos) el *movimientismo* nos referimos a una concepción criptoanarquista, que en este periodo histórico subestima la importancia de la lucha electoral y de la participación en los gobiernos; que mistifica y mitifica a los denominados «movimientos sociales»; y que en el plano de las ideas tiende a convertir los movimientos sociales en vanguardia de la lucha contra el capitalismo.

Como resultado de todo ello, la izquierda de América Latina y el Caribe enfrenta actualmente grandes dificultades para cumplir con las dos tareas básicas para quienes desean alterar el *statu quo*: ofrecer un mapa del camino y coordinar el conjunto de los frentes de acción. Claro que esta última afirmación puede no ser adecuada en lo que se refiere a algunas organizaciones o algunos sectores existentes dentro de cada partido, pero mirando de forma global consideramos que se trata de una descripción adecuada. Y más específicamente en el caso de los partidos de gobierno, también es preciso considerar que ganar elecciones y administrar países tan desiguales, con poblaciones muy influenciadas por los medios de masas, exige movilizar a menudo el respaldo de capas populares más propensas a seguir liderazgos carismáticos, a contramano de las indispensables direcciones colectivas. Y lo mismo ocurre con la necesidad de gran cantidad de recursos financieros, indispensables en procesos electorales en los cuales el debate programático es relegado por el «comercio del voto». Esto genera una relación con el Estado y con los sectores empresariales que puede generar autonomía, aunque parcial, de estos partidos respecto de sus bases sociales originales. Finalmente, la situación descrita exige actuar dentro y fuera del aparato del Estado, buscando ser al mismo tiempo fuerza hegemónica

y contrahegemónica, capaz de disputar elecciones y de gobernar como parte del camino hacia el poder. Es decir, hacia una revolución político-social.

Estos factores negativos afectan a todos los partidos políticos progresistas en el gobierno, independientemente de la radicalidad exhibida por las administraciones que los integran o apoyan. Pero existen diferencias relevantes para considerar: en aquellos países donde el neoliberalismo fue más destructivo, se erosionaron incluso las bases de sostén de la derecha clientelista e implosionó todo el espectro político, inclusive el de izquierda. También por ese motivo, cuando se agota la hegemonía neoliberal y la oposición vence en las elecciones, los nuevos presidentes son parte integrante de organizaciones políticas relativamente recientes, como es el caso del Movimiento v República (MVR) venezolano, del Movimiento al Socialismo (MAS) boliviano y de Alianza PAÍS en Ecuador.

Además, los nuevos gobernantes encuentran la necesidad, y al mismo tiempo cuentan con los medios para convocar a asambleas constituyentes, lo que radicaliza el proceso desde el punto de vista retórico, político e institucional. En parte, esta radicalización es una reacción a las brutales desigualdades estructurales; pero por otro lado representa una respuesta a la radicalidad de la oposición de derecha, con sus campañas de descalificación, desestabilización y golpes. Al mismo tiempo, las políticas radicales no implican que en esos países las condiciones macro y microeconómicas sean las más favorables para construir un modelo económico posneoliberal, ni mucho menos un modelo poscapitalista.

La contradicción entre las condiciones subjetivas y objetivas está en la base del creciente conflicto entre una parte de la base social original de esos gobiernos y algunas de las políticas desarrollistas que esos mismos gobiernos se sienten obligados a implementar. Decimos «obligados» porque se trata tanto de responder a las demandas sociales acumuladas como de corresponder a las necesidades futuras en el mediano y largo plazo. Pero como el desarrollismo realmente existente es de naturaleza capitalista, genera reacciones centristas (alianzas estratégicas con el capital), movimientistas (reacciones sectoriales contra determinadas políticas) y utopistas (rechazo izquierdista al desarrollo) entre las diferentes familias de la izquierda. Y no puede ocultarse que tales divisiones en la base política y social de los gobiernos, en un escenario de dificultades causadas por la crisis internacional, pueden causar un contexto electoral favorable a la oposición de derecha.

Por el contrario, en otros países del continente, donde existía una economía industrial diversificada, la resistencia político-social consiguió imponer más límites al neoliberalismo. A su vez, el Estado y el espectro político fueron mejor preservados y los partidos antineoliberales que ganaron las elecciones tienen muchos años de vida, como es el caso del PT brasileño (fundado en 1980) y del Frente Amplio (FA) de Uruguay (creado en 1971). Pero por motivos similares, la derecha electoralmente derrotada se mantiene muy poderosa e influyente, bloqueando procesos constitucionales y reformas estructurales.

En estos países no sorprende que el pragmatismo centrista sea fuerte, mientras que el utopismo y el movimientismo son, en términos relativos, marginales. Paradójicamente, y a contramano de esta relativa moderación política de los procesos, esos países poseen condiciones macro y microeconómicas (por lo menos en potencia) más favorables a la construcción de un modelo económico posneoliberal, e incluso para transitar la construcción del socialismo.

Aun considerando el esquematismo de la descripción, la contradicción mencionada entre condiciones subjetivas y objetivas solo encuentra solución teórica y práctica en el contexto de una estrategia continental. Por ese motivo, la integración es el principal divisor de aguas en el debate político de la izquierda en América Latina y el Caribe. Sin duda, la integración no asegura un futuro socialista para cada uno de los países de la región, y no cualquier integración es compatible con una estrategia socialista. Pero en la actual situación internacional, para la mayoría de los países latinoamericanos y caribeños, solo la integración hace del socialismo (o también de un desarrollo capitalista progresista) una alternativa realista.

Así, si la izquierda latinoamericana y caribeña desea ampliar su fuerza sin perder el rumbo, tendrá que poner más atención en el debate sobre el capitalismo en el siglo XXI, en el balance del socialismo del siglo XX y en la discusión estratégica. Esto incluye poner en la ecuación la relación entre línea política, base social, partido, gobierno y Estado. Y también, poner en la ecuación la relación entre transformación nacional e integración regional. ☐

El PT en el gobierno o el desafío de mantener las convicciones

Luego de ocho años en el poder, el Partido de los Trabajadores (PT) enfrenta una serie de transformaciones políticas y sociológicas: cambios en sus bases políticas –en parte producto de las políticas de transferencia de renta hacia sectores excluidos implementadas desde 2003– y su estabilización como un partido de gobierno, con más de 1.500.000 afiliados. Aunque los movimientos sociales siguen considerando al PT un aliado, no son pocas las quejas vinculadas a la lentitud para satisfacer las demandas «de abajo» en contraste con la velocidad para atender ciertos reclamos empresariales. Pero pese a todo, el PT sigue siendo, según el autor, el canal para el tránsito de Brasil hacia mayores niveles de justicia social.

KJELD AAGAARD JAKOBSEN

Mucha agua pasó bajo el puente desde la fundación del Partido de los Trabajadores (PT) hasta el paso de ocho años por el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y la recién iniciada presidencia de Dilma Rousseff. Los cambios son significativos. Hoy, además de la presidenta de la República, el PT posee la mayor bancada parlamentaria en la Cámara Federal, con 88 diputados, lo que representa diez veces más que los ocho diputados federales elegidos en 1982 cuando disputó su primera elección. Desde entonces, el PT no solo

Kjeld Aagaard Jakobsen: cientista político y consultor en relaciones internacionales. Ex-secretario de Relaciones Internacionales de la Central Única de Trabajadores (CUT) y de la Alcaldía de San Pablo.

Palabras claves: Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Partido de los Trabajadores (PT), Brasil.

Traducción: Sara Daitch.

creció electoralmente sino en número de afiliados, hasta llegar a transformarse en el partido más conocido y preferido por la población. Incluso existe cierta unanimidad entre los que siguen la política brasileña, simpatizantes o no del PT, en que se trata de la organización partidaria más sólida del país. Investigaciones demuestran que es el partido más popular de Brasil desde el año 2000 y que obtuvo la preferencia de 24% del electorado a partir de 2009¹.

No obstante, Brasil cambió mucho durante estas tres décadas y el PT también sufrió transformaciones, principalmente si se compara su posición de opositor intransigente al gobierno y a la institucionalidad política de la década de 1980 con su situación actual de socio mayoritario de un gobierno de coalición, compuesto por partidos que transitan entre la derecha y la izquierda. En las primeras elecciones en que participó tenía prácticamente como única estructura la movilización de la militancia partidaria y las parcas recaudaciones financieras entre afiliados y simpatizantes. Sin embargo, en la actualidad las campañas del partido se han profesionalizado con el propósito de volverlo más competitivo electoralmente, y son solventadas mediante donaciones, en especial de empresas a las cuales otros partidos políticos brasileños ya tenían acceso desde hace mucho tiempo. La cuestión del financiamiento y el manejo de los recursos llevó al PT a enfrentar una de sus mayores crisis en 2005, agravada por una cobertura mediática de la oposición que rayaba en el intento de golpe de Estado.

El PT construyó un funcionamiento partidario inédito en la vida política brasileña al preocuparse por la organización y la participación de la base partidaria, asegurando además espacios de expresión y participación para las tendencias políticas internas del partido. En este tiempo también asistimos al ascenso en la vida política brasileña de Lula da Silva, el mayor líder del PT, quien de dirigente sindical en los años 70 pasó a presidente del partido durante los primeros años de existencia de este, y fue luego candidato a la Presidencia de la República en cuatro oportunidades hasta su elección en 2002 y su posterior reelección. Dejó el gobierno después de ocho años con una popularidad de casi 80% y un gran prestigio nacional e internacional, lo que en este momento lo convierte en la personalidad política más influyente en la sociedad brasileña, y también dentro del propio partido, del cual es presidente honorario.

¿Qué significan para el futuro del PT esta historia y las transformaciones que ocurrieron? ¿Cuál será el efecto específico de la participación de los «petistas» en las estructuras de poder del país durante casi una década? ¿Qué es lo que

1. André Singer: «As duas almas do Partido dos Trabalhadores» en *Novos Estudos Cebrap* N° 88, 11/2010.

cambia sin Lula en la Presidencia? Las estructuras del PT ¿están adaptadas a la realidad actual para preservar su situación de partido más popular de Brasil y conductor de las transformaciones políticas y sociales que defendía en su fundación? Estos son algunos de los temas abordados en este artículo, que no pretende brindar respuestas definitivas pero sí tiene el propósito de contribuir a la discusión, porque el debate y la «batalla de ideas» siempre fueron motores importantes en el desarrollo del PT.

■ Los inicios del PT y su funcionamiento interno

El PT fue fundado en 1980, durante la lucha por la redemocratización de Brasil y en el marco de una reforma partidaria aprobada en los estertores de la dictadura militar. Su manifiesto de fundación lo sitúa como un partido de masas, creado a partir de las luchas sociales para garantizar la participación política

El manifiesto de fundación del PT lo sitúa como un partido de masas, creado a partir de las luchas sociales para garantizar la participación política de los trabajadores, y su estatuto lo identifica ideológicamente con el socialismo democrático ■

de los trabajadores, y su estatuto lo identifica ideológicamente con el socialismo democrático².

Sus fundadores fueron sindicalistas del campo y la ciudad; activistas del movimiento popular; integrantes de la Iglesia católica identificados con la Teología de la Liberación; militantes de agrupaciones de izquierda que operaron en la clandestinidad, algunos de ellos incluso en la lucha armada; grupos feministas; intelectuales de renombre en el país, entre otros. La diversidad de esta agrupación explica el

contenido de las normas partidarias aprobadas en ese momento, así como las posiciones políticas frente a la coyuntura que aún era de transición desde un régimen militar hacia una democracia, proceso que, en rigor y formalmente, solo concluiría en 1989 con las primeras elecciones directas para la Presidencia de la República luego de casi 30 años.

Un desafío importante en esta época era construir una síntesis que pudiera mantener este conjunto de visiones ideológicas mínimamente articuladas, en especial considerando la irremediable tradición de la izquierda de dividirse en función de posiciones muchas veces difíciles de comprender para los ciudadanos

2. Fuente: sitio web del PT, <www.pt.org.br>, fecha de consulta: 26/5/2011.

comunes. Es un hecho que el PT sufrió disidencias de algunas personalidades a lo largo de su existencia, así como también de tendencias internas (principalmente en el campo trotskista), que formaron sus propios partidos, aunque la repercusión desde el punto de vista electoral no haya sido significativa. El estatuto del PT sufrió algunas modificaciones durante varios encuentros nacionales. Y en la última versión de 2007 se destacan, entre los varios aspectos abarcados, algunas normas internas que garantizan la representación pluralista y la preocupación por la participación política de los afiliados.

El estatuto aprobado durante la fundación del partido valoraba en gran medida los núcleos de base, organizados a partir de un número mínimo de afiliados por categoría profesional, local de trabajo, sector social y lugar de residencia. A partir de ciertos criterios, ellos tenían el poder de convocar a reuniones de directorio municipal y de alcaldes, y las bancadas de concejales y diputados debían consultarlos sobre sus proyectos institucionales. Estos núcleos de base tuvieron gran importancia en la construcción partidaria de los primeros años y aún forman parte de la estructura del PT, pero han perdido las prerrogativas estatutarias de intervenir directamente en las decisiones de bancadas y directorios. Con todo, continúan representando un espacio importante, en particular para los «petistas» que viven en el exterior.

Desde el comienzo, el PT aceptó la afiliación de jóvenes de entre 16 y 18 años y de extranjeros residentes en Brasil³. Esos afiliados solo estaban impedidos de participar en instancias que requerían el derecho legal a voto. Por otra parte, el partido permite la existencia de tendencias políticas internas a partir de ciertos criterios que aseguren que estas actúan en el PT como una opción estratégica y no para utilizar el partido como un espacio táctico y, desde el comienzo, existen mecanismos que garantizan la participación de las tendencias en las instancias de dirección proporcionalmente a los votos que obtengan. Uno de los principios del partido es también el derecho a la libre manifestación pública sobre cuestiones doctrinarias y políticas, aunque ello no impide que se exija fidelidad a las decisiones partidarias.

En relación con la selección de cargos como alcaldes, gobernadores y presidente, cuando existe más de un candidato el estatuto determina la realización de elecciones internas para que los afiliados, en el ámbito de la contienda electoral, puedan decidir quién será el que los representará en la elección. En el caso de las candidaturas parlamentarias en los tres niveles de gobierno, estas se deciden en

3. El derecho al voto facultativo para electores entre 16 y 18 años se aseguró en la Constitución de 1988, y los extranjeros solamente adquieren ese derecho al naturalizarse como brasileños.

los respectivos encuentros (asambleas). Además de las internas, también están previstos mecanismos de consulta, referendos y plebiscitos sobre asuntos que puedan exigir posiciones de una parte o de todos los afiliados.

Además, se organizan discusiones sectoriales que tratan temas específicos, como las cuestiones vinculadas a temáticas raciales, sindicales, indígenas, sobre mujeres, diversidad de género (LGTB), educación o deportes, entre otras. Algunas secretarías sectoriales poseen representación en el Ejecutivo nacional del PT, con derecho a voz pero no a voto. El I Congreso, realizado en 1991, aprobó un cupo mínimo de 30% de mujeres en las instancias y los cargos de dirección del partido, y es obligatoria la instalación de guarderías en los locales de encuentro partidario.

Podemos marcar el inicio de la llegada real del PT al gobierno en 1988, cuando consiguió las alcaldías de grandes ciudades como San Pablo, Porto Alegre, Santos, Campinas y Vitória, entre otras, y en 1994, cuando logró las gobernaciones de Espírito Santo y del Distrito Federal. Estos momentos fueron oportunidades importantes para mostrar una nueva forma de gobernar, en comparación con los partidos tradicionales, mediante mecanismos de participación popular –como el «presupuesto participativo» inaugurado en la intendencia de Porto Alegre y la «Bolsa Escola» implementada en el gobierno del Distrito Federal–, además de la idoneidad en el tratamiento de los recursos públicos y licitaciones.

Sin embargo, estas experiencias de gobierno también provocaron cierta inflexión en el funcionamiento del partido frente a las nuevas responsabilidades y a las paradojas de transformarse en «partido de gobierno». Se hizo evidente cuán complejo era defender los intereses y los derechos de los trabajadores cuando estos eran funcionarios públicos municipales y provinciales; gobernar para todos los ciudadanos a partir de las directrices del propio partido; gobernar con una minoría partidaria en las cámaras municipales y las asambleas legislativas provinciales y, finalmente, exportar personal partidario a la «máquina» del Estado.

El primer problema que debía enfrentarse era la tensión entre las expectativas de los servidores públicos, que acumulaban demandas salariales y laborales y que contaban con el gobierno del PT para resolverlas, todas e inmediatamente, y las expectativas de un gobierno que por ser «de los trabajadores» esperaba la comprensión de los empleados estatales frente a los cofres vacíos, cuando no dilapidados, por gobiernos anteriores. Esta dicotomía llevó a innumerables huelgas y conflictos extremadamente agotadores, como por ejemplo la huelga

de los choferes de ómnibus de San Pablo, en 1992. La madurez para resolver esta cuestión de la manera más adecuada llegó solamente con el tiempo, y algunas administraciones petistas inauguraron la práctica saludable de la negociación colectiva entre el gobierno y los sindicatos de servidores públicos, inexistente hasta entonces en la legislación brasileña.

Otra fuente de tensiones fue la relación entre el partido y las administraciones petistas, porque muchos militantes entendían que los alcaldes y gobernadores debían someter sus gestiones a las determinaciones de los respectivos directorios, municipales o provinciales, a veces hasta en los mínimos detalles, como al momento de definir contrataciones y obras. A su vez, los alcaldes y gobernadores argüían que no habían sido elegidos exclusivamente por los militantes petistas y que gobernaban para todos los habitantes de las ciudades o de los estados. En varios lugares esta situación debilitó la relación, y así algunos alcaldes de ciudades importantes, como Campinas y São Bernardo do Campo, salieron del PT al inicio de la década del 90. En el caso del gobierno del estado de Espírito Santo, el gobernador no dejó el PT pero los afiliados se dividieron entre los que apoyaban y los que se oponían al gobierno.

El partido tardó en recuperarse electoralmente en la mayoría de los lugares donde existió este tipo de conflicto. El actual estatuto partidario somete solo las bancas parlamentarias a las deliberaciones de las instancias de dirección, por considerarlas órganos del partido, y también determina que los mandatos le pertenecen. A su vez, las bancadas eligen libremente a sus líderes, que tienen asiento en las instancias de dirección del PT. El último gran conflicto entre parlamentarios y dirección partidaria fue en 2003, en ocasión de la reforma en la seguridad social, aprobada durante el primer mandato del presidente Lula. Esta derivó en la expulsión del PT de tres diputados federales y de una senadora por su abierta oposición a este proyecto, contrariando la decisión partidaria.

El último gran conflicto entre parlamentarios y dirección partidaria fue en 2003, en ocasión de la reforma en la seguridad social, aprobada durante el primer mandato del presidente Lula. Esta derivó en la expulsión del PT de tres diputados federales y de una senadora ■

La primera vez que el PT se asoció con otros partidos para participar de una elección mayoritaria fue en 1989, cuando Lula fue candidato a presidente por el Frente Brasil Popular. Esta coalición incluía otros dos partidos

de izquierda, el Partido Comunista de Brasil (PCDOB) y el Partido Socialista de Brasil (PSB), y en el segundo turno recibió el apoyo de otros partidos. Aunque esta coalición se repitió en los años siguientes, incluso con su ampliación hacia el Partido Democrático Trabalhista (PDT), y en muchas elecciones municipales con la existencia de alianzas más amplias hacia el centro y hacia la derecha, solamente en la lucha por la Presidencia de la República de 2002 la alianza electoral del PT incluyó al Partido Liberal (PL), de centroderecha, que postuló al empresario José Alencar como candidato a vicepresidente. Este movimiento, además de favorecer la victoria de Lula, también permitió la creación de una coalición partidaria con mayoría de votos en el Congreso Nacional, aunque siempre dependiente de negociaciones políticas así como de distribución de presupuestos y cargos.

Sin dudas, el sectarismo de los primeros años de construcción partidaria contribuyó a demarcar ideológicamente al PT y sus valores, pero está claro que

El sectarismo de los primeros años de construcción partidaria contribuyó a demarcar ideológicamente al PT y sus valores, pero está claro que fue la apertura al centro político lo que le permitió romper sus límites electorales ■

fue la apertura al centro político lo que le permitió romper sus límites electorales, con toda la complejidad y los desafíos que implica preservar la identidad partidaria al ser el partido el aval del gobierno. Finalmente, para gobernar municipios, estados y el país entero fue preciso reclutar a innumerables sectores del movimiento social, sindical y del propio partido para ejercer funciones en el aparato del Estado, y este cambio de función pocas veces tiene retorno. En este sentido, el caso del PT no fue tan dramático como en Sudáfrica, donde en 1994 el Congreso Nacional Africano (CNA), con Nelson

Mandela a la cabeza, venció en la elección presidencial así como en la mayoría de las provincias y drenó a los sindicatos y organizaciones sociales de su mejor personal, lo que generó graves repercusiones en el desempeño del movimiento social durante los primeros años de gobierno. Pero incluso así el proceso de renovación y reposición de personal que se desempeña en la maquinaria estatal no es tan simple ni tan rápido y puede repercutir negativamente en la calidad del ejercicio partidario.

■ El papel de Lula en la construcción del PT

La trayectoria política de Lula es la de un líder en ascenso, no solo por la dimensión que tomó su participación política, en un principio encabezando las

primeras huelgas que cuestionaron la dictadura militar y más recientemente como presidente de Brasil, sino también por su contribución a la historia política brasileña durante estas tres décadas y en el presente.

Su actuación política en el ámbito nacional se inició cuando las huelgas de los metalúrgicos del ABC paulista se transformaron en más que meras reivindicaciones salariales, al cuestionar la política salarial del gobierno militar y pasar por encima de la declaración de ilegalidad de la huelga. Por este motivo Lula se transformó en un perseguido político, y más tarde fue uno de los fundadores del PT y su primer presidente nacional hasta 1987. Fue candidato a gobernador por el estado de San Pablo en 1982 y en 1986 fue electo diputado constituyente, primer y único mandato parlamentario que ejerció. Fue candidato derrotado a presidente de la República en 1989, 1994 y 1998, y candidato victorioso en 2002 y 2006.

Aunque su victoria en 2002 pueda atribuirse al desgaste de la política neoliberal promovida por el gobierno del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), a la más amplia política de alianzas del PT y a una campaña más profesionalizada, está claro que existieron esfuerzos por parte de Lula para conocer el país y desarrollar un programa de gobierno coherente. Sus «Caravanas de la Ciudadanía» recorrieron todo el país para encontrarse con la población y observar de cerca sus problemas. La sensibilidad social de Lula –por su experiencia de vida– y los diferentes proyectos desarrollados por el Instituto de la Ciudadanía, creado por él, incluyeron problemáticas como vivienda, salud, seguridad, economía, agricultura, entre otros, y contribuyeron a la elaboración de propuestas que fueron al encuentro de los anhelos de la población y se transformaron en acciones de gobierno que impactaron en el país durante los ocho años de gobierno, principalmente en el estímulo al desarrollo y en políticas sociales. La experiencia internacional de Lula como dirigente sindical y luego en el liderazgo partidario le ofreció la posibilidad de adquirir una visión de mundo y contribuir a la formulación de una política exterior brasileña que fue innovadora, en especial en el fortalecimiento de las relaciones Sur-Sur.

Aunque Lula sea una personalidad influyente en el PT, no siempre sus opiniones sobre candidaturas o alianzas electorales en municipios o estados fueron aceptadas, y cuando el PT se preparaba para participar en la elección presidencial de 2002, aun siendo el candidato evidente tuvo que pasar por una interna electoral con otro precandidato. Al término de su mandato demostró altos niveles de apoyo popular –algo muy difícil de conseguir luego de ocho años de gobierno–, cuando sería natural que existiera cierto desgaste en función de medidas eventualmente no implementadas. Su popularidad, carisma e imagen interna

y externa le otorgan un inmenso capital político, aunque evitó hacer sombra al gobierno de la presidenta Rousseff.

Al inicio de su primer mandato, en enero de 2003, Lula optó por gobernar sin rupturas, cumpliendo contratos y obligaciones según lo que había prometido en su campaña⁴ y, en particular, mantuvo la estabilidad económica anclada a la administración de la tasa de interés. Probablemente evaluó que el costo de

Al inicio de su primer mandato, Lula mantuvo la estabilidad económica anclada a la administración de la tasa de interés.

Probablemente evaluó que el costo de una ruptura radical con el modelo sería demasiado alto en una coyuntura internacional desfavorable y con capital político insuficiente ■

una ruptura radical con el modelo sería demasiado alto en una coyuntura internacional desfavorable y con capital político insuficiente, considerando que no alcanzó la mayoría absoluta de votos en el primer turno de las elecciones en 2002.

Su estilo de hacer política al frente de la Presidencia fue el de ejercitar al máximo las posibilidades de negociación y conciliación. Si por un lado esto agradó a la población e hizo posible la implementación de una serie de medidas políticas importantes, como los mecanismos de transferencia

del ingreso, por otro no permitió estimular ciertas contradicciones necesarias para provocar transformaciones sociales más profundas; tampoco conquistó a la mayoría del empresariado, por más que este sector se haya beneficiado de los buenos resultados de su gobierno. Más allá de las políticas aplicadas, la elite empresarial no ve al PT como un partido que la represente ni a sus dirigentes como miembros de su clase y de su confianza. Por lo tanto, lo que hoy existe en Brasil no es un «pacto social», sino más bien una tregua que se rompe siempre que algún hecho coyuntural crea dificultades al PT, como por ejemplo, en 2005.

La implantación de mecanismos sostenibles de distribución del ingreso y de un Estado de bienestar social depende de medidas que la conciliación y la negociación por sí solas no proporcionarán. Para alcanzarlos es preciso realizar, entre otras medidas, una reforma tributaria que revierta la regresión y la acumulación de impuestos, estableciendo más tributos para los más ricos, incluyendo fortunas y herencias, así como redistribuyendo tierras con mayor

4. «Carta al Pueblo Brasileño», 2002.

agilidad. Las elites brasileñas, en particular el sector que vive de rentas, no lo aceptarán pacíficamente. Lo mismo vale para una reforma política profunda que amplíe la democracia y disminuya la corrupción y el clientelismo, reforma que no puede esperarse del propio Congreso Nacional, mayoritariamente conservador, por más negociaciones y conciliaciones que puedan ocurrir. Y lo mismo puede decirse, también, respecto de la democratización de los medios de comunicación.

■ El nuevo momento del PT

Al no buscar una modificación de la Constitución que lo habilitara para un tercer mandato, Lula contribuyó a que el PT enfrentara en 2010 una elección presidencial sin su presencia como candidato. Aunque haya sido el promotor más importante de la candidata Dilma Rousseff, incluso señalando ante el electorado que ella sería la continuidad de su gobierno, el hecho es que el partido tuvo que enfrentar esta elección con un candidato diferente. De la misma manera, el gobierno de Rousseff y el PT tendrán que actuar sin Lula en la Presidencia, por más que eventualmente pueda colaborar, en especial en momentos difíciles que seguramente llegarán.

Este fue un gesto importante para fortalecer el partido. Lula realizó un gesto semejante en 1987, al dejar la presidencia del PT, y aun en medio de la dificultad natural de reemplazarlo, varios de los que ocuparon el cargo consiguieron imponer su propia personalidad en sus mandatos. Los actuales dilemas y desafíos del PT no se relacionan con gobernar sin Lula en la Presidencia; se refieren principalmente al funcionamiento del partido debido a su crecimiento electoral, al presidencialismo de coalición, al sistema electoral vigente en Brasil y al mantenimiento de la estrecha relación con los movimientos sociales, en particular el sindical.

El crecimiento del número de parlamentarios, alcaldes y gobernadores y la ocupación de cargos en el Estado, desde secretarías municipales hasta ministerios, reemplazaron la relación directa que existía anteriormente entre afiliados, dirigentes partidarios y ocupantes de cargos parlamentarios y administrativos, por una relación cada vez más delegada entre estas representaciones y los «espacios» políticos.

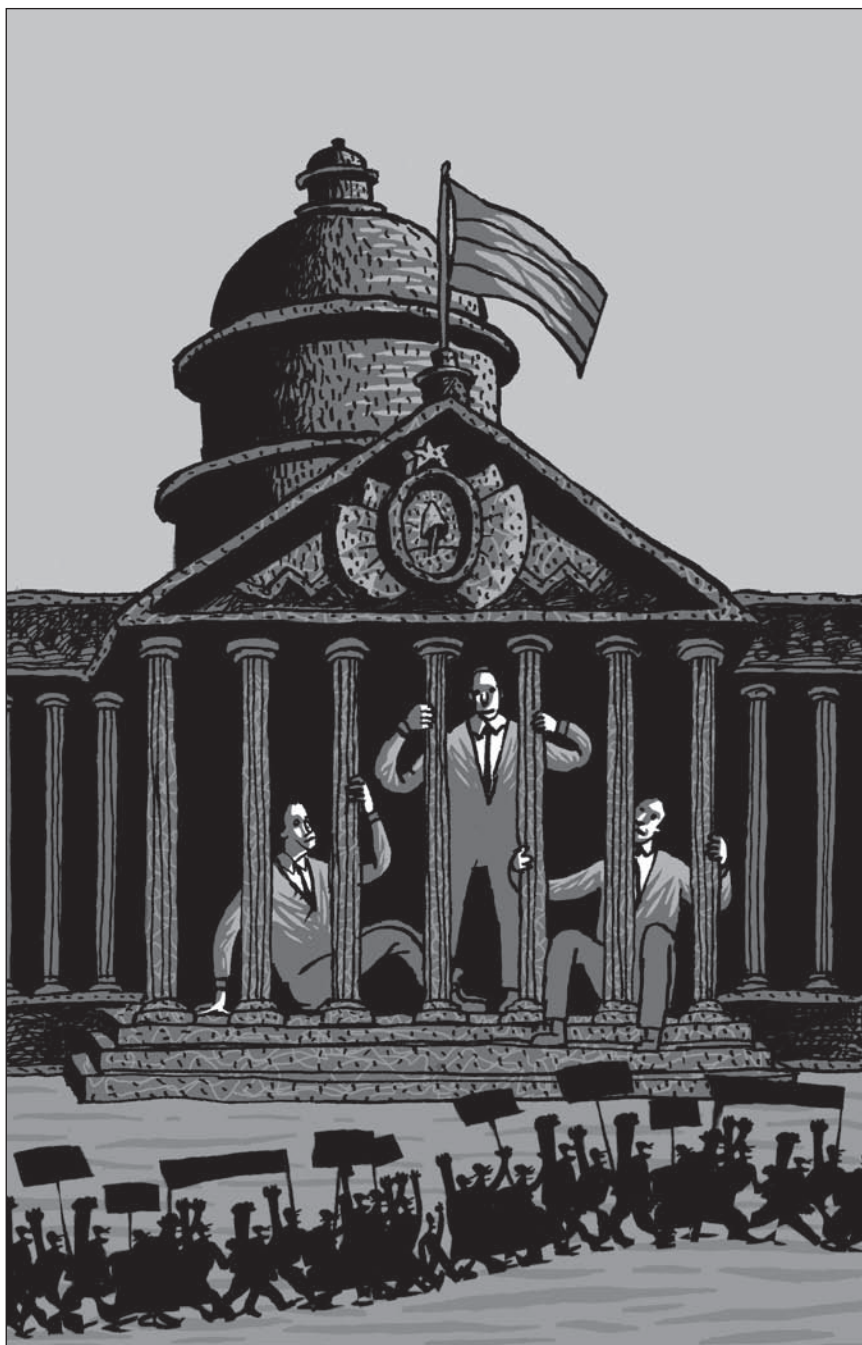
En rigor, esta es la clásica respuesta ante las necesidades del ejercicio moderno de gobernar, pues este último exige capacidad técnica y agilidad en las decisiones que la democracia directa difícilmente proporciona, y por eso se delega poder a través de representaciones. No obstante, la delegación amplía también

la autonomía de quienes ocupan cargos mayoritarios, de los parlamentarios y de la burocracia estatal, y la relación de estos con los electores, los afiliados al partido y las propias instancias partidarias se vuelve más distante e indirecta. Además, los gobiernos de coalición de los que participa el PT en las diferentes esferas ven limitadas sus acciones políticas debido a los acuerdos programáticos y a la división de cargos con otros partidos políticos. De esta manera, los gobiernos, en especial el federal, son objeto de permanentes disputas dentro de la coalición, situación complicada por la acción de los medios de comunicación, que han asumido el papel de representantes de facto de la oposición al PT. Otro factor complicado que se suma es el sistema de representación proporcional por listas abiertas, que da la posibilidad de votar por candidatos en forma individual, por fuera de las listas de los partidos, lo que hace de la tarea de conquistar los votos de los electores un trabajo individual y dependiente de los recursos de campaña, cada vez más elevados.

Aun así, el PT es uno de los pocos partidos brasileños que preserva un razonable nivel de debate y acción colectiva. Pero a pesar de esto, necesita perfeccionar los mecanismos de responsabilización (*accountability*) ante sus miembros y la sociedad. Una de las iniciativas en ese sentido fue el nombramiento de una comisión para proponer cambios estatutarios que tomen en cuenta la existencia de más de 1.500.000 afiliados en todo el país y les ofrezcan la posibilidad de participar e influir en la vida partidaria, no solo en los momentos electorales internos y externos. Sus propuestas se analizarán en el IV Congreso, que se realizará en el segundo semestre de 2011.

Mientras tanto, existe la necesidad de realizar inversiones en la capacitación de dirigentes y en la asesoría, porque los sectores especializados que van hacia el gobierno, por más fieles que se mantengan al partido, responderán en primer lugar a la jerarquía del gobierno, y si el partido quiere acompañar e influir en determinadas políticas no debería delegar la responsabilidad simplemente a los que se integraron a la burocracia del Estado. Al mismo tiempo, en lo que respecta al sistema electoral de los parlamentarios, existe una gran posibilidad de mejorar la situación con la aprobación del voto en lista cerrada y con el financiamiento público de campañas, tratados ambos en la reforma política en discusión. Esto fortalecería la responsabilidad colectiva del partido para definir candidaturas y campañas, permitiría ampliar la participación de las mujeres en el Parlamento por medio de listas con equilibrio de género y eliminaría el inconveniente del financiamiento privado de las campañas.

Finalmente, la construcción de una situación más favorable en la correlación de fuerzas actual en la lucha por la hegemonía política dentro de los gobiernos



de coalición pasa por iniciativas más contundentes del movimiento social en defensa de sus derechos e intereses, que por el origen y el programa también son las convicciones del PT. Sin embargo, dentro del funcionamiento político delegado, la tendencia es que el partido también pueda distanciarse de los movimientos.

La gestión de Lula representó un gobierno abierto a la sociedad y a negociaciones importantes con el movimiento social representado por los sindicatos, el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST) y la Central de Movimientos Populares, entre otros. Pero ello no impidió el surgimiento de disidencias partidarias y críticas de organizaciones ambientalistas frente a obras de infraestructura y otras iniciativas que estas consideran agresivas para el medio ambiente. En paralelo, hay voces en la Central Única de Trabajadores (CUT) que reclaman que se podrían haber logrado mayores avances en relación con la ratificación de las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) –la 87, sobre libertad sindical, y la 158, contra el despido sin motivo, entre otras–. Por su parte, el MST considera tímida la reforma agraria llevada adelante por el gobierno y sostiene que se habría prestado una exagerada atención a los intereses del *agrobusiness*.

La presidenta Rousseff fue elegida con una plataforma de continuidad con el gobierno de Lula y se ha mantenido en esta línea en sus primeros meses de mandato, inclusive sosteniendo la promesa de sacar de la miseria absoluta a los 17 millones de brasileños que aún faltan. Sin embargo, hay presiones desde varios flancos en favor de la contención del gasto público, para reducir los impuestos a las empresas y para generar excedentes para la inversión gubernamental, lo cual puede poner en riesgo las políticas sociales. De hecho, recientemente fue anunciada la intención del gobierno de privatizar la gestión de los principales aeropuertos del país, una medida rechazada por la CUT. En síntesis: aunque se creó una mesa de negociaciones regulares entre el gobierno federal y las centrales sindicales, y aun cuando el movimiento social sabe de la importancia de contar con un gobierno aliado, proyectos como la mencionada privatización, la lentitud en los procesos de negociación en comparación con la rapidez con que los sectores empresariales son atendidos y la falta de acción frente a problemas crónicos del país como la alta rotación de mano de obra y los accidentes laborales, pueden generar tensiones significativas. Y es fundamental que el PT y sus parlamentarios, así como los cuadros que forman parte del gobierno, sepan lidiar con estas tensiones y abrir espacios para que las posiciones del movimiento social sean consideradas, pues varios de estos reclamos representan las convicciones defendidas por el PT desde su fundación.

■ Conclusión

Mantener las convicciones originales del PT, luchar por transformaciones económicas, sociales y políticas, se justifica plenamente porque a pesar de los indicadores positivos de inclusión social resultantes de los dos mandatos del presidente Lula, aún resta mucho por hacer, en especial para que la inclusión se extienda y se vuelva permanente. Frente a esto, además de ampliar necesariamente los mecanismos de responsabilización del partido, es preciso poner atención a los cambios en curso dentro de la propia sociedad brasileña, que resultan sobre todo de las políticas implementadas a partir de 2003, para que la actuación del PT sea más eficaz. Existen varios factores por considerar.

Primero, que siempre fue mayor la cantidad de votos logrados por Lula en las elecciones presidenciales que los votos alcanzados por el PT, inclusive con variantes importantes que dependían de regiones geográficas y de estratos sociales⁵. Y segundo, como señalan varios estudios, se observan realineamientos políticos significativos de importantes sectores del electorado en relación con el partido⁶. El primer dato sugiere que hay espacio en la sociedad para que el PT amplíe su representación y el segundo, que el desarrollo regional y la movilidad social desde abajo hacia arriba traen nuevos actores a la escena política, con culturas políticas diferentes de las del electorado tradicional del partido, compuesto principalmente por trabajadores urbanos organizados y por los sectores más politizados de la clase media. Estos nuevos actores votaron mayoritariamente por Lula en 2006 y por Rousseff en 2010, pero aún es necesario conquistarlos de forma definitiva, es decir, entender sus aspiraciones con la perspectiva de organizarlos y no solo para buscar votos.

El riesgo de un partido con las características del PT de transformarse en una «máquina electoral» para mantenerse al frente del gobierno, en vez de preservarse como un instrumento de cambios que necesita de apoyo y de involucramiento social, está siempre presente. Por esto es necesario construir una relación partido-sociedad más fluida y perfeccionar los mecanismos de responsabilización del partido para que sus principios socialistas y democráticos se mantengan siempre hegemónicos. ■

Páginas web

Partido de los Trabajadores: <www.pt.org.br>.

Fundación Perseu Abramo: <www.fpabramo.org.br>.

5. A. Singer: «Raízes sociais e ideológicas do Lulismo» en *Novos Estudos Cebrap* N° 85, 12/2009.

6. A. Singer: «As duas almas do Partido dos Trabalhadores», cit.

El partido peronista y los gobiernos kirchneristas

El peronismo y su expresión gubernamental actual, el kirchnerismo, concitan una diversidad de miradas a menudo fuertemente polarizadas. Fuera de Argentina, la larga persistencia del peronismo como partido de poder se ha transformado en un verdadero enigma. Este artículo vincula la crisis de la política, las particulares formas que desde hace un tiempo asume el partido fundado por Juan Perón en los años 40 y las coyunturas recientes para caracterizar el actual «peronismo kirchnerista», que parece haber construido una particular épica política tras la muerte de Néstor Kirchner en 2010.

RICARDO SIDICARO

Las vinculaciones entre el partido peronista y los gobiernos kirchneristas presentan la suficiente complejidad como para desconcertar a no pocos observadores de la realidad argentina. En este breve texto nos proponemos analizar desde una perspectiva sociológica las relaciones entre estos actores sin ignorar los riesgos que entrañan las indagaciones sobre situaciones en curso cuyos participantes ofrecen permanentemente interpretaciones sobre sí mismos. El partido peronista (o Partido Justicialista), en lo que atañe a su accidentada historia y sus formas organizativas, ha sido un tema de discusión en las ciencias sociales y existe un cierto número de estudios sobre el tema. En cambio, los análisis de los aspectos políticos de las dos experiencias

Ricardo Sidicaro: sociólogo. Es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet)-Instituto Gino Germani y profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Palabras claves: crisis, campo político, peronismo, kirchnerismo, Argentina.

de gobierno kirchnerista parecieron haber encontrado dificultades quizás no tanto en virtud de la falta de distancia temporal sino –y sobre todo– en la variedad e intensidad de las opiniones enfrentadas que suscitan.

Con independencia de las consideraciones sobre cada uno de los mencionados actores, el foco de nuestra atención se colocará en las relaciones que establecieron, sus variaciones y conformaciones, para intentar comprender el sentido de sus acciones. Las referencias conceptuales y empíricas que formularemos sobre la desarticulación del *campo político* nacional apuntan no solo a contextualizar a los actores sino, también, a proporcionar claves de inteligibilidad de sus relaciones.

■ La desarticulación del campo político

Cuando estalló la crisis de 2001, el peronismo y la Unión Cívica Radical (UCR), las dos grandes fuerzas políticas con mayor presencia electoral desde el retorno a la democracia en 1983, eran pálidos reflejos de lo que habían sido en sus mejores momentos. Ambas tenían en común haber encabezado experiencias gubernamentales de corte neoliberal con el consiguiente abandono de sus programas históricos, y tanto los radicales como los peronistas registraron divisiones que se plasmaron en las elecciones de 2003. El uso del poder gubernamental le permitió al entonces presidente Eduardo Duhalde establecer las reglas que abrieron la arena electoral nacional para las tres fracciones peronistas que competían entre sí¹. El partido-Estado creado por Juan D. Perón a mediados de la década de 1940, transformado en los años 60 en un poderoso movimiento sociopolítico en el que coexistían distintos proyectos voluntaristas, se había convertido hacia fin de los 90 en una sociedad de partidos provinciales peronistas sin horizontes ideológicos nacionales.

El radicalismo, por su parte, padeció las consecuencias de articular un electorado más exigente y, luego de alcanzar el cenit con el alfonsinismo (1983-1989), entró en declinación al no poder responder a las demandas institucionales, sociales y económicas acumuladas durante la dictadura militar (1976-1983); al no modernizar sus estructuras y dirigencias también vio crecer la influencia de sus aparatos provinciales. En efecto, peronistas y radicales fueron perdiendo los vínculos de representación social, dejaron de producir debates e ideas

1. Estas fueron encabezadas por Néstor Kirchner, hasta entonces gobernador de la austral provincia de Santa Cruz; por el ex-presidente Carlos Menem; y por el gobernador de San Luis –y presidente durante unos pocos días en medio de la crisis de 2001– Adolfo Rodríguez Saá.

acordes con los contextos en que debían actuar y, como expresión extrema, cuando manejaron el gobierno nacional implementaron políticas económicas elaboradas por *think tanks* ajenos a sus tradiciones ideológicas. Los sucesos de finales de 2001 expresaron la sobredeterminación de las crisis superpuestas, entre las cuales la del sistema de partidos reveló ser la de efectos más persistentes, ya que la economía nacional se recompuso en un año, los salarios y los niveles de ocupación formales en alrededor de tres años volvieron a sus situaciones anteriores a la crisis, y los paliativos aplicados a la desestructuración social absorbieron sus efectos más disruptivos.

Así, en la década iniciada con la crisis de 2001, en el *campo político* –definido en la perspectiva conceptual de Pierre Bourdieu– se profundizaron las tendencias a la descomposición de los partidos de alcance nacional, mientras que en la sociedad se expresaban elevados porcentajes de falta de confianza en sus dirigentes. Si en los regímenes políticos democráticos contemporáneos es normal un cierto nivel de autonomía de los actores de un *campo político* con respecto a los sectores que integran la sociedad, distan de ser comunes, en cambio, las virulentas movilizaciones sociales en reacción contra las clases políticas –a las que se percibe como encerradas en sus propios intereses– como las registradas en el caso argentino entre 2001 y 2002.

La accidentada vida de las instituciones representativas no auguraba sin duda un futuro fácil para la reconstrucción democrática iniciada en 1983. Tanto los dirigentes políticos como la ciudadanía carecían de experiencias democráticas mínimamente prolongadas. En los actores centrales del recién restablecido *campo político* no se podían borrar como por arte de magia los *habitus* o sistemas de predisposiciones consolidados durante tantos años de participación en pequeños cenáculos desconectados de la representación real de la sociedad. Muy pocos dirigentes de partidos habían recorrido los *cursus honorum* que los socializan en la convivencia democrática, y la idea de que un solo partido podía aspirar a representar a toda la sociedad distaba de haber desaparecido. En la sociedad predominaban, a su vez, visiones de la democracia como lo opuesto a la dictadura, mientras que los reclamos de participación política eran escasos. Probablemente, el rechazo a la amenaza de un nuevo golpe militar era lo único que creaba una cierta comunidad de metas en el seno de la clase política, y entre esta y amplios sectores de la sociedad².

2. Al respecto, v. particularmente P. Bourdieu: «Conférence: Le champ politique» en P. Bourdieu: *Propos sur le champ politique*, Presses Universitaires de Lyon, Lyon, 2000.

El debilitamiento de las capacidades estatales (políticas, burocráticas, técnicas y económicas) generaba condiciones negativas para el adecuado gobierno de los múltiples problemas que conocía el país, y ese deterioro estatal se agravó con la implementación de las políticas neoliberales. Se combinaron entonces, contradictoriamente, los efectos del aumento de las exigencias de una parte considerable de la ciudadanía, los de la profundización de la dualización territorial entre las regiones modernas y las atrasadas en lo económico y lo educativo, los efectos de la fragmentación generada por los procesos de globalización, la frustración de expectativas de mejora del bienestar social, las consecuencias del desplazamiento de sectores del empresariado nacional por los nuevos intereses internacionales, etc. Así, a menos de dos décadas de reinstaurada la democracia, y en medio de un clima de creciente ilegitimidad de los poderes públicos, estalló una verdadera rebelión de los individuos que resumió su rechazo a la clase política en la iracundia de la fórmula «que se vayan todos».

A menos de dos décadas de reinstaurada la democracia, estalló una verdadera rebelión de los individuos que resumió su rechazo a la clase política en la iracundia de la fórmula «que se vayan todos» ■

Nunca antes los integrantes de la clase política, sin distinciones, habían sido tomados como *alteridad* por las movilizaciones ciudadanas que en nombre de *nosotros el pueblo* convirtieron las disconformidades individuales en expresión colectiva de protesta. El hecho de que hoy, a diez años de aquellas movilizaciones ciudadanas, no se haya reconstruido un *campo político* mínimamente normal puede considerarse como una prueba de la profundidad de la desarticulación registrada.

El crecimiento de la desconfianza de la ciudadanía en los partidos y en las instituciones estatales durante el periodo comprendido entre el comienzo de la normalización democrática y los años 2001-2002 se reveló con frecuencia en los estudios de opinión pública. En 1984, 73% de los encuestados dijo tener confianza en el Poder Legislativo, mientras que en 2002 respondió de ese modo solo 7%. La medición sobre los partidos políticos comenzó a realizarse en 1987, momento en el que 38% de los encuestados dijo tenerles confianza, pero ese índice bajó a 4% en 2002³. En las opiniones recogidas por distintas investigaciones sobre la legitimidad de las instituciones públicas y de los partidos políticos argentinos, se constató que las críticas a los dirigentes

3. Gallup: *Estudio acerca del trabajo voluntario y la responsabilidad social empresarial, Argentina, 2007.*

partidarios y a los funcionarios estatales en general con gran frecuencia remitían a la existencia de prácticas de corrupción y a su impunidad. Desde comienzos del decenio de 1990, las denuncias de corrupción se habían multiplicado en los medios de comunicación, encontrando acogida en las oposiciones antimenedistas. Pero detrás de las reiteradas menciones a la corrupción, aun cuando no todos los que abordan el tema lo digan explícitamente, se encuentra, en realidad, una cuestión mucho más significativa que el hecho de lucrar desde puestos de gobierno: la impunidad de los actos de corrupción en un régimen democrático revela la existencia de comportamientos que no se ciñen a las obligaciones de respeto a las leyes, a la vez que muestran la falta de igualdad entre los ciudadanos. Si la idea de la ausencia de justicia con respecto a los crímenes de la dictadura había erosionado la legitimidad de los dirigentes partidarios⁴, luego, con el tema de la corrupción ese deterioro se amplió. Las percepciones individuales y/o colectivas de incumplimiento de las obligaciones legales minaron las bases del reconocimiento de las autoridades públicas y fueron haciendo crecientemente verosímiles las denuncias sobre nuevos actos de corrupción⁵.

Los estudios realizados por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina muestran que durante el gobierno de Néstor Kirchner y el primer bienio del de Cristina Fernández, si bien aumentó ligeramente el porcentaje de quienes decían tener alta confianza en los partidos políticos (pasando de 2,1% en 2004 a 6,7% en 2009), esos valores continuaban mostrando la gran distancia de la población con respecto a las dirigencias partidarias. Cabe señalar, no obstante, la disminución de las opiniones totalmente negativas –ninguna confianza en los partidos pasó de 75% en 2004 a 54% en 2009–, y el aumento de los porcentajes de quienes decían depositar poco o algo de confianza (2004: 23% y 2009: 40%). Aun cuando no es posible discernir a partir de los datos publicados cómo se distribuyen las variaciones de los índices de confianza según las preferencias partidarias de los encuestados, es probable que se trate de la expresión de una mejora que abarca por igual a dirigentes oficialistas y opositores⁶.

4. Especialmente las leyes de Obediencia Debida y Punto Final del radical Raúl Alfonsín y los indultos del peronista Carlos Menem.

5. Sobre las percepciones sociales de la corrupción en Argentina, hemos consultado los *Informes Latinobarómetro* del periodo analizado.

6. Observatorio de la Deuda Social Argentina: *Barómetro de la Deuda Social Argentina* N° 6, Universidad Católica Argentina, 2010, pp. 228-230. Se trata de informaciones provenientes de una encuesta multipropósito y longitudinal, con diseño en panel, aplicada a una muestra aleatoria de 2.500 casos representativos de la población de 18 años y más, residentes en el Área Metropolitana de Buenos Aires, Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Salta, Gran Resistencia, Gran Mendoza, Paraná, Bahía Blanca y Neuquén.

■ El peronismo

Si bien bajo muchos aspectos el peronismo tendió a ser estudiado empleando esquemas de análisis que se apartan de las formas más corrientes de encarar las clasificaciones de otras fuerzas políticas nacionales o extranjeras, fueron su ideología y su organización partidaria los dominios que incitaron a las mayores controversias. Sin ánimo de agotar los aspectos en los que dicha fuerza política suscitó discusiones académicas en Argentina y abrió preguntas a los observadores internacionales, digamos que su ubicación ideológica en la matriz izquierda-centro-derecha fue objeto de reñidos debates. Aunque es cierto que la intromisión de juicios valorativos no ayudó a la objetividad de los abordajes, no dejó de influir al respecto el sinnúmero de voceros enfrentados que en sus propias filas ofrecieron alternativas excluyentes sobre su identidad y su historia.

Por la época en que el peronismo apareció en la escena política nacional, predominaron en las ciencias sociales las por entonces difundidas interpretaciones sobre los actores de la sociedad civil que habían patrocinado su formación.

La obsesiva cuestión sobre los orígenes del peronismo se plasmó en las preguntas por las causas que habían llevado a los obreros a seguir a un caudillo proveniente del Ejército en lugar de inclinarse por la izquierda, como suponían los criterios normativos y la filosofía de la historia acerca de lo que debía ocurrir con los desenvolvimientos políticos de los procesos de industrialización. Igualmente persistentes fueron las indagaciones sobre el protagonismo de una burguesía industrial para sus orientaciones gubernamentales.

Al mismo tiempo, los contextos internacionales en los que aparecieron los promotores del peronismo llevaron a los primeros intérpretes a pensar en su carácter de retoño tardío de las experiencias fascistas que ya comenzaban a clausurarse en el Viejo Mundo. Es cierto que, en su época liminar, en las filas peronistas se alineaban figuras que simpatizaban con los totalitarismos europeos, pero también revistaban en ellas quienes llegaban de partidos e ideologías socialdemócratas. Estos últimos, que patrocinaban una *democracia social* con pluralismo liberal-democrático, no fueron tampoco los predominantes, ya

La obsesiva cuestión sobre los orígenes del peronismo se plasmó en las preguntas por las causas que habían llevado a los obreros a seguir a un caudillo proveniente del Ejército en lugar de inclinarse por la izquierda ■

que fueron los divulgadores de las doctrinas sociales de la Iglesia quienes más pesaron en la materia.

Con menos referencias a grandes ideologías, buena parte de la oposición al peronismo tendió a caratularlo como una típica dictadura latinoamericana creada en torno de un líder personalista, o en clave griega clásica, un demagogo. Con respecto a las opciones de la tipología democracia, autoritarismo y totalitarismo, sin temer los aparentes contrasentidos, Seymour Martin Lipset innovó al definirlo como un fascismo de izquierda, teniendo en consideración sus apoyos obreros. Las inclusiones en los casilleros de los *populismos* fueron tensionadas por la *anomalía* que entrañó su singular persistencia una vez desalojado del poder⁷. Es más, la distribución en celdas taxonómicas se amplió cuando en los años 70 se formaron guerrillas peronistas de vocación castrista que fueron combatidas, en nombre del peronismo, por grupos armados

Si bien determinadas corrientes militares no ocultaron su intención de suprimir el peronismo, no fue menos evidente la existencia de sectores políticos y sindicales de esa filiación que les prestaban colaboración, en tanto que otros fueron objetivo de las desapariciones ■

que no ocultaban sus simpatías por el fascismo. En 1973, con el retorno del peronismo al gobierno, el país se sumó al bloque de los no alineados, rompió el bloqueo a Cuba y profundizó las relaciones económicas con las naciones comunistas, mientras que en lo interno llevó adelante políticas que perjudicaban a las grandes empresas transnacionales, situando al justicialismo entre los movimientos tercermundistas de la época. Pero al año siguiente, con la muerte de Perón estalló una verdadera guerra sucesoria, que bajo la en-

deble presidencia de su viuda, María Estela Martínez de Perón, desembocó en el golpe de Estado de 1976. Si bien determinadas corrientes militares no ocultaron su intención de suprimir el peronismo, no fue menos evidente la existencia de sectores políticos y sindicales de esa filiación que les prestaban colaboración, en tanto que otros criticaban y denunciaban la represión dictatorial y fueron objetivo de las desapariciones.

7. Luego de su caída en 1955, lejos de debilitarse, el peronismo no solo conservó sus apoyos en los sindicatos, sino que conquistó adhesiones en sectores de las clases medias y empresarios que antes le habían sido hostiles; a comienzos de los años 70, en su seno coexistían dificultosamente múltiples y antagónicas tendencias e intereses sociales.

Todo ello tuvo su costo. Al volverse a las regulaciones democráticas en 1983, el peronismo se encontró con su primera derrota en las urnas en una elección presidencial totalmente libre. Sin Perón, la heterogeneidad política que siempre lo había caracterizado quedó oficialmente instalada. La situación de oposición alimentó sus divisiones, en condiciones en las que el antaño fuerte sindicalismo peronista se había debilitado por la desindustrialización y las crisis heredadas de la dictadura. Las dirigencias territoriales representativas de intereses provinciales y municipales actuaron como partidos justicialistas en niveles locales casi sin conexiones entre sí, mientras que en el plano nacional se formaban elites de notables que lograron un cierto éxito al crear el denominado «peronismo renovador», cuyo objetivo era organizar un partido político democrático y confiable para el electorado que le había sido esquivo en 1983.

Uno de los principales dirigentes de la renovación peronista fue Carlos Menem, quien como candidato a la Presidencia en 1989 planteó la necesidad de volver a los programas industrialistas y de distribución de ingresos, pero una vez que ganó las elecciones hizo un gran giro ideológico y se convirtió en un aplicado y ortodoxo seguidor del Consenso de Washington. Pese a ese cambio completo de programa, la casi totalidad de los dirigentes peronistas no expresó mayores disidencias, y así la fuerza política creada por Perón gobernó durante un decenio cumpliendo el rol de aliado subalterno del capital financiero internacional. Nada permite sostener que esos dirigentes peronistas hubiesen adoptado el neoliberalismo como ideología y su apoyo a las innovaciones menemistas debe considerarse como un observable empírico más de la desarticulación del *campo político* argentino, con la consiguiente pérdida de creencias de sus participantes.

Si, como sostiene Michel Offerlé, invariablemente detrás de la apariencia de uniformidad de los partidos queda «oculta una multitud de interacciones entre individuos que usan de manera considerablemente diferencial ese cuerpo inmaterial que es un partido político»⁸, cabe abordar de manera conceptual la versatilidad de las opciones de los dirigentes peronistas y las razones de la estabilidad de sus apoyos populares distinguiendo dos objetos de análisis diferentes. Sobre las modificaciones producidas en los motivos que llevaban a los dirigentes a sumarse al peronismo, Duhalde hizo una elocuente comparación:

8. *Los partidos políticos*, Lom, Santiago de Chile, 2004, p. 138.

Yo comencé [a ocuparme de la política] en el año 74. Yo creo que en esa época un 30% de los que ingresaban lo hacían para salvarse ellos. Y un 70% ingresaba para salvar el mundo. Con el paso del tiempo se han invertido los porcentajes y el 70% ingresa con intenciones subalternas a la política. Terminada la dictadura hubo un descenso muy pronunciado en la moral media del pueblo argentino. Primero lo advertí rápidamente en los dirigentes porque la única preocupación era cómo aumentar el sueldo inicial para ganar más.⁹

Desde esa visión de las cosas, a Duhalde no debió sorprenderle que primero bajo su gobierno y luego en el de Néstor Kirchner, casi la totalidad de quienes desde puestos dirigentes apoyaron a Menem mutaran en entusiastas críticos del neoliberalismo. En cuanto a la estabilidad del electorado justicialista, en el año 2000 el historiador oral Daniel James resumió sus observaciones sobre el municipio de Berisso, ubicado en el conurbano bonaerense. Allí, el peronismo contó con nutridos apoyos obreros en sus orígenes y en los 90 sufrió las consecuencias del neoliberalismo con sus altas tasas de desocupación; no obstante,

Carlos Menem obtuvo grandes mayorías en las elecciones presidenciales de 1989 y 1995 (...). Alrededor de 15.000 berissenses están afiliados al Partido Justicialista. En las últimas elecciones internas votaron unos 10.000 (...). El local sindical se clausuró hace mucho. El índice de desocupación ronda el 35%. Muchos berissenses se desempeñan hoy en la economía informal. De hecho, el mismo peronismo local refleja estos cambios. Su conducción está compuesta en gran parte por miembros de la elite local: médicos, abogados, ingenieros, pequeños comerciantes, los hijos y los nietos de los trabajadores de la carne. Desde 1983, todos los intendentes de la ciudad salieron de sus filas.¹⁰

Es obvio que las situaciones de los dirigentes y de los votantes populares distan de ser similares, sin embargo, el relato político que los hacía coincidir sobre el pasado era tan eficaz como para mantener una unidad electoral favorecida por políticas asistenciales que operaban en un *campo político* cuya tendencia a la desarticulación llevaría poco a poco a la despolitización de unos y otros.

En todas las etapas evocadas muy sumariamente existieron cambios considerables en la entidad denominada «partido peronista», que en ningún momento se ajustó a los modelos propios de los partidos liberal-democráticos: instrumento electoral en el decenio fundacional; partido proscripto entre 1955 y 1973; fuerza política que estalló internamente entre 1973 y 1976; movimiento

9. Entrevista a Eduardo Duhalde en Jorge Fontevecchia: *Reportajes 2*, Sudamericana, Buenos Aires, 2010, p. 366.

10. D. James: *Doña María. Historia de vida, memoria e identidad política*, Manantial, Buenos Aires, 2004, p. 33.

congelado durante la dictadura militar y dirigido por el ala sindical al llegar la democracia, cuyas luchas de reconstrucción fueron parcialmente exitosas; conjunto de partidos provinciales y municipales aunados apenas por recuerdos históricos bajo el menemismo y la experiencia neoliberal. La manera en que se organizó desde entonces el partido peronista correspondió a lo que en conceptos weberianos se denomina *sociedad* (o *sociación*). En *Economía y sociedad*, Max Weber definía este concepto señalando que puede llamarse así «una relación social cuando y en la medida en que la actitud en la acción social se inspira en una *compensación* de intereses por motivos racionales (de fines o valores) o también en una *unión* de intereses con igual motivación»¹¹. Los *mercados* ilustran bien esa particular manera de acción social: quienes operan en los intercambios mercantiles lo hacen movidos por la búsqueda de ganancias individuales luchando contra otros participantes.

■ El kirchnerismo

Es habitual denominar «kirchnerismo» tanto la gestión gubernamental argentina entre los años 2003 y 2011 como el conjunto heterogéneo de sectores políticos e ideas identificado con el presidente Néstor Kirchner y con su sucesora y esposa Cristina Fernández. En la Argentina este tipo de neologismos formados a partir de un apellido se han hecho usuales para designar grupos o corrientes políticas que, sin ofertar principios programáticos bien definidos, hacen del pedido de adhesión a un individuo y a quienes lo secundan su emblema principal.

No resulta para nada sorprendente que en el caso argentino, en una época caracterizada, tal como ya señalamos, por la desarticulación del *campo político*, se haya generalizado la oferta de personalismos. Puede decirse que en otras épocas el líder se identificaba y resumía un programa, mientras que en el juego

No resulta sorprendente que en el caso argentino, en una época caracterizada por la desarticulación del *campo político*, se haya generalizado la oferta de personalismos. En otras épocas el líder se identificaba y resumía un programa, mientras que en el juego político desarticulado el líder es el programa ■

11. *Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva*, Fondo de Cultura Económica, México, 1999, p. 33. Weber contraponía las relaciones de *sociedad* (o *sociación*) a la relación de *comunidad* inspirada en el sentimiento subjetivo (afectivo o tradicional) de quienes eran partícipes de la constitución de una entidad que suponía mayores compromisos mutuos.

político desarticulado el líder *es* el programa. Kirchner fue el candidato presidencial propuesto por un pequeño grupo que organizó una de las tres fracciones peronistas que compitieron en las elecciones nacionales de 2003, y no ocultó en ningún momento la decisión de situarse en un plano superador del peronismo. Jefe del pequeño Partido Justicialista de la provincia patagónica de Santa Cruz, Kirchner no tenía un rol relevante en la política nacional ni en la fragmentada estructura organizativa del peronismo. Sus juicios críticos sobre el Partido Justicialista no dejaban lugar a malentendidos. En un libro de conversaciones con el sociólogo Torcuato Di Tella, editado a comienzos de 2003, definía el peronismo como «un partido vaciado de contenido, sin ideas»¹²,

una inmensa confederación de partidos provinciales con liderazgos territoriales muy definidos (...). La falta de discusión interna quedó patentizada cuando el gobierno de De la Rúa se derrumbó y el peronismo debió hacerse cargo del gobierno. Lo único que había en el justicialismo era la unidad jurídica, porque en su seno tenía corrientes abiertamente contradictorias, excluyentes, diría.¹³

A partir de conceptos sociológicos de Bourdieu, puede afirmarse que Kirchner hablaba con discurso de *hereje*, propio de quienes estando fuera de un campo

**Kirchner hablaba con
 discurso de *hereje*, propio
 de quienes estando fuera de
 un campo se proponen
 ganar posiciones en él
 impugnando las deficiencias
 de quienes lo dominan ■**

se proponen ganar posiciones en él impugnando las deficiencias de quienes lo dominan, estrategia que apunta en el caso del *campo político* a postular ideas o ideas-fuerza que dan acceso a su control¹⁴. Tal como afirma Bourdieu, por lo general la herejía o heterodoxia suele ir unida a la crisis y «saca a los dominantes de su silencio, les impone producir el discurso defensivo de la ortodoxia, pensamiento derecho y

de derechas cuyo objetivo es restaurar el equivalente de la adhesión silenciosa de la doxa»¹⁵. Lo interesante de lo sucedido con la estrategia de hereje desplegada por el núcleo promotor del kirchnerismo fue que prácticamente no suscitó en sus comienzos reacciones ortodoxas o llamados a respetar

12. *Después del derrumbe. Teoría y práctica política en la Argentina que viene. Conversaciones Néstor Kirchner-Torcuato Di Tella*, Galerna, Buenos Aires, 2003, p. 131.

13. *Ibid.*, p. 126.

14. P. Bourdieu: «Conférence», cit., p. 68.

15. «Algunas propiedades de los campos» en P. Bourdieu: *Cuestiones de sociología*, Istmo, Madrid, 2000, p. 114.

supuestas verticalidades organizativas, ni tampoco conoció recriminaciones doctrinarias. Esas omisiones fueron, por cierto, una especie de prueba de la profundidad de la crisis en que se hallaba el peronismo. Las referencias de Kirchner a la situación del *campo político* del año 2002 fueron, también, claras:

Se ha agotado el bipartidismo como lo conocimos, con un radicalismo que no es más un partido de poder (va a tardar mucho tiempo en recuperarse, si es que alguna vez se recupera), y el justicialismo, aliado durante la última década a los sectores neoconservadores liberales (...) en el peronismo... sé que hay un aparataje muy grande, hay mucha plata, clientelismo, les importan poco las propuestas, los proyectos. Hoy en día el peronismo dejó de representar a los que representaba, los usa. Hay mafias internas, aprietan a los clubes en la provincia de Buenos Aires para que no me alquilen para hacer actos. Ya no hay cuadros militantes: tienen gerentes y clientes.¹⁶

El debilitamiento de la acción de alcance nacional de los partidos se reflejó en el modo en que sus expresiones provinciales y municipales fueron cobrando autonomía y tendieron a dar prioridad a la defensa de intereses locales, lo que aumentó los protagonismos de los jefes y burocracias territoriales y de sus roles político-administrativos. En esas circunstancias, la popularidad de los gobiernos provinciales o municipales quedó atada a su capacidad de conseguir ante el poder central los presupuestos necesarios para satisfacer demandas locales. Entre 2000 y 2001, al pasar el control de la primera magistratura a la coalición dirigida por la UCR, los jefes justicialistas provinciales y municipales tuvieron menor acceso a los fondos estatales, pero todo cambió al producirse la crisis institucional, social, económica y política de fin del año 2001. Con la renuncia de Fernando de la Rúa, la lucha entre fracciones peronistas se libró primero por la designación del presidente que debía conducir la normalización institucional, y luego por la nominación de un candidato para las elecciones de 2003.

El jefe justicialista más fuerte de la época, Duhalde, fue designado para conducir esa transición y en tanto participante de las pujas internas cifró sus preferencias en la candidatura de Néstor Kirchner, quien con apenas 22% de los sufragios alcanzó la primera magistratura: su rival para la segunda vuelta, el ex-presidente Menem, decidió retirar su postulación en virtud de sus posibilidades nulas de triunfo. En esas condiciones de falta de legitimidad de origen se instaló el gobierno kirchnerista, que habría de mantenerse en el control de las decisiones políticas durante los ocho años siguientes.

16. Entrevista a Néstor Kirchner en *Página/12*, 23/6/2002, pp. 12-13.

Sobre la situación institucional argentina, Kirchner resumió su opinión en su discurso de asunción de la Presidencia, apuntando que «como sociedad, hace tiempo que carecemos de un sistema de premios y castigos. En lo penal, en lo impositivo, en lo económico, en lo político, y hasta en lo verbal, hay impunidad en la Argentina. En nuestro país, cumplir la ley no tiene premio ni reconocimiento social»¹⁷.

Esas carencias se convirtieron durante su gestión en verdaderos recursos de poder, ya que las instituciones en crisis ampliaban notablemente los márgenes de acción de las iniciativas presidenciales, así como las posibilidades de establecer políticas de intercambio con aquellos a los que el presidente trataba de ganar como aliados. Por esa vía, no solo mejoró sus vínculos con los dirigentes de los partidos peronistas provinciales sino que, además, consiguió las adhesiones de gobernadores e intendentes que habían sido elegidos representando a la UCR. En ese contexto de profundización de la debilidad de las reglas institucionales y de desarticulación del *campo político*, el liderazgo de Kirchner pasó a ocupar el centro de la escena. Si bien la fragmentación social reinante no era una condición propicia para la aparición de efervescencias sociales creadoras de jefes carismáticos, Kirchner alcanzó muy rápido altos índices de popularidad, y al estar al frente de lo que cabe caracterizar como un *gobierno de líder sin partido*, pudo concitar las adhesiones de personas y grupos ajenos, u hostiles, al peronismo.

■ La presidencia de Kirchner y sus heterogéneos apoyos

Los cercanos días de caos institucional, social y económico fueron el fondo de recuerdos que favoreció la aceptación del nuevo gobierno por diversos actores colectivos que tenían reclamos específicos. Se formó así una suma de apoyos que en términos metafóricos cabe caracterizar como una «suspensión coloidal», expresión que en química se utiliza para designar la combinación en la que en un medio fluido flotan partículas sólidas sin establecer contactos orgánicos entre sí. En este caso, esa «suspensión» estaba integrada por:

- los *organismos de defensa de derechos humanos* que reclamaban el castigo a los militares responsables de los crímenes de la dictadura;
- las *organizaciones sociales de protesta* contra la desocupación y la exclusión social;

17. «Discurso de asunción de la Presidencia de la Nación», 25 de mayo de 2003.

- los *sectores del sindicalismo* que pedían la preservación de la estructura de empleo y la recomposición de los niveles salariales;
- las *representaciones de empresarios* favorecidos por las medidas económicas adoptadas;
- *dirigentes de los partidos en crisis*;
- los *partidos peronistas provinciales*, con la excepción del de la provincia de San Luis, que bajo la conducción de Adolfo Rodríguez Saá mantuvo la actitud opositora.

En cuanto a los aportes de cada uno de los integrantes de esa convergencia sui géneris a la construcción de la legitimidad social de la gestión kirchnerista, digamos que las entidades de defensa de derechos humanos dieron un respaldo simbólico que trascendía la política inmediata; las organizaciones sociales de excluidos expresaron sus apoyos mediante movilizaciones populares; los empresarios formaron opinión favorable en medios sociales reacios a los reclamos de los sectores populares; los dirigentes de los partidos en crisis avalaron el pluralismo; los jefes sindicales garantizaron la armonía social; los partidos justicialistas provinciales aportaron apoyos legislativos y electores¹⁸. Una vez alcanzados los apoyos de la *confederación* de partidos peronistas provinciales, el gobierno se consideró lo suficientemente fuerte como para romper su relación con Duhalde.

Desde un principio, Kirchner concitó apoyos definidos de manera genérica como progresistas o de centroizquierda, internamente heterogéneos, la mayoría carentes de organizaciones propias y sin dirigentes reconocidos. Sin suscribir acuerdos formales, las coincidencias en torno de determinadas reivindicaciones se combinaron en ciertos casos con nombramientos en cargos o responsabilidades en el gobierno nacional. En términos generales, los altos dirigentes kirchneristas anunciaban

En términos generales, los altos dirigentes kirchneristas anunciaban su interés en patrocinar la creación de un frente o partido transversal para organizar a sus aliados progresistas, pero esa iniciativa no llegó a concretarse durante el periodo presidencial de Kirchner ■

18. Al respecto, v. R. Sidicaro: «Désarticulation du système politique argentin et kirchnerisme» en *Problèmes d'Amérique Latine* N° 71, invierno 2008-2009 y «Epílogo: después de *Los tres peronismos*» en *Los tres peronismos. Estado y poder económico*, nueva edición ampliada, Siglo XXI, Buenos Aires, 2010, pp. 249-272.

su interés en patrocinar la creación de un frente o partido transversal para organizar a sus aliados progresistas, pero esa iniciativa no llegó a concretarse durante el periodo presidencial de Kirchner. Sin mayores discusiones programáticas, lo que terminó siendo la vertiente transversal del kirchnerismo fue una suma de personas sin mayores contactos entre sí, que coincidían en sus simpatías por el gobierno y en sus críticas al peronismo tradicional. Las mayores coincidencias surgieron en torno del cuestionamiento al capital financiero internacional, de las críticas a los organismos multilaterales de supervisión y crédito y de las afinidades con las experiencias de cambio existentes en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Chile y Brasil. El rechazo al proyecto de integración económica y de libre comercio del gobierno de Estados Unidos, en el marco del proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), fue igualmente bien recibido por los sectores progresistas. Como muestras de independencia en política internacional, las visitas al país de Fidel Castro y de Hugo Chávez tuvieron un alto valor simbólico. La decisión oficial de recuperar el control de ciertas actividades privatizadas y el congelamiento de tarifas de los servicios o los bienes provistos por empresas de capital global generaron tensiones que mostraron la resolución de encaminar la política por una nueva vía distante del neoliberalismo.

Lo que a partir del año 2006 pasó a llamarse la Concertación Plural pudo parecer el anuncio de la formación de una instancia organizativa para dar una cierta unidad a los dirigentes políticos provenientes de horizontes partidarios disímiles que apoyaban al gobierno, aun cuando tal entidad nunca se constituyó como ámbito de participación y de deliberación política. Las dificultades para crear un partido político a partir de los apoyos de carácter progresista fueron resumidas por Kirchner a mediados de 2006: «La transversalidad fue una denominación periodística. Es un término que podría funcionar en un sistema de partidos que están funcionando. En la Argentina, todos sabemos que la reconstrucción de los partidos políticos va a llevar un tiempo largo»¹⁹.

Y continuaba remarcando que el modo de participación en el proyecto kirchnerista de muchos dirigentes de partidos tales como la UCR, Afirmación para una República Igualitaria (ARI), el Frente Grande o el socialismo o de pequeños partidos vecinales había sido la integración a puestos o tareas de gobierno. Señalemos que con independencia de las connotaciones ideológicas, la búsqueda de dirigentes de otros partidos capaces de transferir electores pareció ser el objetivo del gobierno.

19. Entrevista con Mario Wainfeld y otros en *Página/12*, 21/5/2006.

Cuando finalizó la gestión de Kirchner, el gobierno reunía índices de aprobación en la opinión pública del orden del 60%, medición hecha a partir de encuestas a individuos cuyas respuestas surgían de ponderaciones de temas distintos pero que convergían en valorar positivamente aspectos de la acción oficial. Por cierto, las iniciativas relacionadas con las críticas a la pasada dictadura genocida pesaron en el vuelco a favor de Kirchner de las simpatías de muchas personas que se definían como progresistas, pero al mismo tiempo no pocos integrantes de los partidos justicialistas provinciales y de los sindicatos peronistas debieron expresar su satisfacción por otros aspectos de la política oficial, aun cuando no compartían las medidas contra los militares.

Las iniciativas relacionadas con las críticas a la pasada dictadura genocida pesaron en el vuelco a favor de Kirchner de las simpatías de muchas personas que se definían como progresistas ■

Las valoraciones diferentes y hasta enfrentadas en el seno de los apoyos al gobierno se dieron también en oportunidad de la sanción de las leyes sobre el proyecto de matrimonio igualitario (o entre personas del mismo sexo), aprobado bajo la presidencia de Cristina Fernández. En los medios culturales provinciales más apegados a las tradiciones católicas se expresaron descontentos ante esa innovación en materia de derecho de familia, y esas reacciones adversas recibieron el apoyo de algunos gobernadores justicialistas y de parte de los legisladores nacionales a ellos vinculados. El caso más notorio fue el de José Luis Gioja, gobernador de la provincia de San Juan, que a pesar de estar alineado con el kirchnerismo no solo manifestó su desacuerdo público con la mencionada reforma, sino que, además, contribuyó a la realización de las movilizaciones organizadas por sectores religiosos contra la ley.

■ La etapa de Cristina Fernández de Kirchner

En las elecciones presidenciales del 28 de octubre de 2007 la fórmula Cristina Fernández de Kirchner-Julio Cobos obtuvo 45% de los sufragios y se impuso en la primera vuelta electoral²⁰. Ese resultado fue posible en virtud del carácter polifacético de los acuerdos del gobierno nacional con fuerzas políticas de todo el país sin mayores bases programáticas. Sería imposible determinar

20. Al respecto, v. AAVV: *Elecciones 2007. Lecturas, escenarios y futuro*, Cuadernos de Argentina Reciente N° 5, Buenos Aires, 12/2007.

los distintos afluentes que convergieron para reunir el porcentaje de votos de la coalición ganadora. La gran aceptación en la opinión pública de la gestión gubernamental fue, por cierto, un factor importante. Los apoyos de los dirigentes peronistas provinciales aportaron también una porción significativa de votos. A modo de indicio de cómo pudieron haber jugado las diferentes motivaciones del voto de la ciudadanía, es interesante señalar que en la provincia de San Luis, donde el gobernador peronista era crítico del kirchnerismo y además se había postulado como candidato presidencial, Cristina Fernández de Kirchner no obtuvo más que 12% de los sufragios. Ese dato indica el carácter decisivo del peso de los caudillos peronistas provinciales que adherían al gobierno nacional. Los gobernadores radicales de las provincias de Mendoza, Río Negro y Catamarca contribuyeron igualmente a acrecentar los votos de la fórmula ganadora, cuyo vicepresidente, Cobos, era parte de los llamados «radicales K». Un aspecto que cabe destacar fueron las derrotas de los candidatos oficialistas en los centros urbanos más modernos del país: Ciudad de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mar del Plata, La Plata y Bahía Blanca, mientras que los máximos porcentajes de sufragios se reunieron en las provincias gobernadas por el peronismo. Las presidenciales

de 2007 demostraron que para el gobierno era difícil conquistar nuevas bases electorales distintas a las de origen peronista.

Al poco tiempo de iniciada la presidencia de Cristina Fernández, las protestas de los sectores empresarios del agro abrieron una nueva etapa de las relaciones políticas que incluyeron cambios significativos en los vínculos de sectores del peronismo con el gobierno kirchnerista ■

Al poco tiempo de iniciada la presidencia de Cristina Fernández, las protestas de los sectores empresarios del agro abrieron una nueva etapa de las relaciones políticas que incluyeron cambios significativos en los vínculos de sectores del peronismo con el gobierno kirchnerista. El rechazo al incremento de las tasas impositivas

a las exportaciones agrarias movilizó a un multifacético conjunto de actores con sectores del mundo rural, que ganó adhesiones en los centros urbanos ajenos a sus actividades pero descontentos con aspectos de la gestión gubernamental. Las buenas condiciones de los mercados internacionales de productos agroalimentarios aseguraban altas tasas de rentabilidad para los productores y el gobierno pareció creer que el presupuesto público podía captar una parte de ellas.

Sin duda, el gobierno de Cristina Fernández poseía una legitimidad de origen superior a la de su predecesor, pero los hechos mostraron que no contaba con los factores objetivos que habían desactivado los reclamos del inicio de la gestión kirchnerista. La salida de la situación de crisis y estancamiento había incentivado los reclamos de todos los agentes económicos; el aumento de los impuestos al agro fue rechazado como una iniciativa arbitraria en tanto mecanismo para fortalecer los presupuestos estatales con fines proselitistas, y así el problema quedó totalmente politizado. Por su parte, los voceros del kirchnerismo actuaron como si creyesen que podían hacer de la derrota de las resistencias agrarias una especie de gesta política susceptible de fusionar contra los «dueños de la tierra» a sus apoyos peronistas y de centroizquierda. Sin embargo, las movilizaciones de productores agrarios pequeños y medianos difundidas por la comunicación televisiva reflejaron reclamos que hablaban en nombre de la ética del trabajo, a la vez que denunciaban la complicidad del gobierno con grandes intereses monopólicos en materia agroexportadora²¹.

Desde el comienzo de la protesta, algunos dirigentes peronistas provinciales expresaron de modo más o menos público el rechazo al aumento de los impuestos a las exportaciones agrarias (en especial concentrados en la soja), mientras que algunos sectores justicialistas y de izquierda daban su adhesión a los reclamos de la Federación Agraria Argentina, la entidad que históricamente había expresado a los pequeños propietarios del campo. El gobierno, por su parte, activó el viejo clivaje «pueblo *versus* oligarquía».

En mayo de 2008, Kirchner asumió la conducción del Partido Justicialista en condiciones en las que era evidente que se trataba de una iniciativa que apuntaba a neutralizar las disconformidades que manifestaban algunos gobernadores y dirigentes provinciales con respecto a las orientaciones del gobierno y, más precisamente, respecto al enfrentamiento con los productores rurales. La ausencia en la reunión partidaria de algunos dirigentes importantes, todos pertenecientes a regiones que eran epicentros del conflicto agrario (Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires o Entre Ríos), mostró el deterioro de las relaciones entre los peronismos provinciales y el gobierno nacional. De todas maneras, esas ausencias se registraron en condiciones en las que el cuerpo directivo del Partido Justicialista en el nivel nacional

21. Al respecto, v. Adrián Murano: *El agitador. Alfredo de Angeli y la historia secreta de la rebelión chacarera*, Planeta, Buenos Aires, 2008; Osvaldo Barsky y Mabel Dávila: *La rebelión del campo. Historia del conflicto agrario argentino*, Sudamericana, Buenos Aires, 2008.

quedaba integrado por la casi totalidad de los gobernadores peronistas. No obstante, cuando el gobierno envió al Parlamento el cuestionado impuesto, una parte de los diputados y senadores peronistas, al igual que la mayoría de los legisladores de la oposición, votó en contra, actitud a la que se sumó el vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, y así se hicieron públicos los resquebrajamientos de los apoyos del kirchnerismo.

Las primeras elecciones legislativas del periodo de Cristina Fernández, realizadas en septiembre de 2009, significaron un notorio retroceso político del kirchnerismo, que fue derrotado en los cinco principales distritos electorales del país: la Capital Federal y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. En el ámbito nacional, la coalición opositora denominada Acuerdo Cívico y Social superó por una ligera diferencia de votos al oficialismo con propuestas cuyo énfasis estaba puesto en las críticas a las transgresiones en el funcionamiento de las instituciones democráticas. Pero además de la pérdida de apoyos que pudo provocar el conflicto rural, lo que más perjudicó al oficialismo en el plano electoral fue la disidencia abierta en el seno del peronismo, bloque que concurrió con candidatos propios a las elecciones y consiguió imponerse por un estrecho margen de votos en la provincia de Buenos Aires, donde reside

**La misma situación de
desarticulación del
campo político que había
beneficiado a los promotores
del kirchnerismo primero
y los perjudicó luego,
jugó en contra de quienes
desde la oposición trataron
de proponerse como
una alternativa política ■**

casi la tercera parte del electorado nacional. Se agregó en lo simbólico el hecho de que Kirchner era el primer candidato a diputado nacional de la lista derrotada.

En la medida en que con las elecciones de 2009 el kirchnerismo perdió la mayoría en el Poder Legislativo, no parecieron exageradas las expectativas de quienes auguraron el comienzo de un nuevo ciclo político e institucional marcado por los protagonismos

de los partidos de oposición. Sin embargo, la misma situación de desarticulación del *campo político* que había beneficiado a los promotores del kirchnerismo primero y los perjudicó luego, jugó en contra de quienes desde la oposición trataron de concertar sus fuerzas para proponerse como una alternativa política. El alto grado de desorganización de los partidos políticos y las consecuentes pujas personalistas entre sus dirigentes obstaculizaron en lo inmediato la acción mancomunada de los opositores.

■ A modo de cierre: ¿hacia un partido kirchnerista?

El *gobierno de líder sin partido* fue eficaz durante el periodo 2003-2007, pero estaba tan fuertemente asociado al personalismo de Kirchner que ese formato de conducción política no fue adecuado para poner en su puesto de comando a su sucesora. Sin ser el único factor, la idea de que el ex-presidente seguía manejando los asuntos públicos deterioró el reconocimiento de la autoridad de Cristina Fernández. La caída de su popularidad hizo que la presidenta decidiese no postularse para una eventual reelección en 2011, y que el candidato volviese a ser Néstor Kirchner. Pero su fallecimiento ocasionó no solo la modificación de los planes del oficialismo sino que, además, inclinó a favor de su esposa a un porcentaje importante de la opinión pública que hasta ese momento no la respaldaba. Tal como sostuvimos en un texto reciente²², a pesar de su popularidad, el kirchnerismo no había conseguido establecer lo que Weber denominó una «leyenda del poder» capaz de relatar una gesta o una lucha legitimadora de sus orígenes y acción de gobierno. La renuncia al balotaje de Menem le anuló la posibilidad de ser plebiscitado por el *pueblo antineoliberal*; la quita en los montos de la deuda externa no dio visibilidad pública a una *alteridad* poderosa que se supusiese derrotada; los juicios a los responsables de los crímenes dictatoriales no alcanzaron la espectacularidad de los de 1985 ni suscitaban reacciones militares; las empresas extranjeras que vieron disminuir sus ganancias no reaccionaron como para alimentar la idea de un triunfo antiimperialista; en fin, en 2008 no hubo *oligarquía* vencida. Sin épica propia, el deterioro del kirchnerismo se vio revertido al producirse el fallecimiento de Kirchner, que fue sentido por amplios sectores de la opinión pública como un excepcional acto de sacrificio personal realizado en nombre de un ideal político. Los índices de popularidad de Cristina Fernández crecieron influidos por esa percepción y, seguramente, en virtud de la evaporación de las dudas sobre quién tomaba decisiones.

En lo que hace al tema de este artículo, también se produjo un cambio notable. Los roles desempeñados por Kirchner habían sustituido la falta de un partido kirchnerista, y si bien su modo personalista de ejercer la autoridad había disciplinado a la mayoría de los jefes provinciales y municipales peronistas, en muchos casos parecía claro que eran el cálculo y las conveniencias lo que los movía. Después de Kirchner, quienes se habían visto atraídos por su política y habían aceptado su conducción por afinidades ideológicas (una parte de ellos convencidos de haber quemado naves), fuesen dirigentes populares de la *suspensión colonial*, miembros más politizados de las organizaciones de derechos humanos,

22. R. Sidicaro: «Epílogo: después de *Los tres peronismos*», cit., p. 271.

figuras progresistas o de centroizquierda, o participantes del mundo cultural, entre otros, debieron imaginar que no estaba lejos el momento en que las dirigencias de los peronismos provinciales pidiesen intervenir de modo más activo en las gestiones gubernamentales. La salida del menemismo había mostrado, apenas ayer, la versatilidad de los dirigentes justicialistas, y nada indicaba que los años kirchneristas hubiesen alterado su proverbial pragmatismo. Organizar un partido kirchnerista contando con los recursos flexibles y con los pocos controles formales de una estatalidad en crisis puede ofrecer oportunidades en especial propicias para quienes parecen vislumbrar tal empresa²³. En lo inmediato, si bien son evidentes las iniciativas de los dirigentes peronistas provinciales y de los jefes sindicales de inaugurar una etapa poskirchnerista, no es menos notorio que las mayores iniciativas políticas giran en la esfera del fortalecido poder presidencial de Cristina Fernández.

La desarticulación de las reglas del juego del *campo político*, el debilitamiento de todos los que fueron sus anteriores participantes colectivos y los obstáculos con los que tropiezan los nuevos aspirantes a serlo no son independientes de las claras dificultades para suturar las distancias que la sociedad ha establecido con respecto a los partidos o lo que queda de ellos. Los personalismos son en ese sentido un estilo de sustitutos pobres y precarios de los partidos organizados, cuyas consecuencias provocan efectos no previstos por los propios sujetos que llevan adelante esas prácticas²⁴. Todo ello hace que los escenarios argentinos y los eventuales reacomodamientos de los actores en vísperas de las elecciones presidenciales de 2011 sean difíciles de prever. El retroceso de las propuestas de políticas de representación de intereses sectoriales y su reemplazo por la búsqueda de *targets electorales* no es, por cierto, una excepción exclusiva del caso nacional analizado. Las diferencias residen, quizás, en el hecho de que allí donde se carece de los antecedentes propios de la consolidación de una cultura política democrática, los protagonistas de la política se (re)presentan en el teatro de la representación aparentando ser personajes providenciales. En Argentina, las consecuencias de un pasado efectivamente dramático bajo muchos aspectos coadyuva al respecto. ☐

23. Con respecto a las instituciones estatales en el periodo, v. Hugo Quiroga: *La República desolada. Los cambios políticos en la Argentina (2001-2009)*, Edhasa, Buenos Aires, 2010.

24. Manuel Antonio Garretón, reflexionando sobre Chile, evoca los problemas de las acciones políticas centradas en intereses personales y las considera un fenómeno de corrupción aun cuando se trate solo de la lucha por posiciones de poder y prestigio político, sin que impliquen la búsqueda de intercambios de bienes materiales. Al respecto, v. M.A. Garretón: *La sociedad en la que vivi(re)mos. Introducción sociológica al cambio de siglo*, Lom, Santiago de Chile, 2000, pp. 58-64. V. igualmente Jaime Osorio: «La descomposición de la clase política latinoamericana: ¿el fin de un periodo?» en *Nueva Sociedad* N° 203, 5-6/2006, pp. 15-26, disponible en <www.nuso.org/upload/articulos/3348_1.pdf>.

Un partido campesino en el poder

Una mirada sociológica del MAS boliviano

La llegada al poder de Evo Morales como primer presidente indígena de Bolivia fue acompañada por otro hecho histórico: el arribo al gobierno de un partido con base rural, que se fue desbordando desde al campo hacia las ciudades. El Movimiento al Socialismo (MAS) es un partido sui géneris, que se piensa a sí mismo como el «instrumento político» de los sindicatos agrarios y mantiene fuertes vínculos con la izquierda boliviana. Su crecimiento no solo ha trastocado la correlación de fuerzas ideológicas; ha contribuido también a un fuerte proceso de ruralización de la política y de la propia identidad boliviana.

HERVÉ DO ALTO

En Bolivia se verifica una paradoja que se convirtió en un rasgo central de la vida política nacional: la inédita hegemonía de un partido campesino en un país ya mayoritariamente urbano¹. La emergencia del Movimiento al Socialismo (MAS), un movimiento fundado por Evo Morales en 1999 para garantizar la presencia de una voz campesina en la política boliviana, es de

Hervé Do Alto: máster en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Políticos Universidad Paul Cézanne Aix Marseille III. Es coautor de *La revolución de Evo Morales. De la coca al Palacio* (con Pablo Stefanoni, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2006).

Palabras claves: campesinos, indígenas, Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, Bolivia.
Nota del autor: este artículo fue elaborado a partir de algunos de los resultados de un largo trabajo de campo dedicado al MAS entre 2004 y 2010, realizado en el marco de una tesis doctoral. No nos detenemos aquí en la metodología o la presentación de los datos como tales para concentrarnos en las tendencias que atraviesan hoy en día el partido de gobierno boliviano.

1. Aunque el censo considera urbanas las poblaciones de más de 2.000 habitantes, a menudo «semirurales», no cabe duda de que la tendencia boliviana es hacia la urbanización, siguiendo un patrón global.

hecho un fenómeno político casi inédito a escala mundial en la historia reciente, no tanto por su composición social sino por el hecho de que los campesinos no hayan sido la columna sino la propia cabeza del movimiento, y por el predominio en su seno de la «cuestión campesina» como tal. En la historia contemporánea, son pocos los países en que el campesinado local llegó al poder, a menudo mediante los llamados «partidos populistas»². Por otro lado, la aparente inexorabilidad del éxodo rural en todo el planeta nos llevaría a pensar que tal perspectiva se vuelve mecánicamente cada vez más lejana –ya que ese éxodo reduce de hecho a los partidos surgidos del mundo rural al papel de fuerzas complementarias o masas de movilización un tanto marginales dentro de coaliciones más amplias, como en el caso en la política europea contemporánea–.

Si bien en muchas revoluciones comunistas fue central la iniciativa del campesinado (Rusia, China, Corea, Camboya o Vietnam), esos procesos fueron casi siempre liderados por una elite originalmente externa al campesinado mismo³. Por esa razón, el interés particular del MAS reside en que no se trata solamente de un partido compuesto por campesinos, sino de un «partido campesino», cohesionado material y simbólicamente por esa identidad, cuya práctica política se impone como una «política legítima» a los miembros del partido que no forman parte de ese grupo⁴. Y aquí es necesaria una aclaración: aunque es visible un proceso de indianización de los sectores populares bolivianos, la identidad campesina sigue siendo muy visible dentro del MAS –algo que se pudo observar también en la Asamblea Constituyente, donde la tensión entre identidades indígenas y campesinas «se resolvió» utilizando la expresión «indígenas-originarios-campesinos» cada vez que el nuevo texto constitucional hace referencia a la cuestión étnica cultural–.

Después de un análisis de la configuración interna del MAS que permite calificarlo de partido campesino, indagaremos entonces en la especificidad de la práctica de poder que tal configuración anima.

2. Ghita Ionescu (comp.) y Ernest Gellner (colab.): *Populismo. Sus significados y características nacionales*, Amorrortu, Buenos Aires, 1970.

3. Sobre el caso chino, v. Lucien Bianco: *Jacqueries et révolutions dans la Chine du xxe siècle*, La Martinière, París, 2005.

4. Sobre la noción de «política legítima» usada en el caso de los militantes comunistas franceses, v. Bernard Pudal: *Un monde défait. Les communistes français de 1956 à nos jours*, Éditions du Croquant, Bellecombe-en-Bauges, 2009.



■ Un partido de campesinos para los campesinos

El MAS nació de las cenizas de un movimiento popular cuyo pilar tradicional fue durante medio siglo el sindicalismo minero. Las reformas estructurales neoliberales de las décadas de 1980 y 1990 acabaron con la minería estatal y con la matriz obrerista que animaba organizativa e ideológicamente a la combativa Central Obrera Boliviana (COB). Por el contrario, las organizaciones populares estructuradas alrededor del campesinado lograron no solo evitar la embestida sino, a la larga, salir fortalecidas de los sucesivos enfrentamientos con el Estado, cuyas expresiones más duras fueron los «combates» en la región cochabambina del Chapare, adonde Evo Morales migró en los años 80⁵.

Las organizaciones sindicales agrarias se beneficiaron, además, de las reformas políticas de los años 90: en el marco de la profunda descentralización administrativa que emprendió el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, los sindicatos rurales comenzaron a renegociar su relación con el mundo político, pues la Ley de Participación Popular (LPP) de 1994 les permitía elegir por primera vez a sus autoridades en el nivel municipal⁶, y los partidos que

En el marco de la profunda descentralización administrativa que emprendió el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, los sindicatos rurales comenzaron a renegociar su relación con el mundo político ■

se concebían a sí mismos como instrumentos políticos de los sindicatos campesinos (el MAS y el Movimiento Indígena Pachakuti) aprovecharon rápidamente estas «oportunidades políticas»; de esa manera se profundizó un proceso de «ruralización»⁷ de la vida política boliviana.

Se puede entender así cómo el campesinado se encontró ante una configuración sociopolítica que le permitiría posteriormente asumir el liderazgo del movimiento popular boliviano. Al cambio en la correlación de fuerzas dentro de la propia COB en favor del mundo rural se sumaba una serie de experiencias electorales conjuntas entre la

5. H. Do Alto y Pablo Stefanoni: *La revolución de Evo Morales, de la coca al Palacio*, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2006.

6. Esteban Ticona, Gonzalo Rojas y Xavier Albó: *Votos y wiphalas. Campesinos y pueblos originarios en democracia*, Fundación Milenio / CIPCA, La Paz, 1995.

7. Moira Zuazo: *¿Cómo nació el MAS? La ruralización de la política en Bolivia*, Fundación Friedrich Ebert / Ildis, La Paz, 2008, disponible en <www.fes-bolivien.org/media/pdf/pub_04_libro.pdf>.

«vieja izquierda» y el sindicalismo campesino compartidas a lo largo de los años 90. Izquierda Unida (IU) y el Eje de Convergencia Patriótica, dos coaliciones de partidos cada vez más reducidos, organizaban la participación en los comicios, pero quienes proveían los votos eran los campesinos, y más específicamente, los cocaleros⁸.

Esa fuerza incipiente permitiría a IU lograr diez alcaldías en las primeras elecciones municipales en la historia del país, celebradas en 1995, y luego cuatro diputados nacionales en las elecciones generales de 1997, todos campesinos. Entre ellos figuraba Evo Morales, quien se destacó por ser el diputado uninominal elegido con el más alto porcentaje de votos en todo el país (61,8%). Un símbolo de esa nueva simbiosis política entre izquierdistas y campesinos fue que en 1993 se pensó postular como candidato presidencial a un «hermano campesino e indígena» y que el Eje de Convergencia Patriótico se convertiría en Eje Pachakuti –una palabra aymara y quechua que designa una «nueva era»–. Paulatinamente, a medida que se afirmaba su peso electoral, los campesinos se irían adueñando de estas coaliciones, al tiempo que se producía un fuerte proceso de reindianización discursiva e identitaria que resultó decisivo en los años siguientes.

Paralelamente a estas experiencias electorales, y a partir del fin de los años 80, se inició una profunda reflexión entre los dirigentes campesinos sobre la posibilidad de construir un partido propio directamente vinculado a los sindicatos agrarios y orientado ante todo hacia la autorrepresentación política y la defensa de sus intereses. En otras palabras, debían ser los campesinos los que organizan su propia presencia en el campo político, a través de una herramienta particular: el «instrumento político». El ideal organizativo que se impuso al término de los debates en el seno de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) fue el de un instrumento cuya relación con los sindicatos sería «orgánica», es decir, fusional⁹. Así pues, después de varios intentos de conformación de un partido campesino –la Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP) en 1995, entre otros–, Evo Morales logró finalmente fundar, en 1998, el Instrumento Político por la

8. Para un análisis de los resultados de estas coaliciones y el papel de los campesinos, v. H. Do Alto y P. Stefanoni: «El MAS: las ambivalencias de la democracia corporativa» en PNUD Bolivia, Proyecto de Fortalecimiento Democrático (PFD): *Mutaciones del campo político en Bolivia*, PNUD, La Paz, 2010, pp. 305-324, disponible en <www.gobernabilidad.org.bo/images/documentos/mutaciones_del_campo_politico_en_bolivia.pdf>.

9. Sobre la noción de «ideal organizativo» y su uso en el caso boliviano, v. H. Do Alto: «Can Organizational Forms Affect the Collective Identity of Social Movements? The Case of the Bolivian MAS-IPSP» en *Bolivian Studies Journal* vol. 12, 2005, pp. 133-154.

Soberanía de los Pueblos (IPSP). Para posibilitar la participación del IPSP en las elecciones municipales de 1999, Morales consiguió la sigla de un socio de IU, el Movimiento al Socialismo (MAS)¹⁰, con orígenes falangistas¹¹. Los éxitos del MAS-IPSP en esos comicios quedarían, una vez más, limitados al mundo rural y más particularmente al departamento de Cochabamba, dentro del cual se destacó la región cocalera del Chapare, bastión político de Morales.

Si la impresión dada por muchos relatos del proceso boliviano es la de una traducción casi mecánica, en el nivel electoral, de una lenta y larga acumulación de fuerzas desde el mundo campesino-indígena –acelerada por el ciclo de protestas antiliberales a partir del año 2000–, esta breve presentación de la historia del «instrumento político» deja ver una trayectoria menos lineal y más contingente: una formación partidaria que, al fin y al cabo, fue un «em-

Los resultados de las elecciones municipales de 1999 revelaron una dificultad de peso, pues el arraigo profundo del MAS en el campo parecía ir de la mano de su débil capacidad de implantación en las urbes ■

prendimiento político» llevado adelante por un grupo de dirigentes, pero un emprendimiento de devenir incierto, que debió muy pronto, incluso, discutir iniciativas rivales en el seno de sus propias filas. Los resultados de las elecciones municipales de 1999 revelaron una dificultad de peso, pues el arraigo profundo del MAS en el campo parecía ir de la mano de su débil capacidad de implantación en las urbes. De hecho, el «ideal organizativo» descrito anteriormente no se adecuaba a las ciudades, y

eran finalmente algunos de los «compañeros izquierdistas» los que asumían la tarea de «construir el instrumento». Pero esta izquierda se incorporó al MAS en ese entonces «con perfil bajo», con el hasta entonces sujeto revolucionario (los mineros) pulverizado, derrotada ideológicamente por la caída del Muro de Berlín y la hegemonía neoliberal y sometida ahora a los *desiderata* campesinos¹².

10. H. Do Alto y P. Stefanoni: *La revolución de Evo Morales, de la coca al Palacio*, cit., p. 56.

11. El MAS-U era un desprendimiento de Falange Socialista Boliviana que fue girando hacia la izquierda bajo el liderazgo de David Añez Pedraza. La "U" (en homenaje al líder fascista Óscar Únzaga de la Vega) fue retirada en un congreso partidario y el nombre oficial quedó establecido como Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP). Sin embargo, se mantuvieron los colores partidarios originales: azul y negro.

12. Hasta los años 80 la izquierda aún desconfiaba de los campesinos, a los que acusaba por el «Pacto Militar Campesino» con la dictadura de René Barrientos, bajo cuyo gobierno fue asesinado Ernesto «Che» Guevara.

Por otra parte, existen otros ex-militantes de izquierda que, sin formar parte del MAS, ejercieron un papel decisivo en los emprendimientos campesinos; se trata de *compañeros de ruta* del movimiento sindical: los empleados de organizaciones no gubernamentales (ONG). Después del derrumbe de los partidos de izquierda, muchos de sus militantes aprovecharon el masivo florecimiento de ONG –parte integrante de la nueva gobernabilidad neoliberal boliviana– y las crecientes posibilidades de financiamiento por parte de la cooperación internacional para ingresar en esas instituciones o conformar sus propias ONG. Entre ellas, algunas se dedicaron específicamente al asesoramiento técnico-productivo, jurídico o político de las organizaciones campesinas. Así, se encuentran ONG antiguas fundadas durante las dictaduras militares, como la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas) o el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), o estructuras más recientes, como el Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (Cenda). Si bien algunas instituciones aparecían íntimamente vinculadas a partidos, la gran mayoría trabajaba en una relativa independencia política.

Dada su peculiar trayectoria histórica, podemos avanzar hacia un primer intento de análisis del MAS, en esta primera fase que va de 1995¹³ a 2002, y proponer un esquema de la «configuración» del partido en el sentido que le da a este concepto Norbert Elias; es decir, ver el MAS como un espacio social caracterizado por un equilibrio de tensiones entre individuos o grupos¹⁴. El MAS presenta la particularidad de ser un partido en el que el ideal organizativo encarnado por la noción de «instrumento» contribuyó, en conjunción con intereses materiales y simbólicos que analizaremos más adelante, a forjar una identidad sui géneris del militante «masista», como lo ilustra el carné de miembro cuyo lema es «MAS legalmente, IPSP legítimamente».

Forjado como una alternativa a los partidos que se impusieron como los pilares del periodo conocido como «Democracia Pactada» (1985-2003), ese ideal organizativo también tuvo consecuencias prácticas en cuanto a la estructuración de la actividad del partido. A pesar de los esfuerzos por extender el aparato hacia las ciudades¹⁵, los dirigentes campesinos continuaron

13. Retomamos la fecha de fundación de la ASP, en la medida en que es la señalada comúnmente, tanto por los militantes de base como por los dirigentes, como verdadera fecha de nacimiento del instrumento político.

14. N. Elias: *Qu'est-ce que la sociologie?* [1970], L'Aube, La Tour-d'Aigues, 1991, pp. 154-161.

15. La Dirección Nacional del MAS crea una Secretaría Urbana en 2001. Entrevista con Carlos Burgoa, ex-secretario urbano del MAS, La Paz, 28 de abril de 2010.

ejerciendo un papel de liderazgo necesariamente aceptado por los nuevos miembros, en la medida en que aparecían como los garantes del proyecto histórico del partido. Ese papel se ilustra en la regla implícita –como muchas otras del MAS– de atribuir las tres primeras carteras de la Dirección Nacional¹⁶ a las llamadas «trillizas» (CSUTCБ, Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia –CSCB– y Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia), siendo Morales el presidente indiscutible e indiscutido del partido y una suerte de clave de bóveda de su configuración interna (entre otros elementos, por su papel de interlocutor/negociador/árbitro entre los distintos componentes). En la práctica, la jerarquía implícitamente aceptada en el MAS desembocó en una membresía diferenciada, con militantes de «primera clase» (los campesinos) y militantes «de segunda» (los urbanos).

Otra característica destacable es la casi ausencia de debates en el seno del partido, que resulta una suerte de prolongación del sindicato agrario. La regulación de las tensiones internas, de hecho, se consigue mediante la búsqueda de un reparto del poder entre sus organizaciones sindicales según múltiples criterios: de manera general, para ser considerada «importante», y por lo tanto legítima, cada organización debe demostrar permanentemente su capacidad de movilización, sea electoral o callejera, cuando un sindicato protesta por asuntos de corte corporativo. De allí que hayamos definido al MAS como una «democracia corporativa» basada en equilibrios diversos¹⁷. Si bien el MAS se construyó sobre la base de redes sociales heredadas de la «vieja izquierda», el rechazo a ciertas prácticas asociadas a esta, consideradas como fuentes posibles de división (la estructuración de tendencias, por ejemplo), y la exaltación de una unidad política lo más monolítica posible como condición de la victoria electoral han llevado a que el partido, desde su fundación, se haya configurado como una organización desprovista de manera paradójica de espacios de debate estrictamente político-ideológico.

A pesar de la orientación claramente marxista e indianista de los textos de los congresos partidarios¹⁸, los programas políticos sometidos por el MAS en cada elección ya dejaban percibir una orientación nítidamente desarrollista y

16. Esas carteras son: Presidencia del partido (Evo Morales), Vicepresidencia (reservada a la CSCB) y Secretaría de Relaciones Internacionales (reservada a la FNMCSB).

17. H. Do Alto y P. Stefanoni: «El MAS: las ambivalencias de la democracia corporativa», cit., pp. 303-363.

18. Ver Carlos Burgoa Moya y Modesto Condori Cuiza: *El caminar histórico del Instrumento Político, 1995-2009. Historia política del MAS-IPSP, 1988-2009*, La Paz, 2011, inédito.

«posneoliberal». El papel central jugado por el campesinado boliviano en el ciclo de protesta que empezó a sacudir el sistema político boliviano a inicios de la década de 2000, con la «guerra del agua» de Cochabamba, contribuiría a consolidar un imaginario respecto a un futuro «desarrollo endógeno» gracias al restablecimiento de la soberanía nacional sobre los recursos naturales como el gas, el hierro o el litio. Y en este contexto, las medidas enmarcadas en el nuevo carácter plurinacional de Bolivia parecen siempre pasadas por un oportuno tamiz nacionalista que las desactiva parcialmente¹⁹. La revitalización de la cuestión nacional puede verse también en el reciente lanzamiento de una nueva estrategia para la recuperación del litoral marítimo perdido en la Guerra del Pacífico (1878-1883), mediante demandas en tribunales internacionales después de casi cinco años de negociaciones bilaterales entre Bolivia y Chile. Todo ello con el objetivo de aglutinar a la nación luego de los costos políticos derivados del frustrado «gasolinazo», la eliminación de subsidios y el aumento de los combustibles de hasta 80% aprobados en diciembre de 2010 y derogados una semana más tarde.

■ El gobierno de Evo Morales: ¿un gobierno campesino?

Los intentos de extensión de la base de apoyo del MAS se enfrentaron a menudo a una serie de dificultades resultantes de su identidad rural. No obstante, desde las elecciones municipales de 2004 esta novedosa experiencia política electoral fue calando en territorios urbanos, especialmente en el occidente andino del país. En paralelo, la primera generación de ex-militantes de izquierda que controlaba el partido en su etapa inicial fue cediendo paso a una militancia más amplia, una gran parte de la cual se sumó al MAS cuando esta adhesión ya estaba atada a la expectativa de conseguir puestos en el Estado: las llamadas «pegas», percibidas a menudo como una legítima retribución del trabajo político efectuado en el marco de una campaña electoral. Semejante proceso llevó a que el destino del partido se

Desde las elecciones municipales de 2004 esta novedosa experiencia política electoral fue calando en territorios urbanos. En paralelo, la primera generación de ex-militantes de izquierda que controlaba el partido en su etapa inicial fue cediendo paso a una militancia más amplia ■

19. Sobre el imaginario político en el proceso de cambio boliviano, v. P. Stefanoni: «Siete preguntas y siete respuestas sobre la Bolivia de Evo Morales» en *Nueva Sociedad* N° 209, 2007, pp. 46-65, disponible en <www.nuso.org/upload/articulos/3429_1.pdf>.

volviera cada vez más dependiente de resultados electorales suficientemente exitosos como para garantizar el reparto de bienes políticos al conjunto de sus adherentes, en el marco de la mencionada «democracia corporativa», que busca equilibrios sindicales y territoriales. Obviamente, es necesario poner en perspectiva esta observación al indicar el contexto laboral en el cual están sumergidos los militantes del MAS y las clases populares bolivianas en general: en un país donde predomina la economía informal y donde una gran parte de la población fue excluida económica, política y simbólicamente, este acceso popular a «pegas» no es solo la expresión de la pervivencia del clientelismo político, sino que es vivido por amplios sectores indígenas y campesinos como parte de la «descolonización» y de la construcción de igualdad de oportunidades.

A esa presión proveniente de las bases se sumaría desde 2002 otra fuente de tensión para los campesinos en el nivel de la cúpula del partido: en virtud del segundo lugar de Morales en las elecciones de ese año, el MAS obtuvo una

En virtud del segundo lugar de Morales en las elecciones de 2002, el MAS obtuvo una importante bancada de congresistas; aproximadamente una mitad estaba compuesta por campesinos y otra, por intelectuales y ex-militantes de izquierda, «invitados» por el propio Morales ■

importante bancada de congresistas; aproximadamente una mitad estaba compuesta por campesinos y otra, por intelectuales y ex-militantes de izquierda, «invitados» por el propio Morales con la ambición de consolidar la credibilidad del partido ante el electorado urbano y de clase media. Y allí se vivió una profunda experiencia sociológica: mientras los campesinos seguían controlando la Dirección Nacional del partido, los ex-militantes de clase media lograban a partir de sus capitales culturales un mejor desempeño parlamentario, y así se fueron convirtiendo en una suerte de voceros del MAS ante los medios de comunicación y la opinión pública.

La sensación indígena y campesina de jugar en una «cancha ajena» se fue profundizando a punto tal que, en 2002, el diputado Rosendo Copa lanzó la iniciativa de crear un bloque indígena transversal a los partidos, lo que fue rechazado de plano por Morales²⁰.

20. P. Stefanoni: «El nacionalismo indígena como identidad política: la emergencia del MAS-IPSP (1995-2003)» en Bettina Levy y Natalia Gianatelli (eds.): *La política en movimiento. Identidades y experiencias de organización en América Latina*, Clacso, Buenos Aires, 2008, p. 359.

La llegada del MAS al poder, tras el triunfo de Morales en la elección presidencial de diciembre de 2005 con una inédita mayoría absoluta (53,7%), condujo a la profundización de estas dinámicas, con dos matices importantes. En primer lugar, con el acceso al gobierno ya no sería la bancada parlamentaria el centro de toma de decisiones, sino un Poder Ejecutivo fuertemente decisionista con Morales a la cabeza. En segundo término, la composición de los gabinetes consagró un nuevo canal de reclutamiento del personal político «masista» con la aparición, en el seno del Ejecutivo, de un gran número de ex-compañeros de ruta, cuya participación llegó a alcanzar hasta un 50% de «oeneros»²¹. En efecto, los técnicos de ONG cercanos al movimiento campesino cumplen con los dos criterios públicamente requeridos por el presidente Morales: «capacidad y compromiso». Si los ministros provenientes de organizaciones sociales urbanas o populares, como sindicatos fabriles o juntas de vecinos, figuraron en el primer gabinete en el año 2006 y llevaron al vicepresidente Álvaro García Linera a definir el Ejecutivo como un «gobierno de los movimientos sociales», y varias mujeres campesinas pasaron por Carteras ministeriales, la presencia de dirigentes sociales se fue reduciendo con el paso del tiempo. Semejante observación, entonces, nos conduce a plantearnos algunas preguntas relativamente simples: ¿gobiernan en realidad los campesinos en la era de Evo Morales? ¿Sigue vigente el emprendimiento histórico de autorrepresentación campesina en el campo político en ese contexto?

Cualquier intento de respuesta al primer interrogante no puede limitarse a la constatación de la relativa ausencia de los campesinos en el Poder Ejecutivo sin el riesgo de caer en una suerte de denuncia de tipo conspirativo respecto a la existencia de un «entorno blancoide», una explicación popularizada, hoy en día, entre los militantes del MAS cuando se evoca la marginación campesina. Tampoco hay que quitarle importancia al hecho de que el propio presidente –y capitán general de las Fuerzas Armadas– sea hoy un (ex)-campesino, que mantiene su cargo como secretario ejecutivo de las Seis Federaciones Cocaleras del Trópico de Cochabamba. Ni que algunos viceministerios estén manejados por dirigentes sociales. O que se registre una presencia sistemática de dirigentes campesinos a la cabeza del Ministerio de Desarrollo Rural, como Julia Ramos y Nemesia Achacollo.

En cuanto a las bases, también existe una amplia presencia en el nivel de cargos subalternos distribuidos por nombramiento –los que son más generalmente el

21. Jimena Costa Benavides: «Los poderes fácticos de la coyuntura» en Horst Grebe López (ed.): *Los actores políticos en la transición boliviana*, Instituto Prisma, La Paz, 2008, pp. 105-138.

centro de las estrategias de clientelismo político—, pero nuestras observaciones de trabajo de campo nos llevan a la intuición de que estos cargos son mayoritariamente ocupados por militantes urbanos del partido²². Por lo cual podemos concluir provisionalmente que la presencia campesina en la administración pública, de por sí, influye poco sobre los procesos de toma de decisiones en el seno del Poder Ejecutivo.

Por el contrario, sí es muy importante la presencia de dirigentes campesinos dentro del Poder Legislativo, ya que la conformación de planchas de candidatos es un proceso que se inscribe fuertemente en la lógica de la «democracia corporativa» descrita con anterioridad. Sin embargo, cabe notar que tanto en la Asamblea Legislativa Plurinacional (Congreso) como en la Asamblea Constituyente (cuyas sesiones se desarrollaron de agosto de 2006 a diciembre de 2007), la ruptura biográfica inducida en las trayectorias individuales de los dirigentes campesinos por el hecho de ingresar en el escenario institucional se intensifica, abriendo mayores posibilidades de encontrar dónde «reciclarse» en el aparato estatal tras el fin de un cargo electivo y habilitando identidades «semicampesinas»: campesinos que viven en las ciudades sin la perspectiva de retornar a la vida rural.

Nemesia Achacollo, actual ministra de Desarrollo Rural, es un ejemplo de esa trayectoria: originaria de Yapacaní (Santa Cruz), ejerció cargos en el nivel departamental, tanto en la Federación Departamental de Mujeres como en la Dirección Departamental del MAS, antes de convertirse en ejecutiva de la Federación de Mujeres Campesinas de 2004 a 2006. En diciembre de 2005 fue elegida diputada por Santa Cruz, mandato que ejerció hasta 2009. En enero de 2010 fue nombrada ministra. Sin duda, este proceso corresponde a cierta maduración del cuerpo dirigente del MAS, lo cual implica lógicamente una nítida profesionalización. Pero esa maduración no solo se expresa en una estabilización de ese núcleo: también se manifiesta en la permanencia de muchos de esos dirigentes a la cabeza de sus organizaciones sociales, lo que lleva a ver en este proceso no solo una profesionalización, sino también una cierta burocratización de dirigentes sindicales desconectados, en muchos casos, de cualquier actividad productiva y, por lo tanto, de sus sindicatos de base. En síntesis: si las organizaciones sociales «perforan» el Estado, este último también «estatiza» las dirigencias sociales, con un pie en sus organizaciones y otro en diversos cargos públicos.

22. Carecemos de estadísticas precisas para evaluar la realidad y amplitud de la presencia campesina dentro del Estado, que solo podría proveer un acceso a los archivos de las direcciones de Recursos Humanos de las distintas instituciones públicas.

Por la nueva configuración que emerge de la llegada del MAS al poder de Estado, se pueden sacar dos conclusiones importantes: además de su papel inicial de regulador del acceso al empleo público, el MAS también juega otro papel, el de cohesionador del apoyo al gobierno. En este marco, si bien la capacidad de las organizaciones sindicales y sociales para formular propuestas o recomendaciones no debe ser menospreciada²³, la incidencia del MAS como partido sobre la política gubernamental es muy débil fuera del sector previamente mencionado: las políticas agrarias, en las que se verifican fuertes tensiones entre visiones campesinistas y comunitaristas respecto de la propiedad de las tierras entregadas por la reforma agraria de Morales. En efecto, es posible afirmar que las orientaciones en términos de política gubernamental son definidas en ámbitos que escapan a las esferas de dirección del partido y de las organizaciones, y resultan favorecidos tanto en el gobierno como en las estructuras de campaña *ad hoc* los «técnicos» invitados: es notable en este sentido el papel que jugaron los futuros ministros en la preparación de la campaña para las elecciones generales de 2005, cuando casi ninguno de ellos era orgánicamente militante del MAS.

Además de su papel inicial de regulador del acceso al empleo público, el MAS también juega otro papel, el de cohesionador del apoyo al gobierno ■

Sin embargo, el marco general de la política gubernamental debe respetar un relato que es el que impusieron los propios movimientos sociales bolivianos a través del ciclo de protestas de los años 2000. Es precisamente en esa clave como se puede leer el «decálogo» que sirvió de propuesta electoral en 2005, dentro del cual figuraban la nacionalización e industrialización de los hidrocarburos, la mecanización del agro, la convocatoria a una asamblea constituyente y una ley contra la corrupción. Pero estas demandas no son las de «todo» el movimiento social boliviano: por ejemplo, las demandas de corte ambientalista siempre fueron más marginales en su seno, pese al rol protagónico de Evo Morales en las cumbres climáticas. De ahí surge, en la nueva Carta Magna, un antagonismo casi estructural entre la visión productivista y desarrollista de la economía y los discursos sobre la defensa del medio ambiente a través del reconocimiento de derechos de la Pachamama. El

23. El Pacto de Unidad, coalición de organizaciones del mundo rural cuyo objetivo era promover la participación campesina e indígena en la Asamblea Constituyente, fue uno de los pocos protagonistas de la sociedad civil boliviana en proponer una propuesta completa de texto constitucional.

gobierno tuvo que enfrentar esa aparente contradicción algunas veces, como durante la Conferencia Mundial sobre el Cambio Climático de Cochabamba, realizada en abril de 2010: en ese momento, el Ejecutivo prohibió a una serie de organizaciones, esencialmente indígenas, y a las ONG aliadas llevar a cabo una mesa de trabajo dedicada a temas ambientales nacionales, tildados por el vicepresidente García Linera de «fuera del contexto», ya que podían desembocar en una condena de varios proyectos productivos que el gobierno apoya, especialmente mineros e hidroeléctricos, a pesar del peligro que conllevan para el medio ambiente²⁴.

Si miramos el episodio de Cochabamba como un conflicto dirimido en favor de cierta percepción de lo que debe ser el desarrollo, podemos ver que primó una visión «campesina» de este conflicto, es decir, una visión que favorece la producción «a cualquier costo» en contra de las supuestas cosmovisiones indígenas originarias. Lo sucedido en Cochabamba, de hecho, ilustra esa manera de proceder que existe en muchos otros ámbitos, como el de la regulación laboral. Como lo hemos señalado, la base social del MAS está esencialmente compuesta de campesinos, o sea pequeños propietarios. Es curioso que, en su fase de expansión urbana, el MAS también se implantó en categorías sociales de similares características socioeconómicas: en El Alto o Santa Cruz, el éxito del trasplante «masista» se explica por la apropiación masiva del partido por parte de los «gremialistas» (pequeños comerciantes)²⁵. Al contrario, las dificultades de implantación del MAS en sectores conocidos por su combatividad, como los trabajadores de la salud, los maestros urbanos o los obreros fabriles, no se entiende solo por el hecho de que estos sectores sean controlados por otros partidos, sino por la poca atención que ha puesto el gobierno en el trabajo asalariado más allá de algunas reformas legales. Las repetidas críticas por parte del gobierno al ejercicio del derecho de huelga han desembocado en sorpresivas amenazas en contra de los maestros rurales –cuya federación suele ser parte, paradójicamente, del MAS–. En Cochabamba, en el marco de una movilización general en favor de un aumento salarial en la cual participaban, en el mes de abril de 2011, los maestros rurales enfrentaron las duras críticas de la Federación Campesina departamental, cuyos dirigentes llegaron a votar una resolución que ordenaba a los afiliados expulsar de las comunidades a los huelguistas²⁶.

24. *El Diario*, La Paz, 24/4/10.

25. H. Do Alto y P. Stefanoni: «El MAS: las ambivalencias de la democracia corporativa», cit., pp. 343-348.

26. «Campesinos instruyen expulsar de comunidades a maestros ‘faltos» en *Erbol*, <www.erbol.com.bo/noticia.php?identificador=2147483943392>, 17/4/2011.

El MAS tampoco se muestra abierto a reivindicaciones de movimientos sociales feministas o LGBT: ni la legalización del aborto ni el matrimonio entre personas del mismo sexo están en su agenda; en varios sentidos, es posible abordar el MAS como una izquierda conservadora, aunque sus difusos marcos ideológicos no permiten descartar que ciertas demandas puedan ser incorporadas de acuerdo con el contexto político.

Hasta ahora, el MAS como proyecto partidista logra sostenerse a pesar de la combinación entre a) la creciente heterogeneidad tanto de su propia composición como del abanico cada vez más amplio de las organizaciones aliadas a él, y b) la permanencia de una jerarquía interna caracterizada por la valoración del militante campesino, así como por el predominio de la «cuestión campesina» como principal brújula para arbitrar decisiones y conflictos. Cabe preguntarse entonces qué permite cohesionar un edificio partidista tan diverso, con dinámicas potencialmente centrifugas. Sin duda, la conquista del aparato estatal ha abierto una suerte de mercado de «pegas» que volvió factible la consolidación de una –hasta entonces incipiente– red de clientela, que refuerza el papel de los campesinos dentro del MAS. Si bien a menudo estos no se benefician directamente de los cargos públicos disponibles para su reparto, las «pegas» constituyen el bien político gracias al cual los sindicalistas rurales mantienen el poder en el seno del partido, pues controlan en parte su distribución. E igual o más importante aún es el papel de Evo Morales como el gran árbitro de las diferentes esferas políticas y sociológicas que dan vida a este partido, esquivo al análisis debido a sus mecanismos informales de funcionamiento y la complejidad de las redes tejidas al calor de tradiciones sindicales, comunitarias, gremiales y territoriales cuya aprehensión exige largos trabajos etnográficos.

En todo caso, el MAS logró mantenerse como un partido campesino, a pesar del crecimiento exponencial de su base militante. Adicionalmente, el hecho de que el triunfo de Morales no haya dado lugar a una «colonización» directa del Estado por los campesinos no significa que estos estén sacando un beneficio puramente simbólico de su victoria: la mayoría de las políticas públicas

El MAS tampoco se muestra abierto a reivindicaciones de movimientos sociales feministas o LGBT: ni la legalización del aborto ni el matrimonio entre personas del mismo sexo están en su agenda; en varios sentidos, es posible abordar el MAS como una izquierda conservadora ■

están destinadas al campo o, aun siendo universales, tienen más impacto en estas regiones por sus niveles de pobreza y de abandono estatal, como los bonos sociales, los planes de alfabetización, la construcción de caminos y carreteras, los proyectos de electrificación rural y extensión de internet y telefonía celular, etc.

■ A modo de conclusión

«Sería entonces cuando veríamos cómo, a la larga, no es la socialdemocracia la que se adueña de los municipios o el Estado, sino que, al revés, es el Estado el que se adueña del partido», escribió Max Weber en una ocasión²⁷. Y la expresión es pertinente en el caso que nos ocupa: aun con un programa relativamente radical y configurado sobre la base de la idea de autorrepresentación social, el MAS no quedó inmune al efecto estatal. Su viabilidad depende ahora de su capacidad para conservar la presencia en el aparato del Estado, e incluso para extender su presencia hasta el más mínimo rincón. Asimismo, el empleo público se ha convertido en un «pegamento» que mantiene unido el partido con cierta disciplina²⁸. Por lo tanto, la hegemonía actual del MAS sobre el sistema político boliviano asombra menos que su fragilidad real en términos de la institucionalización interna y de la dependencia del liderazgo de Evo Morales, hoy una figura a todas luces irremplazable.

Cabe preguntarse, entonces, si este partido campesino podría sobrevivir, por ejemplo, a una derrota electoral. En las elecciones municipales de 2010, en las cuales el MAS se destacó por un frío pragmatismo, el partido oficialista se alió a grupos provenientes de la derecha en las regiones opositoras como Santa Cruz (bajo la consigna de que «para derrotar a la derecha, hay que cooptar a sus eslabones más débiles»), al mismo tiempo que rompía con sus más fieles aliados en las regiones de hegemonía «masista», con la esperanza de ganar las alcaldías ubicadas en sus supuestos bastiones sin necesidad de compartir el poder con aliados como el Movimiento sin Miedo en La Paz. El esperado tsunami electoral se convirtió en un contundente fracaso: el MAS no logró el triunfo en varias alcaldías donde esperaba una victoria (La Paz, Oruro, varias zonas rurales aymaras), aunque se mantuvo como el partido más votado en el ámbito nacional.

27. M. Weber, intervención en el Verein für Socialpolitik en Gilbert Badia: *Rosa Luxemburg, journaliste, polémiste, révolutionnaire*, Éditions Sociales, París, 1975, p. 139.

28. Para un análisis más detallado del uso de esa noción en el caso boliviano, v. H. Do Alto y P. Stefanoni: «El MAS: las ambivalencias de la democracia corporativa», cit.

Hoy, en un contexto en el que la mística política se ha reducido en el espacio gubernamental y se observa un desgaste relativo de la figura de Evo Morales, habrá que ver si es posible el objetivo planteado por el vicepresidente García Linera: «reideologizar» el MAS, «dejando de lado las peleas y las pugnas más personales, más individuales y por cargos, para que sea un motor del pensamiento y del compromiso revolucionario»²⁹. ☒

29. *Los Tiempos*, Cochabamba, 30/7/2010.

México: el crepúsculo del PRD

Las referencias a la crisis del Partido de la Revolución Democrática (PRD) son un lugar común entre la opinión pública y, al mismo tiempo, conforman un rompecabezas para el análisis político. En los últimos años, este partido-movimiento que surgió de las entrañas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y en 2006 quedó a las puertas de colocar en la Presidencia a Andrés Manuel López Obrador sufrió profundas mutaciones. Las multitudinarias protestas antifraude contribuyeron a ampliar su base popular, pero hoy el PRD se enfrenta a un «empate catastrófico» entre la Nueva Izquierda y el obradorismo, y este último tiende a proyectarse cada vez más hacia fuera del partido.

MASSIMO MODONESI

Bajo el rubro del sentido común, la crisis del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se manifiesta desde hace años como sentencia, acompañada de sentimientos de regocijo, indiferencia, resentimiento, rabia o lamentación. Ampliamente aceptada, esta idea general aparece y reaparece con fuerza cada vez que, dentro de este partido, emergen contrastes y divisiones entre grupos y facciones, cuando algún resultado electoral cuantifica

Massimo Modonesi: historiador y sociólogo; doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es profesor de la UNAM y coordinador del Centro de Estudios Sociológicos de la misma institución. Dirige la revista *Observatorio Social de América Latina (OSAL)* del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso).

Palabras claves: izquierda mexicana, Partido de la Revolución Democrática (PRD), Andrés Manuel López Obrador, México.

un retroceso, una inconsistencia política resalta una pérdida de identidad opositora o un escándalo revela lagunas éticas y vicios morales propios. Al margen de la circunstancialidad singular y particular, esta sentencia adquiere un carácter general y permanente por extensión de la multicitada crisis de los partidos políticos o de la política en general, otra convención discursiva asentada mediáticamente en la opinión pública, detrás de la cual proliferan sesudas interpretaciones politológicas y sociológicas, así como críticas «movimientistas» y «sociedadcivilistas», izquierdistas o ultraliberales. Por otra parte, en un sentido particular, la crisis del PRD se traduce y se confunde con la pretendida crisis de la izquierda, atribuyéndose al PRD la representación de este sector político o simplemente operándose una generalización y una simplificación por lo menos cuestionable.

Si la idea de crisis remite a una patología y proyecta la idea de enfermedad y la posibilidad de la muerte, la muchas veces anunciada y siempre postergada muerte del PRD como institución política obliga a preguntarse si la enfermedad no se convirtió en un estado crónico y, por ende, en una forma de vida, un proceso en el cual lo patológico se traslapa con lo fisiológico, o si realmente es el anuncio de la muerte o un sinónimo de agonía. La primera hipótesis parece pertinente para entender la trayectoria del PRD desde su fundación en 1989 hasta 2006. La coyuntura actual, entre 2006 y 2011, plantea otro desafío interpretativo que puede ser atendido acudiendo a la idea de crisis como acontecimiento histórico, es decir, del fin de un ciclo de vida ligado al papel histórico del PRD, a las razones de su nacimiento y de su arraigo. En este sentido, en los últimos años, el PRD como proyecto histórico, como movimiento político, parece haber muerto, más allá de que sobreviva un instituto político con este nombre.

■ Dimensiones de la crisis

A la par de los altibajos electorales, las divisiones internas, los desaciertos de sus gobiernos locales y las contradicciones de su conducta política, la manifestación más sobresaliente y contundente de la crisis del PRD radica en la percepción negativa socialmente generalizada que se fue plasmando en los imaginarios y las representaciones sociales. En la construcción de una imagen *perversa* del PRD, junto con las experiencias y percepciones directas de los ciudadanos, no podemos dejar de señalar el papel que cumplieron los medios de comunicación de masas –en su gran mayoría adversos a esta institución partidaria–, en tanto fomentaron y garantizaron la formación, la difusión y la generalización de esta apreciación a lo largo de los años. Al mismo tiempo, al margen del agigantamiento mediático, es revelador y sintomático que la

idea de crisis del o en el PRD sea reconocida por sus mismos integrantes y simpatizantes, a tal punto que el último congreso partidario –en diciembre de 2009– fue considerado de «refundación», lo cual expresa un nítido rechazo hacia el estado presente del partido, un deseo de volver a empezar que alude a un pasado virtuoso y se proyecta hacia un futuro purificador. Esto confirma que el «reflejo» externo, aun en su distorsión mediática, corresponde a un fenómeno interno: un conjunto de tensiones y contradicciones que se sintetizan en la forma y el diagnóstico de la crisis.

Rebasando el plano de las representaciones sociales y abrevando en los escasos estudios especializados sobre el PRD, el análisis sociopolítico de su crisis resulta, por distintas razones, escurridizo y resbaloso¹. Por el hecho de ser un proceso en curso y por la ambigüedad conceptual propia de la noción, la crisis acaba siendo un fenómeno difícil de caracterizar y periodizar en el contexto de la historia de este partido.

Una posible aproximación puede arrancar justamente de la problemática apertura semántica del concepto de crisis y del consenso sobre la necesidad de una refundación como extremo recurso de salvación. En este sentido, descifrar las tensiones que recorren el PRD implica interrogarse sobre su naturaleza en relación con las distintas acepciones de la noción de crisis entendida como alteración de un equilibrio, una tensión transformadora, potencialmente destructora y, en última instancia, el aviso de una posible muerte. Por otra parte, la *refundación* alude a un renacimiento, un retorno a la inocencia perdida, un deseo que expresa tanto la vuelta al pasado como un proyecto de futuro, ambos afincados en un malestar en relación con el presente. ■

La refundación alude a un renacimiento, un retorno a la inocencia perdida, un deseo que expresa tanto la vuelta al pasado como un proyecto de futuro, ambos afincados en un malestar en relación con el presente ■

Un posible acercamiento puede comenzar precisamente de la problemática apertura semántica del concepto de crisis y del consenso sobre la necesidad de una refundación como extremo recurso de salvación. En este sentido, descifrar las tensiones que recorren el PRD implica interrogarse sobre su naturaleza en relación con las distintas acepciones de la noción de crisis entendida como alteración de un equilibrio, una tensión transformadora, potencialmente destructora y, en última instancia, el aviso de una posible muerte. Por otra parte, la *refundación* alude a un renacimiento, un retorno a la inocencia perdida, un deseo que expresa tanto la vuelta al pasado como un proyecto de futuro, ambos afincados en un malestar en relación con el presente.

1. Estudios que, por cierto, no llegan a analizar lo ocurrido a partir de 2006. Ver Adriana Borjas Benavente: *Partido de la Revolución Democrática. Estructura, organización interna y desempeño público: 1989-2003*, Gernika, México, DF, 2003, 2 vols.; Víctor Hugo Martínez González: *Fisiones y fusiones, divorcios y reconciliaciones: la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (1989-2004)*, Plaza y Valdés, México, DF, 2005; Francisco Reveles Vázquez: *Partido de la Revolución Democrática: los problemas de la institucionalización*, Gernika, México, DF, 2004; Enrique Semo: *La búsqueda. 1. La izquierda mexicana en los albores del siglo XXI y 2. La izquierda y el fin del régimen de partido de Estado*, Océano, México, DF, 2003-2004; Igor Vivero Ávila: *Desafiando al sistema. La izquierda política en México. Evolución organizativa, ideológica y electoral del Partido de la Revolución Democrática (1989-2005)*, Porrúa, México, DF, 2006.

Si asumimos que la crisis es un fenómeno que emerge, que no es constitutivo de la normalidad, su carácter extraordinario nos obliga a contrastar un momento de equilibrio con la perturbación del orden, la salud con la enfermedad². Ubicar el nacimiento de la crisis como patología puede permitir distinguir el momento en que adquirió carácter fisiológico y se volvió ordinaria y por lo tanto consustancial a la existencia misma del partido.

■ Los rasgos originarios

Los orígenes nos proporcionarán un punto de partida desde el cual evaluar la profundidad de una transformación que acabó siendo definida como involución y crisis. Una crisis, como toda transformación, puede medirse en términos comparativos, en relación con una situación inicial, con un estado originario.

El PRD nació de una crisis política, de la crisis de otro partido que era el *alter ego* del Estado. En otros términos, una crisis estatal, una grieta del pacto de dominación, parió al PRD. Como es sabido, entre 1986 y 1988 el desprendimiento de la Corriente Democrática del Partido Revolucionario Institucional (PRI), encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, suscitó la simpatía de importantes sectores populares y de organizaciones de la llamada «izquierda social» y confluyó con la izquierda comunista agrupada en el Partido Mexicano Socialista (PMS), una parte del trotskista Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y otras formaciones políticas menores sin registro electoral. De esta convergencia sociopolítica surgió la campaña electoral opositora más importante, hasta ese entonces, de la historia del país, centrada en la demanda democrática pero condimentada con reivindicaciones nacional-populares en pleno ascenso del neoliberalismo, todavía encubierto bajo el tecnicismo de «ajuste estructural». El recurso extremo al fraude electoral dejó en evidencia que la magnitud de este fenómeno de disidencia política y oposición social desbordó el aparato de control político priísta. La movilización popular y ciudadana fue el factor disruptivo que hizo «caer el sistema» y forzó las rutinas de reproducción institucional. Frente a la disyuntiva entre el enfrentamiento y el reflujo, desde las cabezas dirigentes surgió la idea de la

2. Sin asumir como inevitable, inexorable y lineal el pasaje entre *Estado naciente e institucionalización*, no podemos desconocer que la tensión que recorre el ciclo de vida de un movimiento o un partido político se disloca sobre una línea que puede visualizarse a partir de la contraposición entre los rasgos originarios y su transformación en el tiempo, en el asentamiento y la consolidación organizacional.

El PRD surgió de la fusión entre culturas políticas distintas, de padre nacional-popular y de madre socialista, aunque el apellido materno no figuró en el acta de nacimiento ■

institucionalización del movimiento: la fundación del PRD como instrumento político de disputa hegemónica³.

En la bisagra entre movimiento y partido, el PRD nació ostentando rasgos identitarios específicos que lo caracterizaban y lo distinguían. El nuevo partido surgió de la fusión entre culturas políticas distintas, de padre nacional-popular y de madre socialista, aunque el apellido materno no figuró en el acta de nacimiento y quedó solamente en la memoria de un sector de sus dirigentes y militantes. La colocación a la izquierda del espectro político, la ambigüedad ideológica típica de la época y la oportunidad política desplazaron la necesidad de adjetivar con claridad el nuevo partido, en el cual aparecían, según el ángulo y las circunstancias y no sin contradicciones y tensiones, rasgos nacional-populares, progresistas, socialdemócratas, plebeyos, clasemedios, demócratas y populistas. En todo caso, al margen de las definiciones ideológicas o clasistas, el PRD sintetizaba y proyectaba una cultura política de oposición, de crítica y de protesta, y un ideario socializante y democratizante.

En el plano proyectual, la identidad perredista creció sobre dos piernas. Junto con la cuestión democrática, bandera fundamental y fundacional plasmada en el nombre mismo del partido, a lo largo del gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) fue forjándose una identidad antineoliberal –ya esbozada en la campaña de 1988– desde el caudal de las reivindicaciones populares surgidas de los agravios provocados por los despojos y las depredaciones privatizadoras. A la dimensión proactiva de la democratización se sumó la dimensión reactiva antisalinista, es decir, el antineoliberalismo mexicano, para completar el mapa genético, la x y la y del ADN perredista.

De ellas, se desprendía un programa orientado a promover una serie de reformas centradas en la redistribución del poder, decisional y económico, una firme apuesta a la democratización formal en contra de los manejos legales e ilegales priístas, una vaga idea de democracia participativa, una dosis de anti-imperialismo negociador y una decidida voluntad de recuperar el papel arbitral y equilibrador del Estado como pilar de un programa de desarrollo social.

3. Ver M. Modonesi: *La crisis histórica de la izquierda socialista mexicana*, Juan Pablos / UCM, México, DF, 2003.

En los planos táctico y estratégico, para operar la revolución democrática y las reformas socioeconómicas, el PRD proponía un conjunto de apuestas que combinaban la conquista de espacios institucionales de representación por vía electoral con la ampliación de la participación por medio de la organización popular y la movilización social. Las apuestas del partido se trifurcaban entre –en orden de importancia– campañas electorales, oposición parlamentaria y protesta social.

En su seno, el PRD se caracterizaba por una vida interna que giraba en torno de las relaciones y las tensiones entre tres polos: el líder, los grupos dirigentes y los militantes. Parte importante de las dinámicas decisionales, en la óptica del consenso, se dirimían –a grandes rasgos– según la lógica de los dos tercios: cuando convergían líder y militantes, a los grupos dirigentes solo les quedaba sumarse o irse; cuando se aliaban líder y grupos dirigentes, los militantes seguían o se retiraban; del mismo modo, cuando grupos dirigentes y militantes convenían, el líder tenía que aceptar, sumarse y hacerse portavoz de la voluntad mayoritaria. Por otra parte, como segunda regla fundamental ligada al principio de unidad, las recurrentes divisiones internas de los grupos dirigentes eran resueltas por la autoridad política y moral del líder. Y finalmente, como tercer nivel de funcionamiento interno ligado al principio de dirección, el líder orientaba los equilibrios internos apoyándose en una u otra parte de los grupos dirigentes.

Un equilibrio precario –afincado en una ética militante ligada a un ideario emancipatorio y a la síntesis concreta encarnada en la figura carismática de Cárdenas– daba forma al PRD y estabilizaba las contradicciones consustanciales a la formación de un partido que pretendía reunir a la izquierda mexicana.

■ La crisis como proceso (1989-2006)

Entre 1989 y 2006, en medio del torbellino de acontecimientos de la historia de México, la trayectoria del PRD puede visualizarse como un claroscuro a la luz de las ambiciones, las esperanzas y las expectativas de los orígenes⁴. La crisis aparecerá entonces, en el proceso de emergencia y agudización de las contradicciones originarias, como una trenza de líneas de tensión.

Los semblantes de la crisis se pueden observar, a grandes rasgos, en una serie de pasajes y de tendencias. La aparente virtud del pluralismo de corrientes

4. Ver M. Modonesi: *El Partido de la Revolución Democrática*, Nostra Ediciones, México, DF, 2009.

dio paso a un creciente corporativismo de las llamadas «tribus», que a su vez dio lugar a una serie de eventos y prácticas degenerativas: repartición cuantitativa de espacios de poder, enfrentamientos sistemáticos, elecciones internas fraudulentas, clientelismo y cooptación en la relación con organizaciones sociales, corrupción, etc. La pureza opositora se manchó de compendias parlamentarias y de cuestionables gestiones en gobiernos y cogobiernos locales. La ambigüedad ideológica derivó en el vaciamiento de ideales; valen como ejemplos la definición de izquierda sin adjetivos que apareció desde 1997 en los documentos partidarios y la propuesta de *izquierda moderna* avanzada por la corriente de Nueva Izquierda como *non plus ultra* de la vaguedad doctrinaria –aun cuando no dejaba de evocar las tendencias renovadoras de la socialdemocracia europea, en particular las que han sido llamadas social-liberales– para destacar la difuminación de las fronteras ideológicas y la pérdida de un anclaje programático propio. Las contradicciones táctico-estratégicas tendieron a resolverse a favor del electoralismo, dejando huérfanos a los movimientos sociales que no aceptaron renunciar a su autonomía relativa por la lógica del intercambio clientelar, el *lobbying* o la transmutación partidaria de sus organizaciones ■

Quedaron los grupos dirigentes, ya no simples delegados sino esencia misma del partido, como accionistas de una sociedad anónima, organizados tribalmente, agazapados en los edificios públicos, los puestos y las funciones. Desaparecidos los antidotos de abajo y de arriba, se desbordó la burocratización y, en última instancia y como consecuencia, el dominio de la corriente más dedicada al cultivo del aparato: Nueva Izquierda⁵.

5. Las corrientes internas del PRD son numerosas y, salvo contadas excepciones, cambian con frecuencia de nombre; en general se estructuran en torno de núcleos de lealtad personal, no raras veces con un simple arraigo local. La fuerza de Nueva Izquierda se debe, entre otras cosas, a su proyección nacional y a su estabilidad en el tiempo y en el perímetro de sus integrantes.

Sin embargo, mientras estas tendencias tomaban vuelo, en particular entre 1997 y 2006, en el PRD permanecieron activas varias de las virtudes originarias. El partido no dejó de vincularse y de promover movilizaciones de protesta, hizo propias las causas de diversos movimientos sociales, conservó un discurso opositor que denunciaba sistemáticamente la deriva neoliberal y la persistencia del autoritarismo en México, impulsó algunas políticas progresistas y redistributivas cuando ocupó gobiernos locales (en particular en el Distrito Federal), promovió la politización de sus militantes y de vastos sectores de la ciudadanía y estimuló la formación y el recambio de liderazgos locales y nacionales.

El arrastre del sentido profundo del PRD como partido-movimiento de izquierda no desapareció del todo frente a las tendencias institucionalizantes que lo asimilaban a la lógica conservadora de una casta política autorreferente. Sin embargo, con el tiempo avanzó un proceso de desdibujamiento y desperfilamiento que conducía a una paulatina homogeneización en la forma de concebir y practicar la política como campo reservado a los profesionales. Todo ello, al margen de que los referentes sociales y las políticas públicas del PRD difícilmente pudieran confundirse con el neoliberalismo clasista del Partido Acción Nacional (PAN), si bien desde que pasaron a ser oposición leal en 2000 resulta siempre más difícil distinguirlos del renovado discurso interclasista del PRI.

La crisis fue deslizándose entre altas y bajas de la movilización social, entre avances y retrocesos electorales, entre momentos de exitoso reformismo en la administración de la capital y un gran número de experiencias de gobiernos locales en las que el reformismo fue imperceptible, cuando no francamente inexistente; entre la emergencia de nuevos liderazgos y la desaparición de viejos, combativas campañas de denuncia antineoliberal y antiautoritaria y cómplices silencios o alineadas votaciones parlamentarias.

Mientras disminuían los militantes, aumentaban los dirigentes y los funcionarios en los gobiernos y parlamentos locales y por medio de una transfusión permanente desde la constante hemorragia priísta, la cual evidenciaba una sorprendente compatibilidad sanguínea. A partir de 1999, la hipertrofia burocrática llevó a virulentos enfrentamientos internos que, más que dar cuenta de un áspero pero franco debate político, manifestaban una disputa por el poder en la cual las facciones recurrían a prácticas clientelares y fraudulentas que contrastaban en forma estridente con el nombre mismo del partido.

En medio de la tormenta suscitada por la disputa interna, con el ascenso de la figura de López Obrador, la sombra de un nuevo caudillo estableció una breve tregua y, al mismo tiempo, reconfiguró el escenario del conflicto. La coyuntura electoral de 2006 fue un punto de inflexión, un parteaguas de la historia del PRD en sintonía con la historia nacional. En una primera etapa, propició una convergencia, una unificación circunstancial en torno de la candidatura de López Obrador, considerada como una oportunidad histórica de alcanzar el objetivo de la «toma del poder», la revancha del 88. Al mismo tiempo, las denuncias de un nuevo fraude electoral y la posterior movilización abrieron la caja de Pandora de las contradicciones acumuladas. En un primer momento y a primera vista, la respuesta de los perredistas fue unánime en denunciar las irregularidades y sostener la protesta. Sin embargo, las formas de las movilizaciones y el estilo del liderazgo de López Obrador provocaron una reacción y un distanciamiento por parte de algunos sectores del PRD y algunos intelectuales –en general expresiones de la moderación institucionalista de las fracciones progresistas de la clase media mexicana–, pero sobre todo marcaron una fractura con Nueva Izquierda, la corriente más importante e influyente del partido.

Se empezó entonces a vislumbrar el pasaje de la crisis como proceso de desgaste y forma de existencia a la crisis como acontecimiento, como implosión del PRD.

■ La crisis como acontecimiento (2006-2011)

Dos modalidades caracterizan la vida interna del PRD entre 2006 y 2011: la amenaza de ruptura (expulsión-escisión según el punto de vista) y la tregua por necesidad de conveniencia. Ambas pueden ser vistas como hipótesis antitéticas o tendencias complementarias, caras de la misma medalla. El tema de fondo es la exterioridad o interioridad del obradorismo en el PRD. Esta misma cuestión, en otro nivel de análisis, marca la línea divisoria entre la vida y la muerte del PRD como proyecto y movimiento histórico.

La ruptura se configura desde la abierta disputa entre obradoristas y antiobradoristas que estalló en 2007, a partir de los deslindes por parte del grupo mayoritario dentro del PRD –Nueva Izquierda, encabezada por Jesús Ortega–, frente a las orientaciones políticas y la creciente autonomía de López Obrador y sus seguidores.



Desde la legalización del fraude electoral, la postura de López Obrador y sus colaboradores marcó un distanciamiento frente al sistema político y el conjunto de instituciones públicas y promovió la organización de un movimiento político

Desde la legalización del fraude electoral, la postura de López Obrador y sus colaboradores marcó un distanciamiento frente al sistema político y el conjunto de instituciones públicas y promovió la organización de un movimiento político que rebasó ampliamente el perímetro y la influencia del PRD ■

que rebasó ampliamente el perímetro y la influencia del PRD. El ex-candidato presidencial reforzó las relaciones con otros partidos que habían participado en la coalición en 2006 (Partido del Trabajo y Convergencia), denunció las mafias políticas y económicas y, fundamentalmente, asumió la centralidad del recurso a la movilización popular como antídoto a una institucionalización del PRD que tendía a la complicidad con una serie de poderes, públicos y privados, caracterizados como ilegítimos y criminales.

La demostración empírica de la capacidad de convocatoria y de consenso popular que sostenía –aun en la derrota electoral– a López Obrador le confería el carácter de actor político en sí y para sí, al margen del padrinzago del partido. La movilización reiterada e intensa de sus seguidores cristalizó en la formación de un movimiento sociopolítico cuyos grados de organización fueron creciendo a lo largo del ciclo de luchas que se iniciaron con la defensa del voto y derivaron en un torbellino que alcanzó dimensiones históricas, y siguieron con las movilizaciones contra la privatización del petróleo, en defensa de la economía popular, en la campaña para la elección delegacional en Iztapalapa y, finalmente, en el apoyo al Sindicato Mexicano de Electricistas⁶.

La postura de Nueva Izquierda, legítimamente preocupada por la emergencia del obradorismo al margen del PRD, empezó a deslindarse y a explicitar una postura política que le diera visibilidad y le abriera un margen de maniobra. Las antinomias planteadas por Nueva Izquierda pueden visualizarse en la opción por la institucionalidad frente a la protesta, las elecciones frente a las movilizaciones, la moderación frente al radicalismo, las alianzas políticas frente a la polarización social, la socialdemocracia frente al populismo.

6. Ver A.M. López Obrador: *La mafia que se adueñó de México... y el 2012*, Mondadori, México, DF, 2010.

Nueva Izquierda se atrincheró en el PRD y, aprovechando un paciente trabajo de ramificación burocrática comenzado en los años 90, mostró un arraigo interno que compensaba el peso de la influencia social del obradorismo. Las elecciones internas para la renovación de los órganos directivos evidenciaron un empate catastrófico entre el candidato del obradorismo, Alejandro Encinas, y el recurrente candidato de Nueva Izquierda, Jesús Ortega. Frente a los vicios de un proceso impugnado por ambas partes, la resolución legal se prolongó hasta la jurisdicción electoral federal, que terminó por sancionar la victoria de Ortega.

La misma lógica rigió el cambio de dirección nacional de 2011, cuando –para evitar la ruptura– se generó un acuerdo de repartición del poder entre Nueva Izquierda (que mantuvo la presidencia del partido en la persona de Jesús Zambrano) y una parte del obradorismo (que obtuvo la Secretaría General en la figura polémica de Dolores Padierna).

Paradójicamente, estos acontecimientos despejaron el tablero, asentaron los equilibrios internos y permitieron a ambas facciones establecer las condiciones de una tregua en la cual Nueva Izquierda retuvo el control del partido pero dejó sobrevivir al sector obradorista, evitando una separación que perjudicaría a ambas partes. El obradorismo, apostando aún a consolidarse como fuerza política independiente, optó por mantener abierto el campo para alianzas lo más amplias posibles de cara al proceso electoral de 2012, evitando tener una competencia progresista que le restaría votos. Nueva Izquierda, por el momento, considera que la cercanía distante con el obradorismo le permite maniobrar sin arriesgar demasiado y le recorta a su vez un espacio político entre la negociación sistémica y la oposición política, reservándose así evaluar pragmáticamente los escenarios conforme estos se van constituyendo.

Sin embargo, la tregua surgida del empate catastrófico se sostiene por la necesidad de conveniencia y en función de cálculos que no resuelven la contradicción de fondo. La exterioridad creciente del obradorismo respecto al PRD constituye de hecho una escisión y una fractura política que modifica el carácter esencial del partido.

■ La imposible refundación

Más allá de lo nominal, el PRD como partido histórico desapareció en la medida en que dejó de ser lo que fue: la expresión política de un movimiento popular centrado en un proyecto de democratización radical y de alternativa

antineoliberal. El obradorismo retomó estas problemáticas, volvió a darles forma y contenido popular y las ubicó –aunque sea temporalmente– a las orillas del sistema político. Dicho de otra manera, el Movimiento para la Revolución Democrática dejó de ser el sustrato sociopolítico del PRD, que persiste como instituto electoral y, por ende, defiende intereses que solo eventualmente pueden coincidir con los del movimiento.

**Más allá de lo nominal,
el PRD como partido
histórico desapareció en
la medida en que dejó de
ser lo que fue: la expresión
política de un movimiento
popular centrado en un
proyecto de democratización
radical y de alternativa
antineoliberal ■**

En efecto, el PRD se mantiene como un instituto político electoral que puede ser parte de un movimiento de oposición antineoliberal o simplemente operar como ala izquierda de un sistema político fincado en la defensa de la institucionalidad vigente y, tendencialmente, como promotor de la implementación de

políticas de amortiguamiento del neoliberalismo, es decir, un proyecto de renovación conservadora. Ambas perspectivas no resuelven el problema de su crisis histórica, de su desarraigo del terreno profundo de los anhelos y las luchas populares. Ya sea el ala institucional de un movimiento de transformación o el ala reformista de una alianza conservadora, su esencia histórica se perdió en el proceso y su crisis de identidad es irreversible.

En ese sentido, el pretendido Congreso de Refundación no pudo ser tal; fue a lo sumo de «renovación», fundamentalmente verbal, visto que esta palabra aparece compulsivamente en los acuerdos generados. Estos se componen de un conjunto de reformas a los documentos básicos: declaración de principios, estatutos, programa, línea política⁷.

El tono que prevaleció en la *Declaración* del Congreso es sintomático. Se refiere al «reencuentro con la sociedad», admitiendo el desencuentro; evoca la congruencia entre «nuestro decir y nuestro actuar», reconociendo un desfase en rubros como «una ética intachable, combatiendo el patrimonialismo, nepotismo, individualismo y corrupción»; invoca la «tolerancia

7. PRD: «Acuerdos generados en el XII Congreso Refundacional», Oaxtepec, 3 a 6 de diciembre de 2009, mimeo.

en el tratamiento de nuestras diferencias», revelando la existencia de comportamientos opuestos.

En cuanto a la *Línea política*, el PRD explicita que está sumergido en «la crisis más grave que jamás haya vivido», lo cual es una afirmación de suma trascendencia en la medida en que ofrece una definición interna de la crisis, como un acontecimiento recurrente de mayor o menor intensidad. Declara el PRD que «nuestro reto inmediato es reconstruir la unidad, recuperar la credibilidad perdida y la confianza», estableciendo dos criterios fundamentales que marcan el costo de la crisis.

En la *Línea política* aparece otro dato sintomático de la lógica que rige el PRD. Al enumerar las acciones que permitirían recuperar la confianza y la credibilidad en relación con los procesos electorales de 2010, 2011 y 2012, la lista muestra una jerarquía que sitúa en último lugar la relación con la sociedad, mientras que antepone una serie de prioridades típicamente partidocéntricas, expresión de una lógica de aparato: «Nos prepararemos para concretar: a) Pacto de unidad; b) Organización seccional; c) Alianzas amplias y plurales con partidos afines; d) Difusión de las acciones de buen gobierno; e) Excelentes candidatos; f) Posicionamiento mediático del PRD y g) Acercamiento a la sociedad».

Un último aspecto revelador aparece en la afirmación según la cual «[e]l PRD necesita una renovación política y organizativa radical que le permita transmitir con claridad su propuesta política y diferenciarla con claridad de las del PRI y el PAN». Se transluce uno de los elementos más profundos de la crisis: la homologación, la conversión del PRD en una pieza relativamente no diferenciable de un sistema político fundado en la división del mercado político y del trabajo institucional.

Sin menospreciar su relevancia puntual, cabe señalar que las del Congreso de Refundación son reformas de ordinaria administración, típicas de todo congreso partidario, que no justifican el adjetivo «refundador» con el cual se manejó el encuentro ni pueden legitimar la proclamada renovación. En particular, sobre el tema espinoso de las corrientes, las reformas que obligan al registro y establecen un Consejo Consultivo de ellas tienden a una mayor reglamentación que, por una parte, hace más transparente la existencia de cada corriente y acota sus actividades, mientras que, por otra parte, sanciona su papel y su centralidad en la vida del partido.

El conjunto de reformas muestra la imposibilidad de impulsar un proceso de refundación y la dificultad de la renovación en medio de un empate catastrófico

entre dos áreas y almas del partido, en el contexto de una escisión ya consumada e irreversible en las bases populares, sus militantes y simpatizantes. Un proceso de refundación hubiera requerido una iniciativa más radical y posiblemente un contexto favorable, ya fuera de crisis estatal o de movilización popular. Paradójicamente, parecería que la tregua entre las dos áreas del partido paralizó la posibilidad de impulsar un proyecto de renovación/refundación que podía surgir solo del reconocimiento explícito de la ruptura.

En el fondo, la única refundación posible hubiera sido la que aceptara la profunda mutación genética del partido, que asumiera su irreversible institucionalización, su plena conversión en agencia electoral, en institución

**En el fondo, la única
refundación posible
hubiera sido la que aceptara
la profunda mutación
genética del partido, que
asumiera su irreversible
institucionalización, su
plena conversión
en agencia electoral, en
institución pública estatal ■**

pública estatal. El PRD novoizquierdista ya no alberga la tensión entre partido y movimiento, ya no hay oscilación entre la opción electoral y la protesta social. La presencia en el seno de los órganos directivos de las corrientes vinculadas al obradorismo da cuenta de una disputa abierta en relación con la disyuntiva planteada anteriormente y refleja la voluntad táctica del propio obradorismo de mantener un pie en la institucionalidad, de reunir el mayor número de fuerzas en vistas de los procesos electorales, de limitar la competencia en el campo

progresista, de contar con un instrumento electoral y parlamentario. Al mismo tiempo, es evidente la separación política en la medida en que estas mismas corrientes, y aún más López Obrador y sus colaboradores, ya no son parte activa del partido; operan desde una lógica que lo rebasa y solo eventualmente lo incluye en tanto se preste a seguir el camino trazado por el proyecto obradorista.

En este sentido, el futuro del PRD está en manos de Nueva Izquierda, de las decisiones que tome esta corriente: ser el ala institucional del movimiento obradorista, orientado hacia la conquista del poder estatal para impulsar una serie de reformas cuyo alcance queda por definirse, o el ala progresista de un pacto conservador tripartito, basado en la lealtad interna a la clase política, a la repartición del poder institucional y la conservación del orden político y económico existentes.

■ La muerte histórica y política del PRD

La polémica sobre las alianzas con el PAN en una serie de elecciones locales de 2010 tensó el debate y puso a prueba la tregua. López Obrador y los obradoristas criticaron las alianzas señalando una incongruencia con los principios del partido y el espíritu de conciliación interna del Congreso, pero no rompieron del todo con el PRD. Con las alianzas locales con el PAN, se confirmó la vocación del PRD novoizquierdista, su plena asimilación a las reglas del juego de un sistema político autorreferente, un tripartidismo pensado como oligopolio de la política, orientado a la repartición del poder y la defensa de los intereses de la casta dirigente.

Al mismo tiempo, en el estratégico estado de México –el más poblado del país–, triunfó la línea obradorista y se revirtió la decisión de la alianza con el PAN logrando imponer un candidato cercano a López Obrador: Alejandro Encinas. No obstante, el posterior arreglo –pegado con alfileres– de repartición entre corrientes, que se sancionó en 2011 con la elección de la nueva dirigencia nacional, no modificó el escenario de la agonía del PRD⁸.

A contrapelo de la plena conversión del PRD al institucionalismo conservador, otro partido ya nació en los hechos. La reunión de los comités que, el 25 de julio de 2010 y el 5 de junio de 2011, llenaron el Zócalo capitalino, y la elaboración del Proyecto Alternativo de Nación, así como la existencia del periódico *Regeneración* –cuyo título evoca al magonismo⁹–, son señales inequívocas de la existencia de un nuevo partido¹⁰. Gusten o no sus formas y sus contenidos, es el partido del movimiento obradorista que, más temprano que tarde, irá precisando sus contornos y tomará las semblanzas de una organización partidaria formal¹¹.

La fundación del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), con cuatro millones de afiliados y un pegajoso himnoailable, marca el nacimiento de una nueva fuerza política que será el centro de una alianza electoral para

8. Ver M. Modonesi: «Los alfileres del PRD» en *El Universal*, 24/3/2011.

9. Corriente anarquista que tuvo un papel relevante en las luchas precursoras de la Revolución Mexicana y que editaba un periódico llamado, precisamente, *Regeneración*.

10. V. el texto elaborado por un grupo de intelectuales a petición de López Obrador: AAVV: *Nuevo Proyecto Alternativo de Nación*, Grijalbo-Mondadori, México, DF, 2010.

11. Sobre algunos aspectos centrales del movimiento obradorista, v. las opiniones de Armando Bartra, uno de los principales artífices del Proyecto Alternativo de Nación en M. Modonesi: «Horizontes de la movilización popular en América Latina y en México. Entrevista con Armando Bartra» en *OSAL* N° 28, 10/2010, en prensa.

sostener la candidatura de López Obrador en 2012. Los forcejeos preelectorales están en curso, las ambiciones presidenciables del actual jefe de gobierno del DF –Marcelo Ebrard– y su acercamiento a la Nueva Izquierda son movimientos en el tablero del ajedrez político de donde surgirá la coalición que sostendrá la candidatura progresista que enfrentará el proyecto de restauración priísta encabezado por Enrique Peña Nieto.

El surgimiento de un partido-movimiento que relanza el proyecto nacional-popular en México drena la esencia política y el espíritu histórico del PRD. La prolongada crisis del PRD desembocó en su *muerte clínica* como expresión de un proyecto histórico, aun cuando se prolongue la existencia de un instituto partidario con el mismo nombre y otras características. En este sentido, como contraparte, se terminó también la tan problemática y polémica crisis del PRD porque, con esta mutación genética, se rescinde el vínculo con el pasado. Aunque siga existiendo un PRD en México, ya no será el heredero legítimo del «partido del 6 de julio». ☒



Junio de 2009

Lima

Nº 45

ANÁLISIS Y ALTERNATIVAS: Energía y desarrollo rural, **Javier Coello**. Responsabilidad y rendición de cuentas en las evaluaciones de impacto ambiental de un proyecto minero, **Fabiola Li**. El mar no termina en la arena, **Constanza Ocampo-Raeder**. Ley de Recursos Hídricos: Necesaria pero no suficiente, **Laureano del Castillo**. Factores de sostenibilidad en sistemas de información para pobladores rurales en el Perú, **Juan Fernando Bossio**. Nuevos estándares internacionales, flexibilidad laboral y elementos de trabajo esclavo en la horticultura de exportación en México, **Boris Marañón Pimentel**. La eficiencia de la agricultura familiar en Argentina: Retomando la esencia de la relación inversa, **Raúl Paz y Ramiro Rodríguez**. ADEMÁS: Publicaciones recibidas y sitios web sobre Amazonía.

Debate Agrario es una publicación del CEPES: Av. Salaverry 818, Lima 11, Perú. Tel.: (51-1) 433-6610. Fax: (51-1) 433-1744. Correo electrónico: <cepes@cepes.org.pe>.

Ecuador: avances y desafíos de Alianza PAÍS

La llegada al poder de Rafael Correa en 2006 –luego de varios años de movilizaciones sociales y derrocamientos presidenciales– abrió una nueva etapa en la política ecuatoriana. En ese marco, uno de los desafíos del Movimiento Alianza PAÍS –discutido en la convención de 2010– es transformarse en una fuerza orgánica y no reducirse a una mera extensión del gobierno o simple fuerza electoral. Para ello deberá enfrentar las tensiones de ser un partido (oficialmente un movimiento) con un fuerte discurso antipartidario, y una organización sin una historia previa al ejercicio del poder estatal.

**VIRGILIO HERNÁNDEZ E. /
FERNANDO BUENDÍA G.**

■ La crisis del sistema de representación y el surgimiento del Movimiento PAÍS

Aunque el surgimiento de una fuerza política se condensa en un tiempo y espacio determinados, este constituye el resultado de un largo proceso social precedente. No se podría entender la emergencia del Movimiento Alianza PAÍS (Patria Altiva i Soberana) en febrero de 2006 sin contextualizarlo en la crisis política provocada por la implantación del neoliberalismo y el «discurso de la gobernabilidad» en las dos décadas precedentes, que hicieron estallar el

Virgilio Hernández E.: profesor de Ciencia Política en la Universidad Católica del Ecuador. Es asambleísta por Pichincha de Movimiento Alianza PAÍS.

Fernando Buendía G.: profesor de Ciencias Sociales en la Escuela Politécnica Nacional.

Palabras claves: crisis de representación, revolución ciudadana, Rafael Correa, Movimiento Alianza PAÍS, Ecuador.

Estado social de derecho y la estrategia cepalina diseñados en la Constitución del retorno democrático en 1978. De igual forma, solo sería posible entender el proceso y los contenidos de la Asamblea Constituyente y la Constitución de 1998 en el marco de la hegemonía del proyecto de neoliberalización de la economía y la sociedad, así como también de las múltiples resistencias que se construyeron en este periodo.

Por ello, los resultados de la Asamblea Constituyente se caracterizaron por un enfoque ambiguo y contradictorio: por una parte, la constitucionalización de la economía de mercado y la consolidación de un sistema hiperpresidencialista; y, por otra parte, la consagración de importantes derechos individuales y colectivos, paradójicamente cuando se modificaba la concepción del Estado y del rol que le correspondía asumir. En efecto, en la desesperación por superar con «ingeniería constitucional» el déficit democrático, la Constitución de 1998 modificó el sistema electoral, contribuyó a la desarticulación del sistema de partidos y otorgó al Poder Ejecutivo una serie de atribuciones formales que, sin embargo, le fueron poco útiles para resolver la conflictividad del sistema político. Si por ejemplo se analizan algunas variables relativas a las facultades del Poder Legislativo respecto de las atribuciones que poseían los presidentes latinoamericanos en ese periodo, podremos observar que el Ejecutivo ecuatoriano diseñado en 1998 era uno de los más fuertes de la región¹.

Estas reformas contribuyeron a minimizar los roles que las instancias de representación como el Parlamento cumplían en la democracia ecuatoriana. A pesar de ello y al mismo tiempo, el Congreso adquirió un rol preponderante en la elección de autoridades de control. Esto terminó favoreciendo la configuración de una lógica oligárquica del Legislativo frente a las tareas de gobierno, puesto que poseía una inmensa capacidad de chantaje, que sumada a la fragilidad institucional del sistema político, convirtió en botín los nombramientos de las autoridades de control e institucionalizó el «reparto» de la Corte Suprema de Justicia. No escaparon a esta lógica los «partidos institucionales», incluidas algunas fuerzas de izquierda.

El cuoteo y reparto de los diversos ámbitos de la gestión de gobierno demostraron también la irrelevancia del debate constitucional. Así, a finales de 2005 y en el marco de una crisis generalizada del país, cuando resultó evidente el fracaso

1. J. Mark Payne, Daniel Zovatto G. y Mercedes Mateo Díaz: *La política importa. Democracia y desarrollo en América Latina*, BID, Washington, DC, 2003.

del diseño constitucional de Sangolquí y ante el temor de un rebasamiento político de los sectores antineoliberales, la elite gobernante mantuvo bloqueada la posibilidad de una reforma política de fondo y prefirió refugiarse en cambios cosméticos para mantener reglas antidemocráticas en el reparto de la representación. Enredado en discursos grandilocuentes y «refundacionales», el presidente Alfredo Palacio –quien reemplazó a Lucio Gutiérrez después de la rebelión popular de abril de 2005– mantuvo a la vez una actitud subordinada a las fuerzas tradicionales y desvaneció así su único capital: la capacidad para responder a la expectativa ciudadana de cambios en el sistema político.

Esta inercia que bloqueaba la necesidad urgente de una reforma profunda en el sistema económico, social y político del país recién fue superada en las elecciones de 2006 con el triunfo de Rafael Correa, un joven economista guayaquileño que cobró notoriedad pública durante la «rebelión de los forajidos» contra Gutiérrez² y su breve paso por el Ministerio de Economía y Finanzas del presidente Palacio. Desde allí impulsó una política soberana en el manejo de los recursos petroleros y en la negociación con los organismos multilaterales de crédito.

La inercia fue superada en las elecciones de 2006 con el triunfo de Rafael Correa, un joven economista guayaquileño que cobró notoriedad pública durante la «rebelión de los forajidos» y su breve paso por el Ministerio de Economía y Finanzas del presidente Palacio ■

■ El proceso histórico de construcción de Alianza PAÍS

Para tener una comprensión más ajustada del proceso de construcción de Alianza PAÍS, es útil el esquema de Angelo Panebianco³. En su estudio sobre los sistemas organizativos de los partidos, el politólogo italiano plantea el desarrollo de tres fases en su proceso de constitución. La primera etapa es de construcción de un sistema de solidaridad caracterizado por el afianzamiento ideológico y el predominio de los incentivos colectivos, cuyo objetivo es la afirmación y ampliación de la militancia. A este primer momento seguiría una fase de institucionalización, en la que se delinea la estructura

2. Ver Franklin Ramírez G.: *La insurrección de abril no fue solo una fiesta*, Taller El Colectivo, Quito, 2005.

3. *Los modelos de partido: organización y poder en los partidos políticos*, Alianza, Madrid, 2009.

organizativa y se establece un sistema de valores. La tercera es la llamada «sistema de intereses» y en ella primarían la supervivencia y la consolidación, la distribución de intereses colectivos y selectivos (materiales y simbólicos) y una menor libertad de maniobra para los líderes. Panebianco reconoce que estas fases no son consecutivas ni lineales, sino que se interrelacionan; no obstante, la ideología será un factor latente que servirá de base para procurar respuestas a las situaciones coyunturales. En la medida en que se institucionaliza, la organización política deberá combinar los elementos que permiten mantener la coherencia (base ideológica, programa, principios, símbolos, celebraciones, etc.) con los que garantizan la cohesión (estructura organizativa, roles, responsabilidades y liderazgos).

En el caso de Alianza PAÍS (AP) estas fases se entrecruzan por su situación particular de haber alcanzado el gobierno inmediatamente después de su creación (más precisamente, comenzó a existir efectivamente luego del triunfo electoral), lo cual ha sido determinante en su proceso histórico, notablemente desacompañado. Entre otros elementos, resalta la acelerada dinámica que imprimió a su desarrollo interno y al proceso de cambio social del país, cobijada bajo la consigna de una revolución ciudadana con cambios «radicales, rápidos y profundos»⁴, para transformar el Estado.

Construcción como fuerza electoral. Luego de su salida del Ministerio de Economía, Rafael Correa lideró la constitución del Movimiento Alianza PAÍS para participar en las elecciones generales de 2006. Este se inicia con un reducido grupo de académicos e intelectuales que se plantearon la necesidad de construir un movimiento político con signo propio; al mismo tiempo se intensificaron los esfuerzos para comprometer una amplia alianza de izquierda que permitiera la unidad de *la tendencia* para enfrentar las candidaturas de derecha que en ese entonces aparecían con amplias opciones de triunfo electoral. En lo organizativo, se constituyó un núcleo básico nacional que desarrolló un «método de penetración territorial» y se conformaron las primeras directivas provinciales que incidieron en la elección de autoridades en los niveles cantonal y provincial.

Si bien los planteamientos programáticos insistían en el discurso de las «cinco revoluciones» (que abordamos más adelante) y adscribían a las tesis de un socialismo renovado, el elemento de mayor identidad fue la oposición a la «partidocracia», que había privatizado la política en beneficio de

4. Frase reiterada en los discursos del presidente Correa.

los grupos de poder oligárquico. A pesar de que existía formalmente una Dirección Nacional, la instancia que tomaba decisiones era el Buró Político, un espacio que, al mismo tiempo, enfrentaba las principales decisiones de la acción de gobierno y los avatares de un movimiento sin mayores canales para el flujo de la política entre la instancia nacional y los débiles círculos locales.

Finalmente, el candidato de AP se impuso en la segunda vuelta electoral, el 26 de noviembre de 2006, con 56,67% de los votos válidos, luego de haber sido derrotado en la primera ronda por el empresario bananero Álvaro Noboa. Al posesionarse ante el Congreso Nacional, el 15 de enero de 2007, Correa prometió convocar una Asamblea Constituyente, a pesar de que contaba con una función legislativa contraria y tenía solo el apoyo de las bancadas de Nuevo País y el Partido Socialista. De hecho, una muestra de la sensibilidad «anti-partidocrática» de AP fue que no presentó candidatos al Parlamento como una forma de no convalidar el viejo sistema político. Y así, como ha señalado el sociólogo Franklin Ramírez, el movimiento liderado por Correa logró colocar «el antagonismo entre partidos y ciudadanos por delante de toda otra contradicción política»⁵.

En medio de un clima conflictivo con los parlamentarios, que incluyó el uso de la fuerza pública y la destitución de 57 congresistas acusados de obstruir ilegalmente la convocatoria a la consulta popular, la Asamblea Constituyente se abriría paso como opción política impulsada con 81,73% de los votos válidos el 15 de abril de 2007. Posteriormente, y a través de un acuerdo que aglutinó un conjunto de movimientos que apoyaron la convocatoria a la Constituyente, nació Acuerdo PAÍS con la participación de otras expresiones políticas como el Movimiento Nuevo País y Alternativa Democrática.

En las elecciones celebradas el 30 de septiembre de 2007, Acuerdo PAÍS logró una importante mayoría y captó 80 de las 130 curules para la Asamblea

**Como ha señalado
Franklin Ramírez, el
movimiento liderado por
Correa logró colocar «el
antagonismo entre partidos
y ciudadanos por
delante de toda otra
contradicción política» ■**

5. «Participación y desconfianza política en la transformación constitucional del Estado ecuatoriano», ponencia presentada en el seminario «Reforma del Estado en los países andino-amazónicos», IFEA-PIEB, La Paz, junio de 2009.

Constituyente⁶. Era la cuarta victoria electoral en menos de 18 meses, en un país caracterizado por la permanente inestabilidad, la desconfianza política y la alta volatilidad de la representación. La campaña fue utilizada adicionalmente para iniciar un proceso de registro de simpatizantes y afiliación de militantes; además se levantaron datos de cientos de miles de personas que querían vincularse a las filas de la revolución ciudadana y participar activamente en el movimiento. Sin embargo, esa base de datos jamás logró estructurarse y menos aún servir para interactuar con los ciudadanos.

La Asamblea Constituyente culminó su labor en la fecha límite del plazo de 240 días que le otorgó la consulta popular, aunque 30 días antes de su finalización se produjo la renuncia a la presidencia de Alberto Acosta, uno de los principales ideólogos y fundadores de AP. Acosta estuvo en desacuerdo con la decisión del Buró Político de terminar el proceso constituyente en los tiempos previstos, en función de un cálculo político resultante del desgaste que, según las encuestas, comenzaba a sufrir la Asamblea, y proponía prolongar los debates. Más tarde se separaría del movimiento debido a diferencias ideológicas, vinculadas en gran medida a la defensa de una perspectiva ambientalista respecto al modelo de desarrollo y a la aplicación más decidida de la nueva Carta Magna, y conformó el Frente Montecristi Vive.

El 16 de octubre de 2008 se proclamaron los resultados definitivos del referéndum aprobatorio de la Nueva Constitución, en el que el Sí obtuvo 63,93% y ganó en 23 de las 24 provincias. El referéndum implicó un extenso debate en todo el país que abonó el crecimiento de la conciencia ciudadana sobre la economía, el modelo de desarrollo, la democracia, la plurinacionalidad, etc. Fue la primera vez, desde 1869, que una Constitución aprobada por una Asamblea Constituyente era discutida y votada por la población.

En las elecciones presidenciales convocadas para el 26 de abril de 2009 el Movimiento Alianza PAÍS (con el nombre partidario original) se impuso en la primera vuelta, y Rafael Correa resultó reelecto con 51,9% de los sufragios; además AP alcanzó 57 legisladores, que representan 47% del total de la Asamblea Legislativa, y consiguió 80 de los 221 alcaldes.

6. Es fundamental considerar que en estas elecciones se aplicaron las normas más democráticas de la historia electoral ecuatoriana. De hecho, si se hubiesen aplicado las mismas reglas de asignación de escaños que se utilizaron para la Constituyente de 1998, controlada por social y demócrata cristianos, AP habría obtenido 127 asambleístas; con las reglas concertadas en 2003 por socialdemócratas y socialcristianos, a AP le habrían correspondido 113 asambleístas. De haberse utilizado el método D'Hondt, hubiese obtenido 96 de los 130 asambleístas.

Finalmente, el referéndum y la consulta popular realizados en mayo de este año fueron concebidos como una respuesta frente a la arremetida de la derecha, que incluyó el frustrado golpe policial del 30 de septiembre de 2010⁷, y frente a la propaganda de los medios vinculados a los grupos de poder sobre el tema de la inseguridad. Entre las preguntas más controversiales se incluyó una reforma judicial que, en lo sustancial, cambió la modalidad de designación de las autoridades del Consejo de la Judicatura, lo cual provocó fuertes discusiones dentro de la tendencia y altercados con la oposición⁸.

No obstante, pese al triunfo oficial en la consulta –aunque con menos votación de la esperada– quedaron en claro los síntomas de agotamiento del modelo de acción gubernamental y de construcción política de AP. Su puesta en marcha sometió a prueba los débiles mecanismos internos de deliberación política y provocó una disensión y distanciamiento respecto de movimientos y personajes que confluyeron en el origen de la alianza, entre ellos Ruptura 25, además de ampliar la brecha con quienes ya habían optado antes por separarse del gobierno.

En el centro de algunas disputas está la fuerte sensibilidad «anticorporativa» del gobierno ecuatoriano, que busca una proyección hacia los ciudadanos no organizados y desactivar privilegios sectoriales, pero que al mismo tiempo generó una serie de conflictos y tensiones posteriores con la «sociedad organizada», desde los indígenas hasta la Policía. En ese contexto, Ramírez observa, como resultado de estas visiones, el riesgo de caer en una «redistribución sin reconocimiento» que ha ido provocando desde 2009 protestas de varios sectores sociales que, en teoría, deberían ser parte de la base de

7. Ver Pablo Ospina Peralta: «Ecuador: ¿intento de golpe o motín policial?» en *Nueva Sociedad* N° 231, 1-2/2011, disponible en <www.nuso.org/upload/articulos/3750_1.pdf>.

8. En la pregunta cinco del referéndum se planteó cambiar el texto constitucional vigente en relación con la elección de los miembros del Consejo de la Judicatura. En la actual Carta Magna esa elección se realiza mediante un concurso de oposición y méritos impulsado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con veeduría de las organizaciones sociales; y lo que se aprobó en el referéndum es que se cambie por un texto alternativo en el que los miembros del Consejo de la Judicatura son nombrados por el Consejo de Participación Ciudadana a partir de ternas elaboradas por los poderes constituidos, en un marco de veeduría e impugnación ciudadana.

**No obstante, pese al
triunfo oficial en la consulta
–aunque con menos
votación de la esperada–
quedaron en claro los
síntomas de agotamiento
del modelo de acción
gubernamental y de
construcción política de AP ■**

la revolución ciudadana. Y tampoco la relación con el movimiento indígena está libre de sobresaltos y tensiones. Ello es así porque, aunque reconocen los avances posneoliberales, varios grupos «resienten, sin embargo, un enorme malestar por la falta de espacios de debate político con la fuerza gobernante», y por momentos parece verse con desconfianza a los actores organizados como «una constelación de demandas particularistas poco dispuesta a inmiscuirse en la construcción del bien común»⁹.

Así, una vez más, las estructuras de AP se movilizaron para obtener el octavo triunfo electoral. Si bien se mantuvo la votación obtenida en abril de 2009, se advierte una modificación de la geografía política post-referéndum: el triunfo nacional se consolida con la votación de la provincia del Guayas y sobre todo de Guayaquil, que se había caracterizado por ser la base de la oposición y el enfrentamiento político al régimen, pero que es, a la vez, la ciudad con mayores índices de inseguridad.

La construcción de AP como propuesta programática y gubernamental. Los ejes programáticos de la propuesta de AP que fueron divulgados durante la campaña electoral de las elecciones presidenciales de 2007 y que luego se convirtieron en la base del programa de gobierno de Rafael Correa fueron: a) la «revolución económica», que restablece el rol redistributivo del Estado; b) la «revolución social», que radica en la conquista de la igualdad y la equidad entre los diversos sectores sociales y las diversas entidades étnico-nacionales; c) la «revolución política», que propugna la transformación y recuperación de la privatizada estructura estatal y el fortalecimiento de la democracia participativa, junto con el mejoramiento del sistema de representación política; d) la «revolución de la integración latinoamericana», mediante la creación de nuevos organismos integracionistas que superen los enfoques mercantilistas; y e) la «revolución ética», que implica el combate a la corrupción mediante el control social, la radical transformación de la contratación pública y la renovación de las autoridades judiciales y de control. A estos ejes se incorporaron dos adicionales: las «revoluciones» ambiental y de la justicia.

La Constitución de Montecristi¹⁰ es sin duda la mayor expresión lograda en la historia nacional de una propuesta de pacto de convivencia social sustentado en

9. F. Ramírez G.: «Post-neoliberalismo indócil. Agenda pública y relaciones socio-estatales en el Ecuador de la Revolución Ciudadana» en *Temas y Debates* año 14 N^o 20, 10/2010.

10. Esta localidad fue elegida sede de la Asamblea Constituyente por ser el lugar de nacimiento de Eloy Alfaro, líder de la revolución liberal y anticonservadora y presidente en los periodos 1897-1901 y 1906-1911.

el acuerdo unitario de las fuerzas sociales populares y de la izquierda ecuatoriana. Su importancia se relaciona no solo con su contenido, sino con el enorme nivel de participación de los actores sociales y territoriales que intervinieron activamente con sus propuestas y presencia en la redacción.

La corta temporalidad del proceso constituyente (ocho meses) impidió no obstante la maduración del debate político e ideológico y generó desacuerdos que afectaron la continuidad futura de la unidad alcanzada entre las tendencias plurales de la izquierda y los movimientos sociales que respaldaron el proceso constituyente¹¹. Pero pese a esta corta luna de miel de la unidad de la izquierda, la nueva Constitución es para AP el referente ideológico y programático fundamental del cual surgieron sus tesis orgánicas y doctrinarias de mediano alcance, aprobadas dos años más tarde en la primera Convención Nacional. Como señala Ramírez, «aunque la gran prensa ha insistido en que se ha redactado una Constitución a la medida de Correa, lo cierto es que en el megabloque [oficialista] las controversias y los agrios debates entre el presidente y algunos asambleístas no fueron pocos»¹². Ejemplos de estas tensiones fueron la declaratoria de Ecuador como Estado plurinacional –demanda asumida por el movimiento indígena desde fines de los años 80– o cuestiones como las reivindicaciones corporativas de los empleados públicos. Al mismo tiempo, se observaron diferencias entre posiciones más centristas y más radicales dentro del propio bloque gobernante.

La Constitución de Montecristi, que tiene por finalidad el «buen vivir» o *sumak kawsay*, propone una utopía jurídica «poscapitalista» inspirada en la cosmovisión campesino-indígena, que establece la primacía del enfoque de justicia y armonía en todos los aspectos de la convivencia humana, social y con la naturaleza¹³. El

La Constitución de Montecristi, que tiene por finalidad el «buen vivir» o *sumak kawsay*, propone una utopía jurídica «poscapitalista» inspirada en la cosmovisión campesino-indígena ■

11. Desde 2006, grupos como el Movimiento Pachakutik y el Movimiento Popular Democrático (MPD, de origen maoísta) se mantuvieron cercanos, independientes o en abierta oposición al gobierno en diferentes momentos. El MPD apoyó abiertamente el golpe policial de 2010.

12. «Las antinomias de la Revolución Ciudadana» en *Le Monde diplomatique* (edición Cono Sur), 9/2008, disponible en *Instituto de Investigación y Debate sobre la Gobernanza (IRG)*, 2008, <www.institut-gouvernance.org/es/corpus_auteur/fiche-auteur-41.html>.

13. No obstante, el buen vivir reconoce también sus fuentes en propuestas del economista Amartya Sen o la filosofía aristotélica, y posiciones provenientes del feminismo, el socialismo, el republicanismo y el marxismo.

buen vivir rompe radicalmente con el enfoque jurídico-institucional anterior y trastoca el denominado «pacto social constitucional» de 1998, que favoreció a los grupos económicamente más fuertes, facilitando su dominio de los mercados y la apropiación de los recursos naturales¹⁴; y a las elites políticas oligárquicas, que impulsaron el modelo de desestatización, desregulación y privatización de las relaciones económicas y sociales.

Cabe resaltar que incluso dentro del movimiento de gobierno se ha instalado un debate respecto a la contradicción presente entre buen vivir y desarrollismo, pues la necesidad de crecimiento que tiene la economía ecuatoriana pone en cuestión un conjunto de decisiones que bordean límites respecto a la sostenibilidad ambiental y los derechos de la naturaleza; la democratización de los medios productivos como la tierra frente a la productividad agrícola; el modelo endógeno frente a la promoción de inversiones y exportaciones; un sistema económico solidario frente a los derechos de la empresa y la vigencia del mercado.

No obstante, el aterrizaje de las tesis programáticas y constitucionales en la gestión gubernamental, en un escenario nacional caracterizado por atrasos y desigualdades estructurales, torna compleja la aplicación inmediata del conjunto de propuestas. Con un sistema económico capitalista atrofiado, es decir, atrasado, débil y dependiente; con una estructura jurídico-política atrapada en manos de fuerzas de corte patrimonialista, patriarcal, cacical y clientelista; con una sociedad fuertemente atomizada en gremialismos, regionalismos y sectarismos; con un conjunto de capacidades sociales colectivas gravemente erosionadas y debilitadas por la pobreza, la desestructuración del tejido social, la emigración y el desempleo o subempleo; con una institucionalidad pública y privada deficiente y atrapada por la corrupción; en fin, con esta herencia del modelo de dominación neoliberal y oligárquico que ha experimentado el país a lo largo de los años, no se podrían resolver y conseguir en un corto plazo las condiciones que hagan vigente el buen vivir.

En correspondencia con estas deficitarias condiciones estructurales de partida, el único camino posible de tránsito de la revolución ciudadana desde el Estado oligárquico hacia el buen vivir es una aplicación continua y progresiva de las políticas transformadoras en función de la correlación política y de fuerzas. Dentro de este marco programático y estratégico, AP ha aplicado

14. Se refiere a los mercados financieros, comerciales, laborales, así como a los recursos como el petróleo, turismo, minería, etc.

su ideario reflejado en la Constitución, en el marco de un cuerpo político y doctrinario acotado que pueda ser eficiente para responder a las demandas gubernamentales del presente momento de la transición. Estos planteamientos, con los que se ha orientado en una buena medida la gestión de gobierno, se discutieron y aprobaron formalmente durante la Primera Convención Nacional en noviembre de 2010¹⁵.

La Convención de AP aprobó además el régimen orgánico, que en consonancia con sus propuestas programáticas define a la organización como un «movimiento político» de izquierda que propugna el socialismo del buen vivir, asume las vertientes de pensamiento libertario, crítico y revolucionario, aplicándolas creativamente a la realidad nacional y reconoce la pluralidad dentro de la tendencia de izquierda –aunque en el proceso previo a la Convención se estableció que los diferentes movimientos que integraban AP debían disolverse para permitir la conformación de un sola estructura nacional–. El planteamiento de constituirse en partido político, presentado por la delegación de Pichincha en la Convención Nacional, no logró el apoyo mayoritario; los principales argumentos en contra fueron la historia de desprestigio de los partidos en el ámbito nacional y la idea de que el movimiento, sin dejar de tener principios y organización, se presentaba como más dinámico y flexible para responder a las complejas realidades nacionales.

El planteamiento de constituirse en partido político no logró el apoyo mayoritario; los principales argumentos en contra fueron la historia de desprestigio de los partidos en el ámbito nacional y la idea de que el Movimiento, sin dejar de tener principios y organización, se presentaba como más dinámico y flexible ■

■ Evaluación del terreno caminado y desafíos futuros

Los consecutivos procesos electorales a través de los cuales se ha encaminado el proceso de cambio que plantea AP impidieron que la organización política pudiera avanzar en su fase de institucionalización, por lo que se estancó y especializó como instrumento electoral. Esto, a su vez, ha entrañado un conjunto de

15. Allí se eligió como secretario ejecutivo a Galo Mora, una figura que no forma parte del gobierno, con la finalidad de potenciar la construcción orgánica con cierta autonomía.

problemas tales como la persistencia de diferentes comprensiones políticas e ideológicas dentro del proyecto (desde el centro hasta la izquierda radical), constantes y agudas disputas por el liderazgo en los niveles provinciales y cantonales, falta de funcionamiento de los mecanismos nacionales de dirección y, finalmente, ausencia de flujo de la política interna.

Para Ramírez, puede percibirse un exceso de mercadotecnia que tiende a debilitar la organización política y que plantea un debate sobre la relación gobierno-movimiento:

el implacable realismo de poder del gobierno se complementa así con un sutil realismo sociológico: no tiene sentido procurar la movilización de una sociedad harta y distante de la política. Se trata, más bien, de interpelarla como opinión pública y de hacerle ver –televisión mediante– los logros del gobierno. Nada más efectivo para llegar a una masa de ciudadanos aletargados y desorganizados que el despliegue mediático (...). La suplantación de la construcción organizativa y la deliberación democrática por el marketing y la procura de amplias audiencias no bastan, sin embargo, para generar vínculos políticos ni espacios reales de participación e interlocución con actores realmente existentes.¹⁶

Luego de siete triunfos electorales, la dirección nacional considera que «Alianza PAÍS se trazó metas que se han ido cumpliendo, objetivos políticos para la transformación del Ecuador» pero reconoce «retrasos en lo orgánico y en el carácter de la organización» señalando que «esta consecutiva participación ha determinado el carácter y condición del Movimiento PAÍS como INSTRUMENTO ELECTORAL (...). Ahora debemos asumir esa realidad y plantearnos también que en los siguientes años debemos consolidar Alianza PAÍS como la organización política garante de la transformación y los retos que tenemos en dicho proceso»¹⁷.

Sin embargo, y como beneficio de inventario, debe considerarse que en apenas cuatro años se ha fortalecido notablemente el andamiaje institucional democrático, empezando por la reinstauración del sistema nacional de planificación vinculante para todo el sector estatal e indicativo para la sociedad; la recuperación de los recursos patrimoniales nacionales –principalmente los petroleros–; el impulso a la redistribución social y económica mediante el fortalecimiento de los ingresos estatales, en especial tributarios; la multiplicación

16. F. Ramírez G.: «Post-neoliberalismo indócil. Agenda pública y relaciones socio-estatales en el Ecuador de la Revolución Ciudadana», cit.

17. «Presente y futuro del Movimiento PAÍS», del 26 de mayo de 2009.

de la inversión y la infraestructura social, y el atenuamiento de la crisis de gobernabilidad que por más de una década afectó a Ecuador.

Huelga decir que los partidos se construyen para ganar las elecciones y gobernar; sin embargo, tener que gobernar, y hacerlo además en la ruptura, desplaza la preocupación por la institucionalización de la organización política y genera alteraciones en las fases propuestas por Panebianco. En este caso los incentivos colectivos que identifican a la organización se resuelven en el mismo movimiento y tiempo que la preocupación por ocupar los puestos públicos con personas competentes «de manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes»¹⁸ que demanda la reorganización del Estado, generando una tensión entre las corrientes ideopolíticas que persisten en el interior. Igualmente, en el aspecto programático, tanto el programa de gobierno como los diagnósticos y demás trazados ideológicos se encuentran constantemente afectados por la urgencia de respuestas de política pública que atiendan las necesidades concretas y cotidianas que surgen como demandas e imperativos de la sociedad, provocando discordia en el movimiento respecto de la pertinencia de una u otra acción.

El factor definitorio que interrelaciona y armoniza la eficacia política electoral de la gestión gubernamental con el proceso de construcción de AP está centrado en el fuerte liderazgo del presidente Correa, quien articula los elementos principales del proceso decisorio y político del proceso de la revolución ciudadana, de tal forma que resulta indiferenciada la estructura de la organización política respecto a la estructura gubernamental. Esto explica, entre otras razones, el motivo por el cual la primera convención de AP se realizó a finales del año 2010 –cuatro años después del primer triunfo electoral–, y establece la banda programática sobre la cual se mueve la agenda gubernamental, en la que la incidencia del presidente es determinante.

El proceso de construcción de AP está centrado en el fuerte liderazgo del presidente Correa, de tal forma que resulta indiferenciada la estructura de la organización política respecto a la estructura gubernamental ■

18. Frase del presidente Correa respecto de las características de sus colaboradores y equipos de trabajo.

En lo interno, AP enfrenta desafíos profundos; el primero de ellos es consolidarse como una organización abierta, amplia y democrática, sustentada en una base partidaria coherente que interviene en el proceso político más allá de la eficacia demostrada en las elecciones. De la misma forma, tendría que recomponer su política de alianzas con los distintos sectores de la sociedad, en particular con los movimientos indígena, campesino, obrero y con grupos sociales que demandan reconocimiento, mayor participación e interacción, rompiendo la lógica de «aliado o adversario». Sobre todo, AP debe demostrarse a sí misma que tiene la capacidad de consolidarse como el movimiento político de la transformación, por ende con profundos asentamientos territoriales y mecanismos que permitan la organización y participación de los millones de ciudadanos que hasta ahora han votado por el oficialismo, sin desconocer además el reto de convocar a la juventud para garantizar la renovación permanente.

En la lucha contra los sectores tradicionales que se oponen al cambio y en la acción gubernamental por la profundización programática en el marco de la Constitución y el Plan de Desarrollo, se juegan la direccionalidad y la continuidad del proceso, que puede devenir en un tipo de reforma democrático-burguesa posneoliberal y modernizadora del Estado, o bien puede llegar a convertirse en una vía alternativa para la construcción de un modelo societal más avanzado en la perspectiva del socialismo del buen vivir. Aún está pendiente profundizar en el debate respecto a la consigna de radicalizar la revolución ciudadana propuesta por el presidente de la República cuando asumió su segundo mandato, el primero de acuerdo con la nueva Carta Magna. ▣



REVISTA DE CULTURA Y CIENCIAS SOCIALES

2011

Gijón

Nº 67

TRABAJO Y MERCADO

Polarización, crisis y cambios en el mundo laboral

SUSCRIPCIONES

Suscripción personal: 30 euros

Suscripción bibliotecas e instituciones: 45 euros

Suscripción internacional: Europa - 60 euros (incluye gastos de envío)

América y otros países - 80 euros (incluye gastos de envío)

Ábaco es una publicación trimestral de CICEES, C/ La Muralla, 3 entlo. 33202 Gijón, España. Apartado de correos 202. Tel./Fax: (34 985) 31.9385. Correo electrónico: <revabaco@arrakis.es>, <revabaco@telecable.es>. Página web: <www.revista-abaco.com>.

El FMLN salvadoreño: de la guerrilla al gobierno

La llegada al gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en 2009 ha sido un hecho histórico para El Salvador, luego de una sangrienta guerra civil y de una larga hegemonía de la derecha. No obstante, este camino de las armas a la batalla democrática institucional conllevó profundos cambios en el interior de una fuerza política cuyo programa alentaba la construcción del socialismo a partir de un triunfo político-militar. Hoy esos objetivos parecen lejanos, y el Frente ha pasado a sostener posiciones progresistas pragmáticas, ha devenido un partido electoralmente competitivo y se ha volcado a la gestión estatal.

LUIS ARMANDO GONZÁLEZ

Desde las elecciones que en 2009 dieron el triunfo presidencial a Mauricio Funes, no es infrecuente encontrar en los medios de derecha salvadoreños columnas de opinión y de análisis en las que se dibuja un perfil del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) como un partido cuyos líderes y miembros de base están no solo atrapados en una ideología radical de izquierda, sino empeñados en crear las condiciones –mediante sutiles mecanismos de conspiración– para hacerse con el control total del Estado. La finalidad última de todo ello no sería otra –según se colige de muchas de esas

Luis Armando González: licenciado en Filosofía por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) de México. Es director general de la Escuela Superior de Maestros (Ministerio de Educación, El Salvador).

Palabras claves: guerrilla, Mauricio Funes, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), El Salvador.

opiniones— que hacer realidad el hasta ahora pospuesto proyecto socialista, fraguado inicialmente en los años 70 por las organizaciones político-militares de izquierda y luego convertido en el propósito principal del ejército guerrillero FMLN a inicios de la década de 1980.

Desde la perspectiva reseñada, el FMLN actual —en tanto partido político— no sería esencialmente distinto del FMLN de los años 80 —en tanto ejército guerrillero—, y su realidad partidaria sería un mero artificio coyuntural, útil mientras se preparan las condiciones para asaltar finalmente el aparato estatal, lo cual ya se estaría plasmando de manera solapada. En este sentido, siempre según estas lecturas desde la derecha, el FMLN, lejos de tener algún compromiso con la democracia, sería un partido absolutamente antidemocrático; es decir, un partido dispuesto a sabotear la democratización del país para imponer, por la fuerza, el proyecto socialista siempre soñado.

Sin embargo, un examen medianamente objetivo de la trayectoria histórica del FMLN revela algo distinto de lo anteriormente planteado. Este ensayo tiene como objetivo ofrecer una visión de conjunto de esa trayectoria. De manera crítica —y muy sintéticamente— se intentará atar diferentes cabos sueltos que hay en la bibliografía sobre el FMLN. El tema específico de análisis es la trayectoria de esta organización, por lo cual se dejan de lado otros aspectos de la historia política salvadoreña que sin duda son claves para entenderla más cabalmente, pero que alargarían demasiado este ensayo¹.

■ Los orígenes: las organizaciones político-militares

Lo primero que cabe destacar en esa trayectoria es la enorme capacidad de cambio mostrada por el FMLN en diferentes momentos de su ya dilatada presencia como movimiento político. La primera gran transformación fue la que dio paso, precisamente, a su fundación como ejército guerrillero en octubre de 1980. Eran otros tiempos en El Salvador y en América Latina. En la década anterior habían florecido importantes movimientos de masas —Bloque Popular Revolucionario (BPR), Ligas Populares 28 de Febrero (LP-28), Frente de Acción Popular Unificada (FAPU), Movimiento de Liberación Popular (MLP)— que demandaban con energía creciente un orden socioeconómico más justo e incluyente². El papel

1. Ver L.A. González: «Estado, sociedad y economía en El Salvador (1880-1999)» en Rodolfo Cardenal y L.A. González (comps.): *El Salvador: la transición y sus problemas*, UCA Editores, San Salvador, 2002, pp. 13-28.

2. Segundo Montes: *El Salvador: las fuerzas sociales en la presente coyuntura (enero 1980-diciembre 1983)*, UCA, San Salvador, 1984.



© Nueva Sociedad / Alejandro Salazar 2011

Alejandro Salazar es boliviano. Ha hecho humor gráfico para los principales periódicos de Bolivia; trabaja también como ilustrador, dibujante, pintor y animador. Ha publicado libros de humor gráfico, *sketchbooks* y *flipbooks*. Blog: <www.aljazar.blogspot.com>.

El papel de la Iglesia católica, en su vertiente más progresista, fue crucial en el despertar organizativo de amplios sectores de la población que vencieron el miedo al aparato represivo del Estado y desafiaron abiertamente a los grupos de poder económico ■

de la Iglesia católica, en su vertiente más progresista, fue crucial en el despertar organizativo de amplios sectores de la población que vencieron el miedo al aparato represivo del Estado y desafiaron abiertamente a los grupos de poder económico³.

En forma paralela al auge del movimiento popular, cuatro organizaciones político-militares se afirmaban en su ideario y ganaban experiencia en la lucha armada: Fuerzas Populares de Liberación (FPL), Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional (FARN) y Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC)⁴. Todas se sostenían en el ideario marxista-leninista (en algún caso, con elementos maoístas y trotskistas) y estaban empeñadas en la toma violenta del poder estatal por la vía armada. Además de competir entre sí por la primacía revolucionaria, también lo hacían con el Partido Comunista Salvadoreño (PCS, fundado en 1930), al cual reprochaban su apuesta por la conquista de la «democracia burguesa» como paso previo en la lucha por el socialismo. El PCS finalmente debió conformar su propia estructura militar –las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL)– para incidir en la dinámica de la izquierda armada gestada en la década de los 70.

A mitad de esa década, las organizaciones político-militares no solo estaban atrapadas en una fuerte disputa entre ellas y con el PCS. Se preparaban, en la práctica y con acciones de hecho, para hacer frente al aparato represivo del Estado, lo cual puso en la mira de los cuerpos de seguridad estatales a sus dirigentes y militantes, sobre quienes se desató una implacable persecución política. Los grupos de poder económico, por su lado, habían creado sus propias organizaciones paramilitares –escuadrones de la muerte– para llevar adelante su particular lucha anticomunista, la cual, pese a su completa ilegalidad, no excluía la colaboración sistemática con los cuerpos de seguridad estatales.

No obstante, la persecución política estatal y paramilitar no se dirigió en exclusiva a las organizaciones político-militares. Abarcó muchas veces de manera

3. Carlos Rafael Cabarrús: *Génesis de una revolución*, Casa Chata, México, 1983.

4. L.A. González: «La violencia sociopolítica de las décadas de 1970 y 1980» en *Enciclopedia El Salvador 2*, Océano, Barcelona, pp. 300-310.

preferencial a los dirigentes, miembros y simpatizantes de las organizaciones populares que, a finales de la década de los 70 y en los primeros años de la década de los 80 fueron víctimas de una intensa represión. Esta última se hizo más despiadada a medida que el movimiento popular radicalizó sus demandas. Esta radicalización se articuló con un fenómeno histórico singular: desde mitad de los años 70, las organizaciones político-militares se habían acercado a las organizaciones populares y habían logrado que estas, poco a poco, hicieran suyo el ideario revolucionario y, en consecuencia, dieran a sus demandas un carácter político y no solo reivindicativo. Cuando la década estaba por finalizar, esa confluencia había alcanzado su mayor nivel, al tiempo que los niveles de represión estatal y paramilitar alcanzaron proporciones exorbitantes.

Otras salidas, distintas de la solución militar, parecían cerrarse cada vez más. Los ecos de la Revolución Sandinista de julio de 1979 se hacían sentir con fuerza en el imaginario de dirigentes, militantes y simpatizantes de las organizaciones político-militares y las organizaciones populares. En ese imaginario, El Salvador estaba en camino de convertirse en otra Nicaragua. Pero algo faltaba: la instancia organizativa capaz de dirigir el asalto al poder estatal y de contener la intensa represión que golpeaba, más que a los cuadros guerrilleros, a los sectores populares organizados, maestros y agentes de pastoral.

■ El FMLN ejército

Crear una instancia organizativa con capacidad para llevar adelante un esfuerzo militar sostenido supuso no solo un intenso debate ideológico, sino superar recelos que, en casos como el del poeta Roque Dalton –asesinado por sus compañeros del ERP, acusado de ser agente de la CIA– involucraban hechos de sangre. El FMLN solo pudo surgir como ejército guerrillero cuando cada una de las organizaciones integrantes aceptó ceder sus ansias hegemónicas a un mando unificado, cuya primera experiencia conjunta fue la Dirección Revolucionaria Unificada-Político Militar (DRU-PM)⁵, conformada por los jefes máximos de cada una de ellas. En octubre de 1980 nació una nueva organización: el FMLN histórico. Operativamente, pronto se sometió a la primera prueba de fuego después de su fundación: la «ofensiva final» de 1981.

El FMLN era aún débil pero logró resistir la contraofensiva desatada por las fuerzas militares del Estado salvadoreño. Los años de 1981-1983 fueron los de mayor dureza para la recién creada organización en el terreno militar. El

5. V. «La unidad de la izquierda» en *ECA* N° 380, 6/1980, pp. 551-556.

Ejército salvadoreño golpeó fuerte a una guerrilla que, en lo fundamental, contaba en esos momentos con la experiencia y los recursos que cada núcleo político-militar había acumulado en la década anterior. Con todo, nuevamente, la represión estatal y paramilitar se hizo sentir en mayor medida sobre los sectores populares organizados. Se continuó una espiral ascendente de violencia terrorista iniciada en marzo de 1980 con el asesinato de monseñor Oscar Romero, y, unos meses después, el de los dirigentes del Frente Democrático Revolucionario (FDR). La violencia de los años 1981-1983 forzó la

**Superada la arremetida
estatal de 1981, el FMLN
comenzó una readecuación
estratégica en la cual
se pasó de una visión
insurreccional a otra
enmarcada en la guerra
popular prolongada ■**

incorporación de militantes de las organizaciones populares al FMLN, que vio aumentar de manera significativa sus filas de combatientes.

Superada la arremetida estatal de 1981, el FMLN comenzó una readecuación estratégica en la cual se pasó de una visión insurreccional a otra enmarcada en la guerra popular prolongada⁶. Fue esa estrategia la que permitió que el FMLN trabajara en la conformación de una re-

taguardia firme, afincada en el control territorial de determinadas zonas del país. Poco a poco, el FMLN se convirtió en un ejército propiamente dicho, con las estructuras de mando y la capacidad operativa correspondientes. A mitad de los años 80, el grupo ya estaba en condiciones no solo de resistir las fuertes ofensivas del Ejército –inscritas en la estrategia de guerra de baja intensidad, asesorada y sostenida logísticamente por el gobierno de Estados Unidos–, sino de tomar la iniciativa militar y de poner en situación defensiva a las Fuerzas Armadas salvadoreñas.

Los referentes ideológicos siguieron siendo los mismos de los años 70, es decir, los tomados del marxismo-leninismo, pero el debate de ideas cedió su lugar al fortalecimiento militar y al objetivo que se pretendía alcanzar a partir de él: la toma del poder por la vía armada. De alguna manera, en la etapa fundacional del FMLN fueron las Fuerzas Populares de Liberación-Farabundo Martí (FPL) las que impusieron al resto de las organizaciones su visión ideológica y resultaron decisivas en la definición estratégica. Esta primacía de las FPL se reconoce en el nombre del ejército guerrillero: Frente Farabundo Martí

6. Ver Raúl Benítez Manaut: *La teoría militar y la guerra civil en El Salvador*, UCA Editores, San Salvador, 1989.

para la Liberación Nacional. Posteriormente, a partir de la muerte, en 1983, de Salvador Cayetano Carpio –el comandante «Marcial»– y de Mélida Anaya Montes –la comandante «Ana María»–, el ERP comenzará a asumir un mayor protagonismo estratégico, sobre todo debido a su capacidad militar, sin que ello signifique la anulación total del peso de las FPL.

Así pues, aceptados unos mismos referentes ideológicos y definida una estrategia político-militar común, las organizaciones integrantes, en alguna medida, disolvieron su identidad particular en el FMLN. Este proceso supuso un cambio drástico en el modo en que las organizaciones político-militares se concebían a sí mismas y en cómo entendían su papel revolucionario. Aceptaron dejar a un lado el dogmatismo ideológico, que las llevaba a verse como las auténticas y exclusivas vanguardias de la revolución, y crear una estructura político-militar que era algo más que la suma de cada una de ellas actuando por separado. Al mismo tiempo, una dosis importante de pragmatismo se hizo presente en esta voluntad de unificación político-militar. La dinámica de la guerra civil y los escenarios nacionales e internacionales que se fraguaron a lo largo de ella obligaron a dejar de lado las meras disputas ideológicas.

De hecho, aunque es posible afirmar que los grandes objetivos ideológicos del FMLN se mantuvieron, hasta 1989, en el marco del ideario forjado en los años 70 por las organizaciones político-militares, también es dable sostener que esos grandes objetivos –entre los que destacaba la instauración del socialismo por la vía armada– se fueron acomodando a las exigencias de cada coyuntura particular y, a la larga, a las necesidades planteadas por el virtual empate militar al que se arribó a inicios de los años 90. Se trataba de exigencias prácticas que obligaban, antes que a la definición de posiciones ideológicas, a la toma pragmática de decisiones. Al fin de cuentas, la guerra en sí misma no es un asunto ideológico sino un ámbito en el que lo que cuenta son la eficacia y los resultados. Y el principal resultado militar buscado por el FMLN, la derrota del Ejército salvadoreño, era algo que a mitad de los años 80 no se había logrado. Por el lado contrario, tampoco el Ejército salvadoreño, por más ayuda estadounidense que recibiera, había alcanzado el propósito principal de su guerra. Pero, en definitiva, entre los militares el apuro era menor: en ese entonces la ayuda militar y económica de EEUU no parecía tener límite alguno.

■ La opción por la negociación: ideología y pragmatismo

La vía de una salida negociada al conflicto –promovida internamente por instancias como la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA)

y un sector de la Iglesia católica, y externamente por los gobiernos de Venezuela, Colombia, México, Panamá, Argentina, Brasil, Perú, Uruguay y Francia— era ciertamente un desafío a la ideología revolucionaria del FMLN, pero era también un desafío a su pragmatismo. Es decir, desde el FMLN se podía responder a la propuesta de una solución negociada a la guerra civil de manera ideológica, lo cual indefectiblemente llevaba a un rechazo absoluto a esa opción y a quienes la promovían. No era el camino hacia la toma revolucionaria del poder ni, en consecuencia, hacia el socialismo. Asimismo, se podía responder de manera pragmática, esto es, atendiendo a lo beneficioso que esa salida podía contener no solo para tener un respiro en momentos difíciles —y trabajar en los reacomodos oportunos—, sino para salir del terreno empantanado de la guerra, con sus secuelas de dolor y destrucción.

Hubo de todo un poco en las distintas etapas de la guerra. En los inicios —cuando el rector de la UCA, el padre Ignacio Ellacuría, más tarde asesinado, hizo una primera propuesta de solución negociada— lo que predominó fue la reacción ideológica. Desde la izquierda radical, tal salida era percibida como una concesión a los enemigos del proyecto revolucionario. Por su parte, la derecha salvadoreña y los mandos de las Fuerzas Armadas leyeron la propuesta de una solución negociada como algo inscrito en la estrategia revolucionaria para la toma del poder.

Lo ideológico, sin desaparecer, cedió su lugar a lo pragmático. La negociación sirvió al FMLN para ganar legitimidad, reconocimiento y ayuda en el ámbito internacional ■

Posteriormente, lo ideológico, sin desaparecer, cedió su lugar a lo pragmático. Por un lado, la negociación sirvió al FMLN para ganar legitimidad, reconocimiento y ayuda en el ámbito internacional, lo cual era urgente pues el gobierno salvadoreño gozaba de un flujo prácticamente ilimitado de ayuda militar y económica proveniente de EEUU. Contrarrestar este respaldo era crucial; no se podía hacer nada al respecto sin un trabajo político-diplomático creativo, que requería, entre otras cosas, habilidad negociadora, tolerancia y receptividad a la tesis de la negociación que un sector importante de la comunidad internacional —sector en el que el FMLN tenía apoyos imprescindibles— defendía con vehemencia⁷. Por otro lado, el FMLN,

7. Ver L.A. González: «Centroamérica: proceso de paz y perspectivas de futuro» en Alberto Carrillo Cázares (ed.): *La guerra y la paz. Tradiciones y contradicciones*, El Colegio de Michoacán, Michoacán, 2002, pp. 119-137.

una vez que afianzó su dominio territorial en el norte, nororiente y zona pa-racental de El Salvador, había perdido contacto regular con la población ur-bana, especialmente con la de la capital.

«Volver a la capital» era vital; la vía militar era una vía deseable. Pero la nego-ciación abría otra posibilidad interesante, sobre todo por lo prioritario que era sumar al proyecto revolucionario a quienes, estando convencidos de la nece-sidad de realizar transformaciones estructurales en el país, no creían que la guerra fuera el camino para ello. Si se los convencía de que la voluntad nego-ciadora era firme del lado del FMLN y una estratagema por parte del gobierno, resultaría más sencillo sumarlos al proyecto revolucionario. En este marco se entiende el enorme significado que tuvieron para el FMLN las reuniones de diálogo, especialmente la que se llevó a cabo en 1987 en la Nunciatura Apos-tólica en San Salvador. Desde el inicio de la guerra civil, era la primera vez que la comandancia general del FMLN se hacía presente de manera pública en la capital: el reconocimiento a la legitimidad de su lucha y a su carácter de fuerza beligerante fue algo irrefutable a partir de entonces.

Los diálogos, en fin, también fueron importantes para ganar tiempo en el terreno militar, pues no se tiene que dejar de lado que lo principal, desde un punto de vista estratégico, era la derrota del Ejército salvadoreño que, por su lado, estaba empeñado en derrotar al FMLN y golpeaba fuerte en las zonas de retaguardia. El objetivo estratégico del FMLN se mantuvo hasta la última gran ofensiva lanzada antes de la firma de los acuerdos de paz: la ofensiva al «tope» de noviembre de 1989. Pero se trató de un objetivo que, al menos desde el encuentro de la Nunciatura, coexistió con otro que, nacido de exigencias pragmáticas, poco a poco fue ganando mayor peso hasta convertirse, a par-tir de 1990, en el principal objetivo estratégico: la finalización de la guerra mediante un proceso de negociación que sentara las bases para una reforma política, social y económica de El Salvador.

Estos dos propósitos coexistieron desde 1987, pero el propósito negociador se subordinó al militar. En 1989, este último fue sometido a una prueba que pondría de manifiesto la imposibilidad de su consecución, al menos en el corto y mediano plazo. Interpretaciones posteriores de la ofensiva militar de noviembre de 1989 la han presentado como una acción diseñada e im-plementada para forzar el proceso de diálogo-negociación, que ciertamente caminaba a paso lento. Y los avances sustantivos en la negociación que se dieron después –y que culminaron en 1992, con la firma de los acuerdos de paz– parecen confirmar esta tesis.

Sin embargo, la envergadura de los ataques militares realizados –que tuvieron la ciudad capital como uno de sus focos principales– y el diseño de la operación en su conjunto, plasmada en el documento que se conoció como «Plan Fuego», apuntaban a algo más que a presionar al gobierno salvadoreño para que diera pasos significativos en el proceso de negociación del fin de la guerra. No es infundado sostener que a esa ofensiva no le era ajena la intención de doblegar militarmente al gobierno salvadoreño o, cuando menos, propinarle un revés de una magnitud tal que inclinara la balanza militar del lado del FMLN. Esta intencionalidad no excluía como resultado colateral, en caso de que lo principal no se consiguiera, presionar por una negociación en la que el

Desde el lado del FMLN, en un escenario internacional marcado por cambios trascendentales –perestroika, caída del Muro de Berlín, desintegración del bloque soviético–, la apuesta por continuar la guerra indefinidamente no auguraba más que aislamiento y quizás hasta un declive progresivo ■

FMLN tuviera una buena ventaja a su favor en virtud de su capacidad militar, que iba a quedar de manifiesto gracias a la ofensiva.

Esto último fue precisamente lo que sucedió. La ofensiva de noviembre de 1989 puso de manifiesto que el aplastamiento militar de uno de los dos bandos en contienda no era algo previsible en el corto y mediano plazo; es decir, que dada la correlación de fuerzas militares, la guerra se podía prolongar sin mayores variantes durante un tiempo lo suficientemente largo como para agotar las energías sociales y económicas del país.

Desde el lado del FMLN, en un escenario internacional marcado por cambios trascendentales –perestroika, caída del Muro de Berlín, desintegración del bloque soviético–, la apuesta por continuar la guerra indefinidamente no auguraba más que aislamiento y quizás hasta un declive progresivo. A su vez, en el plano interno era creciente el clamor social por una solución negociada; no escuchar ese clamor –que cobró una fuerza inusitada a raíz del asesinato, el 16 de noviembre de 1989, de los jesuitas de la UCA y sus dos colaboradoras a manos de elementos del Batallón Atlacatl– hubiera significado dar la espalda a sectores sociales, eclesiales y políticos sin los cuales era imposible que el FMLN sobreviviera políticamente.

Desde el lado del gobierno, encabezado entonces por Alfredo Cristiani (1989-1994), de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), el panorama

internacional tampoco era favorable como para persistir en el empeño de la guerra. Los cambios en Europa del Este, por un lado, comenzaban a incidir en la política exterior de EEUU, desplazando de sus intereses los compromisos adquiridos en el marco de la Guerra Fría. Por otro lado, la muerte de los jesuitas de la UCA y sus dos colaboradoras sacudió la conciencia de la comunidad internacional, haciendo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) asumiera, como compromiso prioritario, el fin de la guerra civil salvadoreña por la vía de la negociación. Internamente, la economía salvadoreña estaba colapsada y un nuevo grupo empresarial –que deseaba insertarse en el proceso de globalización– emergía con unos ánimos e intereses distintos de los de la oligarquía tradicional. No era posible que este nuevo sector tuviera éxito mientras la guerra continuara, de tal suerte que se convirtió en un soporte de los esfuerzos negociadores del gobierno de Cristiani. Su principal preocupación era asegurarse que, en la negociación con el FMLN, sus intereses económicos quedaran lo suficientemente resguardados.

Así las cosas, el proceso de negociación entró en una fase decisiva a partir de 1990. Lo que en el FMLN inicialmente se aceptó por razones pragmáticas terminó por convertirse en un asunto estratégico: una negociación en la cual se consiguieran logros por los que se había luchado en la guerra, pero renunciando a dos grandes objetivos: la toma del poder estatal por la vía armada y la instauración del socialismo a partir de esa victoria militar.

■ El FMLN partido y la hegemonía de la derecha

Un cambio ideológico sustancial comenzó a darse en el FMLN. Algunos de sus dirigentes –los más intelectualizados– comenzaron a hacer públicos análisis en los cuales se defendían adscripciones socialdemócratas –tal como ellos las entendían– que pretendían hacer creer que la apuesta por la negociación y la conquista en ese proceso de objetivos por los que se había luchado militarmente era lo más natural del mundo. Algunos de esos dirigentes abjuraron después del marxismo-leninismo que había nutrido sus ideales en los años 70 y buena parte de los 80 y con el que habían justificado prácticas militares y militaristas de los más diversos signos.

En la negociación se jugaba otro asunto fundamental: la desaparición del FMLN ejército y su conversión en partido político. Esto tocaba, por un lado, lo ideológico. Y es que la estructura militar del FMLN fue diseñada para luchar por un proyecto ideológico: la instauración del socialismo mediante la lucha armada. Una nueva visión debía reemplazar a la vigente hasta entonces, y esto no

podía hacerse sin un debate en el cual la democracia y las elecciones comenzaron a ocupar un lugar central. En parte, los aportes de quienes en el FMLN tenían la capacidad de escritura estaban destinados a dar sentido a los cambios que se

La conversión en partido político suponía desarticular las estructuras militares y redefinir las relaciones con la militancia de base y las poblaciones en las que el FMLN se había arraigado ■

avicinaban. Por otro lado, se encontraba la cuestión organizativa: la conversión en partido político suponía desarticular las estructuras militares y redefinir las relaciones con la militancia de base y las poblaciones en las que el FMLN se había arraigado.

El FMLN encaró este desafío no sin sufrir fuertes desmembramientos internos, que dejaron fuera de la nueva estructura no solo a organizaciones que habían sido

parte de él cuando era un ejército –el ERP y la FARN⁸– sino a cuadros que habían integrado a las dos organizaciones que se quedaron en la conducción del nuevo partido: las FPL y el PCS. En resumen, una cosa era clara: el FMLN partido político estaría sometido a la Constitución de la República y a las reglas de la democracia electoral. En consecuencia, lo que el FMLN pudiera hacer para avanzar en sus objetivos históricos –los que tenía como ejército– no podía ir más allá del marco constitucional y de sus posibilidades como un partido más del sistema político salvadoreño.

En la ruta hacia los acuerdos de paz de 1992 el FMLN estaba en camino de vivir su mayor transformación ideológica e institucional. Y en efecto así sucedió. Una vez que se firmaron los históricos documentos que pusieron fin a 12 años de guerra civil, el FMLN dejó de ser un ejército y se convirtió en un partido político que tendría que competir electoralmente con otros partidos para acceder, temporalmente, a una cuota de poder político. La apuesta que se hizo entonces fue que un triunfo electoral en el nivel presidencial, inmediatamente después de firmada la paz –sumado a una cuota significativa de diputados en la Asamblea Legislativa–, daría al FMLN la oportunidad de realizar cambios sustantivos en el aparato económico que permitieran avanzar en la justicia y la inclusión socioeconómica. Esta apuesta fue la que estuvo

8. Los dirigentes de estas organizaciones fueron los que más proclamaron sus credenciales social-demócratas, al punto de crear un partido –el Partido Demócrata (PD)– de corta vida. Mientras la experiencia partidaria duró, sus líderes no dudaron en aliarse con Arena, con el fin de vencer las resistencias legislativas del FMLN. Otros miembros de estas organizaciones se vincularon a empresas mediáticas desde las que trabajaron en las campañas electorales de Arena.

en la base de la relevancia dada en los acuerdos de paz a la reforma política e institucional, en detrimento de compromisos de fondo en el terreno económico. La derecha empresarial y política se preparó para sacar ventaja de esta situación, para lo cual era crucial que el FMLN no lograra la cuota de poder político que le permitiera cumplir, ni siquiera parcialmente, su propósito de impulsar cambios sustantivos en el ámbito económico-social.

Haciendo uso de una amplia gama de recursos, la derecha salvadoreña logró mantenerse en el Poder Ejecutivo durante cuatro periodos, así como asegurarse una alianza política en la Asamblea Legislativa que le permitiera, mediante la conformación de un bloque afín, tener los votos suficientes para imponer sus decisiones y diseñar el resto de las instituciones del Estado –en particular, la Corte Suprema de Justicia– a la medida de sus intereses. Dicho de otro modo, la derecha consiguió imponer su hegemonía en el interior de la sociedad salvadoreña. Desde 1994, el FMLN conquistó espacios en los niveles legislativo y municipal, pero no obtuvo la cuota de poder suficiente para completar los acuerdos de paz en su componente socioeconómico. La hegemonía de la derecha no solo hizo que ese componente fuera olvidado sino que alentó la implementación de un programa neoliberal anclado en la tercerización económica, la maquilización, el estancamiento industrial y, lo que es más grave, el abandono del sector agrícola. De aquí la sensación de que la gran ganadora de los acuerdos de paz fue la derecha empresarial, la elite formada por los «ricos más ricos de El Salvador»⁹, cuya riqueza no dejó de aumentar mientras, desde distintos sectores, se alababan las conquistas democráticas alcanzadas a partir de la firma de la paz.

En efecto, en el plano de la democratización política los avances fueron indiscutibles desde 1992¹⁰. Pero al cierre de esa década, la transición democrática daba señales de no estar avanzando hacia la consolidación. No solo por la debilidad institucional, la irrupción de una violencia social creciente¹¹ o la inexistencia de la alternancia política en el Ejecutivo, sino por la vigencia de un modelo económico que no lograba satisfacer las necesidades fundamentales de la mayor parte de la población y que más bien generaba exclusión y marginación socioeconómica en el campo y la ciudad. Es decir, el modelo económico

9. Ver María Dolores Albiac: «Los ricos más ricos de El Salvador» en R. Cardenal y L.A. González (comps.): ob. cit., pp. 153-183.

10. Ver L.A. González: «Acerca de la transición a la democracia» en R. Cardenal y L.A. González (comps.): ob. cit., pp. 117-126.

11. Ver L.A. González: «Violencia social y territorialización del crimen» en *ECA* N° 695, 9/2006, pp. 882-885.

se mostraba como un obstáculo para la profundización democrática, al punto de generar procesos de desarraigo y anomia que, de afianzarse, pondrían en tela de juicio la consolidación democrática. Casi nadie prestó atención a esta dinámica en aquel momento, pero una vez que se desató –lo cual sucedió en la segunda mitad de la década siguiente– el país se encaminó hacia un callejón sin salida. Este callejón sin salida no solo era social y cultural, también era político: Arena y la derecha habían fracasado en su gestión del país, pero el FMLN no parecía estar preparado, a los ojos de amplios sectores de la población, para asumir la conducción del Ejecutivo.

■ Itinerario final: el FMLN como partido de gobierno

Para quebrar la hegemonía de la derecha, tejida a partir de componentes económicos, políticos y mediáticos bien entrelazados, el FMLN tenía que ser innovador en la fórmula política que le permitiera ampliar su base electoral. Las diferentes elecciones en las que el partido participó desde 1994 le habían permitido acumular un caudal electoral nada despreciable, suficiente para tener un peso importante en la Asamblea Legislativa y para controlar un número significativo de alcaldías, pero insuficiente para acceder a la Presidencia. La elección de 2009 era una prueba de fuego para el partido, pues tenía que enfrentar el dilema de continuar siendo segundo –permitiendo que Arena gobernara por un quinto periodo consecutivo– o prepararse a fondo para llegar a la Presidencia de la República.

Desde 2000, con el mandato de Francisco Flores (1999-2004), las condiciones del país, sin haber cambiado sustancialmente para abrir las puertas automáticamente al arribo de un gobierno de izquierda, se habían deteriorado de manera sensible en lo económico y social, golpeando con severidad a las clases medias¹². Bajo el gobierno de Elías Antonio Saca (2004-2009) esas condiciones empeoraron. Con una propuesta política creativa, era posible prever que el FMLN podía sumar a su caudal electoral firme los votos adicionales para ser el ganador en las elecciones de 2009, no solo por un castigo a Arena, sino por presentar una propuesta que positivamente fuera aceptada por sectores sociales que hasta entonces habían recelado del proyecto de izquierda representado por el FMLN.

La fórmula electoral de 2009 fue la clave de la victoria en los comicios de ese año¹³. Lo novedoso fue integrar a la fórmula como candidato presidencial

12. Ver L.A. González: «Un necesario cambio de marcha en El Salvador» en R. Cardenal y L.A. González: ob. cit., pp. 350-358.

13. L.A. González: «Balance sociopolítico de 2009 y perspectivas para 2010» en *Teoría y praxis* N° 16, 2/2010, pp. 87-92.

a una personalidad, Mauricio Funes, que no provenía de las filas del partido, pero que desde su trabajo en los medios de comunicación había dado muestras de un compromiso decidido con la democracia y la justicia. En torno de la candidatura de Funes se articuló un importante movimiento –los «Amigos de Mauricio»– que fue decisivo para sumar al caudal electoral del FMLN los votos adicionales que contribuyeron al triunfo de marzo de 2009. El FMLN, tras dos décadas de lucha política –una década como ejército y otra como partido–, accedía por primera vez, y con él la izquierda, a la conducción del gobierno salvadoreño. Algo histórico había sucedido.

La hegemonía de la derecha fue puesta en jaque. La posibilidad de cambios importantes en el país en el plano socioeconómico suscitó grandes expectativas. Se trata del presente, cuando el FMLN se ha convertido –pese a que se lo quiera ver como «partido en el gobierno»– en «partido de gobierno». Asumirse como tal no le fue fácil; tuvo que aceptar, cuando menos, que a) el partido no podía vaciarse en el gobierno; b) la independencia del presidente Funes para conformar el gabinete y trazar su estrategia de gestión; y c) la presencia en el nuevo gobierno de figuras provenientes del movimiento «Amigos de Mauricio».

Tras un periodo de tensiones generadas al calor del debate sobre estos temas –a los que se sumaron otros asuntos como las reservas del presidente Funes ante el socialismo del siglo XXI–, las relaciones entre el gobierno y el FMLN se estabilizaron, sobre todo a partir de la divulgación del Plan Quinquenal de Desarrollo –en junio de 2010–, que puso de relieve el vínculo del gobierno con el FMLN en asuntos sustantivos de carácter económico y social. Llegar a la actual fase de equilibrio –cuando se está a punto de cumplir el segundo año del gobierno de izquierda– supuso asumir con realismo, por el lado del FMLN, las posibilidades que se abrían de incidir desde el Ejecutivo en la dinámica del país, a partir de la cuota de poder alcanzada en ministerios importantes. No se controlaron todos los ministerios, pero sí algunos de los más relevantes: Educación, Seguridad Pública y Justicia, Gobernación, Trabajo, Relaciones Exteriores, Obras Públicas y Salud. Otras dependencias quedaron en manos

La fórmula electoral de 2009 fue la clave de la victoria. Lo novedoso fue integrar a la fórmula como candidato presidencial a Mauricio Funes, que no provenía de las filas del partido, pero había dado muestras de un compromiso decidido con la democracia y la justicia ■

de algunos miembros del movimiento «Amigos de Mauricio» –Ministerio de Hacienda y la compañía de electricidad CEL– y un ministerio –el de Economía– en manos del partido Cambio Democrático (CD). Figuras independientes de izquierda tienen a su cargo instancias como el Ministerio de Medio Ambiente y el Banco Central de Reserva.

El maximalismo inicial de algunos militantes y dirigentes del FMLN fue reemplazado por posturas realistas que no solo permitieron reconocer las atribuciones del presidente Funes, sino el margen de maniobra con el que el partido contaba en la nueva coyuntura. Este realismo permitió que los temas ideológicos fueran cediendo su lugar a los acuerdos y el trabajo conjunto. Un asunto que despuntó como polémico fueron las relaciones del FMLN con Hugo Chávez y la integración de El Salvador a los convenios con Alba Petróleo de Venezuela. Empero, el FMLN aceptó la decisión del presidente Funes de no vincularse a Petrocaribe, mientras que el propio FMLN –a través de sus alcaldías– pudo potenciar sus relaciones con Alba Petróleo, que recientemente inauguró una importante planta industrial de hidrocarburos en El Salvador. También el FMLN ha mantenido una relación cercana con Daniel Ortega, pero ello no ha tenido implicaciones significativas en las relaciones del partido con el gobierno de Funes. Lo que sí generó algunas diferencias fue la postura ante el golpe de Estado en Honduras contra Manuel Zelaya, en 2009. Mientras que el FMLN apoyó abiertamente a Zelaya, desde el gobierno se manejaron diversas salidas, que enfatizaban la vía de la prudencia diplomática.

En fin, no solo el FMLN ha cedido al realismo. También lo ha hecho el gobierno del presidente Funes. En esto, el papel del ex-presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva ha sido clave, pues su cercanía con el gobierno y con el FMLN le permitió dar consejos oportunos conducentes a moderar las respectivas posturas. Como quiera que sea, en la fase actual de su larga trayectoria histórica, el FMLN se ha convertido en un soporte firme de la democratización del país. Ha dado muestras de una capacidad de cambio ideológico e institucional verdaderamente sorprendente. Sigue defendiendo el ideario socialista, pero ahora lo relaciona estrechamente con la democracia no solo política, sino social y económica. Hay conciencia en su dirigencia de que ese ideario solamente puede ser defendido en un marco democrático con una institución partidaria sólida y competitiva. Este es el FMLN de ahora. Un FMLN cuya dirigencia sabe que para impulsar transformaciones sustantivas en el país solo se cuenta con mandatos temporales que deben ser renovados periódicamente y que los cinco años de la actual gestión son una oportunidad para probar a la población que la izquierda puede hacer mejor las cosas que la derecha. ☐

Feminismo y descolonización

Notas para el debate

JENNY YBARNEGARAY ORTIZ

El gobierno boliviano ha incorporado una novedosa Unidad de Despatriarcalización a la institucionalidad estatal dependiente del no menos sorprendente Viceministerio de Descolonización. Pero aunque ello representa un avance hacia mayores posibilidades emancipatorias, este ensayo sostiene que la relación entre patriarcado y colonialidad es menos lineal de lo que el discurso oficial deja ver. Y que la idea de que la despatriarcalización es mera consecuencia de la descolonización –como se desprende de ciertos textos gubernamentales– puede limitar las posibilidades abiertas por la nueva Constitución.

Vivimos tiempos de «des» y de «antis». Pese a que en gran parte de América Latina estamos transitando procesos de cambio político y social, aún no parece perfilarse una teoría o un discurso con nombre propio que dirija la práctica política hacia algún propósito común. Ello ocurre no solo en Bolivia sino en el resto del mundo, donde los movimientos sociales manifiestan su «indignación» frente a sinnúmero de

motivos –con justas razones– e incluso se proclaman antineoliberales, antiimperialistas, antiautoritarios e incluso anticapitalistas, y un largo etcétera.

En Bolivia, al asumir la Presidencia Evo Morales en 2006, se inició un periodo con numerosas promesas de cambios profundos para el pueblo boliviano, en el marco de la llamada «revolución democrática y cultural».

Jenny Ybarnegaray Ortiz: psicóloga social, con estudios de Maestría en Filosofía y Ciencia Política. Se adscribe críticamente al «proceso de cambio», milita por los derechos de las mujeres y se proclama feminista (sin adjetivo).

Palabras claves: feminismo, descolonización, patriarcado, Bolivia.

Nota: este texto se enmarca en una investigación elaborada por la autora para el ciclo de conversatorios: «¿Cuánto hemos avanzado las mujeres? Logros, dilemas y desafíos hacia el proceso de despatriarcalización», bajo el auspicio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Coordinadora de la Mujer, Bolivia, en junio de 2011.

Bajo este nuevo clima de época se planteó el ambicioso objetivo de modificar la estructura del Estado desde los cimientos para construir una sociedad sin excluidos ni excluidas, con ciudadanía plena para todos y todas, particularmente para los pueblos indígenas, originarios y campesinos, con el fin de revertir las condiciones de exclusión, negación y subordinación a las que fueron sometidos desde la invasión colonial. La gestión gubernamental quedó marcada así por dos tareas gigantescas: la «descolonización» del Estado boliviano –a través de la Asamblea Constituyente– y la reversión de los efectos del neoliberalismo mediante la «recuperación» de los recursos naturales, en especial mediante la nacionalización de los hidrocarburos, decretada el 1 de mayo de 2006. Pero el proceso de «refundación» de Bolivia incluyó en su agenda un objetivo novedoso, y no menos ambicioso que los anteriores: la «despatriarcalización», para la cual se creó la Unidad de Despatriarcalización en el marco del Vice-ministerio de Descolonización puesto en marcha durante el gobierno de Morales.

Todavía no se sabe a ciencia cierta de qué trata en concreto la despatriarcalización tal como se la entiende desde el gobierno, pero queda claro que se articula con el ideario «des» aplicado a muchas otras cosas: *des*andar la historia nacional, *de*construir discursos, *de*shabitar un pasado que se presenta

en cada calle, en cada esquina, en cada chacra donde moramos y desde donde proyectamos nuestras vidas. Por ello, cuando se trata de dar contenido y proyección a la propuesta de despatriarcalización, nada más pertinente que aproximarnos al concepto de patriarcado para entender sus horizontes de sentido.

■ Acerca del patriarcado

Actualmente, el patriarcado forma parte de la estructura de poder en todas las sociedades del planeta aunque, por cierto, no se expresa de la misma manera en todas las culturas. Quizás por el hecho de que la cultura occidental se ha expandido por todo el orbe a través de diversos procesos más o menos violentos (entre ellos, el de colonización), se encuentran en su tradición más antigua los sentidos y significados del patriarcado, lo que no implica que allá donde llegó no haya encontrado un ambiente propicio para arraigarse de forma definitiva.

La tradición aristotélica que «naturaliza»¹ el predominio masculino y que se imprime en el ámbito doméstico se sigue sosteniendo hasta nuestros días y con matices diferentes, pero hoy se expresa más en el ámbito simbólico y consuetudinario de las relaciones entre mujeres y hombres que en las normas jurídicas impuestas y

1. Aristóteles: *Política*, libro I, cap. IV.

consentidas de la sujeción. En cambio, la consideración del origen «natural» de la capacidad de mando de los hombres, que se extiende también al ámbito público, viene cediendo al impulso de los movimientos feministas del mundo entero: en nuestros días las mujeres gozan (al menos en las normas de las democracias de corte occidental) del estatus de ciudadanas de pleno derecho.

Aunque se sostiene sobre ese «sentido común» básico –la «natural» primacía masculina–, el patriarcado se resignifica permanentemente. En cada época y en cada lugar donde se establece adquiere las formas y condiciones que la sociedad le permite y se expresa en los múltiples sistemas y estructuras que constituyen una formación social dada: en las relaciones económicas y sociales, en los sistemas jurídicos, ideológicos y políticos que la sustentan, en las reglas no escritas de la convivencia humana, en las culturas que la expresan.

Ahora bien, cuando se disecciona con cuidado ese sentido «universal» del predominio masculino, se descubre enseguida que quien lo representa no es un «hombre cualquiera». El patriarcado imprime en los hombres un sentido de masculinidad expresado en mandatos específicos. Un «verdadero hombre» tiene el *deber ser* del guerrero, del sabio, del proveedor, del protector, debe tener vocación de poder y portar un falo imponente.

En consecuencia, cuando de relaciones de poder se trata (en el ámbito público), resulta que no a todos los hombres les está dado ejercerlo; unos aparecen mejor dotados que otros para asumir tal condición y en la mayoría de ellos se descubre –al menos en apariencia– a un hombre adulto, heterosexual, económicamente «exitoso», socialmente dominante y políticamente poderoso. Esos atributos, que configuran la masculinidad dominante, son precisamente los que terminan enajenando al ser humano masculino para convertirlo en un patriarca que, aun cuando no alcance la gloria del poder en la sociedad, tendrá siempre en su propio hogar (en el ámbito privado) el espacio donde le estará permitido ejercer ese «don natural» al que hacíamos referencia. Ahí, el padre de familia es «por naturaleza» el jefe de familia, aquel por quien pasan –en última instancia– todas las decisiones, desde las más cotidianas y domésticas hasta las más trascendentales.

El patriarcalismo es, además, adultista y homofóbico, es constructor de jerarquías excluyentes, es guerrerrista y autoritario, es negador de diferencias entre los seres humanos; en consecuencia, no afecta solo a las mujeres: se impone al conjunto de la sociedad donde se establece. Se trata, entonces, de una condición que funda, estructura y constituye las relaciones sociales, tanto en el ámbito público como en el privado. Por este motivo, cuando

hablamos de patriarcado nos estamos refiriendo a una estructura de poder que atraviesa todas las fronteras, las sociales, las históricas, las territoriales y las simbólicas, y no a una característica específica de algún sistema político en particular o de alguna estrategia de dominación, como la del colonialismo.

■ Efectos del colonialismo en el plano de la subjetividad colectiva

En efecto, la asociación que se hace hoy en Bolivia entre colonialismo y patriarcalismo exige una digresión sobre el significado del primer concepto que, a la fecha, ha merecido importantes avances teóricos desde diversos campos del saber y con distintos énfasis. Aquí abordaré uno de ellos: el de sus efectos en la subjetividad colectiva. Por supuesto que un análisis de esta naturaleza requiere mucho más espacio y profundidad que la que permite un corto ensayo, donde solo es posible trazar algunas pistas generales.

En el análisis histórico del proceso de construcción de la ideología hegemónica y dominante en el territorio que hoy se llama Bolivia² se advierte que la conquista española significó el momento definitivo de la *ruptura* histórica, ruptura entre un pasado –no exento de contradicciones– en el que los pueblos originarios se desarrollaban autónomamente³ y un futu-

ro signado por el colonialismo como ideología y como estrategia de poder. Dos cosmovisiones antagónicas explican el sentido de lo que se caracterizó como el «choque de dos mundos»: frente al panteísmo andino, el monoteísmo católico; frente a la reciprocidad como carácter de la relación social, la explotación esclavista que imponía el conquistador; frente al vínculo de equilibrio con la naturaleza, el antropocentrismo depredador.

A través de un prolongado «proceso de sujetación»⁴, la colonización –que se prolongó durante el periodo republicano iniciado en 1825 bajo la forma del llamado «colonialismo interno»– logró implantar en el «ser nacional» su carácter de «conciencia colonizada». El sujeto colonizado, el

2. J. Ybarnegaray: «La capacitación en el proceso de producción del sujeto. El caso del Servicio de Formación de Mano de Obra (FOMO) en el sector agropecuario. Cochabamba - Bolivia», tesis de licenciatura en Psicología, Universidad Mayor de San Simón, 1986, pp. 25-49.

3. No se puede pasar por alto que el imperio incaico se había constituido como tal a través de un largo proceso de conquistas mediante el cual logró someter a otros pueblos originarios, entre ellos a los aymaras. Sin embargo, y a diferencia de la conquista ibérica, su estrategia de expansión no incluía la «extirpación de idolatrías», y tuvieron la sagacidad de asimilar las formas de representación y organización social y económica de los pueblos por ellos conquistados a su propio acervo cultural. Así sucedió, por ejemplo, con la organización comunitaria del *ayllu* de origen aymara.

4. «Proceso de sujetación en el doble sentido: de constitución del sujeto y de sujetación –ligadura o atadura– de esos sujetos así constituidos al conjunto de la estructura.» Néstor Braunstein et al.: *Psicología: ideología y ciencia*, Siglo XXI, México, DF, 1983, p. 16.

que porta esa «conciencia colonizada», se caracteriza por los siguientes rasgos: sobrevalora al opresor (lo asume como modelo), es fatalista (se rinde frente al «destino»), se subestima y se culpabiliza de su situación asumiendo el estigma que le atribuye el colonizador, se reifica, se cosifica, se vuelve extraño para sí mismo, renuncia al poder como objeto de deseo, lo transfiere al opresor y no lo disputa⁵.

Estos rasgos determinan un arraigado sentimiento internalizado de «autoindeterminación histórica», con efectos disímiles –aunque igualmente perversos– en los distintos estratos de la composición social. En las clases dominantes, se expresa a través de la sostenida tendencia a la sujeción y adscripción a proyectos de dominación foráneos de toda hechura. En los pueblos indígenas y en las clases subalternas, frena los impulsos de disputa del poder, hasta el punto que estos ceden sus banderas a facciones de las clases dominantes eventualmente identificadas como aliadas a sus causas para mantenerse al borde, en movimientos reivindicativos que no consiguen traspasar las fronteras de los espacios de constitución del poder, hecho que se dio repetidas veces en la historia.

No obstante, la incursión del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) en la arena política boliviana en la década de 1990 y la

sostenida irrupción indígena-originaria-campesina marcaron en parte el inicio de la reversión de estas determinaciones neocoloniales: esta vez sí los grupos subalternos ingresaron en la disputa abierta por el poder. La llegada de Evo Morales al Palacio de Gobierno en 2006, de la mano de las organizaciones indígenas-originarias-campesinas, núcleo de la base social del «proceso de cambio», significa un giro histórico sin precedentes y, en este marco, la sola enunciación del objetivo trascendente de la descolonización marca el hito fundacional de subversión del orden instituido en la conquista española y sostenido durante toda la República.

Ahora bien, ¿será posible tal descolonización? Creo que como hecho fáctico de larga duración, el colonialismo dejó una marca indeleble en el proceso de constitución del sujeto nacional y nadie que hoy se considere boliviano o boliviana puede sustraerse de sus efectos; por ende, considero que es un hecho de efecto irreversible. Los estigmas que dejó el colonialismo en la conciencia nacional son tan profundos y arraigados que me resulta inimaginable un proceso de descolonización de efectos inmediatos o de mediano plazo.

Para ello, haría falta desplegar un largo proceso de «cura» que imagino

5. Ver Julio Barreiro: *Educación popular y proceso de concientización*, Siglo XXI, México, DF, 1976.

análogo en lo social a lo que el psicoanálisis procura en el plano del sujeto: la develación del «trauma» que inauguró la neurosis, no para desaparecerlo o revertirlo, sino para «manejarlo» de manera más positiva para sí mismo. En otras palabras, considero difícil, si no imposible, «descolonizar» a toda una sociedad constituida bajo la huella colonial; en cambio, me figuro posible desmontar ciertos patrones de la estructura estatal de corte colonial para dar paso a la posibilidad de «manejar constructivamente el trauma», es decir, para movilizar las sujeciones que nos han impedido imaginar hasta ahora un proyecto de autodeterminación histórica, y no para retornar a un pasado precolombino mitificado.

■ **Asamblea Constituyente:
la promesa de equidad
para las mujeres**

Fue el protagonismo indígena en la demanda de la Asamblea Constituyente el que señaló sus horizontes de sentido y el que explica la fuerte orientación del nuevo texto constitucional hacia el reconocimiento y la puesta en vigencia de sus derechos. Desde su visión, no era suficiente reformar la anterior Constitución: se requería producir otra donde quedase finalmente afirmado el reconocimiento de que Bolivia es un país heterogéneo, múltiple, diverso, constituido sobre la base de la negación de esa diversidad estructural.

Pero los indígenas no fueron los únicos: la sociedad boliviana en su conjunto –salvo sectores conservadores que veían en la construcción de la nueva Carta Magna un enorme riesgo de desestabilización del *statu quo* que sostenía su condición de privilegio– abrazó la causa constituyente con enorme expectativa. Entre otros, estamos las mujeres. Lo afirmo en presente porque considero que el proceso constituyente no ha concluido con la promulgación de la Constitución, sino que representa más bien otro hito en el proceso de creación de nuestro proyecto de autodeterminación histórica, el que marca un antes y un después.

Desde fines de la década de 1990 y en diversos espacios, las mujeres comenzamos a producir los consensos necesarios para construir, más allá del reconocimiento de nuestra propia diversidad, una plataforma que lograra plasmarse en la nueva Constitución. El resultado de este proceso fue, a todas luces, exitoso: la nueva Carta Magna incorpora un lenguaje no sexista que hace visible la identidad diferenciada de mujeres y hombres, y en casi una treintena de artículos garantiza los derechos largamente anhelados por las mujeres.

Entre los principales están la afirmación de la libertad de culto y la declaración de independencia del Estado respecto de la(s) religión(es) (art.

4), demanda que han enarbolado las mujeres como condición necesaria para garantizar sus derechos sin que en ello medien principios religiosos; la equidad de género como valor del Estado (art. 8) y como principio de constitución del sistema de gobierno (art. 11) en situación de paridad; la no discriminación y la sanción a todas las formas de discriminación como principio fundamental del Estado (art. 14) y el derecho a vivir sin violencia, con mención explícita a que es un derecho de las mujeres (art. 15); el principio de igual salario por igual trabajo en aplicación del principio de no discriminación (art. 48); la presunción de filiación que favorece sobre todo a las mujeres cuyas parejas niegan la paternidad de sus hijos para soslayar responsabilidades consecuentes (art. 65); el reconocimiento de los derechos sexuales y los derechos reproductivos para mujeres y hombres (art. 66), que abre las puertas a los propósitos de autodeterminación sobre el propio cuerpo; el reconocimiento del trabajo del hogar como fuente de riqueza del Estado Plurinacional (art. 338); el derecho de acceso de las mujeres a la tierra como propietarias (art. 395) y la obligatoriedad del Estado de desarrollar políticas para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres en el acceso a la tierra (art. 402).

Con este resultado se establece definitivamente que los derechos de las

mujeres son «cuestión de Estado» y no solo reivindicación de grupos aislados de mujeres. No obstante, una importante observación al margen es que los avances alcanzados están todavía enmarcados en el ámbito conceptual de la equidad de género: la Constitución no menciona en su ideario la despatriarcalización como propósito, principio o concepto.

■ Surge la propuesta de despatriarcalización

La idea original fue planteada por el movimiento feminista boliviano «Mujeres Creando»⁶ mediante la consigna «No hay descolonización sin despatriarcalización», que interpela el discurso gubernamental centrado en la descolonización. Más tarde, y de manera paradójica, el Viceministerio de Descolonización⁷ creó la Unidad de Despatriarcalización, con la misión de desarrollar el concepto y proponer políticas públicas destinadas a ese propósito. No obstante, en los hechos esta entidad se apropió de la consigna para enmarcarla bajo una interpretación particular. A la fecha, el desarrollo conceptual

6. Para mayor información sobre esta agrupación, v. su página web: <www.mujerescreando.org/>

7. Entidad creada en febrero de 2009 mediante decreto supremo de adecuación de la estructura del Órgano Ejecutivo a la nueva Constitución Política del Estado, bajo dependencia del Ministerio de Culturas. Mayor información en: <<http://descolonizacion.blogspot.com/2011/05/descolonizacion-y-despatriarcalizacion.html>>.

de la despatriarcalización (así como el de la descolonización) es todavía incipiente. En una reciente publicación se observa con claridad una visión que asocia patriarcalismo con colonialidad de forma subordinada: «Racismo y patriarcado constituyen el eje de la colonialidad que ha servido de justificación de los genocidios coloniales»⁸.

En otras palabras, el patriarcado sería un instrumento de dominación propio del colonialismo que habría llegado a estos territorios en los barcos europeos allá por el siglo XVI. De ahí que se plantee que

La despatriarcalización es el enfrentamiento contra toda esa herencia colonial (...). Es la desestabilización de relaciones de dominio y de ejercicio del poder, como lo plantea la socióloga Sarela Paz Patiño. Es la transgresión de las reglas sociales, culturales, religiosas, normativas y políticas patriarcales que tienen la misión de eternizar el cautiverio de las mujeres, tal como lo afirma la antropóloga Marcela Lagarde.⁹

Leyendo las anteriores proposiciones entre líneas me animo a señalar que sus autores parecen sostener una idea que se viene divulgando en diversos espacios: que «en el principio», en el «paraíso precolonial» no existía patriarcado sino una relación de complementariedad entre lo femenino y lo masculino, léase también entre hombres y mujeres. Pero ¿será el patriarcado solo una «lacr

colonial»? Para demostrar esta proposición, varios autores suelen recurrir a los textos y gráficos de la *Primer nueva crónica y buen gobierno* de Guaman Poma de Ayala (1530-1621)¹⁰ como fuente principal. Sin embargo, la lectura del texto conduce a proponer la tesis contraria, ya que contiene un sinnúmero de enunciaciones como las siguientes:

Yten: Mandamos que la muger biuda que no se casasen otra ues ni que fuesen amansebados después de auer muerto su marido. Teniendo hijo, sea erederero de toda su hazienda y casas y chacras [sementera], y ci tubiere hija, sea eredera de la mitad de la hazienda y de la mitad sea erederero su padre o su madre o sus ermanos.

Yten: Mandamos que la muger que mouiese [abortase] a su hijo, que muriese, y ci es hija, que le castigasen dozientos asotes y desterrasen a ellas.

Yten: Mandamos que la muger corronpida o consentía que la corronpiesen o fuese puta, que fuese colgada de los cauellos o de las manos en una peña biua en Anta Caca y que le dexen allí murir; el desuirgador, quinientos asotes y que pase por el tormento de hiuaya

8. Amalia Mamani H. e Idón Chivi V.: *Descolonización y despatriarcalización en la nueva Constitución Política del Estado*, Centro de Promoción de la Mujer «Gregoria Apaza» (CPMGA), La Paz, 2010, p. 28.

9. *Ibíd.*, p. 35.

10. Facsímil disponible en *El sitio de Guaman Poma*, Det Kongelige Bibliotek, <www.kb.dk/permalink/2006/poma/info/es/frontpage.htm>, fecha de consulta: 30/6/2011.

[piedra muy pesada] a que le suelte de alto de una uara al lomo del dicho hombre. Con esta pena se muere, algunos quedan bibos. Y al forzador le sentencie la muerte de la muger. Y se se consentieron las dos, mueran colgados, y iguales penas.¹¹

La extensión de este texto no me permite adentrarme más en esta obra, pero es posible afirmar que, en suma, esta crónica muestra que el incario se organizó como una sociedad profunda y severamente patriarcal, y creo que quizás por ello resultó tan permeable al patriarcalismo colonial español investido por la religión cristiana-católica y sus rígidas reglas de obediencia de las mujeres a los hombres.

En consecuencia, percibo un alto riesgo en la asociación subordinada del patriarcado al colonialismo. La encuentro muy similar a la promesa comunista de que la destrucción de la sociedad de clases traería *como consecuencia* la liberación y la igualdad de las mujeres, lo que nunca sucedió en los regímenes del «socialismo real» del siglo xx. En otras palabras, dudo que la descolonización traiga *como consecuencia* la despatriarcalización; temo más probable que esa asociación pueda convertirse en una trampa de postergación para las aspiraciones de las mujeres, hoy plasmadas como derechos reconocidos en el texto constitucional.

■ Entre el discurso y la práctica: horizontes de la despatriarcalización

Que una consigna de interpelación al discurso descolonizador, proveniente de una de las más radicales corrientes del feminismo en Bolivia, haya suscitado semejante debate en el ámbito público es un logro insospechado por sus propias creadoras. Haber conseguido instalar el patriarcado como sistema de opresión en el marco del discurso del «proceso de cambio» –cuyos actores más connotados aún se manifiestan reacios a admitir que en la Bolivia de hoy mujeres y hombres vivimos en condiciones de marcada desigualdad fundada en el patriarcalismo– es sin duda un resultado sin precedentes.

Este logro envuelve el reconocimiento implícito de que la noción del *chachawarmi*¹² –promovida por las organizaciones indígenas en interpelación al concepto de género– debe ser reconocida como «anticipación creativa» y no como sentido fáctico de las relaciones entre mujeres y hombres en las culturas andinas, pues de ninguna manera

11. G. Poma de Ayala: *Nueva crónica y buen gobierno*, cap. 9, «De las 'Ordenanzas Reales'».

12. En idioma aimara significa «expresión de convivencia entre partes iguales o diferentes que tengan un propósito común». También enuncia «relación de reciprocidad y complementariedad entre lo femenino y lo masculino». Ivonne Farah H. y Carmen Sánchez G. (eds.): *Perfil de género, Bolivia*, VGAG / ASDI / Cides-UMSA / JICA / Unifem, La Paz, 2008, p. 89.

tiene constatación en la realidad de la vida pública y privada de las mujeres bolivianas en general, mucho menos de las indígenas-originarias-campesinas que son el sujeto social prioritario de las políticas públicas de despatriarcalización.

También es un logro destacable el hecho de que las organizaciones de mujeres –aunque no exclusivamente estas– se hayan impuesto la tarea de trabajar en torno de este concepto que podría servir como horizonte de emancipación colectiva, en cuyo marco se promueva el principio de igualdad sin desconocer las diferencias que caracterizan a las propias mujeres como resultado de la influencia determinante de diversas variables que colocan a unas y otras en distintas condiciones y posiciones en la sociedad.

Sin embargo, aquí me parece oportuno señalar que no encuentro unanimidad de criterio dentro de las filas gubernamentales, ni coherencia de sentido a la hora de poner en práctica la promesa de equidad contenida en el texto constitucional y en el discurso de la despatriarcalización.

En el ámbito de la promesa de equidad de género contenida en el texto constitucional se observa una marcada inconsecuencia, pues si bien se aplica el principio a la normativa secundaria en desarrollo, es decir, a las leyes de aplicación del texto

constitucional, se ha debilitado a tal punto el mecanismo nacional responsable de la ejecución de políticas públicas a favor de las mujeres que actualmente carece de las mínimas capacidades necesarias para ponerlas en práctica o siquiera para gestionarlas ante otras instancias del Estado.

En el terreno de la despatriarcalización, al articularla de manera subsecuente con la descolonización como condición de realización, al concebir el patriarcado como una característica de la colonialidad, al rehuir considerarlos como sistemas simultáneos y paralelos de producción de jerarquías ideologizadas, de subordinaciones y exclusiones, la comprensión conceptual de sus promotores gubernamentales deja muchas dudas sobre las posibilidades de convertir esa despatriarcalización en un instrumento de emancipación colectiva, en particular desde la diversas perspectivas de las mujeres.

Por otra parte, al plantearse como misión despatriarcalizar «con el manto de la Pachamama-Madre Tierra»¹³,

13. En la «Presentación Oficial» de la Unidad de Despatriarcalización se plantea como misión: «Con el manto de la Pachamama-Madre Tierra, nuestro compromiso y desafío es: Despatriarcalizar el Estado colonial y neoliberal, las familias, la sociedad y la religión». Estado Plurinacional de Bolivia: «Presentación oficial de la Unidad de Despatriarcalización», Ministerio de Culturas / Viceministerio de Descolonización / Unidad de Despatriarcalización, La Paz, 15 de septiembre de 2010.

la propuesta gubernamental peca de exclusivismo cultural y desconoce flagrantemente el artículo 4 de la Constitución Política del Estado que claramente señala: «El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión». Es decir, cae en el mismo reduccionismo cultural dominante hasta no hace mucho, que hubiera proclamado cualquier propósito (menos el de despatriarcalizar, obviamente) «con el manto de la Virgen María, Madre de Dios...».

Asimismo, el desconocimiento del feminismo como proyecto político destinado a desbaratar las bases del patriarcado –como es posible observar en el discurso oficial– es equivalente a desconocer la impronta indígena del discurso descolonizador de hoy. Esta distorsión arbitraria y de ninguna manera ingenua pone en entredicho la autenticidad de la intención manifiesta en el discurso oficial.

La promoción de políticas públicas suscita mayores dudas aún: algunas de las políticas en marcha ponen de manifiesto la precariedad de su desarrollo conceptual y resultan inconsistentes con sus postulados, revelan que no parece existir todavía una reflexión suficientemente profunda y abarcadora como para comprender lo que en verdad significa,

representa y conlleva el patriarcado. Analicemos algunas de ellas.

Hace algunas semanas el Viceministerio de Descolonización promovió como «política de despatriarcalización» una ceremonia de matrimonios colectivos basados en supuestas tradiciones indígenas, presidida por el propio presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales. Al concluir la ceremonia, mujeres y hombres recién casados manifestaban su complacencia, ellas porque con esta ceremonia habían «adquirido» el apellido del esposo y ellos por habérselos «otorgado».

En primer lugar, si de descolonizar se trata, dudo que estas ceremonias tengan algún referente en una ritualidad ancestral efectiva que resigne el matrimonio como lazo conyugal distinto del concebido en el marco de la cultura colonial/occidental/cristiana. Si se trata de despatriarcalizar, no veo de qué manera ese tipo de ceremonias podría contribuir a la construcción de relaciones horizontales, de complementariedad y reciprocidad, entre mujeres y hombres. Es posible observar, por el contrario, que se adscribe al mismo sentido patriarcal que tiene el matrimonio civil y religioso, a través del cual la mujer pasa de ser la señorita («la hija del señor») a la señora («esposa de otro señor»).

Otra política propuesta por esta entidad es la de promover una norma

destinada a alcanzar la paridad entre mujeres y hombres en todos los niveles y en todas las instancias del aparato público, mediante el anteproyecto de Ley de Equivalencia Constitucional. No se trata de una idea equivocada, pero debería al menos reconocerse que esta propuesta está enmarcada en el concepto de equidad de género, que responde claramente a la criticada «igualdad de oportunidades» de la que esta entidad pretende diferenciarse con su propuesta de despatriarcalización.

Lo mismo se podría anotar con relación al proyecto de debate nacional sobre interrupción médica del embarazo, en tanto política pública, porque si nos remitimos a los preceptos de las culturas raíz del proyecto de descolonización, encontraremos que estas reprobaban «la interrupción médica del embarazo», que es un eufemismo del aborto, al que atribuyen incontables adversidades naturales como castigos de la Pachamama.

A pesar de ello, y con la perspectiva puesta en remontar las contradicciones anotadas, el momento político que vive Bolivia plantea no pocos desafíos. En primer lugar, es imprescindible construir el concepto y sentido del patriarcado y el de la despatriarcalización desde una óptica más consistente e incluyente. El patriarcado debe ser concebido y construido teóricamente como un «lugar común» desde donde interpelar a la

sociedad y al Estado para contribuir a desmontar sus múltiples manifestaciones de sentido, productoras de sujeciones, exclusiones y subordinaciones combinadas.

En esta dirección, como horizonte emancipatorio, la despatriarcalización no debiera ser patrimonio exclusivo de sector alguno. En el entendido de que la sociedad toda está sometida al patriarcalismo –aunque en diversos grados y condiciones–, el mayor desafío que enfrentamos en esta coyuntura es proponer caminos para «despatriarcalizar» la sociedad en su conjunto.

Debiéramos apropiarnos del concepto para desarrollarlo desde diversas ópticas y a partir de sus múltiples manifestaciones, reconociendo que esa diversidad de expresiones incide en la creación de la condición de subordinación a la que estamos sometidas las mujeres, las y los indígenas, las personas que tienen el valor (o no) de manifestar su sexualidad diversa y, en general, todas las personas estigmatizadas como «anormales» por esa sociedad donde, por el contrario, la «normalidad» es la excepción y no la regla. Solo desde esa apropiación y desarrollo conceptual multifacético será posible proyectarlo como campo político.

El desafío consecuente –aunque también precedente– de esa construcción de sentido es erigir alianzas que

lleven a interpelar el patriarcado desde todos los lugares donde se manifiesta, y no solo desde la situación de las mujeres, teniendo siempre presente que construir alianzas no equivale a promover la cimentación de un discurso hegemónico-homogéneo ni de imponer prácticas o expresiones de afirmación uniformes. Construir alianzas supone el reconocimiento de aquello que impulsa a edificar «unidad en la diversidad», a identificar espacios y sentidos comunes propulsores de acción colectiva.

Finalmente, es preciso tener en cuenta que todavía está vigente el discurso de los derechos de las mujeres que ha inspirado una amplia agenda de reivindicaciones, incorporada en la

Carta Magna. El cumplimiento del mandato constitucional de equilibrar y equiparar los derechos de hombres y mujeres (equidad de género) no es incompatible con la propuesta de despatriarcalización; podría ser más bien una plataforma de creación de condiciones para su futura realización. Por lo tanto, en vez de continuar por caminos paralelos, se deberían poner en diálogo los discursos de equidad y despatriarcalización para construir consensos de gestión pública complementaria, con la mirada puesta en el mandato constitucional de aplicación de los derechos de las mujeres (táctica), para proyectar así la propuesta de despatriarcalización hacia logros de auténtico impacto estructural (estrategia). ☐

umbrales

de América del Sur

Abril de 2011 - Julio de 2011

Buenos Aires

Nº 12

PRESENTACIÓN: El desafío de un orden más justo. MUNDO: EEUU: crisis económica y ataque a los derechos sociales, **Ricardo Aronskind**. Estados Unidos y el poder democrático como lugar vacío, **Martin Plot**. Las revueltas árabes en el espejo latinoamericano, **Khatchik DerGhougassian**. Europa, más encantada que encantadora, **Andy Cohen**. La delgada línea roja, **Pablo De Biase**. AMÉRICA LATINA: El gobierno de Dilma Rousseff: desafíos y perspectivas, **Iole Iliada Lopes**. La política exterior del gobierno de Rousseff, **Miriam Gomes Saraiva**. Los límites del tercer batllismo, **Javier Silva Pintos**. Al menos cuatro equívocos sobre el proceso boliviano, **Pablo Stefanoni**. ARGENTINA: Pueblo o corporaciones, **Eduardo Rinesi**. Sindicalismo y progresismo en Argentina: la necesidad de revisar dogmas, **Sebastián Etchemendy**. La *pax* kirchnerista, **José Natanson**. Hoy todo el hielo en la ciudad..., **Antolín Magallanes**. Recuperar la Ciudad, **Daniel Filmus**. La nueva derecha en su laberinto, **Carlos Heller**. La única herencia posible, **Edgardo Mocca**. RESEÑAS: La última gran transformación, **Gabriel Diner**. Reflexiones acerca del conflicto con el campo, **Constanza Iselli**. Un horizonte socialmente igualitario, **Marcela Velurtas**. Los trabajos de la memoria, **Sebastián Mauro**.

Umbrales de América del Sur es una publicación del Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (Cepes), Bartolomé Mitre 1895 EP 1, C1039AAA Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: <umbrales@cepes.org.ar>.

Summaries ■ Resúmenes en inglés

Carmelo Mesa-Lago: Cuba: What Has Changed after the VI Communist Party Congress? [3782]

After 14 years without celebrating such meetings, in April 2011 the 6th Cuban Communist Party (PCC) Congress took place. The congress was marked by the ambitious reforms proposed by Raúl Castro as a goal since replacing his brother Fidel in 2006. However, the contradictions, hesitation, inertia and resistance of the bureaucratic apparatus has sown doubts about the efficiency of the Congress-approved changes to get the country out of the deep economic crisis that it is facing and recuperate the strength exhausted by more than half a century of swimming against the current. *Key Words: Economy, Reforms, Cuban Communist Party Congress, Raul Castro, Cuba.*

Stefanie Hanke / Arnold Antonin: Haiti: The Unexpected President: Crisis and Post-Election Scenarios [3783]

The election of singer Michel Martelly as president of Haiti was an unexpected fact, in the middle of the slow reconstruction of the country after the devastating earthquake of 2010. The new government must lead with a country

—and a state— that are almost destroyed, militarily occupied by the United Nations (UN) and still a prisoner of the oppressive heritage of half a century of misgovernment which included the long dictatorships of the Duvaliers. Thus the new mandate will face enormous challenges, under a questioned strategy of cooperation by the international community, which should increase its civilian presence and focus on helping development and defining an exit strategy from the country. *Key Words: Elections, Earthquake, Reconstruction, René Prével, Michel Martelly, Haiti.*

Gerardo Honty: Nuclear Energy in Latin America: The Day After [3784]

The debate about nuclear energy has been revived —particularly in Europe— after the Fukushima catastrophe in Japan, which has put the risks of this controversial source of energy back on the table. However, the debate is even more incipient in Latin America, where —despite it being a marginal source— there are various projects to increase nuclear energy, supposedly associated with a reaffirmation of national sovereignty. In this context, the article reveals the nuclear situation in the region

and argues against the nuclear option as the paradigm for development.

Key Words: Nuclear Energy, Renewable Energy, Environment, Fukushima, Latin America.

Valter Pomar: Evaluation and Challenges of the Continent's Left [3785]

In a large part of Latin America and the Caribbean, Left parties –with different traditions and ideological projects– have reached government. Despite the advances, a strategic deficit can be perceived at the time of overcoming a first stage of palliative reforms of the effects of Neoliberalism. The article maintains that if the Latin American and Caribbean Left desires to widen its strength without losing its course, it will have to pay more attention to the debate about capitalism in the XXI century, as well as the evaluation of socialism in the XX century and strategy discussion. This involves adding into the equation the relation between political lines, the social base, the party, the government and the State.

Key Words: Left, Strategy, Integration, Capitalism, Socialism, Latin America.

Kjeld Aagaard Jakobsen: The PT in Government or the Challenge of Maintaining its Beliefs [3786]

After eight years in power, the Workers' Party (*Partido dos Trabalhadores*, PT) is facing a series of political and sociological transformations: changes in their base policies –in part as a result of the policies of transfer of income towards

excluded sectors implemented in 2003– and its stabilization as a party of government, with more than 1,500,000 affiliates. Although the social movements still consider the PT an ally, there are many complaints of the slowness to satisfy the demands «from below» in contrast to the speed of attending to certain business claims. But despite everything, for the author the PT remains the channel for Brazil's transit towards greater levels of social justice. *Key Words: Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Workers' Party (PT), Brazil.*

Ricardo Sidicaro: The Peronist Party and the Kirchner Governments [3787]

Peronism and its current governmental expression, Kirchnerism, muster a diversity of views often strongly polarized. Outside of Argentina, the long persistence of Peronism as the party of power has transformed into a true enigma. This article links the political crisis, the particular forms the party founded by Juan Perón in the 40s has taken in recent times, and the junctures that characterize the current «Kirchnerist Peronism», which seems to have built a particular political epic since Nestor Kirchner's death in 2010. *Key Words: Crisis, Political Field, Peronism, Kirchnerism, Argentina.*

Hervé Do Alto: A Peasants' Party in Power: A Sociological View of the Bolivian MAS [3788]

The arrival in power of Evo Morales as the first indigenous president of Bolivia

was accompanied by another historical moment: the arrival in government of a party with a rural base, which went flooding from the country to the city. The Movement Toward Socialism (*Movimiento al Socialismo*, MAS) is a party *sui generis*, which thinks of itself as a «political instrument» of the agrarian syndicates with strong ties to the Bolivian left. Its growth has not only disrupted the correlation of ideological forces; it has also contributed to a strong process of ruralization of policies and of the very identity of Bolivia.
Key Words: Peasants, Indigenous, Movement Toward Socialism (MAS), Evo Morales, Bolivia.

Massimo Modonesi: Mexico: The Twilight of the PRD [3789]

The references to the Democratic Revolution Party's (*Partido de la Revolución Democrática*, PRD) crisis are common ground in public opinion and, at the same time, form a puzzle for political analysis. In recent years, this party-movement which surged from the bowels of the Institutional Revolutionary Party (*Partido Revolucionario Institucional*, PRI) and in 2006 was on the threshold of placing Andrés Manuel López Obrador in the Presidency, has suffered profound mutations. The antifraud protests of the multitudes have contributed in the broadening of its popular base, but today the PRD faces a «catastrophic draw» between *Nueva Izquierda* and Obradorism –which tends to project itself evermore outside of the PRD.
Key Words: Mexican Left, Democratic Revolution Party (PRD), Andrés Manuel López Obrador, Mexico.

Virgilio Hernández E. / Fernando Buendía G.: Ecuador: Advances and Challenges of the PAÍS Alliance [3790]

The arrival in power of Rafael Correa in 2006 –after various years of social mobilizations and presidential overthrows– marked a new stage in Ecuadorian politics. In this context, one of the challenges for the PAÍS Alliance –discussed in the Convention in 2010– is transforming itself into an organic force and not being reduced to a mere extension of government or a simple electoral force. For this, it must face the tensions of being a party (officially a movement) with a strong anti-party discourse, and an organization without previous history in exercising state power.
Key Words: Representation Crisis, Civilian Revolution, Rafael Correa, PAÍS Alliance, Ecuador.

Luis Armando González: The Salvadorian FMLN: From Guerrilla to Government [3791]

The arrival in government of the Farabundo Martí Front for National Liberation (*Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional*, FMLN) in 2009 was an historic moment for El Salvador, after a bloody civil war and a long «democratic» hegemony of the Right. Nevertheless, the path from weapons to institutional democratic battles led to deep changes inside the political force whose programme fed the construction of socialism after a political-military triumph. Today these objectives seem far off, and the Front has gone from sustaining pragmatic progressive positions, has become an electorally competitive party and has

overturned the state management.

Key Words: Guerrilla, Mauricio Funes, Farabundo Martí Front for National Liberation (FMLN), El Salvador.

Jenny Ybarnegaray Ortiz: Feminism and Decolonization: Notes for the Debate [3792]

The Bolivian government has incorporated a new Depatriarcalization Unit into the state institution dependent of the no less surprising Viceministry

of Decolonization. But although this represents an advance towards greater emancipatory possibilities, this essay sustains that the relation between patriarchy and colonialism is less linear than the official discourse shows. And that the idea that depatriarcalization is a mere consequence of decolonization –as is shown in certain governmental texts– can limit the possibilities open for the new Constitution.

Key Words: Feminism, Decolonialization, Patriarcal, Bolivia.

Réplica

Sra. Svenja Blanke
Directora Nueva Sociedad

Estimada Señora:

En artículo publicado en *Nueva Sociedad* (N° 233, mayo-junio de 2011), la periodista Jacqueline Fowks hace referencias a mi persona con afirmaciones que deseo rectificar. Lamento que la misma no haya juzgado necesario consultarme previamente sobre esas menciones a mi persona, lo que hubiese permitido evitar afirmaciones que no corresponden con la verdad.

No es cierto que yo haya tenido cualquier participación en las piezas publicitarias realizadas durante la campaña de 2008 para la alcaldía de São Paulo. El autor y responsable de la pieza mencionada críticamente por Jacqueline Fowks fue João Santana y esto fue públicamente asumido por él mismo en entrevista al periódico *Folha de São Paulo*. En lo que a mí respecta, jamás me permitiría cualquier crítica a la orientación sexual de nadie y soy conocido por públicamente asumir la defensa de los derechos de los homosexuales y la lucha contra la homofobia. Basta visitar mi blog para constatar esto.

Rechazo también la afirmación que pretende involucrarme negativamente en supuestos negocios, insinuación que igualmente no corresponde con la verdad. Quienes informaron erradamente a la periodista lo han hecho por desconocimiento o mala fe, pero no puedo dejar pasar insinuaciones infundadas sin cualquier base otra que el rumor.

Por último, aunque no me concierne directamente, quiero también aclarar que Valdemir Garreta nunca tuvo su nombre involucrado en lo que se denominó «*mensalão*» en Brasil y que concierne al supuesto funcionamiento de una caja 2 por parte de dirigentes del PT y de diputados de la base de sustentación del gobierno brasilero, en 2005.

Sin otro particular, solicito la publicación de esta carta para rectificar las informaciones erradas contenidas en el referido artículo, en el cual –dicho sea de paso– encontré una reflexión interesante sobre el proceso político peruano.

Luis Favre
20 de junio de 2011

Alemania: F. Delbanco, Tel.: (49 4131) 2428-8, e-mail: <post@delbanco.de>.

Argentina: Distribuidores: Jorge Waldhuter, 14 de Julio 58, Buenos Aires, Tel./Fax: 6091.4786, e-mail: <jwalibros@ciudad.com.ar>. Librerías, Buenos Aires: Librería Universitaria de Buenos Aires, Tucumán 1792.

Bolivia: en La Paz: Yachaywasi, Tel.: 2441.042, e-mail: <yachaywa@accelerate.com>, Fax: 244.2437. Plural Editores, Tel./Fax: 2411.018, e-mail: <plural@plural.bo>.

Brasil: en San Pablo: Librería Española e Hispanoamericana, Tel.: 3283.4700, e-mail: <libreriaespanola@terra.com.br>; en Porto Alegre: Outras Américas, e-mail: <nuevasoc@uol.com.br>.

Colombia: Librería Fondo de Cultura Económica, Calle 11 No. 5-60, Barrio La Candelaria, Bogotá, Colombia. Tel.: (571) 2832200, e-mail: <libreria@fce.com.co>.

Costa Rica: Librería Nueva Década, Tel.: (506) 225.8540, e-mail: <ndecada@ice.co.cr>.

Ecuador: LibriMundi, Tel.: (5932) 252.1606, 223.4791, e-mail: <librimu1@librimundi.com.ec>.

España: Marcial Pons-Librero, Tel.: (34 914) 304.3303, e-mail:

<revistas@marcialpons.es>; Mundi-Prensa Libros, (34 914) 363.702.

Guatemala: F&G Libros de Guatemala, 31 avenida "C" 5-54, zona 7, Colonia Centro América, 01007 Guatemala, Tel.: (502) 2433 2361 (502) 5406 0909, e-mail: <informacion@fygeditores.com>.

Japón: Italia Shobo, Fax: 3234.6469; Spain Shobo Co., Ltd., Tel.: 84.1280, Fax: 84.1283, e-mail: <info@spainshobo.co.jp>.

Nicaragua: Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), Km 9 1/2 carretera a Masaya, Tel.: 276.1774 (Ext. 8), Apartado Postal 2438, e-mail: <comunicacion@ipade.org.ni>.

Perú: El Virrey, Bolognesi 510, Miraflores, Lima, Tel.: 444.4141, e-mail: <info@elvirrey.com>.

Puerto Rico: en Río Piedras: Compañía Caribeña de Libros, Tel.: (1-787) 297.8670, e-mail: <cclibros@yahoo.com>.

Ventas y consultas por Internet:
<www.nuso.org>

Distribución internacional a librerías:
<distribucion@nuso.org>

PARA SUSCRIBIRSE A NUEVA SOCIEDAD

SUSCRIPCIÓN	ANUAL	BIENAL
Incluye flete aéreo	6 números	12 números
América Latina	US\$ 70	US\$ 121
Resto del mundo	US\$ 107	US\$ 196
Argentina	\$ 165	\$ 330

> Formas de pago

1. **Pago online:** Ingrese en <<http://www.nuso.org/suscribe.php>>, donde encontrará un formulario para registrar su pedido y efectuar el pago.

2. **Pago con tarjeta de crédito vía postal:** Complete el cupón incluido en la revista y envíelo por correo a: Nueva Sociedad, Defensa 1111, 1° A, C1065AAU Buenos Aires, R. Argentina.

3. **Pago con cheque:** Envíe un cheque por el importe correspondiente a la orden de **Fundación Foro Nueva Sociedad** a la siguiente dirección: Nueva Sociedad, Defensa 1111, 1° A, C1065AAU Buenos Aires, R. Argentina, acompañado de los datos del suscriptor (nombre, domicilio postal completo, teléfono, correo electrónico).

> Para otros medios de pago y cualquier otra consulta, escriba a <distribucion@nuso.org>.

LAS REALIDADES DEL TRABAJO EN AMÉRICA LATINA

COYUNTURA

Marc Saint-Upéry. Las dimensiones de la revolución democrática árabe
Mercedes Isabel Botto. ¿Qué nos enseñan los 20 años del Mercosur?

APORTES

Christoph Reinprecht. El regreso de la inseguridad social

TEMA CENTRAL

Jürgen Weller. Panorama de las condiciones de trabajo en América Latina

Enrique de la Garza Toledo. Más allá de la fábrica: los desafíos teóricos del trabajo no clásico y la producción inmaterial

Álvaro Padrón. Internacionalismo y renovación. Los desafíos del sindicalismo.

Alma Espino. Trabajo y género: un viejo tema, ¿nuevas miradas?

Ricardo Antunes. La nueva morfología del trabajo en Brasil. Reestructuración y precariedad

Ernesto Rodríguez. Empleo y juventud: muchas iniciativas, pocos avances. Una mirada sobre América Latina

Paula Lenguita. Revitalización desde las bases del sindicalismo argentino

Pilar Sánchez Voelkl. Masculinidad en la clase gerencial transnacional. Rituales del siglo XXI.

SUMMARIES

LATINOAMERICANOS EN TRÁNSITO Migración, mitos y fronteras

COYUNTURA

Jacqueline Fowks. Sobresaltos políticos en el Perú del «milagro» económico. Un análisis de los resultados electorales

María de los Ángeles Fernández Ramil. Entre la emergencia oficial y el desconcierto opositor. Chile en el primer año de gobierno de Sebastián Piñera

TRIBUNA GLOBAL

Fernando Pedrosa. ¿Es posible hoy una Internacional socialista y democrática?

TEMA CENTRAL

Alejandro Grimson. Doce equívocos sobre las migraciones

Alejandro Portes. Migración y desarrollo: un intento de conciliar perspectivas opuestas

Pablo Ceriani Cernadas. Luces y sombras en la legislación migratoria latinoamericana

Gioconda Herrera. Cuidados globalizados y desigualdad social. Reflexiones sobre la feminización de la migración andina

Marcio Pochmann. La fuga de cerebros y la nueva división internacional del trabajo

Eleonora Ermólieva. ¿Fuga o intercambio de talentos? Nuevas líneas de investigación

Carlos Heredia Zubieta. La migración mexicana y el debate en Estados Unidos. A la sombra del Tea Party

Menara Lube Guizardi. «Asumir el comando»: la capoeira como red social y migratoria

ENSAYO

Christian Ferrer. El país del ave Fénix. Un comentario sobre el devenir histórico de los argentinos para lectores no argentinos.

SUMMARIES



www.nuso.org

Julio-Agosto 2011

COYUNTURA

Carmelo Mesa-Lago Cuba: ¿qué cambia tras el VI Congreso del Partido Comunista?

Stefanie Hanke / Arnold Antonin Haití: el presidente inesperado. Crisis y escenarios poselectorales

TRIBUNA GLOBAL

Gerardo Honty Energía nuclear en América Latina: el día después

TEMA CENTRAL

Valter Pomar Balance y desafíos de las izquierdas continentales

Kjeld Aagaard Jakobsen El PT en el gobierno o el desafío de mantener las convicciones

Ricardo Sidicaro El partido peronista y los gobiernos kirchneristas

Hervé Do Alto Un partido campesino en el poder. Una mirada sociológica del MAS boliviano

Massimo Modonesi México: el crepúsculo del PRD

Virgilio Hernández E. / Fernando Buendía G. Ecuador: avances y desafíos de Alianza PAÍS

Luis Armando González El FMLN salvadoreño: de la guerrilla al gobierno

ENSAYO

Jenny Ybarnegaray Ortiz Feminismo y descolonización. Notas para el debate

